ARMANDO CHAGUACEDA • LUIS DUNO-GOTTBERG
COORDINADORES

LA DERECHA COMO AUTORITARISMO EN EL SIGLO XXI

CADAL
CENTRO PARA LA APERTURA Y EL DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA

CECI A.C.
Centro de Estudios Constitucionales Iberoamericanos A.C.

RICE

LA DERECHA COMO AUTORITARISMO EN EL SIGLO XXI

Los signos de un viraje global hacia políticas conservadoras son claros. En general, sugieren que el liberalismo, en su forma económica de libre mercado y en su versión política más tolerante e inclusiva, se ha desacreditado para amplias franjas de la ciudadanía. Incluidos segmentos de voto popular, hoy seducidos por liderazgos neopopulistas autoritarios, oligárquicos y xenófobos.

En este libro nos proponemos reflexionar, de forma preeminente, sobre aquellas derechas cuya vocación autoritaria les hace abrazar formas políticas que mezclan la limitación de derechos e instituciones –tradicionalmente ligados al modelo democrático– con modos de implementación, defensa y profundización de un capitalismo de acusados rasgos oligárquicos. Todos estos temas son abordados en los capítulos que conforman la obra por colegas de reconocida trayectoria académica, con diversa procedencia nacional y disciplinar. Lo que otorga a la reflexión aquí reunida un carácter más amplio y plural que otros emprendimientos tradicionales.

ISBN 978-987-4492-06-7

CC BY NC ND

CADAL
CENTRO PARA LA APERTURA Y EL DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA

@cadal fundacioncadal cadal.org cadaltv

ARMANDO CHAGUACEDA • LUIS DUNO-GOTTBERG
COORDINADORES

LA DERECHA COMO **AUTORITARISMO** EN EL **SIGLO XXI**

BUENOS AIRES • **2020**

La derecha como autoritarismo
en el siglo XXI

© 2020, de esta coedición
Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL)
Centro de Estudios Constitucionales Iberoamericanos AC
Rice University

Coordinadores:
Armando Chaguaceda • Luis Duno-Gottberg

Autores:
Maristella Svampa
Armando Chaguaceda
Ysrrael Camero
José del Tronco Paganelli
Katia Gorostiaga Guggiari
Stephany Castro
Gabriel Gómez
Carme Colomina
Jaume Ríos
Ángel Rivero
Víctor Alarcón Olguín
Sarah Patricia Cerna Villagra
Denis Volkov
Andrey Kolesnikov
Orçun Selçuk
Astrid Arrarás
Luis Duno-Gottberg

Diseño interior y portada:
Verónica Alonso S.

Hecho el depósito que marca la Ley 11.723
ISBN: 978-987-4492-06-7

www.cadal.org

Los puntos de vista expresados en este libro representan opiniones y análisis de los/as autores/as y no reflejan necesariamente los de las entidades que lo publican.

La derecha como autoritarismo en el siglo XXI / Maristella Svampa ... [et al.] ; coordinación general de Chaguaceda Armando; Luis Duno-Gottberg. -1a ed.- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Fundación Cadal; México: Centro de Estudios Constitucionales Iberoamericanos AC ; Houston, Texas: Rice University, 2020.
Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-4492-06-7

1. Autoritarismo. I. Svampa, Maristella II. Armando, Chaguaceda, coord. III. Duno-Gottberg, Luis , coord.
CDD 321.9

Índice

PRÓLOGO

¿Una nueva hegemonia conservadora?:
Palabras a modo de introducción
Armando Chaguaceda • Luis Duno-Gottberg 7

Lo que las Derechas traen a la región latinoamericana.
Entre lo político y lo social; nuevos campos de disputa
Maristella Svampa 15

Populismos de derecha y desdemocratización
Armando Chaguaceda • Ysrrael Camero 63

El papel de las élites en las interrupciones presidenciales
José del Tronco Paganelli • Katia Gorostiaga Guggiari 79

Brasil bajo Bolsonaro: contrastes a la luz de la Democracia Liberal
Stephany Castro • Gabriel Gómez 119

Donald Trump: el presidente de la polarización
Carme Colomina • Jaume Ríos 147

El populismo de Viktor Orbán: una democracia iliberal para Hungría
Ángel Rivero 159

La evolución reciente de la derecha política mexicana
Víctor Alarcón Olguín 183

El conservadurismo paraguayo:
un análisis del gobierno de Mario Benítez
Sarah Patricia Cerna Villagra 207

Los *hijos* de Putin: ¿quién gobernará Rusia después de 2024?
Denis Volkov • *Andrey Kolesnikov* 231

Autogolpe en Turquía (2016-2018): Lecciones del Perú
Orçun Selçuk • *Astrid Arrarás* 271

El campo transversal de la política venezolana:
¿hacia una derecha (post)bolivariana?
Luis Duno-Gottberg 303

PRÓLOGO

¿Una nueva hegemonia conservadora?: Palabras a modo de introducción

Escribir sobre autoritarismos esta en boga en las ciencias sociales y las humanidades. Ello da cuenta de un desafio en curso al orden democrático de la PosGuerra Fría. Donde, aún cuando se discutiesen significados alternativos a la democracia liberal -enmarcados en supuestas formas populares, participativas o radicales- la idea de un modo de ordenar la convivencia abierto a la implicación ciudadana, la rotación de las élites y la protección de los derechos del cómun frente al Estado se constituyó como un consenso aparentemente compartido en todo el orbe. Pero, ¿cómo ignorar que el mundo devenga hoy más autoritario que democrático, a despecho de la continuidad de nuestras repúblicas liberales de masas? ¿Quién niega la proliferación de regímenes hibridos? ¿Vamos bien?

Los signos de un viraje global hacia políticas conservadoras son claros y, en general, sugieren que el liberalismo –en su forma económica de libre mercado y en su versión política más tolerante e inclusiva– se ha desacreditado para amplias franjas de la ciudadanía. Incluidos importantes segmentos de voto popular, seducidos por liderazgos neopopulistas, oligárquicos y xenófobos como los representados por Donald Trump y sus aliados del Viejo Continente. Pero el giro autoritario de derechas es el espejo de su opuesto, que le abona y resignifica. ¿Qué decir entonces de proyectos firmemente anclados en la retórica del socialismo, por ejemplo? El legado del comunismo de Estado, con sus déficits de desarrollo

económico, sostenibilidad ambiental y democracia política, se ha visto replicado por algunos de los experimentos antineoliberales del siglo XXI; emblemáticamente representados por el desastre venezolano y la supervivencia de la autocracia cubana. El orbe, a diestra y siniestra, ve nacer Leviatanes.

Constatamos –por la saturación de nuestros mercados, la volatilidad de las crisis, la persistencia de la cuestión social y el imparable deterioro ambiental– que el capitalismo es el modo de producción, distribución y consumo globalmente vigente. En sus modalidades liberal –de matriz occidental– y estatista –encabezado por el empuje chino– los diversos capitalismos impactan y reconfiguran, a escala mundial, las identidades nacionales y culturales, las fronteras geopolíticas y la producción artística. La aldea global se parece, cada vez más, a un bazar de mercaderes hiperactivos o una maquila de frenética explotación, más que a un ágora con ciudadanos libres y preocupados por la *cosa pública.* Hay, como dijo alguna vez el ensayista Rafael Rojas, mucho mercado y poca república.

Un universo capitalista, con crecientes franjas autoritarias y vapuleadas instancias democráticas, es el que nos abriga. Y en sus circuitos, caracterizar las ideologías dominantes de nuestro tiempo es una ardua labor. Sea por la heterogeneidad que siempre caraterizó, desde sus orígenes modernos, a la clasificación izquierda-derecha; sea por las actualizaciones que han sufrido en las últimas fases del proceso de globalización. Si, recuperando a Norberto Bobbio[1], consideramos que las izquierdas se caracterizan por una pulsión igualadora –que no excluye el corsé vanguardista y la dictadura sobre las necesidades– y las derechas por una conservación del orden –basado en la primacía del individualismo posesivo– aún

1 *Derecha e izquierda. Razones y significados de una distinción política,* Taurus, México, 2014.

el mapa se torna complejo de dibujar. Reconociendo el dilema, en esta obra nos proponemos reflexionar de forma preeminente sobre aquellas derechas cuya vocación autoritaria les hace abrazar formas políticas que mezclan la limitación de derechos e instituciones –tradicionalmente ligados al modelo democrático– con formas de implementación, defensa y profundización de un capitalismo de acusados rasgos oligárquicos.

El énfasis de la obra está puesto en nuestro hemisferio. En los últimos doce años, Panamá, Guatemala, Argentina, Haití, Honduras, Chile, Perú, Costa Rica, Paraguay y Brasil han pasado de tener presidentes de izquierdas a otros de derechas. Esta ola llegó a América Latina precedida por una grave crisis económica en varios de sus países y provocada, entre otras cosas, por la caída de los precios de las materias primas y grandes casos de corrupción de los gobiernos de izquierda y centroizquierda. Dentro de EEUU, el *outsider* Trump estremeció el *establishment*, capturando –y disciplinado– a un Partido Republicano cada vez más conservador y, cosa impensable, postrado ante su nuevo líder. Del otro lado del Atlántico, el Brexit encarna un fenómeno rupturista que cuenta con expresiones afines en otras partes del Viejo Continente; mismas que reposan en discursos xenofóbicos y el rechazo del espíritu cosmopolita y globalizador. El rechazo del proyecto liberal clásico parece ceder paso a diversos populismos autoritarios. Este contexto –y sus urgencias– determina el sentido de los trabajos aquí contenidos.

Partiendo de este diagnóstico –y sin la pretensión de agotar el tema– el actual volumen ofrece un abordaje multidisciplinario, multi-focal y geográficamente amplio de la radicalización conservadora de un segmento significativo de esa mitad del mapa político moderno denominada «la derecha». Denominado, según los autores, como «giro conservador» o «nueva hegemonía de derechas», existe una serie de elementos constantes que aparecen en mayor

o menor grado en distintos casos nacionales: el personalismo, el autoritarismo; los desplazamientos de nociones de responsabilidad colectiva por los de responsabilidad individual; la erección de un orden punitivo; las concepciones de la ciudadanía ligadas a la integración asimétrica al mercado y la participación acotada a través del consumo; así como la exacerbación de discursos religiosos –con frecuencia de corte evangélico– en las naciones occidentales.

Por ello en estos capítulos encontrarán caudillos de formato tradicional y populistas 2.0. Entramados políticos orientados a la implementación del neoliberalismo o a la preservación del neopatrimonialismo. Propuestas políticas que han logrado convertirse –una vez conquistado el gobierno– en agenda de Estado y mentalidades, con pretensión ideológica, que se difunden a través de fronteras sociales, virtuales y transnacionales. Y todos estos temas, con el trasfondo común del estudio de las derechas populistas y /o autoritarias, son abordados por colegas de diversa procedencia nacional y disciplinar. Lo que le da a la obra un carácter más amplio y plural que otros emprendimientos tradicionales.

En el texto que da inicio al volúmen, Maristella Svampa traza un cuadro general del llamado fin de ciclo progresista y el giro a la derecha en la Latinoamérica de fines de la primera década del siglo XXI, vinculando las transformaciones sociales e institucionales con los nuevos desafíos geopolíticos. Además, pasa balance sobre el impacto de los populismos y las dinámicas polarizadoras; entre cuyos legados visibilizaron y fortalecieron posiciones conservadoras, algunas de carácter autoritario. Analizando específicamente las diferencias y similitudes entre la Derecha Neoliberal y la Derecha Radical Autoritaria, con miradas aterrizadas en los casos de Argentina y Brasil.

El capítulo de Armando Chaguaceda e Ysrrael Camero retoma la discusión sobre los nexos entre populismo y derecha.

Considerando que las críticas y reivindicaciones de las identidades y agendas populistas son un fenómeno diverso, dependiente de cada contexto nacional, regional e internacional y también de disímiles tradiciones de pensamiento. Con una lectura centrada en las derechas europeas, los autores postulan que el deslizamiento hacia el populismo de derecha, expresa una ruptura interna del consenso liberal-conservador que se había consolidado en la postguerra, lo que suponía en Europa occidental un régimen político democrático sostenido dentro de un Estado de Derecho.

Por su parte José del Tronco Paganelli y Katia Gorostiaga dan cuenta de cómo las democracias latinoamericanas experimentan interrupciones de mandatos presidenciales que no constituyen en términos estrictos, «golpes de estado», sino «reequilibrios» políticos. Dichas interrupciones adquieren la forma de juicios políticos, impulsados por actores «de oposición» quienes gozan de «legitimidad institucional» por pronunciarse desde estructuras parlamentarias. Indagando si estos procedimientos son mayormente activados por partidos «a la derecha» del espectro ideológico, en contra de presidentes representativos de fuerzas populares y/o progresistas, los autores centran su foco en el caso de la ex presidenta brasileña Dilma Rouseff.

Stephany Castro y Gabriel Gómez evalúan la consistencia del autoritarismo personalista del actual presidente brasileño, Jair Bolsonaro, a partir del contraste entre algunas de sus decisiones –en la forma de decretos presidenciales en áreas diversas de la política pública– y el concepto de democracia liberal. Reconociendo el carácter exploratorio de este estudio, los autores sugieren la necesidad de futuras investigaciones centradas en los decretos presidenciales como herramienta privilegiada por gobiernos personalistas.

Carme Colomina y Jaume Ríos abordan el fenómeno de Donald Trump, quién convirtió la imprevisibilidad mediática y política en la marca definitoria de su gestión. Su presidencialismo personalista abrió todavía más la polarización heredada de la era Obama hasta hacer de la confrontación permanente la piedra angular de su liderazgo. La renuncia al multilateralismo y a la lucha contra el cambio climático, así como los desafíos al poder legislativo y judicial, han contribuido al desorden geopolítico en el exterior y al desequilibrio constitucional en el interior. Este reordenamiento de la facción conservadora se consolida con el aval mayoritario del Partido Republicano, sectores evangélicos, y el apoyo de una parte importante de su electorado.

En el contexto del México actual, Víctor Alarcón Olguín discute los cambios recientes en los partidos de derecha y sus expresiones identitarias, poniendo énfasis en sus procesos organizativos y resultados electorales. Sus aportes combinan, sofisticadamente, las miradas de la ciencia e historia políticas especializadas en la nación azteca. El autor propone, en su capítulo, una explicación del declive de su influencia y de los desafíos que signan su decadencia o renovación dentro del contexto político actual y de cara a los procesos comiciales de 2021 y 2024.

Para el caso paraguayo, Sarah Patricia Cerna analiza el liderazgo y el estilo de gobernar del actual presidente, Mario Benítez. Identifica los rasgos autoritarios y conservadores de un discurso y una agenda que defienden la gestión del gobierno autoritario de Alfredo Stroessner; promueven la militarización de la juventud e implementan políticas de «mano dura» para combatir la violencia e la inseguridad. Por último, menciona los ataques contra lo que consideran «ideología de género», acercándose a sus pares de Argentina y Brasil.

Desde Rusia, Denis Volkov y Andrey Kolesnikov abordan ese faro del conservadurismo global que es el putinismo. En su estudio revelan cómo la principal preocupación del *establishment* ruso para el período de 2018 a 2024 no es la modernización del país, sino el tránsito suave y seguro del poder para sus élites. Siendo alto el grado de participación estatal en los procesos económicos, políticos y comerciales del sistema, la tarea de las élites «civiles» y tecnocráticas es mantenerlo en un estado estable y la misión de las élites del poder determinar su marco político e ideológico.

Retomando las miradas comparativas, Orçun Selçuk y Astrid Arrarás examinan la declaración del estado de emergencia del presidente turco Erdoğan el 20 de julio de 2016 como un caso de autogolpe contemporáneo. Para apoyar su argumento de que en Turquía ocurrió un autogolpe, establecen una comparación con el caso más documentado en Occidente, en el período después de la Guerra Fría: el autogolpe de Fujimori en Perú. Aunque ambos paises son diferentes en términos de ubicación geográfica, características demográficas y legados históricos, ambos tienen o tuvieron presidentes personalistas, de derecha y neoliberales, lo que otorga relevancia a esta comparación.

Concluyendo el presente libro, Luis Duno-Gottberg recupera la dimensión socio-histórica de las formaciones políticas venezolanas, identificando una mutación que pone fin a la ausencia de una derecha radical en los últimos sesenta años. El momento que parece llegar a su fin se caracterizaba por la existencia de un centro sustentado en el *estado de bienestar* y los pactos políticos, todo lo cual producía una notable distensión social. Hacia los años 80 –y en el contexto de una crisis que precede a la Revolución Bolivariana– aparecen las fracturas del consenso que sostenía un «campo político trasversal», donde los matices de izquierda y derecha parecían más o menos difusos. El autor concluye que asistimos hoy, dentro de un contexto signado por la violencia y el autoritarismo,

a una transformación de la cultura política venezolana, donde las distinciones entre derecha e izquierda parecen improductivas.

Cerramos esta introducción con una nota personal. Quienes coordinamos esta obra, transitamos, en Latinoamérica y los EEUU, por diversas experiencias vitales. Nuestras carreras han transcurrido, a retazos, en las academias y sociedades de democracias consensuadas o frágiles, socialismos autoritarios, (neo)liberalismos enajenantes, populismos variopintos en fases de crisis y ascenso. En todos los casos, constatamos que el despojo de los derechos concretos de la gente común puede ir de la mano del encumbramiento de burocracias todopoderosas y oligarquías predadoras. Y, a menudo, del maridaje autoritario y neopatrimonialista entre ambas. Por ello, no somos neutros: nuestro horizonte normativo pasa por un proyecto pluralista de *democratización de la democracia,* integralmente republicano, cabalmente liberal, civilmente socialista. Desde esas coordenadas, hemos invitado y reunido –con toda la riqueza que porta la diversidad– a un conjunto de voces que coinciden, desde sus abordajes disciplinares y temáticos, con nuestra preocupación por diagnosticar la actual ola de conservadurismo global. Para abordarla desde la especificidad del saber académico –científicamente coherente, ideológicamente plural, socialmente comprometido– les ofrecemos esta obra.

Armando Chaguaceda y Luis Duno-Gottberg

(Ciudad de México/Houston)

Lo que las Derechas traen a la región latinoamericana

Entre lo político y lo social; nuevos campos de disputa

Maristella Svampa[1]

Estados Unidos se enfoca en aquellas áreas donde hay problemas, como el Medio Oriente. No invierte mucho tiempo en América Latina, pues es como un perro simpático que está durmiendo en la alfombrita y no genera ningún problema.

Pedro Pablo Kuczynski, 2017, en la Universidad de Princeton.

Que acabe con la ideología implantada por el anterior Gobierno que pretendía tapar en la mente de nuestros niños lo que está en la Constitución, que dice que la familia es la unión de un hombre, una mujer y sus hijos.

Marcos Galdino Júniors, Pastor evangélico,
Iglesia Asamblea de Dios, 2018, Brasil

INTRODUCCIÓN

Hasta hace pocos años, se consideraba que América Latina, representada por los gobiernos progresistas, se hallaba a contramano del proceso de radicalización del neoliberalismo, que hoy atraviesa Europa y los Estados Unidos, con sus consecuencias en términos de aumento de las desigualdades, xenofobia y antiglobalismo. Sin embargo, en los últimos tiempos, nuevos vientos ideológicos recorren la región. El final de ciclo progresista, al menos como lo conocimos, es un hecho consumado, en términos de gobierno, de alianzas regionales y clima de época.

1 Profesora Investigadora, Universidad Nacional de La Plata.

El fin de ciclo implicó el ocaso del progresismo como *lingua franca*. Los elementos modulares que caracterizaron esta lengua común fueron el cuestionamiento del neoliberalismo, asociado a los 90; un discurso igualitario que apuntó a la inclusión social, muy especialmente a través de programas sociales y el impulso del consumo; la implementación de políticas económicas heterodoxas y, por último, la aspiración a la construcción de un espacio latinoamericano, desde los cuales pensar la integración regional. Sin duda, la consolidación de una hegemonía política progresista, asociada a estos cuatro elementos modulares, estuvo ligada al boom de los precios internacionales de las materias primas.

A lo largo del ciclo progresista (2000-2015) hubo quienes tendieron a identificar de manera más o menos automática *Progresismos e Izquierdas*. Sin embargo, a nivel nacional y regional, desde las izquierdas, la clarificación de lo que se entendía por Progresismo fue objeto de ásperos debates e interpretaciones, sobre todo en relación a cuestiones ligadas a la concepción del cambio social, el rol de los movimientos sociales y las estrategias de desarrollo, entre otras. Dichas pujas revelaron la tensión creciente entre diferentes narrativas políticas descolonizadoras, sobre todo entre la narrativa nacional-desarrollista y aquella indianista, las cuales tuvieron un gran protagonismo en el cambio de época, esto es, en el cuestionamiento de la hegemonía neoliberal y la apertura de un nuevo escenario político. La narrativa desarrollista, actualizada en clave de neoextractivismo, iría articulándose con otras dimensiones, propias de la tradición populista, tan profundamente arraigada en nuestras latitudes, lo que con el correr de las aguas daría lugar a un *populismo de alta intensidad,* [2] en sus diferentes expresiones.

2 Retomo y reformulo un tipo ideal propuesto por el sociólogo Aníbal Viguera (1993) que establece dos dimensiones para definir el populismo: una, según el tipo de participación; y la otra, según las políticas sociales y económicas. En esa línea, distingo entre *populismo de baja intensidad*, vinculado al carácter

De modo que, hacia fines de la primera década del siglo XXI, la categoría «populismo» fue ganando cada vez más terreno para caracterizar a los gobiernos progresistas, hasta tornarse nuevamente un lugar común y devenir también un campo de batalla político e interpretativo. Por un lado, desde sectores mediáticos y el campo de la derecha el concepto de populismo fue muy bastardeado, rápidamente asociado a la demagogia política y económica, el personalismo y la corrupción. Por otro lado, desde sectores académicos se hizo el esfuerzo por abandonar la visión unidimensional y peyorativa de sus detractores para reconocer que, los populismos latinoamericanos del siglo XXI –como sus predecesores del siglo XX– en tanto regímenes políticos son ambivalentes, complejos y multidimensionales.

Así, tal como lo entiendo, los populismos –en plural– constituyen un fenómeno político complejo y contradictorio que presentan una tensión constitutiva entre elementos democráticos y elementos no democráticos. Los populismos pueden ser definidos como una dimensión estructuradora de la política, un modo de entender –y desarticular parcialmente– la verticalidad del vínculo social, que aparece condensado en una cierta concepción del cambio social, en favor de aquellos sectores considerados más desfavorecidos. En términos de tradición, existe una tipología variada, que va desde los populismos de derecha, asociados a un discurso xenófobo y proteccionista, más frecuentes en los países centrales, hasta aquellos de carácter progresista, vinculados a diferentes variantes de los nacionalismos periféricos, tal como tradicionalmente ha venido ocurriendo en la región latinoamericana.

unidimensional del mismo (estilo político y liderazgo, que puede coexistir con políticas neoliberales), y un *populismo de alta intensidad*, que ensambla estilo político con políticas sociales y económicas, que apuntan a la inclusión social. Asimismo, existen diferentes tipos de populismos de alta intensidad, pues no es lo mismo el populismo de clases medias, representado por el kirchnerismo y el correísmo, que el populismo plebeyo, ilustrado por los casos boliviano y venezolano. He abordado el tema en Svampa, 2016 y 2017.

Lo propio de los populismos es que comprenden la política en términos de polarización y de esquemas binarios, lo cual tiene varias consecuencias: por un lado, contribuyen a la simplificación del espacio político, a través de la división en bloques antagónicos (el bloque *popular* versus el bloque *oligárquico*); por otro lado, promueven la selección y jerarquización de determinados antagonismos, en detrimento de otros, los cuales tienden a ser denegados o minimizados en su relevancia y/o validez (cuando no, expulsados de la agenda política), así como la subestimación del pluralismo político y social. Asimismo, en términos de relación líder/organizaciones, la forma histórica que éstos asumen en la región es el modelo de participación social controlada, esto es, la subordinación de los actores colectivos al líder, bajo el tutelaje estatal.

En esa línea, los populismos latinoamericanos del siglo XXI presentan similitudes con los populismos clásicos del siglo XX (aquellos entre las décadas de 1930 y 1950). Ciertamente, los gobiernos de Hugo Chávez, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, Rafael Correa y Evo Morales, incluso el de Lula Da Silva y Dilma Rousseff, provenientes de países con una notoria tradición populista, habilitaron el retorno de *populismos de alta intensidad*, sostenidos en la reivindicación del Estado como constructor de la nación, un tipo de vinculación con las organizaciones sociales, el ejercicio de la política como permanente contradicción entre dos polos antagónicos y, por último, la centralidad de la figura del líder.

Por encima del lenguaje de guerra, lo propio de los populismos del siglo XXI fue la consolidación de un esquema de gobernanza, de un pacto social, en el cual convivieron–aun de manera contradictoria– la tendencia a la inclusión social (expansión de derechos, beneficios a los sectores más postergados e inclusión por el consumo) con el pacto con el gran capital (agronegocios, sectores extractivos, incluso, en algunos casos, con los sectores financieros). En esa línea, y pese al proceso de nacionalizaciones (que hay que

analizar en cada caso y en cada país), los progresismos populistas establecieron alianzas con grandes corporaciones transnacionales aumentando el peso de éstas en la economía nacional. Ejemplos de ello son Ecuador, donde las empresas más importantes incrementaron sus ganancias respecto del período anterior; Argentina, que durante el ciclo kirchnerista mostró una mayor concentración y extranjerización de la cúpula empresarial; o Brasil, donde el consenso lulista impulsó la alianza con el sector del agronegocios al tiempo que favoreció al sector financiero.

Una vez dicho esto y al calor del fin del ciclo progresista, cabe preguntarse cuáles han sido los factores que fortalecieron la visibilización y legitimación de valores conservadores, incluso de corte autoritarios/reaccionarios ¿Ha sido el proceso de polarización y la personalización de los liderazgos? ¿Acaso la consolidación de regímenes políticos más tradicionales –populismos plebeyos o de clases medias– facilitó una transición hacia opciones más radicalizadas, de derecha? ¿O la conexión entre los progresismos realmente existentes y el giro conservador es más indirecta, por la vía del debilitamiento de los movimientos sociales? También podemos preguntarnos si la emergencia de una nueva derecha es todavía la excepción en América Latina. Y si ésta no responde a una tendencia global, con vinculaciones indirectas en relación al agotamiento del progresismo en América Latina.

Para intentar responder algunas de estas preguntas, propongo un desarrollo en dos partes. En una primera parte, buscaré trazar un cuadro general del fin de ciclo y el giro a la derecha, a través de la indagación de los cambios políticos ocurridos, los nuevos alineamientos gubernamentales, el hundimiento de la institucionalidad regional progresista gestada en los últimos quince años, en fin, el surgimiento de nuevas alianzas políticas y comerciales, y los nuevos desafíos geopolíticos.

En una segunda parte, haré una lectura de carácter a la vez más teórica pero también más específica, para explicar cómo los populismos y las dinámicas polarizadoras, abrieron ventanas de oportunidad política, instalando nuevos umbrales sociales. Aclaro, sin embargo, que antes que realizar una discusión del concepto populismo y sus múltiples interpretaciones, me interesa partir de la definición dada más arriba (el populismo como ambivalencia, como dinámica de polarización y como pacto social), a fin de explicar cuáles fueron los factores que fortalecieron la visibilización y legitimación de valores conservadores, incluso de corte autoritarios/reaccionarios. En esta línea, analizo cómo las dinámicas recursivas desencadenadas consolidaron campos antagónicos y abrieron a nuevas oportunidades políticas, que visibilizaron y fortalecieron posiciones conservadoras, incluso de carácter reaccionarias y autoritarias. También me interesa dar cuenta del tipo de Derechas que caracterizan a la región, estableciendo diferencias y similitudes entre la Derecha Neoliberal y la Derecha Radical Autoritaria. Por último, retomaré los casos de Brasil y Argentina, dos de los países que encabezaron el final del ciclo, en relación a los campos de conflictos, para dar cuenta, a su vez de este vaivén entre lo político y lo social.

PRIMERA PARTE. FIN DE CICLO, GOBIERNOS, ALIANZAS REGIONALES Y CAMBIOS GEOPOLÍTICOS

En términos de gobiernos, el ocaso del ciclo progresista se habría iniciado en 2015, en Brasil, con el golpe parlamentario contra la presidenta Dilma Rousseff y luego, en Argentina, con el triunfo electoral de Mauricio Macri; se profundizaría en 2017, con la transición ecuatoriana, tras la victoria de Lenin Moreno, cuyo gobierno implicó un distanciamiento crítico de las coordenadas del progresismo de Correa; se continuaría en Chile, con el nuevo regreso de Sebastián Piñera al gobierno, y encontraría un cierre catastrófico

con el derrocamiento de Evo Morales en noviembre de 2019. Por otra parte, la vía espuria del golpe parlamentario conoció expresiones tempranas, primero en Honduras, con la expulsión de Zelaya (2009), y luego en Paraguay, con la rápida destitución de Fernando Lugo (2012); procesos que aceleraron el retorno a un escenario abiertamente conservador en estos países. El fin de ciclo progresista no sólo incluye golpes parlamentarios y procesos eleccionarios, sino también mutaciones al interior del progresismo, como el caso de Lenin Moreno, pero también la deriva autoritaria del gobierno de N. Maduro en Venezuela, país que desde hace años atraviesa una crisis generalizada –de alcances geopolíticos–; a lo que se añade el viraje abiertamente represivo en Nicaragua, bajo el binomio D. Ortega-R. Murillo, desde 2018, con sus muertos y centenares de presos, digno de la peor de las dictaduras.

Asimismo, fue en 2018 que el giro conservador tuvo también su vuelta de tuerca autoritaria en Brasil, con el encarcelamiento de Lula da Silva y el inesperado y abrumador triunfo en las elecciones presidenciales de Jair Bolsonaro, un político de extrema derecha, que profesa sin pudor alguno, valores autoritarios y políticas militaristas de mano dura. Por añadidura, el cuadro se complica si observamos países con gobierno conservador, por ejemplo, Colombia, en el cual se vislumbra un recrudecimiento represivo, con la llegada de Iván Duque, un político asociado al ala uribista. En 2018 y pese a los acuerdos de paz firmados con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), «dentro de la categoría de violencia política, se perpetraron 648 asesinatos, 1151 casos de amenaza de muerte, 304 lesionados, 48 atentados, 22 desapariciones forzadas, tres agresiones sexuales y 243 detenciones arbitrarias. En lo que va corrido de 2019 (mes de mayo), han sido asesinados al menos 62 líderes sociales»[3].

3 Carta al presidente Ivan Duque de parte de Académicos del mundo y de Colombia, mayo de 2019. https://comosoc.org/carta-abierta-academicos-a-Duque

Otros elementos dan cuenta del cierre del ciclo económico, con el fin del boom de los *commodities* y su conexión con hechos de corrupción. Además del connotado caso de Brasil, el escándalo de Odebrecht salpica a Colombia, El Salvador, Honduras, Argentina (pese a que se reconocieron los sobornos y no hay imputados todavía), Ecuador (a poco de asumir, el vicepresidente Jorge Glas fue apartado del cargo), aunque el ejemplo más radical es el Perú, donde cuatro expresidentes fueron llevados a la justicia. En marzo de 2018, el presidente en ejercicio, Pedro Pablo Kuczynski (PPK) debió renunciar, y en abril de 2019, el dos veces presidente Alan García, líder del alicaído APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana), produjo una conmoción internacional al preferir la vía del suicidio, antes que comparecer ante los estrados judiciales. Sin embargo, ahí donde la cuestión de la corrupción ha pegado más fuerte, horadando la credibilidad y el capital político, es en los gobiernos progresistas, que ahora son caracterizados desde sectores de derecha y una parte importante de la sociedad, como «populismos irresponsables», reducidos a una suerte de cleptocracia perversa, beneficiada por el período de rentabilidad extraordinaria ligada a los *commodities*.

A fines de 2019, volvieron a moverse las placas tectónicas en América Latina. Asistimos a grandes movilizaciones opositoras en Ecuador, contra la política de ajuste del gobierno de Lenin Moreno y, sobre todo, en Chile, donde las protestas masivas hicieron estallar al modelo chileno por los aires, ese mismo modelo que durante años reivindicaron todas la derechas regionales y globales como horizonte deseable. El carácter transversal de las protestas en Chile muestra las marcas de la desigualdad en todos los rubros: desde derechos básicos, transporte, salud, educación hasta en términos de violencia estatal.

Por otro lado, en Uruguay, desde 2005 gobernaba el Frente Amplio, con sus diferentes alternancias, confirmando con ello que es

uno de los partidos más institucionalistas (y moderados) de la región, poco proclive a los excesos populistas de sus vecinos. Sin embargo, en octubre de 2019 el Frente Amplio perdió en el balotaje frente a Enrique Lacalle Pou, representante del Partido Nacional, por un escasísimo margen (48,8% frente a 47, 3%), en el marco de una transición ordenada, pero hacia la derecha.

La nota inesperada la aportó Bolivia, en el marco de las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019. El derrocamiento y posterior exilio de Morales, la persecución a numerosos referentes del exoficialismo, así como el carácter represivo y sumamente conservador del gobierno de facto de Janine Añez, no dejan dudas acerca del gran retroceso político que vive ese país. Pero ello no obsta reconocer que el mayor punto ciego de Evo Morales fue el afán reeleccionista. Ya en 2016, al dejar de lado el resultado del referéndum[4] que le negaba la posibilidad de volver a presentarse como candidato presidencial, Morales forzó las instituciones democráticas (Tribunal Nacional Electoral) con el objetivo de ser habilitado nuevamente como candidato. En las elecciones de octubre pasado, la denuncia de irregularidades y manipulación, reportados no solo por la auditoria de la OEA, sino también por aquella contratada por el Organo electoral y otra de la UMSA (Universidad Mayor de San Andrés), fueron claras al respecto. Pero ahí, nuevamente, el gobierno reforzó el discurso negacionista y desestimó el rechazo creciente de vastos sectores sociales que salieron a la calle a recusar los resultados de las elecciones. Aunque diversa en sus orígenes, la insurrección pasó a ser comandada por un nuevo liderazgo de extrema derecha encarnado por Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, en alianza con

4 En febrero de 2016, se llevó a cabo un referendo cuyo objetivo era la aprobación o rechazo del proyecto constitucional para permitir al presidente o vicepresidente del Estado Boliviano a postularse nuevamente a una elección. La negativa se impuso por el 51% de los votos.

la policía. Sucedió entonces lo inesperado. Gracias a los errores y abusos del oficialismo, cuyo triunfo electoral en primera vuelta era sospechado por justas razones, sectores abiertamente antidemocráticos y racistas, se apropiaron del discurso de «defensa de la democracia». La salida insurreccional se fue configurando así en un golpe de Estado, dejó a Bolivia más polarizada que nunca.

Mientras tanto, en solitario fervor, asoma como la excepción del «fin de ciclo», México, a partir del resonante triunfo de Andrés López Obrador, aun si hay que decir que dicho gobierno se instala en una suerte de progresismo fuera de ciclo (o de «progresismo tardío», como lo denominara Massimo Modonesi[5]), al tiempo que reivindica para sí la «especificidad nacional». Por otro lado, el retorno del peronismo en Argentina en octubre de 2019, con el triunfo de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner, frente a Mauricio Macri, no puede ser interpretado como una vuelta tout court del progresismo. Probablemente se trate de un gobierno de centro, con algunas medidas de centro-izquierda, en un contexto de vacas flacas, y de enorme emergencia económica, social y financiera.

Por último, el *nuevo clima de época* viene de la mano de la profundización del estado de Excepción. Como señala Emiliano Terán Mantovani, «en Brasil, tras el decreto de militarización de Rio de Janeiro en febrero de 2018, el gobierno de Michel Temer declaró que este plan servirá como un «laboratorio» para todo el país, por lo que no descartó que las fuerzas armadas sean desplegadas en otras regiones[6]. En Venezuela, se ha impulsado una creciente militarización de todos los ámbitos de la vida y la instauración, de hecho y de derecho –por decreto oficiales emitidos permanentemente desde

5 https://nuso.org/articulo/mexico-el-gobierno-progresista-tardio/

6 https://www.telesurtv.net/news/temer-amenaza-con-militarizar-otras-regiones-brasil-20180228-0028.html

te desde enero de 2016–, de un estado de excepción en el país. En Colombia, donde el estado de excepción constituye un instrumento ordinario de la política gubernamental y de las estructuras jurídicas desde hace ya varias décadas, el escenario *Post-acuerdo* de Paz (desde noviembre de 2016) no supone la interrupción del proceso de militarización imperante, la asistencia militar por parte de los EE.UU, ni de la intensa represión social y desaparición de activistas que está en desarrollo en el país.» Estos, entre otros procesos, «no deben ser leídos únicamente en clave nacional-estatal, en la medida en la que pueden articularse con la política exterior de las potencias en disputa en la región, principalmente de los Estados Unidos, que instala nuevas bases militares o «task forces» en diversos países (especialmente en Perú, Paraguay, Colombia y Argentina) o impulsa maniobras conjuntas de fuerzas militares (como las operaciones militares que desarrolló con Brasil, Colombia y Perú en la frontera amazónica de estos tres países en noviembre de -2017 (Svampa y Terán Mantovani, 2019).

En términos regionales, el final de ciclo puede ser ilustrado por tres hechos: el primero de ellos está ligado al previsible vaciamiento de la UNASUR (Unión de Naciones Sudamericanas), símbolo máximo del bloque progresista y sus aspiraciones de integración regional, en clave política. Hay que tener en cuenta que el nuevo regionalismo tuvo su bautismo de fuego en la cumbre de Mar del Plata (Argentina), realizada en 2005, cuando los países latinoamericanos enterraron el ALCA (Alianza Latinoamericana de Libre Comercio), promovido por Estados Unidos, y crearon el ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas), bajo el impulso del carismático Hugo Chávez. En una clara línea latinoamericanista se pergeñaron proyectos ambiciosos, como el de la creación de una moneda única (Sucre) y el Banco del Sur, los cuales sin embargo no prosperaron, en parte debido al escaso entusiasmo de parte de Brasil, país que, a raíz de su rol de potencia emergente, en general

juega en otras ligas globales. La creación de la UNASUR, en 2007, y posteriormente de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), en 2010, inicialmente como foro para procesar los conflictos de la región, por fuera de Washington (pues excluye a Estados unidos y Canadá), jalonan dicho proceso de integración regional.[7]

Ahora bien, en abril de 2018 Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú presentaron su baja temporal e indefinida de la UNASUR. Esta decisión fue anunciada bajo la consigna de la no reincorporación hasta que «no se garantice el funcionamiento adecuado de la organización». «Con esto, UNASUR se quedó con seis miembros activos, menos de la mitad más uno, lo cual la dejó sin fondos y sin poder de decisión, y la convirtió en un organismo únicamente testimonial».[8] Un gesto simbólico de este vaciamiento fue el retiro de la estatua en homenaje a Néstor Kirchner que

7 Esto no significa que, durante el ciclo progresista, el UNASUR u otros organismos regionales hayan cumplido con sus objetivos iniciales. En realidad, con el correr del ciclo progresista, la hipótesis del regionalismo desafiante fue relativizada a raíz del pasaje a una Unasur de «baja intensidad» (Comini y Frenkel, 2014), signada por el final de los grandes liderazgos regionales (la muerte de Chávez y de Néstor Kirchner, el alejamiento de Lula Da Silva, tres líderes que apostaron fuertemente a la integración regional). Por otro lado, no hay que desestimar el rol de la UNASUR en la expansión del neoextractivismo. Por ejemplo, a partir de 2007, la IIRSA (Iniciativa para la Infraestructura Regional Sudamericana), rebautizada COSIPLAN, quedó bajo la órbita de la UNASUR, que buscó fortalecer los vínculos entre los países de América del Sur, por medio de la intensificación del comercio regional y de inversiones del Banco Nacional de Desarrollo Económico (BND) en obras de infraestructura. En diversas regiones, los proyectos del IIRSA-Cosiplan serán resistidos y cuestionados. Se trata de 544 proyectos que totalizan una inversión estimada en 130.000 millones de dólares. Para el 2014, el 32,3% de las inversiones dentro de IIRSA estaba reservado al área energética, concentrados principalmente en centrales hidroeléctricas, muy cuestionadas por sus efectos sociales y ambientales, sobre todo en la ya fragilizada zona de la Amazonia brasilera y boliviana. Más aún, de 31 proyectos prioritarios del Cosiplan, 14 de ellos tocan la Amazonia. (Carpio, 2017).

8 http://www.motoreconomico.com.ar/opinion/qu-le-pas-a-la-unasur

se hallaba en la sede central de UNASUR, en Ecuador, por pedido expreso del presidente Lenin Moreno[9] así como la decisión de darle otro destino al edificio. Al inicio, en una decisión no exenta de polémicas, se pensó en hacer de éste la sede de la castigada CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), pero luego se acordó en utilizar al edificio como sede de un centro de estudios superiores indígenas[10]. Algo similar sucede con la CELAC, (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), aunque ésta se encuentra más bien en estado de parálisis, dadas los enfrentamientos ideológicos en torno a los posicionamientos respecto de Venezuela y Nicaragua.

En segundo lugar, en contraste con lo anterior, la Alianza del Pacífico (AP), que nació en 2011 como una iniciativa de integración regional formada por Chile, Colombia, México y Perú, para contrabalancear el peso del entonces progresismo hegemónico y su incipiente red de organismos regionales, fue tomando mayor relevancia tanto en términos políticos como sobre todo económicos. Actualmente son veinte los Estados Observadores dentro de la AP, con Panamá y Costa Rica que expresaron su interés por formar parte del bloque. Por ejemplo, Panamá inició negociaciones con México para firmar un Tratado de Libre Comercio y con ello cumplir con los requisitos para incorporarse a la Alianza.[11] Alineada con una política aperturista, en 2019, la AP realizó un acuerdo comercial inédito con el Mercosur. «Las ocho naciones de ambos bloques concentran 79 por ciento de la población de América Latina, 85 puntos porcentuales del producto bruto de la región, 86 por ciento de las exportaciones y 88 puntos porcentuales de la in-

9 https://www.perfil.com/noticias/politica/ecuador-retira-estatua-nestor-kirchner-no-representa-nuestros-valores-unasur.phtml

10 https://www.efe.com/efe/america/portada/el-presidente-de-ecuador-convertira-la-sede-unasur-en-quito-una-universidad-indigena/20000064-3675570

11 http://www.sice.oas.org/TPD/Pacific_Alliance/Pacific_Alliance_s.asp

versión extranjera directa, ponderó el mandatario mexicano, quien hasta ayer fungió de presidente *pro tempore* de la AP».[12]

Pero no es solo el desmantelamiento de la institucionalidad regional creada por los progresismos lo que está en juego. Ahí donde pueden percibirse con extrema claridad los cambios es en los alineamientos respecto de lo que sucede en Venezuela, sobre todo a partir de la autoproclamación de Juan Guaidó. el presidente de la Asamblea nacional, como «presidente encargado» (enero de 2019); y en Nicaragua, desde 2018, ante la denuncia y constatación evidente de la violación de derechos humanos. Como era de esperar, el conflicto en Venezuela dividió las aguas, reordenó las alianzas y generó nuevos espacios regionales e internacionales para negociar una salida pacífica (Grupo de Lima, Grupo Internacional de Contacto), así como confirmó el rol nada neutral de la OEA (Organización de los Estados Americanos). Sin embargo, la disputa en Venezuela, emblema del rentismo petrolero, ha desbordado el mapa del subcontinente, e incluso la relación América Latina-Estados Unidos, para colocarla en el tablero geopolítico global, al involucrar otras potencias (mientras USA y la Unión Europea apoyan a Guaidó; China y Rusia se manifestaron en favor del gobierno de Maduro). En este marco, la CELAC quedó paralizada, frente a la división en dos bandos[13], lo cual se agravó al ingresar

12 «El primer paso para un eventual e inédito acuerdo comercial en el mundo entre dos bloques económicos fue acordado ayer entre los gobiernos de los países que conforman el Mercado Común del Sur (Mercosur) –Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil– y las naciones que integran la Alianza del Pacífico (México, Chile, Colombia y Perú), al firmar una declaratoria conjunta y el Plan de Acción de Puerto Vallarta». https://www.nodal.am/2018/07/libre-comercio-en-la-region-inedito-acuerdo-entre-la-alianza-del-pacifico-y-el-mercosur/

13 «Desde hace 2 años, la CELAC enfrenta una parálisis en sus trabajos, derivada principalmente de la división ideológica existente a causa de las crisis en Venezuela y, recientemente, Nicaragua. Prácticamente, la membresía de la CELAC está dividida en dos facciones. Por un lado se encuentran los integrantes del Grupo de Lima –formado por trece países de la región, y Canadá–, el cual se ha

en la agenda las denuncias contra el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, con centenares de muertos y presos políticos, productos de la represión estatal. En todo caso, la situación de crisis política y colapso generalizado en Venezuela y, en menor medida, la represión en Nicaragua, constituyeron la punta de lanza para cimentar el nuevo eje político conservador compuesto por la tríada Duque-Bolsonaro-Macri, quienes en enero de 2019 reconocieron rápidamente a Guaidó, frente a la prudencia y distanciamiento de otros países, como México y Uruguay. En consecuencia, no es extraño que en marzo de 2019, reunidos en Chile, ya bajo el nuevo gobierno de Sebastian Piñera, Duque, Bolsonaro y Macri, a los que hay que agregar al peruano Martín Vizcarra, el paraguayo Aldo Benítez y el ecuatoriano Lenin Moreno (el único presidente deudor del ciclo progresista), lanzaron el PROSUR, cuyo objetivo es dar el golpe de gracia a la UNASUR, y reemplazarlo por una unidad descentralizada y «sin presión ideológica».[14]

Al mismo tiempo, la contra-respuesta a la hipótesis del «fin de ciclo» y a la ofensiva neoliberal, también supo mostrar el peor costado de los progresismos, a través del Foro de Sao Paulo, al como aparece en su declaración de julio de 2018. Si, por un lado, éste

dedicado a bloquear a Venezuela de reuniones regionales y no reconoce al régimen de Nicolás Maduro, además de apoyar la aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua en la OEA. Por el otro, están los miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), que respaldan al gobierno de Venezuela y al de Daniel Ortega en Nicaragua frente a las críticas y sanciones de la comunidad internacional. Este enfrentamiento ideológico ha dado como resultado la cancelación de diversas reuniones sectoriales y ministeriales. Incluso, no fue posible celebrar la VI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC, cuyas cinco ediciones anteriores habían gozado de una periodicidad anual ininterrumpida, hasta ahora.». http://revistafal.com/la-celac-en-el-nuevo-escenario-regional/ http://revistafal.com/la-celac-en-el-nuevo-escenario-regional/

14 https://www.lanacion.com.ar/politica/macri-viaja-a-chile-para-lanzar-el-prosurmacri-y-varios-presidentes-de-la-region-lanzan-hoy-en-chile-un-nuevo-organismo-nid2231031

repudió la persecución y posterior encarcelamiento de Lula da Silva (algo que difícilmente pueda ser cuestionable), también expresó de modo enfático su solidaridad incondicional para con los gobiernos de Venezuela y Nicaragua, países en los cuales se denuncian graves violaciones de derechos humanos.[15] A lo largo del ciclo progresista, esta política de apoyo incondicional tuvo también su expresión en CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales), pese a integrar centros y grupos de trabajo académico muy heterogéneos y a que se defina por su apuesta al pensamiento crítico[16]. El rechazo a cualquier tipo de autocrítica produjo un daño inconmensurable en el campo de las izquierdas, pues no sólo le quitó credibilidad, y promovió el arte de la ventriloquía de parte de no pocos intelectuales alineados de manera automática con los progresismos, sino también facilitó una serie de argumentos políticos en manos de sectores liberales, conservadores y autoritarios, acerca del conjunto de las izquierdas, dispuestas a movilizarse en contra del imperialismo, pero que «no se interesarían por los derechos humanos» o bien, consideran que éstos son temas relativos a la «democracia liberal», sin contenidos sustantivos.

En términos geopolíticos, a nivel global, el fin de ciclo y el giro a la derecha se articula con la profundización del cuestionamiento a la globalización neoliberal, visible en la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea (*Brexit*) y del triunfo de Donald Trump en Estados Unidos. Este contexto impulsó la expansión de los populismos de derecha y el crecimiento de la derecha radical, identificada con

15 Veáse la Declaración del Foro de Sao Paulo de julio de 2018 (https://www.nodal.am/2018/07/cierra-el-foro-de-sao-paulo-con-fuerte-apoyo-a-lula-nicaragua-y-venezuela/), así como la inaguruación de Clacso del foro de Pensamiento Crítico, que contó con la participación central de varios expresidentes.

16 Foro de pensamiento crítico realizado en buenos aires, en diciembre de 2018. Una de las pocas voces críticas en términos políticos fue la de Edgardo Lander. Disponible en youtube, https://www.youtube.com/watch?v=T3aHEdE8wsk. Véase también de la autora, http://www.sinpermiso.info/textos/clacso-entre-la-ventriloquia-y-la-ausencia-de-autocritica

posicionamientos xenófobos y antiglobalistas. Asociado a profundas transformaciones políticas, económicas y sociales, ocurridas en las últimas décadas, este escenario de derechización, expresa asimismo un deslizamiento político-ideológico de las clases subalternas, que hoy repudian las consecuencias de una globalización desigual, y traducen ese rechazo en propuestas populistas, de corte nacionalista y xenofóbico. En clave norteamericana, esta fenomenal insubordinación contra el actual orden neoliberal mundial ha sido analizada por Nancy Fraser en términos de fin de los «neoliberalismos progresistas» (2017). En Europa, los diferentes procesos eleccionarios parecen haberse convertido en una suerte de test general sobre el destino de la Unión europea que enfrenta, por un lado, a aquellos que abogan por la continuidad, a partir de la defensa del status quo, del libre comercio y la moneda europea (derechas, partidos de centro y socialdemócratas); por otro lado, una extrema derecha que reclama la salida del euro, la implementación de una política proteccionista y la expulsión masiva de inmigrantes, a quienes se culpa de usufructuar los servicios sociales que ofrecen los estados europeos.

Cabe volver sobre los impactos geopolíticos y regionales producidos por la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Por un lado, las políticas proteccionistas que éste intenta llevar a cabo tienen un innegable impacto global, especialmente en lo que se refiere a la puja interhegemónica con China, potencia global ascendente. La transición hegemónica, que hasta este momento se había asentado sobre una relación de cooperación pacífica entre Estados Unidos y China, según los términos de Wallerstein,[17] pareciera sufrir una inflexión. Por otro lado, Trump en-

17 Reflexionando sobre las características de esta relación, Wallerstein se preguntaba: «¿Son rivales China y Estados Unidos? Sí, pero hasta cierto punto. ¿Y son enemigos? No, no son enemigos. ¿Y son colaboradores? Son ya más de lo que les gustaría admitir, y lo serán más conforme continúa la década» (Wallerstein, 2012).

caró una flexibilización de la normativa ambiental, a tono con sus posiciones negacionistas respecto del calentamiento global, lo cual también trajo aparejado un relajamiento internacional en el tema, pese a la gravedad de la crisis socioecológica. Por último, respecto de América Latina, la renegociación del NAFTA (North America Free Trade Agreement) y la anunciada salida de Estados Unidos del TPP (Tratado Trans-Pacífico), si bien facilita la consolidación de las (ya asimétricas) relaciones económico-comerciales entre los países latinoamericanos y China, y el ingreso de otras potencias, como Rusia, se vio acompañada por una mayor injerencia política de Estados Unidos en la región, luego de más una década (desde 2005) de relativa autonomía, muy especialmente en relación con Venezuela y la amenaza de intervención o de apoyo a una intervención militar.

En términos comerciales, durante el ciclo progresista y al calor de la caída de los precios de los commodities (2013), los diferentes gobiernos latinoamericanos contrajeron préstamos con China, firmaron convenios comerciales unilaterales con este país, e incluso algunos (como Ecuador) con la Unión Europea. Asimismo, otorgaron importantes concesiones petroleras y mineras a grandes corporaciones transnacionales, que implicaron fuertes concesiones a la dimensión más anti-imperialista de la retórica progresista. Sin embargo, el doble discurso progresista se hacía todavía en el marco de un andamiaje o institucionalidad latinoamericana vigente, que tensaba, pese a todo, la liberalidad de esos convenios. En la actualidad, al no existir más ese andamiaje regional ni tampoco el lenguaje político latinoamericanista que lo acompañaba (el progresismo como *lingua franca*), se han abierto las puertas para la concreción de otros acuerdos comerciales, los llamados de Nueva Generación, que ya en Europa han generado enormes

resistencias[18]. Se trata de tratados elaborados en el mayor secretismo, de espaldas a la sociedad, que conllevan una radicalización del neoliberalismo, pues proponen suprimir las barreras aduaneras, eliminar las trabas al comercio, al tiempo que implican una mayor flexibilización de la normativa ambiental y social, establecen un dispositivo de negociación de las diferencias entre las empresas y los estados y buscan liberalizar aquellos sectores de actividad no suficientemente mercantilizados (salud, educación, cultura, entre otros).

En esta línea, hubo un avance del Tratado Transpacífico (TTP), que fue aprobado en México, Chile y Perú, y que crea el área comercial más grande del mundo, pese al retiro de Estados Unidos. Uno de los países donde hubo más resistencia, fue Chile, donde según críticos, el TTP-11,[19] «rebaja de manera considerable los aranceles comerciales a los países participantes, pero más aún, a las empresas transnacionales. Esto último ha provocado el rechazo de los sectores opositores al gobierno de Sebastián Piñera, quienes han señalado que suscribiendo este tratado Chile cedería soberanía frente a las grandes corporaciones.»[20] Lo cierto es que el convenio traerá nuevas asimetrías: mayores inversiones extranjeras en re-

18 Este es el caso del CETA o Acuerdo Económico y Comercial Global entre Canadá y los países de la Unión Europea, que fue producto de la negociación secreta entre diferentes mandatarios, de espaldas a sus sociedades. En razón de ello, hubo numerosas movilizaciones en diferentes países europeos.

19 El llamado TPP-11 es el pacto comercial que sustituye al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), el cual fue suscrito por 12 países el 4 de febrero de 2016.Estados Unidos anunció su salida del CPTPP en enero de 2017, pero los 11 países restantes –Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y México– convinieron mantenerlo y el pasado 8 de marzo firmaron el nuevo acuerdo en Santiago de Chile. https://www.infobae.com/america/mexico/2018/12/30/entro-en-vigor-el-acuerdo-comercial-tpp-11-de-asia-pacifico-que-abrira-para-mexico-los-mercados-de-10-paises/

20 https://radio.uchile.cl/2019/04/12/luciana-ghiotto-por-tpp-11-es-el-peor-tratado-de-libre-comercio-de-la-historia/

cursos naturales (algo que ya sucede en el intercambio con China y ha potenciado el proceso de reprimarización de las economías), bloqueo de políticas orientadas a la diversificación de la matriz productiva, reduciendo la soberanía nacional; y desplazamiento de la regulación pública que quedaría en manos de tribunales de arbitraje internacional, lo cual favorece a las grandes corporaciones[21].

Como expresa el especialista Gustavo Merino, del IADE (Instituto Argentino para el Desarrollo Económico), el TPP11 «continúa expresando, aunque de forma más débil que el TPP, una institucionalidad transnacional, una estatalidad globalista, que busca fijar el sistema de mediaciones (normas y organismos) que se imponen como universalidad para cada Estado particular y que están en relación con una estrategia de acumulación y apropiación de la riqueza social por parte del capital transnacional del Norte Global en competencia con nuevos jugadores emergentes –especialmente China, sus transnacionales estatales, sus alianzas, su inmenso mercado, su competencia en las ramas tecnológicas de primer orden y su influencia euroasiática donde se define el poder mundial-. De hecho, el escrito de más de 6000 páginas del TPP fue elaborado en secreto y sus redactores fueron principalmente representantes de trasnacionales y cuadros técnicos formados en sus *think tank*.»[22]

En suma, la tendencia del corrimiento ideológico hacia la derecha parece ser la regla. Los gobiernos cambiaron, no por única vía: lo hicieron a través de elecciones libres, pero también de mutaciones internas y de golpes parlamentarios. La crisis fue de

21 https://www.eldesconcierto.cl/2018/12/20/tres-razones-para-oponerse-al-tpp-11/

22 http://www.iade.org.ar/noticias/relanzamiento-del-tratado-transpacifico-la-continuidad-de-la-geoestrategia-globalista-pesar. Desde 2016 el presidente argentino M. Macri –cuyo país ha sido además sede de la OMC en 2017 y del G20 en 2018– ha expresado su intención de acercarse al TTP, en una sociedad donde existe escaso conocimiento en cuanto a las consecuencias que éstos conllevan.

corte política y económica, pero también revela un agotamiento ideológico, visible en la transformación de los progresismos en populismos de alta intensidad, de su consolidación como modelos de dominación tradicional. Ahora, bajo otro clima político-ideológico, tanto regional como global, despuntan asociaciones que van reuniendo el arco de la derecha latinoamericana, para ir configurando un nuevo mapa. Surgen nuevas alianzas regionales que buscan desplazar el andamiaje regional construido durante el ciclo progresista. En términos geopolíticos, los astros se alinean en la dirección de la multipolaridad, pero al mismo tiempo, el ascenso de Trump implica mayor injerencia política de Estados Unidos en la región, una suerte de «retorno a la normalidad», con sus nuevas bases militares y sus fuerzas especiales.

Podría sintetizarse este cambio de época con algunas postales. La primera, remite al «retorno a la normalidad» en las relaciones de subalternidad América Latina- Estados Unidos. Esto fue expresado con total crudeza por Pedro Pablo Kuczynski, en febrero de 2017, cuando todavía era presidente del Perú, quien en el momento ser condecorado en la Universidad de Princeton, declaró: *«Estados Unidos se enfoca en aquellas áreas donde hay problemas, como el Medio Oriente. No invierte mucho tiempo en América Latina, pues es como un perro simpático que está durmiendo en la alfombrita y no genera ningún problema»* [23]*.*

La segunda postal refiere al quiebre de las lealtades políticas. Dos casos resonantes ilustran este viraje: la extradición del escritor y ex activista italiano de las Brigadas Rojas, Cesare Battisti, quien desde 2010 estuvo refugiado en Brasil. Durante la campaña electoral, Jair Bolsonaro había prometido entregar a Battisti a Matteo Salvini, el vicepresidente de Italia, con quien comparte un

23 https://rpp.pe/peru/actualidad/ppk-para-eeuu-america-latina-es-como-un-perro-simpatico-que-no-genera-problemas-noticia-1033439

proyecto ideológico Lo curioso de todo ello es que quien entregó a Battisti, en enero de 2019, accediendo al pedido de extradición, no fue un gobierno conservador o neoliberal, sino el propio Evo Morales[24]. De igual modo sucedió con Julian Assange, a quien en abril de 2019 el presidente ecuatoriano Lenin Moreno le quitó la inmunidad diplomática,[25] lo que permitió que éste fuera arrestado por la policía británica. Sin duda, ambos son hechos impensables años atrás, en pleno ciclo progresista.

PARTE II: POLARIZACIÓN, DERECHAS Y OPORTUNIDAD POLÍTICA

UNA APROXIMACIÓN PROCESUAL

Los progresismos latinoamericanos, con sus enormes deficiencias y contradicciones, buscaron implementar un proyecto político de corte igualitario, en contraste con la era neoliberal. Sin embargo, con el correr de los años, más allá de los procesos de democratización, se fueron transformando en modelos de dominación más tradicional, en populismos de alta intensidad. Al calor del boom de los *commodities* y, muy especialmente, de su crisis, alimentaron una dinámica de polarización que en su despliegue iría instalando nuevos umbrales sociales, horadando el pacto social que los sustentaba.

Esta dinámica de polarización puede ser comparada en intensidad e interacción con las campañas políticas. Sin embargo, lo que al inicio es considerado como un mecanismo simplificador más o menos frecuente de la política (la configuración de esquemas

24 Lula había rechazado la extradición de Battisti a Italia en 2010. Al conocerse la detención de Salvini en Bolivia, el hijo de Bolsonaro escribió en las redes sociales: «Brasil ya no tiene bandidos. El regalito está llegando», en un mensaje directo a Salvini. https://www.elmundo.es/internacional/2019/01/13/5c3b76d8fddd-ff2ebd8b457a.html

25 https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-47897043

binarios), en un determinado campo de conflicto e interacción, al volverse más o menos permanente corre el riesgo de convertirse en un marco de inteligibilidad general de la política y la sociedad. La polarización no sólo va envolviendo actores sociales y grupos políticos diferentes que atraviesan y conforman el campo de conflicto, sino que va adquiriendo una significación más ontológica que política, al generar identidades contrapuestas que se conciben como irreconciliables e irreductibles. Así, no sólo los populismos fueron forjando cadenas de equivalencia[26] al calor de virulentas confrontaciones, sino también la oposición, política, económica y mediática, que fue ocupando el espacio público, elaborando repertorios de acción colectiva, movilizando demandas diferentes, constituyendo y redefiniendo identidades.

Del lado de los progresismos, la polarización produjo una exacerbación de las hipótesis conspirativas: todo terminaba siendo culpa del «imperio», de la derecha o de los grandes medios de comunicación. Toda crítica realizada desde la izquierda ecologista, indígena o clasista, terminaba siendo «funcional» a la lógica de los sectores más concentrados. En el marco de este realineamiento, poca posibilidad había de que emergieran nuevas opciones dentro del campo de la centroizquierda u otras izquierdas, lo cual tendió a agravarse, a raíz del proceso de concentración del poder en los líderes o lideresas. Del lado del campo opositor (político y mediático), lo usual fue la demonización de las diferentes experiencias progresistas, las que, hacia el fin de ciclo, comenzaron a ser caracterizadas como «populismos irresponsables», reducidos sin más a una pura matriz de corrupción y culpables de haber

26 Utilizo el concepto de «cadenas de equivalencia» introducido por Laclau, referido a la capacidad de un discurso (un significante vacío) de articular demandas sociales heterogéneas, sin por ello apelar al esquema interpretativo de este autor en relación al populismo.

desperdiciado la época de bonanza económica asociada al boom de los *commodities.*

Gran parte de los gobiernos progresistas quedaron atrapados en esta dinámica polarizadora que abrió a nuevas oportunidades políticas a sus opositores, legitimando otros discursos y posicionamientos políticos-sociales, esto es, instalando nuevos umbrales o puntos de inflexión desde los cuales percibir o pensar la sociedad. Leída a la vez como apertura y como cierre, la noción de *umbral* nos habilita a reconocer menos el carácter inherentemente mutante de lo social que a entender cómo se instalan nuevas fronteras sociales, que tienden a reconfigurar nuestra percepción de los hechos y establecen nuevos consensos.[27] Breno Bringel (B.Bringel & José Mauricio Domingues: 2018, pp.132-139) desarrolla un enfoque procesual similar al que propongo aquí, a través del concepto de «campos de acción», al cual define como «configuraciones sociopolíticas y culturales, que expresan ordenes societales en los cuales los actores interactúan entre ellos y otros campos», que incluyen no sólo movimientos sociales, sino partidos políticos y otros grupos en disputa. Esta conceptualización propone ir más allá de la noción de matrices socio-políticas contestatarias para analizar la dinámica de movilización social, e incluir a los movimientos y grupos de derecha e incluso de extrema derecha, en un campo más amplio.

27 La complejidad del mundo social exige la adopción de un enfoque procesual, que subraye tanto la interrelación de los actores, como el carácter dinámico y recursivo de lo social. Sostener que la realidad social presenta no sólo un carácter dinámico, sino también recursivo, conduce a afirmar que el movimiento, el proceso de interacción, va generando nuevos umbrales desde los cuáles pensar la sociedad. En ese sentido, una noción que nos puede ayudar en el análisis de la polarización es la de «umbral de pasaje», a fin de referirnos a aquellos momentos de interacción en los cuales se percibe una inflexión, un punto de condensación, sino de redefinición –parcial o global- de la situación. La historia política nos proporciona muchos ejemplos de ello. He tratado el tema en Svampa, 2008.

En términos más específicos este contexto de polarización y de recursividad acelerada, la dualidad y ambivalencia propia de los populismos resultaron políticamente insostenibles en el tiempo, pues en la medida en que éstos fueron revelando sus limitaciones y sus déficits, más aún su agotamiento, los más beneficiados terminaron por ser los sectores más conservadores y reaccionarios. Esto explica asimismo por qué, en general, la salida de los regímenes populistas suele ser traumática, pues no solo abre a episodios revanchistas, en términos sociales y políticos, sino que, además, el contexto de polarización genera nuevas oportunidades políticas, a partir de las cuales se habilitan lenguajes y demandas más conservadoras y autoritarias.

CICLOS Y DERECHAS, ENTRE LO POLÍTICO Y LO SOCIAL

Desde el punto de vista histórico, suelen distinguirse ciclos diferentes de la derecha:[28] el primero, entre 1964 y 1985, caracterizado por la *Derecha Dictatorial*, asociada al ejército y las fuerzas conservadoras; una derecha que instauró, de la mano de la doctrina de seguridad nacional, el terrorismo de Estado y terminó violentamente con la vida de centenares de miles de miembros de la sociedad civil. Las dictaduras del Cono Sur (Brasil, Uruguay, Chile y Argentina, en orden cronológico, ilustran este período oscuro de la historia)

Un segundo ciclo aparece asociado a la *Derecha neoliberal*, que se extendería entre 1985 y la actualidad, de la mano del ajuste estructural y el Consenso de Washington. Se trata de una derecha que combina cierto respeto por los marcos institucionales (no en todos los casos), con políticas de seguridad de mano dura. Su rasgo más

28 Retomamos los dos primeros ciclos planteados por Francisco López Segrera (2016), aunque diferimos respecto de la caracterización del tercer ciclo. http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/collect/clacso/index/assoc/D11890.dir/America-Latina-Crisis-del-neoliberalismo.pdf

notorio es la plasticidad ideológica, al acoplarse con tradiciones políticas diferentes, desde aquellas populistas (Menem, en Argentina) los nuevos *outsiders* de la política, (como Fujimori, en Perú), o políticos más conservadores (como Fernando Henrique Cardoso en Brasil). En el marco del reciente ciclo progresista, estas derechas estuvieron lejos de desaparecer, representadas por gobiernos conservadores. Ciertamente no encarnaron la novedad, pues las expectativas políticas estaban puestas en los gobiernos progresistas, pero tanto Perú, Colombia y –hasta hace muy poco– México, a los que hay que sumar Paraguay y Honduras y las alternancias conservadoras en Chile, ilustraron –aun con matices diferentes– este persistente modelo de Derecha Conservadora Neoliberal.

En relación al actual escenario, es posible hablar de un nuevo ciclo, a condición de aclarar que no hay una única derecha ni una derecha hegemónica, pese al ocaso del progresismo. En realidad, desde el punto de vista político, a la *Derecha Neoliberal* actualizada en clave neoconservadora o pospolítica, hay que sumar la emergencia de una *Derecha Radical Autoritaria,* que mantiene una relación más ambigua con el neoliberalismo, al tiempo propone una vuelta a los valores jerárquicos y los binarismos tradicionales.

Tanto el gobierno Mauricio Macri (Argentina) como el de Michel Temer (Brasil), Horacio Cartes (Paraguay) e incluso aquel de Lenin Moreno (Ecuador, con los matices del caso), se insertan en la estela de la Derecha conservadora neoliberal, aún si presentan rasgos diferenciadores respecto de otros períodos. Por un lado, se trata de derechas pospopulistas, que apuntan sus críticas al ciclo progresista. Son derechas cuya emergencia está marcada por la polarización, como dimensión fundamental de la estructuración de identidades políticas. Por otro lado, desarrollan políticas de ajuste en contextos de caída de los precios de los commodities y de crisis socioeconómica.

LA DERECHA NEOLIBERAL

El caso de Argentina es paradigmático. En 2015, el ascenso de Mauricio Macri se dio en un contexto de intensificación de la polarización, en el cual confluyeron el cansancio hacia una sobreactuada épica populista, y los primeros impactos de la crisis económica. Una parte importante de la sociedad argentina planteaba la necesidad de una alternancia, algo que brindara una bocanada de aire fresco en términos políticos y que, al mismo tiempo, abriera la posibilidad a un mejoramiento de sus oportunidades económicas. En ese marco, el espacio anti-kirchneristá logró articular otras demandas, por ejemplo, las promesas del crecimiento económico, («la lluvia de inversiones») de mano del discurso de la eficiencia económica; a su vez, ésta se articuló con la demanda de las clases medias urbanas y rurales, pequeños y medianos empresarios, economías regionales, que votaron a Mauricio Macri porque creyeron que, siendo empresario (y, además, hijo de inmigrantes europeos), éste podría entenderlos y apoyarlos. Asimismo, no pocos argentinos de clase media baja también lo votaron en contra de la «patria asistencialista», para confirmar su distancia en relación a los más pobres, asistidos por el Estado. Cerraba fuertemente esta cadena de equivalencias el discurso anticorrupción y la promesa de un orden republicano, menos conflictivo y pospolítico[29]. Sin embargo, Macri no logró construir un populismo conservador y con pretensiones pospolíticas. Apenas asumió el gobierno, abandonó las promesas de «pobreza cero» y desempolvó el léxico de la derecha neoliberal, típica de los '90, que se creía desterrado: ajustes, tarifazos, predominio de los mercados, altas tasas de desocupación, vuelta

29 Según el sociólogo Gabriel Vommaro (2017), se trataría de una nueva derecha que busca la desconflictualización de la política, que atribuye la idea de conflicto e ideología al kirchnerismo y a los partidos tradicionales. Sin embargo, el fracaso económico de un proyecto que inicialmente quería colocarse en el centro, hizo que éste impulsara aún más la polarización.

al FMI, riesgo país. La idea misma de «nueva derecha» se diluyó, al calor del ajuste neoliberal y el discurso de clase, más allá de que el gobierno no solo mantuviera, sino aumentara considerablemente los programas sociales en relación con los sectores excluidos, en un contexto de aumento de la pobreza y la desocupación (que en junio de 2019 superó el 10%).

En 2019, el escenario pareciera ser otro: para quienes fueron sus votantes, el gobierno de Macri, perdido en el laberinto del retroceso social y el agravamiento de la pobreza y la inflación, se reveló finalmente como un fraude. Al calor de la crisis económica, social, financiera y el ajuste permanente, aquella cadena de equivalencias políticas que lo llevó de modo casi inesperado a la Casa Rosada, se ha quebrado[30]. Si quedan eslabones de ella, para las elecciones presidenciales de octubre del corriente año, lo que estará disponible para la oferta macrista –y a lo que apuesta denodadamente el oficialismo– es el antikirchnerismo *en estado puro* (como «pesada herencia»; como «populismo irresponsable», como sinónimo de «corrupción», «mayor riesgo país» y «aislamiento del mundo», como retorno al «conflicto» y a la «venganza», entre otros), pero sin un imaginario conservador positivo como propuesta alternativa.

En suma, luego de 11 años de polarización salvaje (2008-2019),[31] la Argentina devuelve la imagen de una sociedad muy da-

30 En realidad, el imaginario político conservador, portador de una visión empresarial, con responsabilidad limitada y negadora de las ideologías, pero abierto a la posibilidad de un pacto social, económico y moral, sólo vivió de modo efímero en el imaginario de los votantes, machacado una y otra vez por los grandes medios de comunicación que abiertamente jugaron en favor de Macri, aún en plena recesión.

31 En Argentina, la piedra de toque de la polarización fue el conflicto por la renta agraria extraordinaria que, en 2008, enfrentó a Cristina Fernández, apenas asumida como presidenta, con los sectores agrarios (oposición que aglutinó el conjunto de las corporaciones agrarias). Pronto, el desacuerdo por el aumento de las

ñada, en la cual la derecha conservadora y neoliberal continúa con chances de continuar en el gobierno, mientras que el progresismo se ha desplazado hacia el centro político, para poder captar votos más despolarizados. Esto ha generado una derechización de la oferta política electoral, aun si no se advierten grandes corrimientos hacia una extrema derecha abiertamente antidemocrática.

En Brasil, el 2013 marcó el parteaguas.[32] La crisis, primero de orden financiero, abrió a un nuevo ciclo de protestas, una «aper-

retenciones agrarias adoptó dimensiones políticas: tanto la respuesta inflexible del gobierno (llamándolos «piquetes de la abundancia») como la rápida reacción de sectores de clase media porteña, que salieron a la calle en apoyo del «campo», cuestionando el estilo beligerante del gobierno, sirvieron para reactualizar viejos esquemas de carácter binario, que atraviesan la cultura política argentina: civilización / barbarie; peronismo / antiperonismo; pueblo / antipueblo; nación / antinación. Como en otras épocas de la historia argentina, los esquemas dicotómicos, que comenzaron siendo principios reductores de la complejidad en un momento de conflicto, terminaron por funcionar como una estructura de inteligibilidad de la realidad política, tanto para aquellos que se identificaban con el campo popular democrático, como para aquellos identificados el campo liberal-republicano. Amén de ello, la polarización social ilustraba una suerte de fractura instalada en el corazón mismo de las clases medias argentinas.

32 Una aclaración se hace necesaria. A diferencia del argentino, que aparece como emblemático, pocas veces se ha reconocido que la experiencia del Partido de los Trabajadores (PT) bajo el gobierno, también forma parte de los populismos latinoamericanos. Ciertamente, el caso del PT tiene sus peculiaridades y puede ser leído como un populismo transformista; o, de modo más gramsciano, en términos de «revolución pasiva» Para el brasileño André Singer, este último concepto es clave en la explicación del lulismo, pues éste vendría a instituirse en una variante conservadora de la modernización. En realidad, la estrategia política del PT se expresó en el llamado «pacto lulista», un modelo que proponía satisfacer a la vez los intereses de los trabajadores y las clases medias, a través de reformas sociales graduales y la expansión del consumo, como los intereses de los empresarios, a través de una política de apertura a las inversiones y de fomento estatal. El «pacto lulista» funcionó entre 2003 y 2013, en el marco del crecimiento económico impulsado por lo que he llamado el «consenso de los commodities», muy atado al sistema financiero, e implicó un mejoramiento de la situación de las clases populares, en uno de los países más desiguales de la región. Al mismo tiempo, conllevó la creciente burocratización del PT, la temprana deriva en la corrupción (*el Mensalão*, 2005), el progresivo abandono de la política de reforma agraria, la

tura societaria», como propone pensarla Breno Bringel, ya citado, visible en la confluencia y disputa en la calle de sectores con tradiciones políticas muy diversas: desde el alteractivista (con fuerte protagonismo en el Movimiento Pase Libre), el campo liberal-conservador (que apoyó la operación Lava Jato y tendría una política agresiva contra el «campo popular-democrático» representado por el PT), hasta el temido campo autoritario-reaccionario (de talante antidemocrático, nostálgico de la dictadura militar).El golpe de estado parlamentario contra Ruosseff consolidó la «radicalización conservadora»[33] que sería liderada por Michel Temer, quien de todos modos careció de la legitimidad política para llevar a cabo las reformas neoliberales.

Más difícil resulta clasificar al gobierno de Lenin Moreno, quien se presenta al mismo tiempo como una continuidad y una mutación dentro del progresismo. Mientras que para Alberto Acosta y J. Cajas Guijarro es «un neoliberal más» [34], para Pablo Ospina, «Si la política económica ecuatoriana puede ser legítimamente calificada como de «derecha», lo discutible es que con Moreno hayamos presenciado algún «giro».[35] Efectivamente, para todos estos autores, el gobierno de Moreno habría profundizado el modelo del ajuste fiscal y de las concesiones petroleras a empresas extranjeras que inició Rafael Correa en 2014.

expansión del agronegocios y el acaparamiento de tierras en manos de latifundistas. En suma, no solo a causa de sus políticas, sino por el temprano cambio de su composición orgánica, el PT, el principal partido de izquierda clasista del continente, devino en el poder, transformismo mediante, un régimen populista.

33 Salvador Schalvelzon, 29/06/2016. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=217321, recuperado el 24/5/2019.

34 https://lalineadefuego.info/2018/09/04/moreno-un-neoliberal-mas-por-alberto -acosta-y-john-cajas-guijarro/

35 https://nuso.org/articulo/ecuador-moreno-correa-elecciones-politica/

LA DERECHA RADICAL AUTORITARIA

En Brasil, la crisis del sistema democrático, con el escándalo de Odebrecht, conllevó la caída de la clase política y empresarial y la descomposición del sistema político tradicional. En el corto período que se establece entre la destitución de Rousseff (2015) y el posterior encarcelamiento de Lula da Silva (2018), se fue tejiendo una cadena de equivalencias sobre la cual se montaron las demandas del campo más autoritario y conservador, que encontraron una traducción político-electoral. En lo político, y más allá del sentimiento antipetista de las clases medias y altas y de la eficacia de los *fake news*, el triunfo de Jair Bolsonaro expresó un llamado social a restablecer los valores morales tradicionales y las jerarquías depuestas. Emergió así una nueva oferta política, un populismo de extrema derecha, con importantes elementos de fascismo explícito,[36] en el cual convergen la apelación a un orden capitalista clásico/autoritario con el llamado al orden patriarcal tradicional, el de la previsibilidad de las divisiones binarias, el de la distinción entre «lo normal y lo patológico/lo desviado».

En esa línea, el vertiginoso ascenso de Bolsonaro resitúa a América latina en el escenario político global, en consonancia con lo que sucede en los Estados Unidos de Trump y en los países europeos, donde se expanden los partidos antisistema, de la mano de la extrema derecha xenófoba, antiglobalista y proteccionista. En el marco de una reacción antiprogresista generalizada, la extrema derecha en su versión populista, o más bien cuasi fascista, surgió como una de las ofertas disponibles, vehiculando un discurso anti-corrupción, a través del cual se visibilizan otras demandas, desde aquellas que proclaman la defensa de la familia tradicional

36 Resulta difícil trazar las fronteras entre populismos de extrema derecha y derechas fascistas, pero ciertamente, como afirma Chantal Mouffe (2019), una diferencia es que mientras el populismo de derecha reivindica la democracia en clave xenófoba, el fascismo apela abiertamente a valores autoritarios.

en contra del estado, la crítica al garantismo y a la política de derechos humanos, a la «ideología de género y la diversidad sexual[37], hasta las que habilitan incluso la defensa de la dictadura militar o la justificación de la tortura.

Posteriormente, en 2018, el encarcelamiento de Lula Da Silva y la imposibilidad de que este se presentara a elecciones generales, pusieron de manifiesto tanto la debilidad del campo popular democrático (del PT y de los movimientos sociales que lo acompañaron, entre ellos el MST), habilitando discursos de carácter antidemocrático, promovidos desde el campo autoritario-reaccionario. Instalado el nuevo umbral, reconfigurada las fronteras políticas entre lo democrático y lo no democrático, el pasaje de un gobierno de derecha más conservadora y neoliberal, que accedió a través de un golpe parlamentario, a uno de derecha radical, por la vía de las urnas, fue muy rápido. Un dato no menor es que, en contraste con la Argentina, en Brasil la polarización no irrumpió en un período de auge económico, sino que coincidió con el fin del boom de los commodities y el agotamiento del «pacto lulista», hacia 2013.

ELEMENTOS EN COMÚN Y DIFERENCIAS

Por encima de las diferencias realmente existentes, en América Latina hay varios elementos en común entre la Derecha Neoliberal y la Derecha Radical Autoritaria:

— La tendencia empresarial y la orientación neoliberal es la norma. Existe así una presencia importante de ministros en el gobierno que provienen del mundo de CEOS empresariales, que fungen como representantes directos de los grandes grupos económicos. No es casual que los grandes grupos económicos

37 Veáse de Pablo Stefanoni (2018) los alcances de la crítica al llamado «marxismo cultural», que apunta sobre todo a la llamada ideología de género y diversidad sexual, así como el discurso garantista y de derechos humanos.

hayan obtenido una remisión de las deudas (patronales y tributarias) (Acosta y Cajas Guijarro, 2018). Son gobiernos neo-empresariales que se proponen llevar a cabo la reforma laboral –y provisional–, realizan el ajuste fiscal, contraen la inversión pública y disparan la desocupación. Por ejemplo, en Argentina y Ecuador, tras el discurso de la política gradual de ajuste, hubo un regreso al FMI, lo que sin duda aceleró el ajuste. El aumento de la pobreza se combina así con la ampliación de las brechas de la desigualdad.

— Los procesos judiciales ligados a hechos de corrupción comenzaron a ocupar un gran espacio en la agenda política. En esa línea, la justicia juega un papel importante en la unidimensionalización del legado del ciclo progresista. Si bien la corrupción involucra una parte importante de la clase política y empresarial, apuntan de manera especial a deslegitimar los progresismos,[38] a fin de bloquear cualquier posibilidad de realización de un balance complejo y multidimensional, instalando la idea de que éstos, lejos de perseguir la igualdad, son y han sido populismos corruptos e irresponsables. Este discurso antiprogresista señala como encarnación de todos los males políticos al régimen venezolano de N. Maduro, símbolo mayor de la corrupción y de la dictadura.

— La expansión de las fronteras de commodities y la construcción del enemigo interno. La profundización del neoextractivismo, a través de la expansión de una nueva fase de exacerbación, en todas sus modalidades (agronegocios, minería, fracking, megarepresas, entre otros), ha sido la regla. Al mismo tiempo, esto ha sido avalado por fuertes medidas represivas (Svampa, 2018;

38 Con ello no estamos afirmando que los progresismos no hayan cometido actos de corrupción. Antes bien, lo que enunciamos es la unidimensionalización de la experiencia progresista, por la vía de su asimilación a la corrupción.

Svampa y Teran Mantovani, 2019). En esta línea, desde las Derechas se destaca la construcción del «enemigo interno», un elemento que nos remonta a la época de la Doctrina de Seguridad Nacional. Mientras que en Argentina el enemigo interno es representado por los mapuches, en la zona de la Patagonia; en Brasil el concepto es mucho más englobante, pues se trata de un discurso no sólo anti-indígena, sino también antigarantista, antigay y racista. Así, mientras se militarizan territorios y se promueve el avance de las fronteras del capital, América latina continúa en el top del ranking mundial en términos de asesinatos a activistas de derechos humanos y activistas ambientales (Global Witness, 2017 y 2019).

Como ya ha sido dicho, estas derechas apuntan al vaciamiento de las instituciones regionales creadas durante el ciclo progresista (Unasur, Alba) y hoy se encaminan a construir nuevos espacios de integración, de la mano de la multilateralidad y el libre mercado. En términos de opciones geopolíticas, la consolidación de una nueva dependencia económica, comercial y tecnológica con China, por la vía de inversiones en infraestructura y extracción de bienes comunes, así como a través de la firma de convenios bilaterales y Acuerdos comerciales de nueva generación, coexiste con el abierto acercamiento de los diferentes gobiernos con Estados Unidos, marcado por el trumpismo, su discurso proteccionista y su lenguaje de guerra. Es la «vuelta a la normalidad» en las relaciones Estados Unidos-América Latina, pero a condición de reconocer que este acto de subalternidad se realiza en un contexto geopolítico complejo y cambiante, marcado por la multipolaridad. Así, mientras se amplían las bases militares norteamericanas en la región, también lo hacen las áreas de comercio con otros países (el Pacífico, Rusia, China).

Por otro lado, existen diferencias notorias entre ambas Derechas, en cuanto a la concepción de lo social y sus valores y quiénes están llamado a ser los protagonistas del cambio: mientras la Derecha Neoliberal se mantiene en una línea de convergencia entre clasismo y neoliberalismo, entre conservadurismo y liberalismo cultural, ensalzando la meritocracia y sumando algunos elementos ligados a la retórica pospolítica; la Derecha Radical expresa la legitimación de valores autoritarios y jerárquicos, abre la puerta a un fascismo social[39] algo que en el límite, propone la eliminación del otro diferente, así como una vuelta radical a los binarismos patriarcales tradicionales (pares binarios que oponen y jerarquizan un polo sobre otro, en términos raciales, sociales, de género y generacionales).

Asimismo, mientras que la Derecha Neoliberal combate el igualitarismo a través de la despolitización y busca articularlo en clave de mercado, de meritocracia y de nuevas oportunidades «aspiracionales»-, la Derecha Radical propone desinstalar la clave meritocrática, expulsándola del dispositivo político institucional, para rearmar el esquema societario en una nueva clave: la que opone «la mayoría silenciosa» a la clase de los expertos, sean que éstos pertenezcan a la clase política/económica y financiera; o de modo más específico, a los expertos asociados a las izquierdas académicas, cuyo discurso se centra en el feminismo y la defensa de la diversidad sexual y étnica. No es casual entonces que, en este último caso, el enemigo no sea sólo político, sino también «cultural», ilustrado por una «élite privilegiada de izquierda», a todas luces universitaria, que promueve «valores disolventes». Los ataques del gobierno de Bolsonaro contra la educación las universidades públicas brasileñas –y particularmente contra las ciencias sociales y

39 Entiendo el fascismo social en la línea en que lo define Boaventura de Sousa Santos (2009), el cual es generado desde la sociedad y conoce diferentes expresiones o manifestaciones sociales.

humanas– son un claro ejemplo de ello. No sólo se repudia su condición de «expertos», sino que además se responsabiliza a éstos de ser los portadores de discursos y prácticas que atentan contra los «valores de la familia y la vida», (el posestructuralismo, y su defensa de la llamada «ideología de género», «el discurso gay», la defensa de las minorías sexuales y étnicas, el discurso en defensa de los derechos humanos).

En esa línea también conviene distinguir entre la Derecha radical que encontramos en América latina (al menos, hasta el momento) y aquella otra que se expande en Europa y Estados Unidos. Mientras que en términos generales en el norte global, la derecha radical tiene una relación más ambigua con el neoliberalismo; más aún, trasluce un rechazo al sistema de desigualdades profundizado por la globalización neoliberal, en clave xenofóbica y proteccionista; en América Latina ésta aparece como una reacción contra los populismos progresistas, y articula en clave antigarantista o antiderechos desde demandas como la seguridad, el rechazo a un estado asistencialista, hasta la defensa de los valores familiares tradicionales en contra del discurso gay/feminista/antipatriarcal.

En suma, contra ellas, la nueva Derecha Radical, propone una narrativa «anti-elitista», «anti-privilegios», busca reivindicar una «verdadera democracia», el de las «mayorías silenciosas». Pero, mientras que en Estados Unidos y Europa este discurso anti-elitista opone de modo prioritario «los políticos ciudadanos» contra los «políticos expertos» (de izquierda y de derecha)[40], y apunta contra los inmigrantes; en América Latina, la derecha radical es primariamente antigarantista o antiderechos y apunta contra *la clase cultural progresista y las izquierdas*, representada de modo paradigmático por las ciencias sociales y el saber experto universi-

40 Vease el perfil de Steve Bannon, https://elpais.com/internacional/2019/03/24/actualidad/1553454729_290547.html

tario. En ambos casos, se trata de un «discurso moral», que opone las creencias del pueblo (la mayoría) contra una clase dominante (los «expertos»), y puja por (re)instalar el dispositivo jerárquico tradicional.

DE LO SOCIAL A LO POLÍTICO-ELECTORAL

Ha sido dicho que Argentina y Brasil comparten el giro político a la derecha, pero de modo diferente. Mientras que una lo hizo de la mano de una derecha política más conservadora y neoliberal, más ligada –incluso en su propio fracaso– a los '90; el caso de Brasil ilustra la emergencia de una nueva derecha radical antidemocrática. Sin embargo, a nivel social, y pese a las diferencias, en Argentina existen elementos propios del giro reaccionario-autoritario que vemos en Brasil, aunque éste encontró vías de expresión más específicas: primero durante la discusión y sanción de la Ley de matrimonio igualitario en 2010, luego, de manera más virulenta, con el proyecto de legalización del aborto, en 2018.

Tengamos en cuenta que el debate por el aborto legal instaló en la agenda pública no solo la problemática de la violencia de género, sino también un potente discurso feminista de decidido corte antipatriarcal. El abigarrado espacio del *Ni una menos* (que surgió en 2015) es un movimiento de movimientos caracterizado por la movilización masiva, en el cual convergieron dos olas: aquella representada por los colectivos feministas que desde hace décadas vienen bregando por la legalización del aborto, con la ola más reciente, ilustrada por la flamante vitalidad antipatriarcal de las más jóvenes. La lucha por la legalización del aborto hizo que este movimiento intergeneracional se convirtiera en una nueva fuerza social, una revolución de alcances inesperados, donde las mujeres expresan un nuevo ethos que se coloca por encima de los clivajes ideológicos (la *sororidad* y la autonomía de los cuerpos).

En 2018, la discusión por el aborto legal dividió a la sociedad argentina en dos campos: por un lado, el campo liberal-democrático y el radical-feminista; por otro lado, el campo liberal conservador y el reaccionario-autoritario. Este último campo, el de los pañuelos celestes, autodenominado «próvida», desarrolló una gran capacidad de movilización, de la mano de sectores pentecostales y el catolicismo ultraconservador; ejerciendo una abierta presión sobre lxs legisladorxs nacionales para rechazar el proyecto de ley del aborto en el Senado, además de impulsar interpretaciones forzadas, lesivas e incluso desquiciadas –como comparar el derecho al aborto con el nazismo, o con la última dictadura militar argentina.

Sin duda, la marea verde feminista constituye el movimiento social más potente e innovador de la Argentina de las últimas décadas.[41] Ahora bien, pese a la derrota del proyecto de ley en favor del aborto en el Senado, la masividad del movimiento hizo creer a muchxs que, más allá de la batalla perdida, éste no sólo había llegado para quedarse, sino también que, más temprano que tarde, se haría justicia. En contraste con este optimismo, hoy la marea verde feminista tiene su *backlash*, su reacción conservadora. Por un lado, en el norte del país, donde ésta suele ser más automática y notoria, e involucra la activa complicidad de funcionarios locales y provinciales, comenzaron a realizarse acciones que pretenden obstaculizar los abortos no punibles (en casos de violación, y cuando existe peligro para la vida o la salud de la mujer, algo que la legislación argentina garantiza desde 1921). Por otro lado, surgieron «grupos de padres» (que en realidad son grupos organizados de activistas antiderechos), para movilizarse en rechazo de la ley de Educación

41 Existe también una reflexión crítica que se orienta a problematizar la dirección punitivista de ciertas corrientes del feminismo actual. Para aportes en una clara línea crítica y progresista, véase Rita Segato (2019), así como Cristina Vega (2018). Para una visión desde la derecha, que critica el punitivismo ligado a las «izquierdas políticamente correctas» y postestructuralista, véase Schapiro, 2019.

Sexual Integral en las escuelas, norma cuyo carácter progresista es innegable. Por último, el dato más novedoso lo aporta una de las provincias consideradas más progresistas, Santa Fe, donde una modelo y panelista televisiva, Amalia Granata, que se opone al aborto legal, obtuvo en las elecciones provinciales de junio de 2018, nada menos que el 20% de los votos. Ella, junto con otros cinco candidatos de su lista (sectores penstecostales y de extrema derecha), serán legisladores provinciales, en nombre de un partido denominado, «Unite por la familia y la vida». En esta línea, la nueva presentación del proyecto de Ley del aborto legal, realizada en mayo de 2019 ante el Congreso nacional, presagia la reedición de contiendas sociales y nuevas espirales de polarización.

Es probable que la elección en Santa Fe encuentre nuevas réplicas en otras provincias. Aunque ahora esas demandas se encuentran todavía dispersas, al calor de la polarización, vaya a saber si estos grupos no podrían confluir con otros que apelan a la «mano dura» y proclaman la defensa del orden capitalista clásico/autoritario, convirtiéndose –como sucedió en Brasil- en eslabones en una misma cadena de equivalencia.

En suma, a diferencia del Brasil, en Argentina la polarización no tuvo su despliegue inicial en un período de declive económico, sino todo lo contrario; tampoco la reacción autoritaria golpeó de lleno al populismo como régimen, sino más bien se orientó contra la marea verde feminista y su agenda de derechos, ya bajo un gobierno de derecha. Sin embargo, más allá de la diversidad de escenarios políticos y de tiempos económicos, lo llamativo es que estas corrientes sociales autoritarias atraviesan el conjunto de los países latinoamericanos, con diferentes grados de expresión y visibilidad, ilustradas por la movilización de los sectores pentecostales y ultracatólicos, así como por la emergencia de nuevas agrupaciones de derecha y anarquistas libertarios, que batallan en contra de lo que denominan «el marxismo cultural», esto es, contra el discurso

garantista, contra el feminismo, la llamado «ideología de género», contra la diversidad sexual, proponiendo un claro regreso a las divisiones binarias tradicionales.

* * *

Nuestro planeta está en peligro. El cambio climático, como expresión más visible de la crisis socio-ecológica es una realidad. Los eventos extremos, la expansión destructiva del modelo neoextractivista en los territorios, sus impactos múltiples, la toxicidad de nuestros alimentos, la amenaza del colapso energético, hacen que habitantes del campo o de la ciudad sintamos diariamente el roce de la catástrofe, la cola del monstruo en la oscuridad. Lamentablemente, no siempre esa sensación de desamparo y de crisis ha servido para abrir el debate público sobre estos temas tan acuciantes, para pensar sobre la situación crítica de nuestros sistemas socio-naturales, sobre la necesidad de un nuevo paradigma civilizatorio; sobre las consecuencias del avance de la comoditización de la naturaleza. Pero también hemos aprendido que esta gran problemática no es la única cola del monstruo en medio de la oscuridad. La regresión es también política y sacude a numerosas sociedades, tanto en el Norte como el Sur global, donde se expande la derecha radical, que abre la puerta a diferentes expresiones del fascismo social.

En tal sentido, la relación entre progresismos y giro conservador no es lineal, aunque la polarización abrió nuevas ventanas de oportunidad. El caso más reciente es Bolivia, donde el derrocamiento de Evo Morales abre a una serie de interrogantes acerca de la rapidez con la que se producen las transformaciones políticas. No sólo los tiempos políticos en el mundo se aceleraron, sino que en su vertiginosidad amenazan con mutaciones bruscas y violentas, de carácter irreversible, a imagen y semejanza de la crisis climática actual.

Así, lo novedoso en América Latina no es la polarización propia del ciclo progresista, ya clausurado, sino más bien la fragilidad del escenario político emergente. El posprogresismo en clave latinoamericana trae la amenaza de un backlash, de una reacción virulenta en contra de la expansión de derechos, de retorno de lo reprimido, capaz de desplegarse a través de peligrosas cadenas de equivalencia, que engarza tanto con las nuevas derechas tradicionalistas como con los fundamentalismos religiosos. En Brasil, esas corrientes sociales encontraron sorpresivamente una traducción y una convergencia política electoral, que dieron nacimiento a una nueva derecha radical. En Argentina, más allá del retorno de un progresismo más débil o de centro, apuntan a golpear al movimiento social más potente surgido en los últimos 30 años, el feminismo antipatriarcal, ilustrado por la lucha en favor del aborto legal. En Bolivia, la conjunción explosiva entre un populismo democratizador, pero ciego, y un revanchismo racista, abre las puertas a figuras de la extrema derecha y con pretensiones fundamentalistas, como Camacho o Añez.

Es cierto que no está dicho que la reacción autoritaria haya llegado para quedarse, pues múltiples son las fuerzas igualitarias que recorren el continente, de la mano de diferentes tradiciones de lucha, desde aquellos que redoblan la acción anti-neoliberal ante el regreso de los tiempos de oscuridad (organizaciones sindicales y movimientos socioterritoriales urbanos), hasta aquellos otros que encarnan la expansión de nuevos derechos y bregan por abrir a otros horizontes civilizatorios (movimientos feministas, diversidad sexual, luchas socioambientales e indigenistas).

Aun así, es necesario pensar lo que sucede en Brasil e incluso, de modo más acotado, en Argentina y otros países, como el síntoma de algo más profundo, presente en todas las sociedades latinoamericanas y en mayor sintonía con lo que ocurre a nivel global. En un contexto posprogresista –marcado por nuevos conflictos

sociales, mayor desigualdad, creciente desorganización social, una acuciante crisis socio-ecológica, discursos punitivos, crisis de los partidos políticos, emergencia de nuevas agrupaciones de derecha–, las vías de la polarización salvaje no solo abren la posibilidad a un giro conservador/neoliberal, a la usanza de los '90; también puede visibilizar corrientes profundas que recorren la sociedad, instalando y legitimando discursos desigualitarios y conductas fascistizantes, que se creían erradicados y que colocan en un gran tembladeral derechos y valores democráticos. Como ya sucedió en Brasil y recientemente en Bolivia, de modo rápido, casi vertiginoso, éstas pueden traducirse en un umbral de pasaje, conllevando un grave retroceso político, social y cultural.

Hay que estar atentos, encender la alarma; acompañar y activar más que nunca las fuerzas sociales democráticas, aquellas que buscan abrir nuevos horizontes de justicia social y ambiental, aquellas que impulsan la expansión de nuevos derechos y combaten las ideologías de carácter reaccionario y desigualitario.

BIBLIOGRAFIA CITADA

Acosta, A. y J. Cajas Guijarro (2018). *Moreno, un neoliberal más.* En https://lalineadefuego.info/2018/09/04/moreno-un-neoliberal-mas-por-alberto-acosta-y-john-cajas-guijarro/

Akram, Assa, (2018). *Tres razones para oponerse al TPP11.* En *El Desconcierto,* https://www.eldesconcierto.cl/2018/12/20/tres-razones-para-oponerse-al-tpp-11/

B. Bringel y José Mauricio Domingues (2018). *Brasil. Cambio de era: crisis, protestas y ciclos políticos,* Madrid: Los libros de la Catarata.

Carpio, Silvia (2017). «Integración energética sudamericana: entre la realidad, perspectivas e incertidumbres», en *Discursos y realidades. Matriz energética, políticas e integración.* Plataforma Energética. (pp. 91-138). Bolivia: CEDLA.

Comini y Frenkel (2014). «Una Unasur de baja intensidad. Modelos en pugna y desaceleración del proceso de integración en América del Sur». *Nueva Sociedad*, https://nuso.org/articulo/una-unasur-de-baja-intensidad-modelos-en-pugna-y-desaceleracion-del-proceso-de-integracion-en-america-del-sur/

Duarte Gamboa, E. E. (2019). «LA CELAC en un Nuevo escenario regional». *Foreign Affairs Latinoamerica,* http://revistafal.com/la-celac-en-el-nuevo-escenario-regional/, rescatado el 28/6/2019.

Foro de Sao Paulo (2018). *Declaración final del XXIV encuentro del Foro de Sao Paulo,* realizado entre el 15 y 17 de julio 2018 en La Habana, Cuba, en https://www.nodal.am/2018/07/cierra-el-foro-de-sao-paulo-con-fuerte-apoyo-a-lula-nicaragua-y-venezuela/).

Fraser, Nancy (2017). *El fin del neoliberalismo progresista,* http://www.sinpermiso.info/textos/el-final-del-neoliberalismo-progresista.

Giotto, Luciana (2019). *El TPP11 es el peor tratado de la historia,* en https://radio.uchile.cl/2019/04/12/luciana-ghiotto-por-tpp-11-es-el-peor-tratado-de-libre-comercio-de-la-historia/

Global Witness, (2018). *2017 es el año con más muertes registradas de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente,* https://www.globalwitness.org/en/press-releases/2017-es-el-%C3%B1o-con-m%C3%A1s-muertes-registradas-de-personas-defensoras-de-la-tierra-y-el-medio-ambiente/

López Segrera, F. (2016) *América Latina, crisis del posneoliberalismo y ascenso de la nueva derecha,* Clacso, http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/collect/clacso/index/assoc/D11890.dir/America-Latina-Crisis-del-neoliberalismo.pdf.

Laclau, E. (2009). «Populismo, ¿qué nos dice el nombre», en F. Panizza (comp), *El populismo como espejo de la democracia* (pp. 51-71). Buenos Aires: FCE.

Merino, G. E. (2018). *IADE, Relanzamiento del Tratado Trans-Pacífico,* en http://www.iade.org.ar/noticias/relanzamiento-del-tratado-trans-pacifico-la-continuidad-de-la-geoestrategia-globalista-pesar, consultado el 20/06/2019.

Modonesi, M. (2018). «México, el gobierno progresista tardío», en *Nueva Sociedad*, https://nuso.org/articulo/mexico-el-gobierno-progresista-tardio/

Mouffe, Chantal (2019). «La apuesta por un populismo de izquierda, Entrevista de Samuele Mazzolini», *Nueva Sociedad,* 281z, mayo-junio.

Ospina, Pablo (2019). «Ecuador: ¿realmente hay un «giro a la derecha»? Del correísmo al morenismo», *Nueva Sociedad.*

Santos, Boaventura (2009). *Sociología jurídica crítica. Para un nuevo sentido común en el derecho.* Madrid: Editorial Trotta.

Schalvelzon, S. (2016). *La llegada de Temer: radicalización conservadora y fin de ciclo,* 29/09/2016, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=217321.

Segato, Rita. *La politicidad feminista no puede ser una política del enemigo,* entrevista, disponible en http://www.lavanguardiadigital.com.ar/index.php/2019/03/08/rita-segato-la-politicidad-feminista-no-puede-ser-una-politica-del-enemigo-sino-inevitablemente-nos-construiremos-como-fascismo/

Schapiro, Alejo (2019). *La traición progresista*, Buenos Aires, Edhasa-el zorzal.

Singer, A. (2013). *Os sentidos do Lulismo: reforma gradual e pacto conservador*, Brasil: Cebrap.

Stefanoni, Pablo (2018). «Biblia, buey y bala… recargados. Jair Bolsonaro, la ola conservadora en Brasil y América Latina». N*ueva Sociedad*, en https://nuso.org/articulo/biblia-buey-y-bala-ola-conservadora-brasil-bolsonaro-stefanoni/

Svampa M.y E. Terán Mantovani (2019). «En las fronteras del cambio de época: Escenarios de una nueva fase del extractivismo en américa latina». En Gabbert, K y M. Lang (editoras), *Como se sostiene la vida en América Latina. Feminismos y Re-existencias en tiempos de oscuridad*. Quito: FRL.

Svampa, M. (2018a). «Entre la ventriloquía y la ausencia de autocrítica», en *Brecha*, https://brecha.com.uy/entre-la-ventriloquia-y-la-ausencia-de-autocritica/

—— (2018b). *Las fronteras de neoextractivismo en América Latina.* México: CALAS. http://calas.lat/es/publicaciones/afrontar-las-crisis/maristella-svampa-las-fronteras-del-neoextractivismo-en-am%C3%A9rica.

—— (2017.) D*el cambio de época al fin de ciclo, Gobiernos progresistas, extractivismos y movimientos sociales en América Latina.* Buenos Aires: Edhasa.

—— (2016). *Debates Latinoamericano. Indianismo, Desarrollo, Dependencia y Populismo.* Buenos aires: Edhasa.

—— (2008). «Notas provisorias sobre la sociología, el saber académico y el compromiso intelectual» En: *Gerard Althabbe, entre varios mundos*, V. Hernández y M. Svampa (editoras), Bs As, Prometeo.

Vega, Cristina (2019). *Reflexiones sobre impunidad, punitivismo y justicia en los feminismos en movimiento*, http://www.sinpermiso.info/textos/reflexiones-sobre-impunidad-punitivismo-y-justicia-en-los-feminismos-en-movimiento

Vommaro, Gabriel (2017). *La Larga Marcha de Cambiemos.* Buenos aires: Siglo XXI.

Wallerstein, I. (2012). «China y Estados Unidos: rivales o colaboradores». En *La Jornada,* 22/01/2012, http://www.jornada.unam.mx/2012/01/22/opinion/028a1mun.

DIARIOS Y PORTALES DIGITALES

Agencia EFE (2018). *El presidente de Ecuador convertirá la sede de la Unasur en Quito en una universidad indígena*, en https://www.efe.com/efe/america/portada/el-presidente-de-ecuador-convertira-la-sede-unasur-en-quito-una-universidad-indigena/20000064-3675570

Infobae (2019). «Entró en vigor el acuerdo comercial TPP11», en https://www.infobae.com/america/mexico/2018/12/30/entro-en-vigor-el-acuerdo-comercial-tpp-11-de-asia-pacifico-que-abrira-para-mexico-los-mercados-de-10-paises/, disponible el 28/6/2019

El País (2019), «Entrevista a Steve Bannon», https://elpais.com/internacional/2019/03/24/actualidad/1553454729_290547.html, Recuperado el 28/6/2019

El País: «El Brasil de Bolsonaro», https://elpais.com/internacional/2019/03/04/actualidad/1551708869_841247.html

La Nación (2019). «Macri y varios presidentes de la región lanzan hoy en Chile un nuevo organismo». En: https://www.lanacion.com.ar/politica/macri-viaja-a-chile-para-lanzar-el-prosurmacri-y-varios-

presidentes-de-la-region-lanzan-hoy-en-chile-un-nuevo-organismo-nid2231031.

Motor Económico, «la Web de Raúl Delatorre», http://www.motoreconomico.com.ar/opinion/qu-le-pas-a-la-unasur, consultado el 20/06/2019.

NODAL Agencia, (2018). «Inédito acuerdo entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur», https://www.nodal.am/2018/07/libre-comercio-en-la-region-inedito-acuerdo-entre-la-alianza-del-pacifico-y-el-mercosur/, consultado el 20 de junio de 2019.

https://nuso.org/articulo/ecuador-moreno-correa-elecciones-politica/

OEA, Sistema de información de comercio exterior, Alianza del Pacífico. http://www.sice.oas.org/TPD/Pacific_Alliance/Pacific_Alliance_s.asp, consultado el 28/6/2019.

Perfil, «Ecuador retirará una estatua de Néstor Kirchner: 'No representa nuestros valores'», 14/03/2019, https://www.perfil.com/noticias/politica/ecuador-retira-estatua-nestor-kirchner-no-representa-nuestros-valores-unasur.phtml.

RPP Noticias (2017). «PPK: Para EE.UU. América Latina es como un perro simpático que no genera problemas», https://rpp.pe/peru/actualidad/ppk-para-eeuu-america-latina-es-como-un-perro-simpatico-que-no-genera-problemas-noticia-1033439.

Populismos de derecha y desdemocratización

Armando Chaguaceda[1] • *Ysrrael Camero*[2]

> «A los que tienen un sentimiento cristiano les corresponde un papel de vigías. Dios nos ha nombrado vigías, también a los políticos»
>
> Viktor Orbán

A MODO DE INTRODUCCIÓN: UNA MIRADA PARTISANA

Los cambios y crisis globales reactualizan hoy el debate sobre el populismo, sus variantes políticas y su relación con la democracia. Dicho fenómeno –las críticas y reivindicaciones de las identidades y agendas populistas– es extraordinariamente diverso: depende de cada contexto nacional, regional e internacional y también de las disímiles tradiciones de pensamiento. En Europa, el avance populista es más visible en su faceta de derechas, aún cuando existen ejemplos como los de Podemos o Syryza, perfectamente incluibles dentro del fenómeno pero en su dimensión izquierdista. Aún así, para los fines del presente artículo, hay ciertos autores y desarrollos, recientes y relevantes, que merecen la pena ser discutidos desde la acera opuesta.

La defensa de los populismos no es privativa de intelectuales de izquierda, como Ernesto Laclau o Chantal Mouffe. Desde posturas conservadoras, una pensadora como Chantal Delsol (2015) propone otras lecturas, que reivindican una forma de hacer política

1 Politólogo, Centro de Estudios Constitucionales Iberoamericanos AC.

2 Profesor Instructor, Universidad Central de Venezuela.

enfrentada al consenso liberal. Defendiendo a un pueblo identificado con el arraigo, las periferias sociales y territoriales, las viejas identidades y costumbres, la lealtad a la familia, la comunidad y la patria. Un pueblo ninguneado, nos dice, por una élite tecnocrática, urbana y universalista, que impone un ideal emancipatorio característico de la Modernidad.

Las ideas de Delsol, quien se desmarca explícitamente de la extrema derecha fascista, tiene elementos atendibles. La crítica al desprecio –sustituto falaz de la comprensión y el diálogo– con que numerosos políticos y analistas descalifican –asumiéndolo como atraso, fanatismo e idiotez– el apoyo que amplios sectores de trabajadores prestan hoy a disímiles candidatos populistas de derecha. Su ponderación de esos mundos diversos de experiencias, necesidades y representaciones que viven en nuestras comunidades, parcialmente integradas a la sociedad de masas, capitalista y democrática. Las críticas al costo humano que el hiperliberalismo de la globalización impone a esas personas y pueblos reacios, por situación o decisión, a montarse en los vagones de cola del *tren del progreso.*

Sin embargo, su confusión entre sano patriotismo y repudio al inmigrante, entre moral tradicional e intolerancia homofóbica, entre catolicismo moderno y republicanismo laico revelan los sustratos claramente conservadores del pensamiento de Delsol, legitimación filosófica del populismo de derechas. Le Pen, Haider o los hermanos Kaczynski, enemigos todos de sociedades multiculturales y respetuosas de las minorías diversas, son presentados por la intelectual gala como demócratas incomprendidos, deseosos de defender al pueblo y de conseguir un auténtico pluralismo, hoy ahogado por la hipocresía liberal. Para hacer un balance real de estos gobiernos y su impacto sobre las democracias dedicamos las siguientes líneas.

POPULISMO Y DESDEMOCRATIZACIÓN

> «Hay cierto mínimo liberal-democrático que no vamos a cuestionar: estamos a favor de la democracia parlamentaria, el libre mercado, las libertades cívicas…en mi opinión, cierto cercenamiento de estas libertades es aceptable y no socaba ese mínimo liberal-democrático»
>
> Jaroslaw Kaczynski

Los momentos históricos de irrupción de los fenómenos populistas se han vinculado con crisis en la relación institucionalizada entre gobernantes y gobernados. El carácter democratizador o autoritario de un fenómeno populista está marcado, primero, por el contexto sociopolítico de su emergencia, es decir, por el tipo de reglas de funcionamiento del poder a las que se enfrenta, contra las cuales construye su confrontación y su sujeto, «pueblo», y en segundo lugar, por la dirección en la que moviliza a los nuevos sujetos colectivos para la ruptura de las reglas de juego existentes, avizorando un horizonte más incluyente y amplio de funcionamiento del poder, o uno más restringido y excluyente.

A efectos de acercarnos a la comprensión del carácter democratizador o desdemocratizador de un determinado impulso populista nos es útil apelar a las palabras de Charles Tilly, para quien la democratización es «el movimiento neto hacia una consulta más mutuamente vinculante, más protegida, más igual y más amplia» entre gobernantes y gobernados. De esta manera, la ampliación de la ciudadanía es el rasgo democratizador más importante a identificar, lo que implica la incorporación de nuevos sectores de la población al pacto simbólico que constituye el funcionamiento de la comunidad política en términos de una mayor igualdad. Al mismo tiempo, la acción de los miembros de la comunidad política debería encontrarse también más protegida frente a la acción arbitraria de los poderosos, ya que solo así esta libertad pública conquistada sería efectiva. Por último, la relación entre gobernantes

y gobernados debería estar marcada por consultas mutuamente más vinculantes, con lo que el poder del ciudadano sería políticamente más efectivo.

El avance hacia un Estado de derecho, que garantizara la protección de los más débiles frente a los poderosos, presentaba aún importantes limitaciones, pero se había retrocedido en materia de intervenciones arbitrarias del poder y actos despóticos de vulneración de derechos. El paso de los gobiernos autoritarios a los democráticos había fortalecido los procesos de consulta mutuamente vinculantes entre gobernantes y gobernados. A pesar de estos avances, persistían importantes desigualdades socioeconómicas, que tenían un impacto político significativo en la medida en que el Estado de Derecho se encontraba desigualmente implantado.

La correlación entre populismo y desdemocratización no es novedosa, en la medida en que la práctica contra-institucional y la acción dirigida contra las elites establecidas, realizada de la mano de la creación de una identidad colectiva homogénea, construida en torno a un liderazgo personalista y carismático, debilita la capacidad de la sociedad para defender su autonomía frente al nuevo poder emergente, que se presenta como único portavoz legítimo de la colectividad.

El concepto de democracia iliberal, como una democracia sin derechos, empleado por Yasha Mounk, nos puede ayudar a comprender el inicio del proceso de debilitamiento de la democracia liberal que proviene desde dentro de la misma tradición democrática, erosionando su institucionalidad, pero no nos es suficiente. Avanzando un paso más, Norberto Bobbio nos recuerda que el matrimonio entre la democracia y el liberalismo se sostiene sobre una mutua dependencia, en la medida en que la destrucción de la institucionalidad liberal, es decir, el desvanecimiento de los límites en el ejercicio del poder y el debilitamiento del sistema de

garantías que protege los derechos individuales, terminan destruyendo a las democracias realmente existentes.

EL POPULISMO Y LAS DERECHAS EUROPEAS

> «¡Yo seré la presidenta del retorno a lo real! Encerrada en su burbuja, que como las burbujas especulativas tendrá que terminar por explotar, la Casta ha perdido todo contacto con lo real. El mundo que nos impone, que es el suyo, no tiene nada que ver con el nuestro, con lo real»
>
> Marine Le Pen

El deslizamiento hacia el populismo, para las fuerzas de derecha, expresa una ruptura interna del consenso liberal-conservador que se había consolidado en la postguerra, y que los incorporaba, especialmente en el caso de la Europa occidental, en un régimen político democrático que se sostenía dentro de un Estado de Derecho fundamentalmente liberal.

En movimientos y partidos conservadores de la Europa occidental, han coexistido dos tendencias desde la postguerra. Una primera, vinculada a valores religiosos institucionalizados, cristianos católicos o protestantes, a la defensa de la familia estable y tradicional, mayoritariamente nuclear, y de expresiones comunitarias que ratificaban una noción de orden y jerarquía, sosteniendo una idea relativamente homogénea y armónica de la comunidad nacional. Junto a esta expresión tradicionalista existía una tendencia liberal, más individualista y racional-empresarial, más abierta a los cambios culturales y a la innovación tecnológica, pero reactiva respecto a proyectos colectivistas y a lo que calificaban como excesos en la intervención del Estado en el área económica.

La consolidación de la Unión Europea, y su expansión hacia el este luego del derrumbe del bloque soviético, se articuló con los elementos más liberales y modernos de las derechas europeas, de esta manera, la democracia cristiana y los partidos populares impulsaron un perfil de alta capacidad tecnopolítica en el proyecto de integración europeo, constituyendo con los partidos socialdemócratas un centro político que constituyó el núcleo dinamizador y estabilizador de la UE.

El auge del populismo de derechas se vincula, en parte, con el debilitamiento de la vertiente liberal de los sectores conservadores. Pero no es el único factor a tomar en cuenta. Se encuentra en la historia de las derechas un campo fructífero para el anti-liberalismo, dada su vinculación tradicional con un anti-iluminismo, que apela a las identidades étnicas particulares y la política nativista, en rechazo tanto al individualismo liberal como a los colectivismos universalistas.

Otro factor que ha facilitado la irrupción del populismo de derecha es la aparición de nuevas «batallas culturales», que tienen en las «redes sociales» digitales su campo inicial y recurrente de confrontación. Eric Hobsbawm llegó a sostener que, el siglo XX corto cerró con tres grandes consensos, que la derecha había ganado la economía, alrededor de los patrones de ordenamiento liberal, que la izquierda había ganado la cultura, con la reivindicación de la libertad y la tolerancia multicultural como valor unificador, y que el centro había ganado la política, con la expansión del régimen democrático como único juego legítimo.

Estos consensos han sido sometidos a fuertes tensiones en la segunda década del siglo XXI, abriéndose paso a nuevas batallas culturales, donde el discurso tradicional, que acompaña al populismo de derechas, sale a disputar el espacio cultural que las izquierdas, desde la liberal hasta la socialdemócrata, habían contribuido

a construir. En el mismo sentido el deslizamiento emocional del discurso político, en reacción contra el racionalismo tecnocrático que acompañó gran parte del discurso globalizador de las últimas décadas del siglo XX, ha abierto un campo para la expresión de un discurso populista que apela emocionalmente a las identidades nacionales.

A diferencia de las izquierdas, desde los populismos de derecha, la polarización se establece en términos horizontales, entre los de «dentro» y los de «fuera» de la comunidad, haciendo énfasis en las diferencias entre el «pueblo», entendido como un organismo homogéneo, frente al otro, «extraño», «extranjero», generalmente a partir de criterios culturales o religiosos. Su mensaje es social y culturalmente anti-pluralista y de carácter xenófobo. Al sujeto «pueblo» se le define y moviliza contra el extranjero, en defensa de una idea de comunidad homogénea que se presenta como amenazada desde fuera, incluso por quienes, distintos, conviven en el mismo espacio.

La ruptura de la «comunidad originaria», desde la perspectiva de las derechas, ocurre por una supuesta penetración de agentes externos. En la medida que marca creciente distancia con los sectores liberales, se impone un discurso contra las elites globalizadoras, a las que tildan de «progresistas», bien sea a las de Bruselas, en el caso europeo, bien sea a las de Washington, en el caso de Estados Unidos. Tienden los populistas de derecha a separar a las elites políticas de las elites económicas, siendo su discurso de confrontación fundamentalmente cultural, religioso o étnico, y político, oponiendo pueblo a élite, pero soslayando la confrontación económica, tan recurrente en la izquierda.

La defensa de la comunidad tradicional en las derechas, reinventada o recreada, se sostiene no solo sobre el retorno a la comunidad nacional homogénea y armónica, donde las tradicionales

jerarquías estaban aseguradas, sino se constituyen contra la tolerancia a prácticas que consideran «desviadas» de la norma, movilizándose contra el matrimonio de parejas del mismo sexo, o contra el feminismo. De esta manera, los populismos de derecha se oponen a los cambios culturales que se han dado en la sociedad occidental desde los años sesenta en lo que se refiere a tolerancia y diversidad sexual y cultural.

Una vez que las derechas se desprenden de sus convicciones liberales, se legitima la confrontación contra la institucionalidad que garantiza el ejercicio de los derechos, sobretodo de las minorías. En los países en los cuales estos populismos han llegado a ejercer el poder, ha sido recurrente la apelación a la legitimidad electoral contra las instituciones liberales «no electas», que garantizan la vigencia del Estado de Derecho.

La expansión de la Unión Europea hacia el Este, incorporando a estados postcomunistas, implicó poner en contacto dos culturas políticas distintas, que son producto de historias que se desarrollaron en paralelo entre 1945 y 1991. Las transiciones a la democracia en muchos países de Europa central y oriental encontraron importantes limitaciones en la consolidación de un *habitus* democrático en la sociedad. No provienen estas nuevas democracias de un Estado liberal de derecho consolidado, y estas sociedades no habían tenido el aprendizaje de tolerancia, apertura, negociación, diálogo, o de políticas de contención de la sociedad civil, que le habían dado forma a un determinado campo cultural en la Europa occidental, a sus consensos y a sus prácticas normalizadas. Esta falta de cultura política y *habitus* democrático en la sociedad, así como la distancia entre las expectativas y la realidad, que se abrió luego de la incorporación de los países de Europa oriental a la UE, en materia de prosperidad y empleo, por ejemplo, generó también un espacio vulnerable para la penetración del discurso populista.

En muchos de estos países era débil o inexistente una tradición liberal, pervivía una cultura autoritaria y tradicional, que incluso hundía sus orígenes en tiempos previos al comunismo. El pluralismo político y la competencia electoral se presentaban como una novedad, mientras que el Imperio de la Ley y la democracia se percibían como un horizonte a construir. El rechazo al pretendido universalismo de la retórica comunista trajo el retorno de discursos nacionalistas étnicos, pre-liberales o antiliberales, que se articularon alrededor de nuevos liderazgos locales, regionales o nacionales, que encontraban pocos contrapesos institucionales a su expansión.

Los casos de Hungría y Polonia, pueden ser paradigmáticos en la expresión de populismos conservadores en países postcomunistas. El liderazgo de Viktor Orbán, en Hungría, a través de su organización FIDESZ (Unión Cívica Húngara), con una propaganda ultranacionalista, contraria a la migración y a la Unión Europea, con rasgos antisemitas, ha llegado al poder, derivando su acción en persecuciones contra los disidentes y reducción en la libertad de expresión. En las elecciones europeas de 2019 obtuvo más del 52% de los sufragios. En Polonia el liderazgo de los hermanos Kaczynski, con su partido Ley y Justicia (PiS), se ha consolidado como un proyecto conservador, católico y nacionalista, que defiende los valores tradicionales, rechazando las formas pactadas en que se construyó el estado democrático polaco desde 1989. Incluso podemos señalar el comportamiento electoral de la zona oriental de Alemania, el área de la antigua RDA (República Democrática Alemana), donde reciben mayor apoyo las alternativas populistas, tanto de izquierda como de derecha. El partido de derechas, Alternativa por Alemania (AfD), así como el movimiento PEGIDA (Patriotas Europeos Contra la Islamización de Occidente), han crecido sobre un discurso contra los inmigrantes, especialmente contra los

musulmanes, siendo críticos con la política migratoria de Ángela Merkel.

Pero no es solo la reacción conservadora y tradicional de países postcomunistas. También ha crecido el populismo de derecha en países occidentales con estados liberales consolidados. Como Francia, donde el Frente Nacional, de Marie Le Pen, obtuvo cerca del 23% de los votos en las europeas de 2019, haciendo uso de un discurso nacionalista, pre-republicano, contrario a la inmigración de origen islámico, en rechazo a la Unión Europea, pero con un enfoque proteccionista que ha penetrado en nichos obreros, tradicionalmente socialistas. En el caso de Italia el populismo de derechas tiene un largo recorrido, siendo el magnate de medios, Silvio Berlusconi, su más importante exponente en los años noventa. En los últimos años la Lega Nord, pasó de ser un partido secesionista del norte a convertirse en pieza central de una coalición de gobierno populista, en conjunto con el movimiento Cinco Estrellas. Matteo Salvini ha construido su liderazgo a partir de un discurso fundamentalmente contrario a la inmigración procedente del norte de África, llegando a obtener 37% de los votos en 2018.

Para estos movimientos populistas de derecha los enemigos recurrentes del «pueblo» son, tanto la élite tecnocrática de Bruselas, que son mostrados como ladrones de la soberanía democrática, como los inmigrantes, mayormente islámicos, que son presentados como amenaza a la cultura tradicional. Hay una recurrente percepción de una conspiración de las elites, así como una reivindicación de una soberanía nacional identitaria de base étnica y cultural.

¿TECNOPOPULISMOS Y *POSVERDAD?*

> «Los medios no pensaban que íbamos a ganar. Subestimaron el poder del pueblo: de vosotros. Y quiero que sepáis que estamos peleando las noticias falsas. Hace unos días les llamé el enemigo del pueblo. Y lo son. Son el enemigo del pueblo americano»
>
> Donald Trump

Un factor coadyuvante en los procesos de expansión del fenómeno populista deriva de una transformación tecnológica en los mecanismos de generación, acceso y distribución de la información. El acceso a las nuevas tecnologías de comunicación, las denominadas redes sociales, ha debilitado la credibilidad de los grandes medios de comunicación institucionalizados, al tiempo que ha fortalecido la creación de redes y espacios de interacción que funcionan como espacios de agregación tribal de los semejantes, y de segregación de lo distinto.

Paradójicamente, una innovación que había generado expectativas de democratización en la comunicación, ha fortalecido comportamientos tribales que reproducen y fortalecen prejuicios, presentados como verdades reveladas, alrededor de los cuales se estructuran los movimientos populistas, especialmente en su dinámica de confrontación contra las elites y las instituciones.

Dicha confrontación no contribuye a la constitución de un espacio público común, sino propicia su sustitución por agregados de espacios sectoriales, internamente uniformes, pero con pretensión de universalidad: las *fake news* y la denominada *posverdad.* Estos han sido nuevos espacios para las denominadas «batallas culturales», que confrontan los grandes consensos institucionalizados, sin propiciar un encuentro deliberativo racional, ni agonal, sino una reacción que ratifica las identidades cerradas que se articulan con las propuestas populistas y las fortalecen.

Efectivamente, las democracias representativas liberales de principios del siglo XXI presentan deficiencias y limitaciones, muchas de las cuales derivan de una crisis de la potencialidad transformadora de la política, es decir, la impotencia de la acción colectiva, la desaparición de sus sujetos tradicionales, que genera la necesidad de generar nuevos sujetos colectivos, muchos de los cuales remiten a viejos repertorios, y a la recreación de viejas identidades.

El resurgimiento del populismo es una respuesta a esta crisis, una respuesta vinculada a su confrontación contra la institucionalidad y contra las elites que parecen dirigirla, pero no hay garantías de que un populismo de izquierdas sea necesariamente democratizador. El ímpetu antipluralista del populismo, que va más allá de su confrontación contra el modelo agregativo liberal, puede facilitar procesos de autocratización, primero, al debilitar los frenos al poder que podrían garantizar el ejercicio de los derechos individuales, y segundo, al dificultar la creación de un espacio común, de una racionalidad compartida, que permita construir respuestas políticas a las demandas sociales expuestas en la esfera pública.

A pesar de que el populismo emerge desde las entrañas primigenias de la tradición democrática, partiendo del reclamo lógico de volver a traer el conflicto al centro de la vida política, su pervivencia en la modernidad tardía, en un mundo que ha vivido los experimentos totalitarios, en un contexto en el que la institucionalidad liberal y el Estado de derecho sostienen las limitaciones efectivas al ejercicio del poder, es una amenaza para las democracias realmente existentes, y para la posibilidad de vivir en libertad, si no viene acompañada de un sistema de garantías y limitaciones que eviten que el desbocado antagonismo existencial derive en el dominio arbitrario del más fuerte frente al más débil.

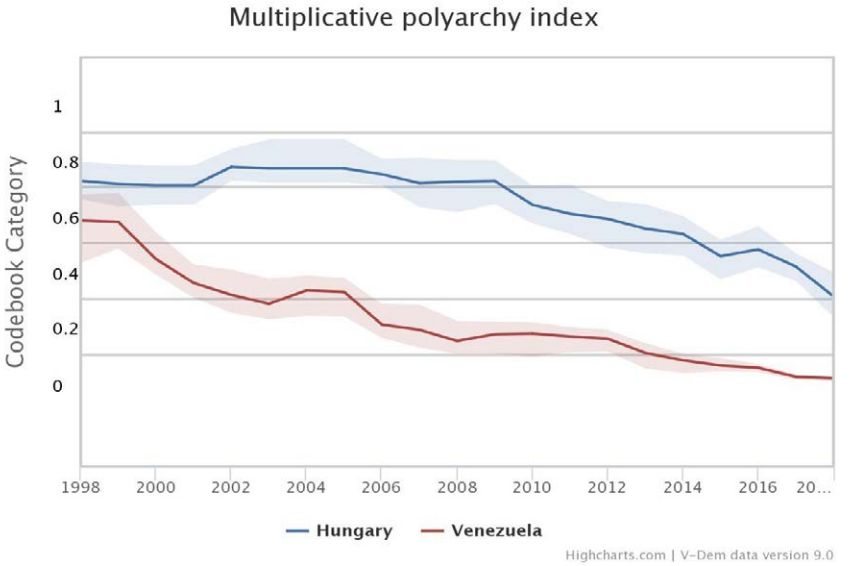
De esta manera, toca recordar las diversas dimensiones de la democracia, conceptualizadas por Pierre Rosanvallon, que surgen también del desarrollo histórico concreto de la misma tradición democrática. La democracia requiere, como actividad ciudadana, de garantías para el despliegue de los (contra) poderes de control, veto y juicio, y como forma de sociedad, requiere un entorno institucional que permita relaciones que respeten la singularidad, la reciprocidad y de comunalidad social. Su legitimidad, en el ejercicio del poder, requiere tanto de una reflexividad dialógica, deliberativa, como de una imparcialidad en la acción pública, que el acercamiento pasional al populismo tiende a soslayar, y que la institucionalidad liberal tiende a proteger.

Lo que lleva a concluir que, aunque la pervivencia del vigor ciudadano de la democracia requiere colocar nuevamente al conflicto en el centro de la experiencia política, así como a los sujetos colectivos como actores protagónicos, no se puede soslayar la imprescindible necesidad de proteger la convivencia en libertad y el pluralismo frente a cualquier poder. La institucionalidad liberal, con sus poderes limitados, con su separación entre los ámbitos de lo público y lo privado, con sus derechos individuales, incluso con la existencia de una racionalidad dialógica como punto de encuentro en un campo público común, es hoy también parte integral de la tradición democrática post-totalitaria, y es lo que la reivindicación populista, sea de izquierda o de derecha, tiende a anular y a expulsar.

Es lo que la democracia realmente existente –no la soñada o imaginada– nos ha llevado a aprender. No hay salida democrática sin institucionalidad liberal. No hay preservación liberal sin democracia. No se puede siquiera preservar el conflicto político agonal, la acción autónoma de los sujetos colectivos, ni el despliegue de las identidades colectivas, sin un sistema de garantías para el ejercicio

de los derechos y las libertades. Es esa frontera lo que la lógica de acción populista no puede traspasar sin matar la democracia.

Un estudio reciente (Ruth-Lovell; Lührmann & Grahn, 2019) revela es que todos los gobiernos populistas, con independencia de su signo político, afectan raigalmente las distintas dimensiones –electoral, liberal, participativa, deliberativa e igualitaria– de la democracia. El legado desdemocratizador del populismo es compartido por sus variantes de derecha e izquierda. Si usamos las herramientas de V-Dem[3] en los casos de Venezuela (populismo de izquierda) y Hungría (populismo de derecha), las trayectorias autocratizadoras son, para ambos casos y como muestra la gráfica a continuación, visibles en cuanto a su impacto negativo sobre la dimensión básica, electoral, de la democracia.



3 En este caso midiendo (https://www.v-dem.net/en/analysis/VariableGraph/) el índice multiplicativo de poliarquía, que evalúa cuan logrado está el principio electoral, que busca la responsividad y rendicion de cuenta entre lideres y ciudadanos a través de elecciones competitivas, libres y justas.

El problema, pues, no es el revestimento ideológico de los populismos, sino su sustancia misma. Ese coctel de personalismo autoritario y polarización schmittiana, enemigo de cualquier intento pluralista y republicano de ordenar nuestra siempre conflictiva convivencia cívica. No importa si enarbola la bandera de la redención de clase o el estandarte de la restauración nacional: su ataque a una sociedad abierta, un pluralismo político y un Estado de derecho constituye una amenaza para las repúblicas liberales de masas. Nada menos que la forma sociopolítica que garantiza, en tiempos modernos, el progreso y la justicia sostenibles.

REFERENCIAS

Delsol, Chantal. *Le Populisme et les Demeurés de l'Histoire*, Paris/Monaco, Le Rocher, 2015.

Ruth-Lovell, Saskia P; Lührmann, Anna & Grahn, Sandra. *Democracy and Populism: Testing a Contentious Relationship,* Working Paper Series, No 91, V-Dem Institute, Gothemburg, 2019.

El papel de las élites en las interrupciones presidenciales

José del Tronco Paganelli [1] • *Katia Gorostiaga Guggiari* [2]

INTRODUCCIÓN

Durante el proceso de democratización experimentado por América Latina en las últimas cuatro décadas, numerosos presidentes han visto cómo sus mandatos fueron interrumpidos antes del cumplimiento del término fijado constitucionalmente. A partir de esta constatación, diversos investigadores han concentrado sus esfuerzos en tratar de explicar el significado de estas interrupciones, durante las recurrentes crisis (Kim, 2014; Edwards, 2015; Pérez-Liñán, 2009; Negretto, 2006) que los presidentes suelen enfrentar en los regímenes de separación de poderes con sistemas multipartidistas y representación proporcional (Linz, 1996; Shugart y Mainwaring, 2002).

No hay, sin embargo, suficientes esfuerzos que analicen el papel que las derechas latinoamericanas han jugado en estos procesos. Dado que las interrupciones de mandatos presidenciales adoptan diferentes modalidades, y los grados de fuerza a los que se ven sometidos los jefes de gobierno y los niveles de legalidad de los mecanismos por medio de los cuales se materializa

1 Profesor Investigador, FLACSO Sede México.

2 Candidata a doctora en Investigación en Ciencias Sociales, FLACSO Sede México

la finalización de sus mandatos, son variables. Este trabajo se propone analizar si existe algún patrón con relación al tipo de interrupciones y el papel jugado por actores políticos de dereha en estos eventos, y en qué medida el *«impeachment»* a Dilma Rousseff, en Brasil en 2016, representa un ejemplo típico de estas modalidades «destituyentes».

Las causas esgrimidas por los actores políticos y analizadas por la literatura espeicalizada para explicar los procesos de interrupción –ya sea que deriven en renuncias del presidente, juicios políticos, o destituciones irregulares– son variadas: escándalos de corrupción, crisis económicas, movilizaciones callejeras, o estrategias fallidas del presidente ante la pérdida del escudo legislativo que lo respalda (Gorostiaga Guggiari, 2016; Marsteintredet y Llanos, 2010; Pérez-Liñán, 2009; Ollier, 2008). Asimismo, pese a algunas propuestas, no se ha terminado de consolidar una tipología que permita clasificar las interrupciones presidenciales no sólo por sus causas, sino también por sus dimensiones constitutivas. Contribuir a este proceso parece relevante para proponer el uso de criterios generalizables en la clasificación de este tipo de experiencias, y de acuerdo con los objetivos de este trabajo, para ver si la participación de ciertos actores está relacionada tanto con las características de los procesos de interrupción como con los rasgos específicos de los gobiernos cuyos mandatos fueron interrumpidos.

En este marco, el presente trabajo analiza el caso del *impeachment* a Dilma Rousseff, por considerarlo un ejemplo de cómo ciertos actores –ante la imposibilidad de acceder al poder a través de elecciones democráticas– desarrollan estrategias políticas barnizadas de argumentos jurídicos no siempre sustentados empíricamente para promover los procesos de destitución vía juicio político. En tal sentido, la interrupción del mandato de Dilma

Rousseff –criticada por sectores cercanos al gobierno como un golpe de palacio, o una asonada parlamentaria basada en argumentos legales enrevesados– fue realizada por medio de procedimientos constitucionales en el marco de una coyuntura de fuerte deslegitimización del sistema político brasileño, a partir de las revelaciones de las operaciones conocidas como *Lava Jato*[3] y *Mensalão*[4]. Una vez caído el escudo legislativo5 con el que contaba la Presidenta entre los partidos aliados (Michel Temer, quien la sustituyó en el cargo, era su Vice-Presidente), el juicio político promovido por actores opositores –partidarios y no partidarios– al gobierno popular, fue el resultado lógico de un proceso jurídicamente terso pero políticamente contaminado.

El trabajo se estructura como sigue: en un primer apartado, se realiza una breve reseña de las interrupciones anticipadas de mandatos en regímenes presidenciales, tratando de delimitar conceptualmente el fenómeno, y haciendo especial énfasis en la experiencia latinoamericana. A continuación se presentan los criterios a tomar en cuenta para la construcción de una tipología de interrupciones de gobierno, adoptando un dispositivo analítico adecuado para su aplicación en países con regímenes de separación de poderes, y se clasifican las interrupciones de mandatos ocurridas en la región entre 1989 y 2016. Seguidamente, se analiza el papel jugado por los actores políticos de derecha en estos procesos, y se analiza si es posible establecer un patrón entre su

3 Se conoce con el nombre de *Lava Jato* a la investigación de operaciones de lavado de dinero y corrupción donde resultaron involucrados varios políticos y políticas brasileños.

4 Se conoce con el nombre de *Mensalão* (mensualidad) a los pagos que cada mes recibían los aliados políticos del gobierno a cambio de su apoyo en las votaciones que tenían lugar en el Poder Legislativo.

5 Término acuñado por Pérez-Liñán (2009) que hace referencia a a distancia o diferencia entre el número de parlamentarios controlados por el presidente y el umbral del veto requerido para la realización de un juicio político.

participación y el modo de interrupción de mandatos presidenciales. A continuación, se describe el el proceso de juicio político a Dilma Rousseff como un ejemplo típico de este tipo de accionar. En las conclusiones, se introducen algunos apuntes sobre el efecto de estas interrupciones para la salud de las democracias de la región, tomando nota de los sucesos más recientes.

LAS INTERRUPCIONES DE MANDATO PRESIDENCIAL

Las interrupciones anticipadas de gobiernos en ejercicio pueden ser legales o ilegales. Estas últimas se distinguen por el uso de la fuerza y la violación de los marcos constitucionales, involucrando, por lo general, la participación de las fuerzas armadas (Pérez-Liñán, 2009). Por su parte, las interrupciones legales se realizan a través de procedimientos que están previstos en las cartas magnas de los países (Gorostiaga Guggiari, 2016). Sean renuncias del jefe del Poder Ejecutivo, reemplazos por causas de invalidez o muerte, o destituciones promovidas desde los poderes legislativo o judicial, las interrupciones legales están contempladas como salidas jurídicamente aceptables para situaciones de crisis, incapacidad, acefalía, o violación de la constitución[6].

En el último cuarto de siglo, este tipo de experiencias han sido relativamente frecuentes en América Latina (Pérez-Liñán, 2018). Desde la finalización anticipada del mandato de Raúl Alfonsín, a raíz de una crisis hiperinflacionaria, hasta la renuncia de Pedro Pablo Kuczynsky en Perú, a inicios de 2018 en medio del escándalo de corrupción que vinculó a la empresa Oderbrecht con diferentes gobiernos latinoamericanos, la región presenció un total de 17 interrupciones anticipadas[7], ninguna de ellas seguida de la instau-

6 Sobre esto se volverá en apartados posteriores.

7 Se entiende aquí por «interrupción presidencial» todos aquellos fenómenos institucionales que determinaron el cese definitivo del mandato del/a presidente/a

ración de un gobierno militar y/o autoritario[8]. Si bien la inestabilidad es una marca de agua para las democracias latinoamericanas (Mainwaring y Pérez-Liñán, 2014), este último dato representa un avance respecto de la historia política regional durante los primeros ochenta años del Siglo XX.

Existen dos tesis acerca del significado y las consecuencias de estas interrupciones anticipadas: la «parlamentarizante» y la «presidencialista». La tesis «parlamentarizante», también llamada «de flexibilización del presidencialismo» sostiene que este tipo de salidas legales a las crisis –que por lo general son «de gobernabilidad»– representan una alternativa para lidiar con la rigidez institucional propia de los regímenes de separación de poderes, en los que los mandatos están temporalmente fijados (Marsteintredet, 2008). Tomando como referencia los regímenes parlamentarios, en los que las crisis políticas suelen desembocar en votos de censura, o en dimisiones y convocatoria a nuevas elecciones por parte del Jefe de Gobierno, esta propuesta alega en favor de este tipo de interrupciones para dotar de mayor «resiliencia» a estos regímenes políticos frente a situaciones de parálisis institucional o fuerte descontento social.

Por su parte, los defensores de la tesis «presidencialista» o «democrática» sostienen que este tipo de salidas representan una

en turno, siempre y cuando estos últimos hayan sido elegidos mediante el voto popular. No se incluyen los presidentes designados por el Congreso a raíz de una interrupción de mandato previa (como fue el caso de Rodríguez Saá en Argentina en 2001-2, o Carlos Mesa en Bolivia en 2005), ni las interrupciones temporales como fue el caso del intento de golpe de Estado a Hugo Chávez –finalmente fallido- en 2002 en Venezuela.

8 El caso de la interrupción del mandato de Manuel Zelaya, en Honduras en 2009, es el más extremo en términos de uso de la fuerza y el más difícil de definir, ya que a pesar de no haberse instaurado un gobierno militar, los procedimientos se asemejan a los de los golpes de estado, con participación de las fuerzas armadas haciendo efectiva una orden del Poder Judicial.

interrupción *de facto* del vínculo democrático establecido por gobernantes y gobernados el día de las elecciones (O'Donnell, 1993, 2001). Mientras los primeros hacen hincapié en la importancia de la legitimidad por desempeño (y la posibilidad jurídica de reemplazo si este último no puede evitar la crisis social o institucional), los segundos resaltan el carácter indeleble de la legitimidad de origen, que debe mantenerse –al menos– hasta la fecha en que tengan lugar las próximas elecciones presidenciales.

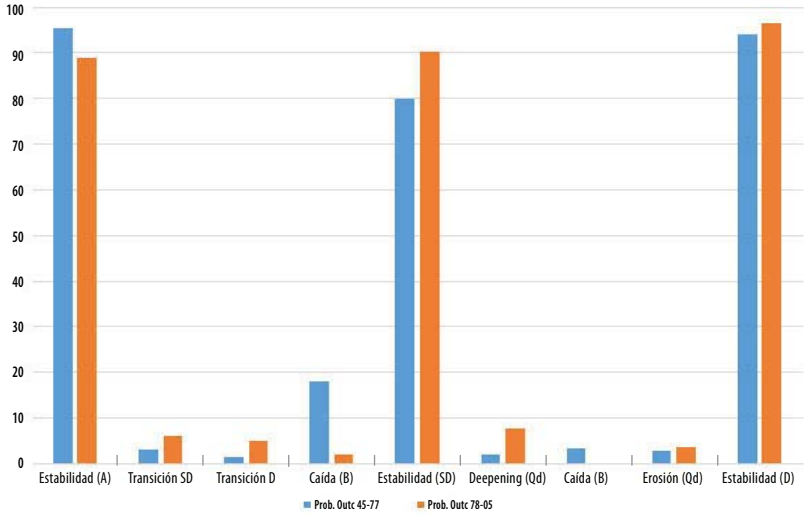
En este trabajo proponemos que cada interrupción presidencial deber ser leída y clasificada de acuerdo con los procesos que la originan, los actores que participan en la misma, y el grado de fuerza o legalidad con que dicho procedimiento de interrupción es puesto en marcha. A su vez, queremos proponer que por lo general las interrupciones ocurridas desde dentro del sistema político, en la que participan partidos políticos y/u otros poderes del Estado suelen dar por tierra con el mandatos de presidentes populares, que llevan o intentan llevar adelante agendas progresistas y redistributivas. Es allí donde las elites, y especialmente las económicas –con fuerte capacidad mediática–, juegan un papel central.

LA EROSIÓN DEMOCRÁTICA Y LAS INTERRUPCIONES PRESIDENCIALES

Durante el Siglo XX en América Latina, las interrupciones presidenciales adquirieron por lo general la forma de golpes de Estado, pero ello ha cambiado desde los procesos de democratización ocurridos durante la llamada tercera ola. Según Mainwaring y Pérez-Liñán (2013: 96), la probabilidad de un quiebre de la democracia en el período que va de 1978 (transición a la democracia en Ecuador) y 2005 es mucho menor (2.1) a la del período 1945-1977 (18.0).

FIGURA 1

PATRONES DE CAMBIO DE RÉGIMEN EN AMÉRICA LATINA (1945-2005)[9]



Fuente: Elaboración propia en base a Mainwaring y Pérez-Liñán (2013: 96)

Sin embargo, durante los últimos treinta años, desde la renuncia de Raúl Alfonsín en 1989 –a unos meses del final de su mandato–, y hasta 2018, se han sucedido diversas interrupciones presidenciales que no han derivado en gobiernos autoritarios tal y como los entendíamos antes de la Tercera Ola. De hecho, la estabilidad de la democracia (medida por años sin procesos de erosión o quiebre) es mayor en este período pero también lo son los casos de erosión democrática.

9 Estabilidad (A) indica estabilidad en regímenes autoritarios. Transición SD indica una transición de un régimen autoritario a una «semi-democracia». Transición D, indica una transición a una democracia plena. Estabilidad SD es el mantenimiento de una «semi-democracia». *Deepening* (Qd) es una profundización en la calidad de la democracia (de una SD a una D). Caída (B) implica un quiebre de la democracia. Erosión (Qd) indica un proceso de reversión de una democracia plena a una semi-democracia, y Estabilidad (D) es el mantenimiento de una democracia plena.

Este punto debe destacarse puesto que –como sostiene Pérez-Liñán en un artículo reciente (2018)–, la inestabilidad política de los regímenes democráticos latinoamericanos ha estado principalmente asociada –durante el siglo XX– al poder hegemónico de los presidentes, que erosionaban la capacidad de control de las instancias de balances y contrapesos (o *accountability* horizontal). Sin embargo, en el caso de las democracias latinoamericanas durante la Tercera Ola, y especialmente en el caso de las interrupciones presidenciales, la evidencia matiza significativamente dicha afirmación.

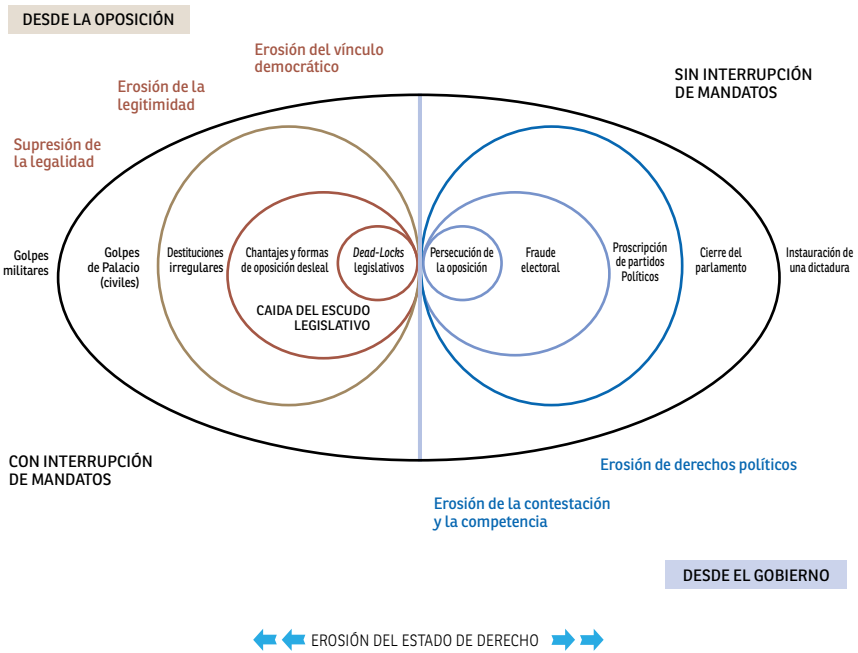
Los procesos de erosión democrática son aquellos por medio de los cuales se suprimen las instancias de rendición de cuentas de los gobiernos. Dicho de otra forma, tanto cuando a) el contrato representativo es distorsionado ya sea porque se limitan desde el poder ejecutivo las instancias de control *del* y competencia *por* el poder, como cuando b) desde la oposición institucional (y/o grupos de poder no institucionales) se limita de forma espuria la capacidad de los gobiernos de cumplir con los contratos representativos establecidos con el electorado el día de la elección. La siguiente figura busca graficar ambas alternativas de erosión (como proceso) y los diversos momentos[10].

Por lo general, la literatura especializada ha analizado la erosión democrática como un proceso llevado adelante desde el poder ejecutivo (lado derecho de la figura 1). Esta propuesta sostiene que la inestabilidad política de los regímenes democráticos latinoamericanos ha estado *principalmente* asociada al poder hegemónico de los presidentes (Mainwaring y Pérez-Liñán, 2013), no sólo durante el siglo XX sino también en la actualidad (Pérez-Liñán, 2018), al

10 Es necesario destacar que en el caso de las etapas descritas, el proceso no es necesariamente secuencial. Antes de la democratización iniciada en 1978, los golpes militares eran frecuentes, y en ocasiones ocurrían de forma bastante abrupta, sin un largo proceso previo de erosión institucional.

disminuir la capacidad de control de las instancias de balances y contrapesos o *accountability* horizontal. En su libro *Democracy and Dictatorship in Latin America* (2013), Mainwaring y Pérez-Liñán presentan evidencia cuantitativa de que la principal causa de quiebres de la democracia en América Latina es la radicalización de los jefes de gobierno y la supresión de canales de control (Kouba, 2016), lo que genera incentivos a los actores de oposición para buscar un cambio de régimen.

FIGURA 1
DOS MODELOS DE EROSIÓN DE LA DEMOCRACIA. ESTRATEGIAS DESDE EL GOBIERNO Y LA OPOSICIÓN



Fuente: Elaboración propia

Desde una perspectiva «dahliana» que concibe a la democracia como poliarquía, es decir, como un régimen caracterizado por la capacidad de la oposición de controlar el ejercicio del poder, el papel desestabilizador de la oposición ha quedado oscurecido. Por ello, la postura aquí presentada propone analizar la erosión del régimen democrático también como resultado de la acción de la oposición, tanto de la institucionalizada como de los grupos de presión. De acuerdo con el lado izquierdo de la figura 1, son los actores de oposición –fundamentalmente a través de su accionar institucional en el parlamento, y a través de la capacidad de *chantaje* de las élites económicas (incluyendo a los poderosos grupos de multimedios que controlan la creación y difusión de información pública)– quienes contribuyen a erosionar la institucionalidad democrática, a través de procesos de desestabilización política, cuyo blanco han sido, principalmente, gobiernos progresistas con agendas redistributivas[11] (Zamosc, 2012).

Dada la recurrencia de interrupciones de mandato de presidentes electos durante el proceso de democratización de la Tercera Ola en América Latina, este trabajo se pregunta si efectivamente las élites económicas han buscado limitar la capacidad representativa de gobiernos progresistas a través del accionar legislativo, y trata de generar evidencia para analizar en qué medida las interrupciones presidenciales que no han derivado en golpes de estado de todas maneras han representado casos concretos de erosión democrática. En tal sentido, se presenta el *impeachment* a Dilma como un ejemplo paradigmático de este tipo de estrategias.

11 Consideradas inaceptables para las élites.

LOS PROCESOS DE DESTITUCIÓN «VÍA JUICIO POLÍTICO». *¿ACCOUNTABILITY HORIZONTAL* O ESTRATEGIA DE LAS ÉLITES PARA LIMITAR EL MANDATO DE LOS GOBIERNOS PROGRESISTAS?

La interrupción anticipada del mandato presidencial –o interrupción presidencial– se refiere a la conclusión del mandato del presidente antes del término legalmente establecido en la Constitución (Gorostiaga Guggiari, 2016). Dicho de otro modo, tiene lugar cuando el presidente no logra terminar el periodo del mandato para el cual fue electo.

Dada la historia política de la región latinoamericana, caracterizada en la mayoría de los países por la inestabilidad política y la dificultad que han enfrentado las instituciones democráticas para consolidarse y representar *«the only game in town»* (Przeworski, 1995), consideramos que las interrupciones presidenciales deben ser clasificadas, en primer lugar, a partir del criterio de legalidad. Si bien es cierto que en ciertas circunstancias, las interrupciones representan una salida política ineludible frente a crisis de gobernabilidad (argumento «de flexibilidad» para la rigidez de los sistemas «presidencialistas»), una interrupción de mandatos no apegada a derecho significa un quiebre del vínculo democrático establecido entre ciudadanos y representantes el día de las elecciones presidenciales inmediatamente anteriores al momento de la interrupción (argumento «democrático»).

Los procesos de destitución del titular del Poder Ejecutivo a través de la activación de un procedimiento legal («juicio político») por parte de actores políticos (general y mayoritariamente opositores) suponen, en principio, la puesta en marcha de una destitución constitucional. En tal sentido, en la medida en que la figura del *impeachment* está contemplada en el plexo jurídico de un país, representa –en teoría– un mecanismo de rendición de cuentas imprescindible para motivar y/o garantizar la responsabilidad de los gobernantes y por tanto un ejercicio del poder apegado a los principios del régimen democrático.

Sin embargo, dichos procesos están revestidos –de forma casi inevitable– de motivaciones políticas. Dicho en otros términos, si bien sólo la constatación de responsabilidad presidencial en la violación de la constitución es el criterio que debe seguir un proceso de *impeachment* para que la destitución pueda tener lugar, la activación de estos procesos siempre es política. La evidencia de diversos países de América Latina (Paraguay, Brasil, Argentina[12]) muestra que sólo cuando el presidente enfrenta coyunturas críticas y su popularidad decae, los actores políticos responsables están dispuestos a aceptar e iniciar un proceso de este tipo. En tal sentido, la coyuntura es determinante en el proceso de activación, pero no debería serlo durante el proceso jurídico. Cuando el proceso legal es limpio, el juicio político representa un avance en la calidad de la democracia porque aumenta la responsabilidad de los gobernantes frente a sus mandantes. Por su parte, cuando la evidencia jurídica no está presente y la responsabilidad díficilmente puede comprobarse, el enjuiciamiento no debería dar lugar a la destitución. Por tanto, un procedimiento de destitución por vía del juicio político viciado en su procedimiento legal daría lugar a una interrupción presidencial que viola el contrato democrático, por tanto erosiona la calidad del régimen político.

Según Pérez-Liñán, lo que ha caracteriza a los presidentes que debieron enfrentar juicios políticos es el aislamiento del que fueron víctimas luego de desafiar a las élites y cuestionar patrones institucionalizados entre las esferas de poder (2000: 67). Por ello, aunque las crisis pueden darse con presidentes que forman parte de la élite económica (Collor de Melo en Brasil o Cubas Grau en Paraguay), el desafío es más amenazante cuando proviene de actores considerados «outsiders» o con propuestas inaceptablemente «radicales» para el *statu quo.*

12 En el caso Argentino, solo hubo propuestas para iniciar el procedimiento de juicio político que no fueron aceptadas. Para ahondar en este caso ver Pérez-Liñán, Aníbal y Mariana Llanos (2019).

Las coyunturas históricas y nacionales tienen sus particularidades. Los consensos pueden adquirir la forma de «espíritus de época», que en determinados momentos operan –si bien con sus especificidades– en diferentes países (el Consenso de Washington es un ejemplo). Pero hay otros consensos que son propios de los países y operan en diferentes épocas y circunstancias. Cuando un jefe de Estado –por lo general respaldado por un apoyo electoral significativo– desafía abiertamente alguno de estos consensos, y en particular, aquellos que la élite dominante considera básico de la convivencia y/o constitucionalidad política del país, provoca en éstas un sentimiento de amenaza para su supervivencia, y ello enciende las alarmas del sistema.

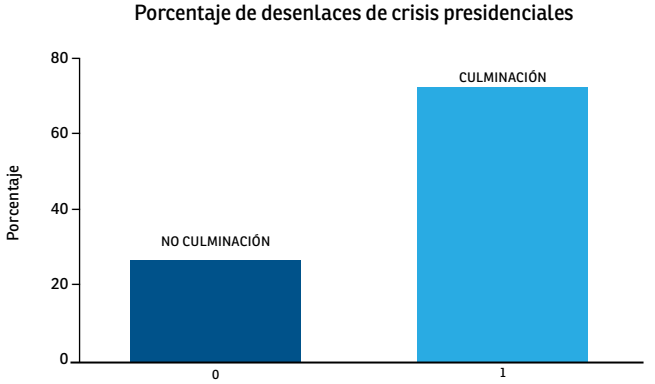
EL PAPEL DE LAS ÉLITES ECONÓMICAS EN LAS INTERRUPCIONES PRESIDENCIALES

Además de las élites políticas, existen actores extra-institucionales que están involucrados en el proceso de toma de decisiones, y específicamente en el desenlace de las crisis presidenciales. Uno de los más importantes son las élites económicas. Éstas, con frecuencia, cuando no fogonean la crisis, intervienen al menos en su conclusión. Esta intervención la hacen, ya sea a través de los vínculos que tienen con el Poder Ejecutivo o bien, con los lazos informales que construyen con los legisladores, es decir, con el Congreso. Esto último es lo que se conoce como poder instrumental de las élites (Fairfield, 2015).

Por tanto, esta capacidad refiere a la fortaleza de los vínculos de las elites con los poderes constituídos del Estado, y en particular con su capacidad para incidir en la toma de decisiones, específicamente con los poderes ejecutivo y legislativo. Esta capaciad se advierte al analizar las crisis presidenciales que han culminado con la destitución –por medios legales– del primer mandatario. En efecto, desde el inicio de la tercera ola de la democracia, hasta la destitución de Dilma Rousseff, se registran 55 crisis presidenciales. De

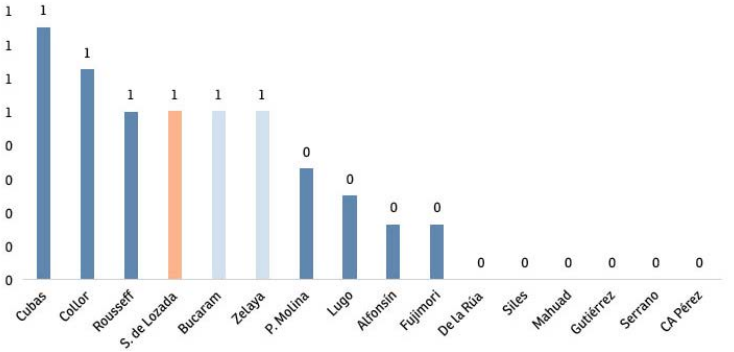
esas, 16 han terminado con la destitución o renuncia del primer mandatario. Es decir, hubo cumplimiento de mandato en el 70,91% de los casos, mientras que el 29,09% de los casos concluyeron en sentido contrario, como se puede ver en la figura 3.

FIGURA 3
DISTRIBUCIÓN DE LOS DESENLACES DE CRISIS PRESIDENCIALES EN PORCENTAJES [13]



Fuente: Elaboración propia con datos de Pérez-Liñán (2009) y Helmke (2017).

FIGURA 4
PODER INSTRUMENTAL DE LAS ÉLITES ECONÓMICAS Y LAS INTERRUPCIONES ANTICIPADAS DE MANDATOS PRESIDENCIALES



Fuente: Elaboración propia

13 «Culminación» implica que la presidencia no es interrumpida. «No culminación» implica interrupción del mandato.

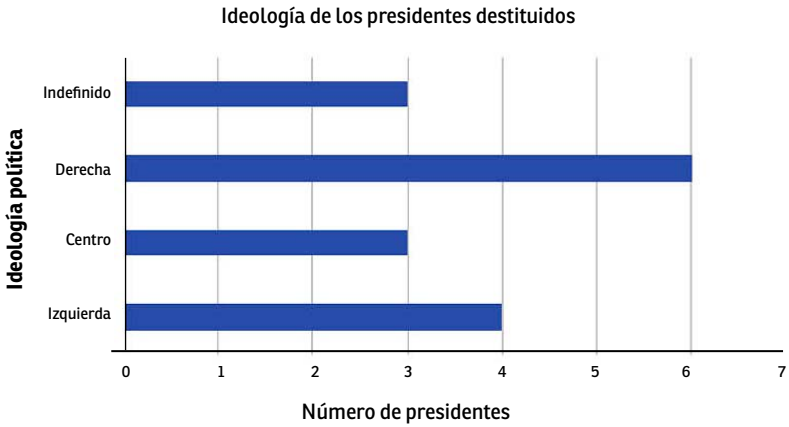
El elemento más notable de esta gráfica es que los juicios políticos y las destituciones irregulares (barras de color azul) (como el caso Zelaya, Bucaram o Mahuad) sólo suceden cuando las elites gozan de cierto poder instrumental. En ausencia de este, por lo general son los ciudadanos y/o los militares (desconociendo la autoridad del presidente) quienes fuerzan la dimisión (los casos de color naranja).

De esas 16 destituciones, en una buena cantidad de ellas, las élites económicas poseían un considerable grado de poder instrumental. En efecto, en el 62,5% de los casos, se advierte que las élites económicas tenían fuertes vínculos con el Poder Ejecutivo y con el Congreso, mientras que en los restantes 37,5% dicho vínculo no existía. Es decir, que es plausible suponer que las elites económicas jugaron algún papel en los procesos de interrupción presidencial.

Ahora bien, ese elevado poder instrumental de las élites económicas no se dirigió únicamente contra los primeros mandatarios considerados de izquierda. Es más, de los 16 presidentes destituidos, la mayoría pertenecen a la derecha del espectro político ideológico. Tal y como se advierte en la figura 5, seis de los presidentes que no lograron culminar su mandato eran de derecha, mientras que solo tres de ellos pueden ser calificados como de izquierda. Los demás se distribuyen entre presidentes de centro y algunos cuya ideología no está claramente definida.

Entonces, ¿qué nos indican estos datos? En primer lugar, que las interrupciones presidenciales son fenómenos frecuentes en América Latina. En segundo lugar, que, a medida que aumenta el poder instrumental de las élites económicas, las probabilidades que tienen un presidente de cumplir el término de su mandato si enfrenta una crisis presidencial, disminuyen. Finalmente, que la orientación política del presidente no es determinante para que sea destituido.

FIGURA 5
DISTRIBUCIÓN IDEOLÓGICA DE LOS PRESIDENTES DESTITUIDOS



Fuente: Elaboración propia

Ejemplo de ello, puede verse en el caso de la destitución de Raúl Cubas Grau en Paraguay, ocurrida en el año 1999. Dicho presidente provenía de las élites económicas, asumió la titularidad del Ejecutivo a través de un partido político de derecha y poseía escudo legislativo. Sin embargo, ninguno de estos atributos le sirvió cuando decidió enfrentarse a su propio círculo de origen. Es decir, al desafiar a las élites con las que estaba fuertemente vinculado, éstas, en lugar de apoyarlo, movieron sus fuerzas para que sea removido del cargo. Este caso, que sirve de ejemplo, se replica en los análisis estadísticos a continuación.

EL PODER INSTRUMENTAL DE LAS ÉLITES ECONÓMICAS

A fin de explorar lo dicho anteriormente, se realizó un análisis cuantitativo donde se estudiaron las crisis presidenciales que enfrentaron 13 países de América Latina[14] a partir de las primeras elecciones competitivas desde el inicio de la tercera ola de la democratización (Huntington, 1994) hasta el año 2016. A partir de esto, se aplicó una estrategia cuantitativa[15]. A través de un análisis de regresión logística, se puso a prueba el poder explicativo del «poder instrumental de las élites económicas» (como variable independiente)[16] respecto de la probabilidad de culminación del mandato de los presidentes en crisis (variable dependiente)[17]. Estas regresiones fueron controladas por el escudo legislativo (Pérez-Liñán, 2009), la inflación (Edwards, 2015), el crecimiento económico (Edwards, 2015), la cohesión legislativa (Casar, 2000) y la ideología política del presidente (Alcántara, 2004).

14 Específicamente, los países que experimentaron crisis presidenciales incluidos en el análisis son: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela.

15 Se construyó una base de datos que incluye los 55 casos de crisis presidenciales que ocurrieron en el periodo referido. Para dicha selección se usaron las crisis presidenciales referidas por Pérez-Liñán (2009) y Helmke (2017).

16 Para medir esta variable se construyó un índice aditivo de las dos dimensiones del poder instrumental de las élites económicas: los vínculos dicha élite con el Poder Ejecutivo y con el Congreso. La codificación, al ser el resultado de la suma de ambas dimensiones, va entre 0 y 2, siendo mayor el poder instrumental de la élite económica en tanto se aproxime más a la segunda cifra. La fuente de esta información son las biografías de presidentes latinoamericanos elaboradas por el Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) (https://www.cidob.org/), los portales del MH y del MT y fue complementada con publicaciones de medios de prensa escrita.

17 La culminación del mandato está codificada con 1 y la no culminación con 0.

TABLA 1
RESUMEN DE LAS VARIABLES PRINCIPALES

Variable	Dimensiones	Indicadores	Fuente
Desenlace		Culminación del mandato No culminación del mandato	Pérez-Liñán (2009) Helmke (2017)
Poder instrumental de la élite económica	Vínculo de la élite económica con el Poder Ejecutivo	Índice aditivo propio a partir del vínculo del presidente, del MH y del MT con la élite económica	CIDOB Prensa escrita
	Vínculo de la élite económica con la Cámara Baja	Orientación política de derecha de la mayoría o de la primera minoría de la Cámara Baja	Portales de los Congresos Alcántara (2004) Prensa escrita
	Poder instrumental	Índice aditivo propio a partir del vínculo de la élite económica con el Poder Ejecutivo y con el Cámara Baja del Congreso	Portales de los Congresos Alcántara (2004) Prensa escrita
Escudo legislativo		Número de escaños Legislativos controlados por el partido político del presidente menos el umbral de veto	Pérez-Liñán (2009) Portales de los Congresos
Inflación		Inflación medida por el índice de precios al consumidor	Banco Mundial
Crecimiento económico		Tasa de crecimiento porcentual anual del PIB per cápita basado en moneda local constante	Banco Mundial
Cohesión legislativa		Votación de los legisladores	V-Dem
Presidente de derecha		Pertenencia del presidente a un partido político de derecha	V-Dem Alcántara (2004)
Presidente de centro		Pertenencia del presidente a un partido político de centro	V-Dem Alcántara (2004)
Presidente de izquierda		Pertenencia del presidente a un partido político de izquierda	V-Dem Alcántara (2004)

Fuente: Elaboración propia con datos de Gorostiaga Guggiari (2020, por venir).

Los resultados del análisis realizado confirman que a medida que aumenta el poder instrumental de las élites económicas, las probabilidades que tiene el presidente de culminar su mandato, en contextos de crisis presidenciales, disminuyen (con un 99% de confianza). Son también significativos en sentido negativo la cohesión legislativa con el mismo nivel de confianza y el escudo legislativo, pero este último con un nivel del 90% de confianza.

Un análisis complementario de la «bondad del modelo» a través del análisis del error estándar robusto, confirma la hipótesis planteada. En efecto, la variable independiente muestra un nivel de confianza del 95%. Es decir, se confirma nuevamente que, en contextos de crisis presidencial, a medida que aumenta el poder instrumental de las élites económicas, las probabilidades que tiene el presidente de cumplir el término del mandato para el cual fue electo disminuyen.

Finalmente, se estimó la tasa global de clasificación correcta. Se utilizó el valor de corte predeterminado de 0.5. Según se advierte dicho análisis, el modelo planteado arroja el 77,78%. [18]

El análisis realizado demuestra que, mientras que mayor sea el vínculo que tiene el Poder Ejecutivo y el Congreso con las élites económicas, más susceptibles se hacen los órganos de poder a las decisiones de estas últimas, sobre todo cuando existe una crisis de gobernabilidad. Como se vio, importa poco el escudo legislativo, la orientación del presidente e, incluso, la situación económica. Lo que de verdad importa para definir el desenlace de una crisis presidencial, es que el gobierno no pretenda desafiar a las élites cuando éstas cuentan con un poder instrumental significativo.

18 Los resultados de los modelos pueden verse en el anexo I.

EL *«IMPEACHMENT»* A DILMA ROUSSEFF. EL USO ARBITRARIO DE LAS INSTITUCIONES POR PARTE DE LAS ELITES POLÍTICAS Y ECONÓMICAS

A pesar del grado de publicidad alcanzado por el proceso de *impeachment* que interrumpió el mandato de Dilma Rousseff en Brasil, no hay en la actualidad un consenso entre los especialistas acerca de la calificación de la destitución. Si bien el proceso siguió las normas establecidas para su regulación, el *crimen de responsabilidad* del que fue acusada la presidenta no pudo ser comprobado de manera fehaciente, por lo que parece posible catalogar su destitución como irregular. De acuerdo con esta interpretación, los criterios políticos de una mayoría opositora en el congreso primaron sobre el criterio jurídico, cuya estricta observancia no hubiera ameritado la interrupción del mandato. Por tal motivo, consideramos relevante analizar el juicio político a Dilma Rousseff como un caso de destitución en el que la élite de centro derecha –que gobernó al país durante casi dos siglos-, al ver dificultado su regreso al poder en la siguiente elección, promovió la interrupción aprovechando una coyuntura crítica, pero sin brindar los elementos para que un juicio de esta naturaleza pudiera ser aplicado.

LAS ETAPAS DE UN PROCESO DE IMPEACHMENT

Un proceso de enjuiciamiento político puede ser dividido lógica y jurídicamente en tres etapas, cuyo análisis permite establecer su grado de legalidad. La primera etapa puede ser denominada como de acusación informal. La misma se caracteriza por ser el momento en que surgen acusaciones contra el titular del Ejecutivo, que cuestionan la legalidad de algunos de sus actos en el ejercicio el cargo. La particularidad de esta etapa es que las acusaciones muchas veces son infundadas, y están motivadas por cuestiones políticas. Por ello, la mayoría de las veces surgen de la oposición y no dan lugar a un procedimiento formal.

Ahora bien, la característica principal de la acusación informal es que es anterior en el tiempo (T-1) al procedimiento mismo de destitución (T). En efecto, es la etapa en la que se busca impulsar que el procedimiento se habilite a efectos de destituir al titular del Ejecutivo. Teniendo en cuenta la variedad de actores que pueden impulsar esta acusación, el peso relativo de esta etapa en el proceso es bajo, pero puede aumentar en contextos de crisis política, social o económica, por la disposición de la prensa a amplificar las acusaciones, y el efecto que ello podría tener sobre la opinión pública (Ollier, 2008, Pérez-Liñán, 2009). Por ello, si bien esta etapa deber ser analizada, sería incorrecto definir la legalidad del procedimiento sólo a partir de ella. Por lo general, con este tipo de acusaciones, se busca –más que impulsar la destitución–, generar inestabilidad y debilitar el poder del presidente frente a la oposición, en la negociación de políticas públicas[19]. Asimismo, este tipo de acusaciones constituye un intrumento de presión sumamente poderoso contra el titular del Ejecutivo, especialmente en gobiernos caracterizados por presidencias atenuadas y órganos legislativos poderosos.

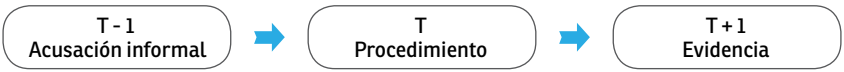
La segunda etapa (mecanismo de destitución propiamente dicho en T) es la de mayor peso durante el proceso. Esta etapa se inicia con la acusación formal y se caracteriza por el desarrollo del proceso que busca la destitución del presidente. En efecto, el mismo puede ser un juicio político, una declaración de incapacidad o cualquier otra figura que tenga el objetivo mencionado. Ahora bien, lo que en verdad interesa de esta etapa es su apego a las normas constitucionales dado que, en caso de que se realice conforme a las mismas, aumenta la probabilidad de que la etapa posterior

19 Ejemplo de esta etapa son las más de 20 solicitudes de juicio político que enfrentó Fernando Lugo durante su periodo de gobierno. Las mismas provinieron de la prensa, de grupos empresariales importantes, de algunos legisladores e, incluso, hasta de su propio videpresidente (Rodríguez, 2012)

(presentación de la evidencia) haga lo propio. Sin embargo, si el procedimiento se realiza, aunque respete los aspectos formales, se aparta de la legalidad que la regula, el procedimiento posterior, aunque pueda presentar todas las evidencias necesarias para la destitución, estará viciado *ab initio*. Dicho de otro modo, la legalidad de T determina la legalidad de la etapa posterior. En atención a esto, la importancia de esta etapa en la valoración de la legalidad de todo el proceso es superior a la de la acusación inicial (T-1) y a la de la presentación de la evidencia (T+1). Esta etapa, por lo general, se sustancia en la Cámara Baja o de Diputados. La misma incluye la presentación formal del pedido de destitución, así como del libelo acusatorio[20].

Finalmente, la tercera etapa, denominada «evidencia» (T+1), es el momento en que se presentan las pruebas que deberían fundar la destitución del titular del Ejecutivo. Es decir, en esta etapa se justifica (o no) el argumento del órgano acusador, ya sea para rechazar el procedimiento, o bien, para interrumpir el mandato constitucional del presidente. La legalidad de esta etapa, entonces, se determina a partir de la pertinencia, oportunidad y conformidad con el derecho de las evidencias presentadas, tanto en términos de su producción como de su consistencia con las causales de destitución mencionadas taxativamente en la Constitución.

FIGURA 2
ETAPAS Y PROGRESIÓN DEL PROCESO DE DESTITUCIÓN



20 Se conoce con el nombre de libelo acusatorio al documento por virtud del cual la Cámara Baja detalla las causas que fundan el pedido de destitución del primer mandatario. En el mismo, además, deben ir enunciadas las evidencias que deben ser consideradas al momento del juzgamiento por la Cámara Alta o de Senadores.

Por lo general, es la etapa en la que suelen concentrarse todos los actores políticos y sociales interesados en la destitución, especialmente cuando parece haber algún tipo de pruebas para llevar adelante la acusación, independientemente de la legalidad del procedimiento previo. En este punto, el caso de la destitución de Dilma es absolutamente paradigmático (crucial), y por ello la relevancia de su análisis.

LA INTERRUPCIÓN ANTICIPADA DEL MANDATO DE DILMA ROUSSEFF EN BRASIL

Dilma Rousseff fue electa como presidenta de Brasil por primera vez a finales del año 2010, para el período 2011-2015, sucediendo a Luiz Inacio Lula da Silva, en el poder. Al igual que *Lula*, Dilma ganó las elecciones como candidata del Partido de los Trabajadores (PT)[21], y representó en términos programáticos una continuidad con la orientación de los dos periodos de gobierno de su antecesor.

En octubre de 2010 (cuando se realizaron las elecciones) el triunfo de Dilma era previsible. Lula se había transformado en el político de mayor relevancia a nivel mundial, tanto por los logros sociales de su gobierno como por haberlo logrado «sin romper» con el *establishment* económico y político brasileño e internacional. Brasil era percibido, al final de su mandato, como la potencia emergente más importante del planeta[22]. Pese a no contar con el carisma ni la popularidad de Lula e ir abajo en las encuestas hasta pocos meses antes de las elecciones, Dilma ganó con relativa holgura (obtuvo el 46% de los votos frente al 32% de José Serra, del

21 Aunque Rousseff era la candidata del PT, la coalición denominada Para que Brasil siga cambiando estaba integrada, además, por los siguientes partidos políticos: PMDB, PCdoB, PDT, PR, PSB, PSC, PTC Y PTN (http://www.jornada.unam.mx/2010/09/28/mundo/021n1mun, consultado el 9/03/2018).

22 El haber sido elegido como Sede del Mundial de Futbol de 2014 y de los Juegos Olímpicos de 2016 son dos indicadores «simbólicos» pero no desdeñables de ello.

PSDB), pero dadas las reglas electorales brasileñas[23] necesitó de una segunda vuelta, en la que mantuvo la ventaja de más de 12 puntos, para ser elegida como presidenta.

Los objetivos programáticos de su primer mandato quedaron expuestos en el discurso de asunción:

> Voy a hacer un gobierno comprometido con la erradicación de la miseria y dar oportunidades a todos los brasileños y brasileñas. Pero, humildemente, hago un llamado a la nación, a los empresarios, trabajadores, prensa, y personas de bien del país, para que me ayuden.[24] [25]

El primer mandato de Dilma Rousseff estuvo caracterizado por el intento de profundización del programa reformista de Lula (a partir del mantenimiento y ampliación de las alianzas partidistas al interior del parlamento), pero también por un intento de «desligar» a su gobierno de los señalamientos de corrupción que la oposición y los grandes medios de comunicación habían hecho durante el mandato de Lula. En el marco de una economía en desaceleración como consecuencia de la crisis global iniciada en 2008, el persistente tema de la corrupción se convirtió en un obstáculo significativo para la presidenta durante su primer mandato. De tal manera, Dilma enfrentó el proceso electoral para su reelección en medio de movilizaciones sociales –especialmente de sectores medios y medios altos– que cuestionaban la calidad de ciertas políticas públicas (transporte y seguridad) así como los distintos escándalos que involucraban a funcionarios y miembros del PT, de los que la prensa se hacía eco periódicamente[26].

---

23 Para ganar en primera vuelta, un/a candidato/a debe obtener el 50% más uno del total de los votos (Constitución del Estado Federativo de Brasil, 1988).

24 O Globo. 31 de octubre de 2010.

25 Traducción propia.

26 En otro acto anticorrupción, diez y ocho funcionarios del Gabinete de la Presidencia fueron separados de sus funciones por orden de la presidenta.

Dilma Rousseff llegó al proceso electoral con niveles significativos de popularidad (el 77% de los brasileños tenía una imagen positiva) y su gobierno estaba relativamente bien evaluado: el 47% de las y los brasileños creía que la Presidenta estaba realizando una buena gestión (Amaral y Ribeiro, 2015). Sin embargo, lo cerrado de su triunfo electoral presagiaba la tormenta venidera. Al igual que en 2010, Dilma necesitó de la segunda vuelta para ganar las elecciones, pero en 2014 su triunfo fue mucho más cerrado. El margen de su victoria frente al candidato Aécio Neves fue de sólo 3 puntos porcentuales (51% a 48%) (Amaral y Ribeiro, 2015).

Esta merma en su legitimidad de origen sumada a los signos de recesión económica «post Copa del Mundo», y a las revelaciones de la investigación judicial *Lava Jato*, que involucraba representantes y funcionarios públicos de distintos partidos políticos, marcaron a fuego su segundo e inconcluso mandato. El creciente descontento social frente a esta coyuntura, «fogoneado» a su vez desde los grandes medios de comunicación, abrieron demasiados frentes para un gobierno sin la fortaleza política ni la energía simbólica que suele proveer «la luna de miel electoral», de la que ya no disfrutó como cuatro años antes, al llegar al poder por primera vez (Nunes y Melo, 2017)[27].

27 La coyuntura crítica del gobierno se complementaba paradójicamente con la posibilidad de que Lula volviera a presentarse como candidato a la presidencia en 2018, disminuyendo significativamente las posibilidades de la oposición de llegar al poder por la vía electoral. El carisma de Lula, y la sensación de «buenos tiempos» asociada a su gestión representaban una barrera política insalvable para quienes estaban en desacuerdo con la orientación del gobierno, específicamente en términos de política económica y social. Si a ello le sumamos que muchos de los políticos opositores estaban siendo investigados judicialmente (dentro del Lava Jato), el horizonte temporal de su acción política se hizo más corto y la búsqueda de cambios adquirió mayor velocidad. Dados los tiempos electorales (faltaban aún tres años para las elecciones), los canales institucionales elegidos por la oposición para acelerar un cambio –que volvía a percibirse improbable en términos electorales– fueron los del juicio político.

A fines de 2015, todos los factores conspiraron en contra del gobierno de Dilma. La recesión económica, el descontento social con las evidencias de corrupción de la clase política, el desempleo creciente –que erosionó uno de los últimos logros que le quedaba por resaltar a la gestión del PT–, la (aún larga) distancia de las próximas elecciones, e incluso la posibilidad cierta de que la coalición de gobierno se mantuviera en el poder gracias a una cada vez más probable candidatura de Lula, se conjugaron para que el día 3 de diciembre el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha (uno de los políticos que estaba siendo investigado por el Poder Judicial por causas de «lavado de dinero») anunciara ante los medios que había decidido aceptar una solicitud –de las alrededor de 20 que había recibido con anterioridad– de juicio político presentadas contra la Presidenta Rousseff. La causa esgrimida para ello fue la develación del ocultamiento de cifras fiscales dificitarias para ajustar las cuentas de su Gobierno en 2015[28].

CRISIS, CHANTAJE POLÍTICO Y ACUSACIÓN. EL CAMINO HACIA EL JUCIO POLÍTICO

En su primera alocución al pueblo brasileño al conocer la noticia de la aceptación del pedido de juicio político por parte de Eduardo Cunha, Dilma Rousseff expresó:

> He recibido con indignación la decisión del presidente de la Cámara de Diputados contra un mandato democráticamente conferido por el pueblo brasileño (del Tronco, 2019).[29] [30]

28 Edición electrónica del Diario *El País*, del día 02 de diciembre de 2012. Consultado el 10 de septiembre de 2017. Disponible en: https://elpais.com/internacional/2015/12/02/actualidad/1449080902_103706.html?rel=mas.

29 Ibidem.

30 Traducción propia.

En ese mismo discurso, pidió tranquilidad y expresó su confianza en las instituciones. Desde su perspectiva, la falta de elementos legales que ameritaran la promoción de un juicio político, haría que el caso fuera definitivamente archivado. Sin embargo, el *momentum* político y el humor social –suponemos que Dilma lo sabía– no jugaban a su favor.

Como fue mencionado, la economía estaba en recesión, el déficit público era de casi el 3% del PIB, el desempleo había aumentado, y principalmente, la revelación de los pagos millonarios de sobornos recibidos por funcionarios de Petrobras (muchos de ellos miembros del PT y comisionados por Lula) y legisladores (entre los cuales estaba Cunha, promotor del *impeachment*) encendieron el reclamo social. Rápidamente, un sector de la población brasileña tomó las calles para protestar contra el gobierno y contra la corrupción imperante en todos los niveles (Nunes y Melo, 2017).

En este contexto, para muchos de los promotores del juicio político, esto representaba una opción política y personal. En términos políticos, para sacar del poder a un gobierno de orientación redistributiva con el que nunca «comulgaron», pero que aceptaron mientras los frutos del crecimiento económico (y de los arreglos particularistas) aumentaban el costo de una postura opositora. En términos personales, porque la investigación del *Lava Jato* ponía en riesgo su situación, y había que presionar a favor de un cambio institucional mediante el cual ganaran tiempo, aliados en el poder, y cercanía con la orientación ideológica y programática del nuevo gobierno. En síntesis, el clima social (a raíz de la crisis) y los avances de la investigación judicial resultaron estímulos oportunos para empujar políticamente el juicio político en contra de la presidenta[31]. Eduardo Cunha fue la figura política que propició

31 En diversos medios, Cunha salió a aclarar que sus motivaciones para aceptar la solicitud del juicio político «no eran políticas».

el *impeachment*. Él, como autoridad máxima del poder legislativo brasileño, fue quien –autorizado por la Constitución– tomó la decisión aceptar la solicitud del juicio político contra la Presidenta, pese a que la evidencia de alguna conducta que fuera susceptible de ser procesada como causal constitucional de juicio político era controvertida[32]. El testimonio de Cunha frente a los medios brasileños es de alguna manera revelador de sus intenciones:

> Con esta medida, (espero que Brasil) pueda superar (la) crisis política y económica que atraviesa (...) No quise ocupar la presidencia de la Cámara para ser el protagonista de un proceso de *impeachment* (del Tronco, 2019).[33]

Si bien Cunha fue electo por el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), principal aliado electoral y legislativo del PT durante el mandato de Dilma, desde 2015 fue percibido como la figura con mayor capacidad política e institucional para ejercer la oposición al gobierno. De acuerdo con Nunes y Melo, la oposición legislativa, la sociedad civil movilizada, el *establishment* empresario, y los medios masivos vieron en Cunha al único actor capaz de interrumpir el largo ciclo del *Partido dos Trabalhadores* en el gobierno de Brasil (2017: pp. 285-6).

El «supuesto» crimen de responsabilidad cometido por Dilma Rousseff durante su mandato y que dio origen al proceso de juicio

32 En Brasil, el juicio político puede ser aplicado sólo a partir de la comprobación de «Crímenes de responsabilidad cometidos durante su gestión» por parte del Primer Mandatario en contra de: la Constitución, la existencia del país, el ejercicio libre de la actividad por parte de los otros dos poderes del Estado, el ejercicio de derechos individuales y sociales, la seguridad interna del país, la probidad en el ejercicio de la función pública, la ley presupuestaria y el acato de las decisiones judiciales (Nunes y Melo, 2017: 288) .

33 Edición electrónica del Diario *El País*, del día 02 de diciembre de 2012. Consultado el 10 de septiembre de 2017. https://elpais.com/internacional/2015/12/02/actualidad/1449080902_103706.html?rel=mas

político fueron las llamadas *«pedaladas fiscales»*. Esta práctica contable –frecuente entre los gobiernos brasileños– consiste en la toma de crédito público adicional en instituciones bancarias estatales sin la autorización del Congreso para «maquillar» las cuentas del gobierno (Nunes y Melo, 2017: pp. 288).

Si bien esta práctica era recurrente, y los argumentos técnicos utilizados para justificar el juicio político fueron endebles, lo cierto es que la coyuntura política y el descontento social generalizado lo hicieron posible. Difícilmente la corrupción enquistada por décadas en el sistema político brasileño pueda terminarse con un juicio político al/a Jefe de Estado (Brasil ya lo experimentó en 1992, con el *impeachment* a Fernando Collor), pero una crisis política sí puede resolverse –en el corto plazo– interrumpiendo el mandato presidencial. Mucho más si esa presidenta es cada vez más impopular, ha perdido apoyo político entre los legisladores de partidos que forman su coalición, y aún más si los medios de comunicación la presentan como la cabeza visible de un sistema político corrupto que debe ser transformado. Más todavía, si quien quedaría a cargo del gobierno es alguien con cuyo favor político se puede contar. Esta parece haber sido la apuesta de Cunha, y de los impulsores del juicio político a Dilma Rousseff.

EL IMPEACHMENT COMO VIOLACIÓN DEL CONTRATO DEMOCRÁTICO

En atención a la estricta descripción del proceso jurídico que permitió el enjuiciamiento y posterior interrupción del mandato constitucional de Dilma Rousseff, la destitución podría ser considerada como apegada a la letra constitucional. Sin embargo, si incorporamos al análisis la legalidad específica de lo sucedido en cada una de las etapas, la cuestión se vuelve un poco más imprecisa.

En efecto, según se dijo anteriormente, el juicio político puede ser dividido en tres etapas: la acusación informal, el procedimiento

y la evidencia. En el caso de la destitución de Dilma, la primera etapa no presenta evidencia de ilegalidad. De hecho, la Presidenta enfrentó, en total, veinte pedidos de juicio político. Diecinueve de ellos fueron detenidos en el Congreso y declarados inadmisibles. Sólo en el vigésimo, una mayoría parlamentaria votó a favor de dar inicio al proceso de enjuiciamiento.

La segunda etapa –el procedimiento propiamente dicho– cumplió –en principio– con todos los requerimientos institucionales. La Cámara de Diputados aprobó la realización del juicio político. Lo mismo hizo la Cámara de Senadores. Se realizó el juicio en la Cámara de Senadores tal y como establece la Constitución. Luego de la investigación, este último órgano colegiado encontró a Rousseff culpable y la destituyó.

Sin embargo, en lo que respecta a la evidencia –tercera etapa–, existen elementos para considerar que el proceso de juicio político no estuvo totalmente apegado a la legalidad vigente. En efecto, en el informe del mes de abril de 2016, presentado por el diputado Jovair Arantes –afiliado al *Partido Trabalhista Brasileiro* (PTB)-, se sostuvo que existió usurpación de la prerrogativa del Congreso de autorizar gastos públicos. Sin embargo, según la defensa, ninguno de los actos denunciados fueron firmados por la entonces presidenta. Cabe preguntarse entonces, ¿Dónde está el crimen de responsabilidad de Rousseff?

Si a esto se le agrega que los actos por los que fue denunciada Dilma constituyen una práctica contable frecuente en Brasil, deviene dudoso que el juicio haya sido realizado realmente porque la presidenta incurrió en crímenes de responsabilidad. Si, además, se escucha la fundamentación de los votos de quienes la destituyeron –por la familia, por el gran arquitecto del universo, por el altísimo, entre otros– parece probable que los motivos que sustentaron la voluntad de enjuiciar a la presidenta, no fueron –principalmente– los esgrimidos en la denuncia.

En atención a lo dicho, si bien las etapas constitucionales del juicio político fueron respetadas, las evidencias no soportan la denuncia. Sin embargo, el *path-dependence* ya había sido activado. Si la acusación había sido aceptada con los mismos argumentos, más allá de la debilidad e insuficiencia de las pruebas potenciales, difícilmente podía detenerse el juicio en la etapa final, cuando esas mismas pruebas serían presentadas formalmente como evidencia. Si a ello sumamos el creciente humor social –amplificado en medios y redes sociales– a favor de la destitución, todo se configuró para el desenlace conocido.

Así, la destitución de Dilma Rousseff, aunque no fue un golpe de estado de acuerdo con las definiciones politológicas más aceptadas, resultó una *destitución irregular,* no completamente apegada a las normas constitucionales que regulan las diferentes etapas de este proceso jurídico. En tal sentido, el mandato democrático otorgado por las ciudadanas y ciudadanos a la presidenta el día de la elección resultó, de acuerdo con la evidencia aquí presentada, claramente violentado.

CONCLUSIONES

De esta manera, el exitoso juicio político llevado adelante por el Congreso brasileño a Dilma Rousseff puede ser considerado como una interrupción anticipada del mandato presidencial no-constitucional. Dado el consenso existente en la literatura especializada, este tipo de interrupciones no constituyen golpes de Estado porque no quebrantan abiertamente la legalidad constitucional, y especialmente, porque no buscan instaurar gobiernos *de facto* cívicos o militares.

Sin embargo, en este caso –como en otros ya reseñados– la interrupción del mandato es el resultado de una interpretación arbitraria de la letra constitucional, sólo posible a partir de una coyuntura de crisis política y creciente descontento social, en la cual sectores

opositores buscan «desmarcarse» del gobierno y mantener o acrecentar su posición de poder y/o influencia luego de la interrupción. La pérdida del «escudo legislativo» (Pérez-Liñán, 2009) es el factor que propicia la crisis y aumenta la probabilidad de reemplazo, y es estimulada por el instinto de supervivencia de la clase política, mecanismo causal apropiado para entender por qué en condiciones críticas similares algunos gobiernos caen (Gutiérrez en Ecuador, Lugo en Paraguay, Zelaya en Ecuador, Dilma, en Brasil) mientras que en otros pueden mantenerse en el poder (Peña Nieto, en México, Samper en Colombia o González Macchi en Paraguay)[34].

Adicionalmente, es relevante analizar cuáles son los efectos de este tipo de interrupciones. En el caso brasileño, el juicio político a Dilma Rousseff y su separación del cargo, permitieron la asunción de Michel Temer, su vice-presidente, quien fue –como miembro del PMDB- uno de los instigadores tras bambalinas de la destitución irregular. Temer, en sus dos años al frente de Brasil, tomó decisiones de política pública que limitaron significativamente algunos de los avances logrados por los gobiernos del PT en términos sociales pero no recondujo la crisis política. Esta, más bien, se profundizó durante su mandato, llegando su figura a niveles de impopularidad del 96%, pero afectando de forma general a toda la clase política. El resultado de esto, entre otras cosas, fue el triunfo del candidato de derecha Jair Bolsonaro, representante de la bancada BBB[35].

34 Este mecanismo sugiere que en aquellos casos en que la destitución del presidente pone en riesgo la supervivencia de toda la elite política, los incentivos de la oposición legislativa es a mantener el «escudo», mientras que cuando no se percibe una amplia probabilidad de que ocurra este «efecto arrastre», lo conveniente es hacer o dejar caer al presidente de turno.

35 La bancada BBB es un término que se utiliza en Brasil para referirse a los legisladores que forman parte de la bancada armamentista (de la Bala), ruralista (del Buey), y evangélica (de la Biblia), cuyas agendas están alineadas en la derecha ideológica y el consevadurismo social. Esta bancada jugó un papel fundamental en el juicio político a Dilma, y una vez consumada la destitución, comenzaron a presionar a Michel Temer, a trabajar a favor de sus propuestas (https://www.

En tal sentido, si enmarcamos este análisis en la discusión de la erosión democrática, los presidentes que enfrentan procesos de juicio político suelen ser percibidos por las elites como una amenaza desde el poder para la democracia, tal y como es concebida por los integrantes de los grupos de poder en cada país. Dicho de otra forma, el juicio político es un mecanismo que puede ser activado de forma preventiva para evitar la transformación del *statu quo* (el funcionamiento adecuado de la democracia de acuerdo con la visión de las élites) pero es su misma implementación lo que cuestiona el contrato establecido entre el presidente y los ciudadanos el día de las elecciones. En una palabra, son dos visiones del régimen democrático las que entran en conflicto: la elitista y la mayoritaria. Cuando el juicio político sigue un curso legal –más allá de las motivaciones políticas y del resultado del *impeachment*–, predomina la visión democrática. Cuando el procedimiento contraviene la legalidad sólo para interrumpir un mandato, afecta negativamente la posibilidad que tienen los presidentes de ser responsables de sus decisiones. En esos casos, y el de Dilma es uno de ellos, los efectos son negativos. La democracia se erosiona y la credibilidad de los ciudadanos en el sistema se derrumba. La llegada a la presidencia de un «ultramontano» como Jair Bolsonaro, es hoy en día, la consecuencia más notable de dicho proceso.

Finalmente, el caso del *impeachment* a Dilma representa el poder de las élites y su capacidad de incidencia sobre la evolución de los regímenes políticos en América Latina. Mas allá de la orientación ideológica –factor que este trabajo contribuye a desestimar como elemento relevante de los procesos de interrupción–, el hallazgo es que son actores externos al sistema político –pero con gran capacidad de influencia en las decisiones de los actores políticos– quienes inciden de forma decisiva en el desenlace de las crisis

folhape.com.br/politica/politica/politica/2018/10/25/NWS,85491,7,547,POLITICA,2193-BANCADA-BBB-GANHA-PROTAGONISMO-CONGRESSO.aspx)

presidenciales cuando estas ocurren. En tal sentido, la capacidad de los jefes de gobierno para negociar y propiciar soluciones consensuadas resulta de gran valor. Ante el desafío (de los presidentes a las élites), deviene el aislamiento, y muy probablemente la interrupción[36].

36 Por eso la radicalización no es nunca buena consejera, pero en especial cuando la llevan adelante los presidentes.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

Alcántara Sáez, M. (2004). *¿Instituciones o máquinas ideológicas? Origen, programa y organización de los partidos políticos latinoamericanos*.

Casar, M.A. (2000). «Coaliciones y cohesión partidista en un Congreso sin mayoría: La Cámara de Diputados en México, 1997–1999». En *Política y Gobierno,* CIDE, Vol. VII, núm.1, México

Del Tronco, J. (2019). «Rendición de cuentas o asonada parlamentaria? El impeachment a Dilma en perspectiva comparada», en Lucca, Juan Bautista y Cintia Pinillos: *Política brasileña en español. De la crisis al impeachment.* Paraná, Argentina: Editorial de la Universidad Nacional de Entre Rios.

Edwards, M. (2015). *Understanding Presidential Failure in South America. En Latin American Politics and Society,* 57(2), pp. 111-131.

Fairfield, T. (2015). *Private Wealth and Public Revenue in Latin America. Business Power and Tax Politics.* New York: Cambridge University Press.

Gorostiaga Guggiari, K. (2016). *Del acuerdo inicial a la ambigüedad: incidencia de las estrategias presidenciales en las destituciones anticipadas* (Tesis de Maestría no publicada) México: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

Helmke, G. (2017). *Institutions on the edge. The origins and consequences of inter-branch crises in Latin America.* Cambridge: Cambridge University Press.

Huntington, S. P. (1994). *La tercera ola. La democratización a finales del Siglo XX.* Barcelona: Paidós.

Kouba, K. (2016). «Party Institutionalization and the Removal of Presidential Term Limits in Latin America». *Revista de Ciencia Política,* vol.36, n.2, pp.433-457

Linz, J. J. (1996). *La quiebra de las democracias.* España: Alianza Editorial.

Llanos, M. y L. Marsteintredet (2010). *Presidential Breakdowns in Latin America. Causes and Outcomes of Executive Instability in Developing Democracies.* Nueva York: Palgrave Macmillan.

Mainwaring, S. y Pérez-Liñán, A. (2013). *Democracies and Dictatorships in Latin America: Emergence, Survival, and Fall.* Estados Unidos: Cambridge University Press.

Mainwaring, S., & Shugart, M. S. (Eds.). (2002). *Presidencialismo y democracia en América Latina.* Buenos Aires: Paidós.

Marsteintredet, L. (2008), «Las consecuencias sobre el régimen de las interrupciones de América Latina». En: *América Latina Hoy,* 2008 (49). pp. 31-50.

Negretto, G. (2006). «Minority Presidents and Democratic Performance in Latin America». En: *Latin American Politics and Society,* 2006, 48, (3). pp. 63-93.

Nunes, F. y C. R. Melo (2017). «Impeachment, crisis política y democracia en Brasil». En: *Revista Ciencia Política* Vol. 37, Núm. 2, 2017, pp. 281-304.

O´Donnell, G. (2001). «Accountability Horizontal. La institucionalización legal de la desconfianza». En *Revista Post Data*, 2001, 7. pp. 11-34

O´Donnell, G. (1993). *Otra institucionalización.* En mimeo.

Ollier, M. M. (2008). «La institucionalización democrática en el callejón: La inestabilidad presidencial en Argentina (1999-2003)». En: *América Latina Hoy*, 49. pp. 73-103.

Pérez-Liñán, A. (2009). *Juicio político al presidente y nueva inestabilidad política en América Latina.* Argentina: Fondo de Cultura Económica

Pérez-Liñán, A. (2018). «Impeachment or Backsliding? Threats to democracy in the twenty-first century». En: *Revista Brasileira de Ciências Sociais* 33 (98). pp. 1-15.

Przeworski, Adam. (1995). *Democracia y mercado.* Cambridge: Cambridge University Press.

Rodríguez González, F. (octubre 2012). *Paraguay 2012: Crónica de un juicio político anunciado.* Ape Paraguay.

Zamosc, L. (2012). «Popular impeachments: Ecuador in comparative perspective», in M. Sznajder, L. Roniger and C. A. Forment (eds.), *Shifting frontiers of citizenship: The Latin American experience,* Leiden, Brill, pp. 237-266.

ANEXO I
LA INFLUENCIA DE LAS ÉLITES ECONÓMICAS A TRAVÉS DEL PODER INSTRUMENTAL

TABLA Nº 1

MODELOS DE REGRESIÓN LOGÍSTICA BINOMIAL CON ERRORES ESTÁNDAR AGRUPADOS POR PAÍS [37]

Variables	Modelo	Modelo 2	Modelo 3	Modelo 4
Poder instrumental de las élites económicas	-1.569969 *** (.5924352)	-2.377211 *** (.6811065)	-2.116381 *** (.429547)	-2.376712 *** (.6783573)
Cohesión legislativa		-.6862367 *** (.2633493)	-.6682076 *** (.2613174)	-.6948272 *** (.2658975)
Presidente de derecha		.7248526 (.9491241)		.6821793 (.988318)
Presidente de centro			-.6748985 (.9179388)	-.3489777 (1.018756)
Escudo Legislativo		-5.031274 * (2.771948)	-3.91792 (2.658065)	-4.95473 * (2.857206)
Inflación		.0063815 (.0045779)	.0057837 (.0036114)	.0061642 (.0046301)
Crecimiento económico		.030975 (.08646)	.0361439 (.0952077)	.0294689 (.0890432)
Constante	2.330585 (.7107538)	1.789898 (.4341493)	2.029207 (.3565299)	1.830783 (.4625958)

* 90% de confianza – ** 95% de confianza – *** 99% de confianza

37 El error estándar agrupado por país de cada una de las variables se encuentra entre paréntesis.

TABLA Nº 2

MODELOS DE REGRESIÓN LOGÍSTICA BINOMIAL CON ERRORES ESTÁNDAR ROBUSTOS [38]

Variables	Modelo	Modelo 2	Modelo 3	Modelo 4
Poder instrumental de las élites económicas	-1.569969 ** (.79993)	-2.377211 ** (.9681864)	-2.116381 *** (.8027294)	-2.376712 ** (.9648792)
Cohesión legislativa		-.6862367 (.4573426)	-.6682076 .4647807	-.6948272 (.4585411)
Presidente de derecha		.7248526 (1.093677)		.6821793 (1.142064)
Presidente de centro			-.6748985 (.9207615)	-.3489777 (1.070065)
Escudo Legislativo		-5.031274 (4.216847)	-3.91792 (4.180553)	-4.95473 (4.257292)
Inflación		0063815 (.0109207)	.0057837 (.0083189)	.0061642 (.0105383)
Crecimiento económico		.030975 (.1004925)	.0361439 (.1053011)	.0294689 (.1013182)
Constante	2.330585 .8496326	1.789898 (.9593375)	2.029207 (.984619)	1.830783 (1.003072)

* 90% de confianza – ** 95% de confianza – *** 99% de confianza

TABLA Nº 3

TASA GLOBAL DE CLASIFICACIÓN CORRECTA

Variables	Modelo	Modelo 2	Modelo 3	Modelo 4
Tasa global	75,68%	77,78%	77,78%	77,78%

38 El error estándar robusto de cada variable está entre paréntesis.

Brasil bajo Bolsonaro: contrastes a la luz de la Democracia Liberal

Stephany Castro[1] *y Gabriel Gómez*[2]

INTRODUCCIÓN

En 2018 ocurrieron varias de las contiendas electorales más importantes de Latinoamérica que terminaron de delinear el rumbo ideológico de la región. El caso de Brasil fue uno de los más impactantes porque, a pesar de que el Partido de los Trabajadores (PT) había estado en el gobierno las últimas cuatro administraciones, y Lula da Silva repuntaba en las encuestas, el contexto político del país atravesaba varias crisis que marcaron la pauta en las campañas: la destitución de Dilma Rousseff, la confirmación de la condena a Lula, la falta de un candidato fuerte del Partido de los Trabajadores, el ascenso acelerado de un candidato de extrema derecha con propuestas radicales, y los rezagos de una recesión económica entre 2015 y 2016 (Arantes, 2018: 84).

Bajo este panorama, Jaír Bolsonaro, candidato por el Partido Social Liberal (PSL), gana la presidencia en segunda vuelta con el 55% de los votos, y acentúa el giro ideológico en el país y América Latina. Sin embargo, Bolsonaro llega al gobierno ante un poder legislativo altamente fragmentado y, al menos en la Cámara Baja, con una clara mayoría opositora. Podría decirse que, por ello, los

1 Politóloga e internacionalista, Universidad Sergio Arboleda, Bogotá.

2 Politólogo, Friedrich-Schiller-Universität, Jena.

decretos presidenciales han sido utilizados continuamente por Bolsonaro, porque su partido no cuenta con una mayoría parlamentaria en el Congreso y tampoco ha logrado una coalición fuerte que la garantice (Domínguez Avila, 2019: 15). En consecuencia, el nuevo presidente ha tenido que apelar a este recurso para introducir las reformas prometidas en campaña.

En este sentido, cabe resaltar que la llegada de Bolsonaro al poder ha suscitado numerosas reacciones por parte de la prensa y la academia. Se le ha calificado de autoritario, populista (Bruera, 2019; Serrano-Amaya, 2019; Sohr, 2019) y de ultraderecha (Natanson, 2018; Stefanoni, 2018) por sus afirmaciones y decisiones con tintes excluyentes respecto a comunidades minoritarias y vulnerables. De hecho, por su corriente nacionalista, y por representar un conjunto de la ciudadanía en contra de las elites (Sohr, 2019), pero a la vez haber sido apoyado por esa misma elite para poder ganar las elecciones (Bruera, 2019), lo han señalado como un «populista de extrema derecha».

Sin embargo, ninguna de estas afirmaciones responde al análisis bajo un marco teórico que posibilite identificar las acciones antidemocráticas que se le atañen al presidente brasileño. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es llenar este vacío argumentativo mediante el análisis de varios decretos presidenciales de Bolsonaro a la luz del concepto de democracia liberal de Wolfgang Merkel (2004). De esta forma, se evalúa si ellos atentan contra principios liberales previamente definidos para, así, determinar si el gobierno de Bolsonaro ha debilitado el sistema democrático de Brasil.

En esa medida, este capítulo está dividido en cinco secciones. El segmento a continuación resalta las acciones más importantes que ha tomado Jaír Bolsonaro desde su llegada al Palácio do Planalto, con especial atención a su uso de decretos presidenciales. Gracias

a ello, es posible evidenciar luego cómo el presidente ha utilizado constantemente este recurso para reemplazar la labor del Congreso en materias legislativas. La tercera sección introduce el concepto de democracia liberal que utilizamos como marco teórico, el cual proviene de Merkel et al (2003), y a través del cual se expone la división de la democracia en 5 regímenes. Así, la *embedded democracy* provee una herramienta analítica ventajosa para el análisis de regímenes democráticos, y por medio del cual analizaremos lo corrido del gobierno de Jaír Bolsonaro. Todo lo anterior para, en el cuarto apartado, analizar algunos decretos presidenciales de Bolsonaro a la luz de la democracia liberal propuesta por Merkel et al (2003). Por último, las conclusiones a este trabajo que se encuentran en la quinta parte, y recogen los elementos relevantes evidenciados.

BRASIL DESDE LA LLEGADA DE BOLSONARO

Jair Bolsonaro viene de una larga trayectoria política en Brasil. Sin embargo, a pesar de llevar casi tres décadas como diputado, cuando presentó su candidatura a la presidencia era casi un desconocido en el escenario político nacional. Postulado por el Partido Social Liberal (PSL)[3], Bolsonaro llevó una campaña agresiva, con un descollante ascenso en el último mes de la contienda. Se consolidó como un candidato de derecha gracias a sus enérgicas propuestas y declaraciones acerca de la flexibilización de la política de armas,

3 El PSL se registró ante el Tribunal Superior Electoral en 1998, y antes de las elecciones del 2018, solo había logrado 1 escaño en Cámara de Diputados en 2002 y otro en 2010 (Domínguez Avila, 2019). Además, sólo hasta la postulación de Bolsonaro a la presidencia, el partido definió su ideología política de forma más conservadora, en favor de la familia tradicional y en contra del aborto; y aunque siguieron defendiendo el liberalismo económico, abandonaron las políticas socio liberales que antes promovían (Arantes, 2018: 82).

la priorización del fortalecimiento del esquema de seguridad[4], el retorno a las políticas de libre mercado y la restricción de algunos derechos de las minorías como los indígenas y la población LGBTI.[5.]

Dentro del programa de gobierno propuesto por Bolsonaro, llamado, Brasil encima de todo. Dios encima de todos', se contemplan medidas como la reducción de la deuda pública en un 20% a través de un proceso de privatización de las empresas públicas, la venta de acciones y asignación de concesiones a operadores privados; un sistema privado para la jubilación por capitalización; rebajar a 17 años la edad de imputabilidad; crear un Ministerio de Economía que unifique las carteras de Hacienda, Planificación e Industria para dirigir el plan de privatizaciones; permitir el uso de armas entre civiles; entre otras. Todas propuestas tendientes al lado derecho del espectro político y al endurecimiento de las medidas en torno a temas de seguridad, específicamente. Todas propuestas que necesitarían un contundente apoyo en el legislativo, o la ampliación de facultades del ejecutivo para ordenarlas unilateralmente, como veremos a lo largo del trabajo.

Bolsonaro construyó una plataforma nacionalista y conservadora, materializada en las restricciones migratorias y deportaciones en lo corrido de su mandato (Méndez, 2019; Milz, 2019), agudizada por sus posturas radicales sobre el rol de la familia tradicional y el endurecimiento del papel policial. Sobre lo primero, durante su candidatura fue contundente en sus afirmaciones contra el aborto y el rechazo a la homosexualidad. Y, relativo a la labor policial,

4 Específicamente en torno a decisiones sobre la capacidad de la fuerza pública para neutralizar criminales, y los decretos sobre la flexibilización del porte de armas para civiles (Ayuso, 2019: 5).

5 En 2017 fue condenado a indemnizar a la parlamentaria María do Rosario Nunes (PT) por haberle dicho: „No la voy a violar porque ni eso merece» (El Universal, 2019). También tuvo que pagar una multa de 50.000 reales por su „expresiones injuriosas, prejuiciosas y discriminatorias» contra la población negra (Redacción BBC News Mundo, 2018).

se pronunciaba en favor de nuevas funciones para que la policía pueda neutralizar delincuentes. Además, expuso un enfoque económico neoliberal que incluía «privatizaciones generalizadas, la reducción del peso del Estado al mínimo indispensable y el desenvolvimiento sin trabas de los actores privados del mercado» (Ortíz de Zárate, 2019).

Ahora bien, durante sus primeros 100 días de gobierno, y con un legislativo altamente fragmentado (Domínguez Avila, 2019: 15), el presidente Jair Bolsonaro redujo enormemente el número de funcionarios públicos (Vallejo, 2019), propuso una gran reforma al Sistema Pensional (Jiménez, 2019), y delimitó aún más el territorio indígena (*El Periódico*, 2019). Además, ha emitido decretos sobre:

- El aumento del 4,6 por ciento en el salario mínimo.
- Encargar a la oficina del Secretario de Gobierno la coordinación y monitoreo de las ONG internacionales en Brasil.
- Permitir al Ministerio de Agricultura, encabezado por Tereza Cristina, delinear el territorio indígena (anteriormente a cargo de la agencia nacional indígena FUNAI).
- Eliminar las preocupaciones LGBT del ámbito del Ministerio de Derechos Humanos, a cargo del pastor evangélico Damares Alves.
- Aliviar las restricciones a la posesión de armas y modificar el Estatuto de Desarme en Brasil, para que los civiles que viven en áreas rurales y ciudades violentas posean un arma y la mantengan en sus hogares o negocios.

Asimismo, se retiró del Acuerdo de Migración de la ONU, que Temer había firmado después de dos años de negociaciones diplomáticas, subastó con concesiones la administración de 12 aeropuertos que rindieron casi $630 millones USD para el gobierno, y

afirmó que pondría a disposición $2.6 mil millones USD para aliviar las deudas de los estados mediante los bancos públicos.

Además, el hecho de que su surgimiento estuviese dado entre la crisis del sistema de partidos brasileño, la reciente destitución de Dilma Rousseff y la condena a Lula da Silva, le dio un aire de «revolución conservadora desde la sociedad» (Costa, 2018) a su candidatura. Así, han dicho que con él se fue gestando una especie de «rearme moral» enmarcado por los valores de la familia tradicional, la coincidencia entre identidad de género - sexo y la religión (Stefanoni, 2018: 5-6). Y que, además, a través de ese discurso conservador, también justificó sus afirmaciones en contra de la corrupción enunciadas por un fuerte *antipetismo*, y su mensaje de ataque a la delincuencia con llamados a la justicia por mano propia.

De esta forma, la sociedad que venía ya saturada por la crisis política y económica gestada por los gobiernos anteriores, rompió el esquema de la composición social del voto y, por Bolsonaro, terminaron votando religiosos, conservadores, ciudadanos con estatus socioeconómico alto, y ciudadanos que no. En general, todos aquellos con necesidades/intereses en seguridad y orden, restablecimiento económico y restructuración de las elites (Natanson, 2018). Todo ello, ha consolidado su plataforma conservadora y tendencialmente de derecha, y además, le ha permitido a su gobierno cierta capacidad de acción en torno a políticas que atenten contra las minorías (como la comunidad LGBTI o los indígenas) y que reformulen el diseño institucional con mayor presencia del ejecutivo, como lo veremos en el análisis.

A pesar de lo anterior, y por lo que se propone en este trabajo, consideramos que afirmar que existe un autoritarismo con tintes de extrema derecha en Brasil es anticipado, y que, al contrario, podría decirse que existe (y ha existido) una democracia con tintes

unipersonales. Es decir, un sistema democrático asentado fuertemente en la figura del ejecutivo, particularmente presidencialista, y que a la luz de otras definiciones no se ajusta al modelo liberal (políticamente hablando). Para ello, analizamos el concepto de democracia liberal acuñado principalmente por Wolfgang Merkel (2003) y evaluamos algunos cambios institucionales que han tomado lugar en Brasil desde la llegada de Jaír Bolsonaro al Palácio do Planalto.

SOBRE LA DEMOCRACIA LIBERAL

El concepto de democracia liberal que se utiliza en este capítulo proviene de Merkel et al. (2003). Merkel y sus colegas desarrollaron el concepto de *embedded democracy*[6] con el objetivo de superar las falencias teóricas del, particularmente diseminado, termino «democracia electoral», que se esparció luego de la tercera ola de democratización (Merkel, 2004: 34). A pesar de que esta terminología abarca el principio básico de la democracia, es decir, elecciones libres, justas y abiertas, destaca varios elementos relevantes, como el principio de *horizontal accountability* o la importancia de un Estado de derecho (*Rechtstaat*) para la democracia. Merkel (2004) incluye estos componentes y otros más para crear un concepto amplio, que, como se explica luego, permite un análisis diferenciado de la democracia.

Para Merkel, la democracia tiene tres dimensiones, las cuales son consideradas como los principios fundamentales de un régimen democrático, es decir, los elementos sin los cuales una democracia no puede existir (Merkel et al., 2003: 40). La primera dimensión es la legitimidad vertical, la cual se refiere a que, en una democracia, el *demos* escoge cómo y quién gobierna. Para que esto sea posible, dos principios son indispensables: libertad e igualdad

6 *Embedded democracy* es utilizado intercambiablemente con democracia liberal.

política (Ibid., 41). Ambos son imprescindibles porque permiten la creación y expresión de preferencias del ciudadano, que luego forman gobierno. La dimensión vertical de la democracia está protegida por dos componentes: (1) *la horizontal accountability,* es decir, la limitación del poder político mediante las instituciones públicas, y, (2) la existencia de un Estado de derecho (*Rechtstaat*) que proteja al ciudadano de violaciones a su vida privada (Ibid., 43). Estos últimos dos elementos forman parte de la dimensión horizontal de la democracia. Por último, la dimensión transversal se asegura de que los gobernantes elegidos democráticamente sean los que en realidad tomen las decisiones políticas (Ibid., 47).

Implícitamente se ha indicado que cada una de las dimensiones abarca ciertos elementos. Estos son llamados por Merkel (2004) los «regímenes parciales» del gobierno democrático. Más concretamente, estos pueden ser catalogados como los elementos que definen a una democracia. La dimensión vertical se compone de los regímenes Elecciones y Derechos Políticos. Por otro lado, la segunda dimensión está integrada por los regímenes *Horizontal Accountability* y Derechos Civiles. Finalmente, la dimensión transversal abarca un solo régimen: el Poder Efectivo para Gobernar (Merkel, 2004: 36). En este punto, procedemos a explicar cada uno de los regímenes. Luego, mostramos por qué cada uno de los regímenes está conectado a los otros, formando así una *embedded democracy*.

- *Régimen electoral:* La existencia de una democracia presupone que las posiciones de poder público son escogidas a partir de elecciones abiertas y competitivas (Ibid., 38). Para que esto sea posible, cuatro condiciones deben ser cumplidas: derecho universal al sufragio; derecho universal a ser candidato en elecciones; elecciones libres y justas, y, por último, representantes electos.

- *Derechos Políticos:* Los derechos políticos que van más allá del derecho al voto completan la dimensión vertical de la democracia (Ibid.). Es aquí donde se formulan y expresan preferencias que, luego, son la base de la lucha por el poder (Ibid., 39). De esto puede deducirse que el núcleo de este régimen es la libertad de opinión, así como también el derecho a asociarse, a protestar y de petición.

  La combinación de ambos regímenes asegura la existencia de elecciones democráticas. Si ambos están presentes en un solo sistema, se le puede considerar democrático. Sin embargo, sería meramente una democracia electoral pues el control del gobierno entre elecciones no es tomado en cuenta (Ibid.). La democracia liberal, por lo tanto, incluye otros regímenes.

- *Derechos Civiles:* Mientras que los regímenes anteriores protegen el ejercicio político, el régimen Derechos Civiles preserva el respeto a la vida privada de los ciudadanos (Ibid., 39). Esto lo hace mediante el ejercicio del imperio de la ley (*rule of law*). Básicamente, este principio se refiere a que el Estado está obligado a respetar reglas previamente establecidas. Por lo tanto, se le considera como una restricción al ejercicio del poder político pues el gobierno de turno no puede actuar a voluntad (Ibid., 40).

  Este régimen se manifiesta en la existencia de derechos constitucionales. A su vez, estos son protegidos por cortes independientes. Es importante aclarar que mayorías transitorias no pueden alterar su naturaleza; es decir, los derechos individuales están fuera del alcance de cualquier decisión democrática (Ibid., 40).

- *División de Poderes y Horizontal Accountability:* La división de poderes es el núcleo del cuarto régimen. En este sentido, tanto la *horizontal accountability* y la división de poderes implican que las autoridades electas están controladas por una red de

instituciones autónomas que tengan la capacidad de restringirse unas a las otras (Ibid.). Más concretamente, los tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) se controlan constantemente (Ibid., 41). Mientras que los instrumentos de la dimensión vertical sólo pueden controlar al gobierno en elecciones, y los Derechos Civiles se ocupan de la relación entre el Estado y el individuo, el cuarto régimen se encarga de la estructura del poder político. Es decir, es la restricción del poder mediante el poder (Ibid.).

- *Autoridad Efectiva para Gobernar:* Finalmente, el último régimen requiere que las autoridades electas democráticamente sean las que en realidad tomen las decisiones políticas (Ibid.). Esto es especialmente importante en democracias nuevas, donde, luego de transiciones a la democracia, ciertos actores (militares, en su mayoría) conservaron autoridad política en dominios usualmente reservados a representantes electos (Ibid.).

Merkel (2004) argumenta que la democracia liberal depende del trabajo conjunto de todos estos regímenes (Ibid., 43). Algunos son necesarios para el correcto funcionamiento de otros, por ejemplo, el régimen Elecciones depende de que tanto los derechos políticos como los derechos civiles sean respetados. Asimismo, ciertos regímenes evitan que actores políticos violen las condiciones fundamentales de otros elementos (el prototipo de esto es la *horizontal accountability*, que previene el abuso de poder de autoridades electas). En este sentido, los regímenes son interdependientes entre sí. Sin embargo, cada uno puede ser analizado por separado, lo cual ofrece una ventaja analítica fundamental: permite localizar los defectos de una democracia con precisión (Ibid.). La lista completa de regímenes y sus condiciones fundamentales se encuentran en el Apéndice A.

De esta forma, cuando las violaciones a un régimen son tan grandes que cambia la lógica de una *embedded democracy*, se puede afirmar que existe una democracia defectuosa (*defektive Demokratie*) (Merkel et al., 2003: 65). Sin embargo, este tipo de sistemas son aún democráticos, pero la integración de los cinco regímenes no funciona de forma adecuada. Cabe resaltar que, la diferencia entre una democracia defectuosa y un régimen autoritario es que, en la primera, los mandatarios pueden perder el poder político mediante elecciones inclusivas y competitivas (Ibid., 67).

Así, dependiendo del tipo de régimen afectado, hay cuatro subtipos de democracia defectuosa. Una democracia exclusiva emerge cuando se violan los regímenes Elecciones y/o Derechos Políticos. Asimismo, una democracia iliberal es el resultado del mal funcionamiento de Derechos Civiles. Siguiendo a O'Donnell (1994), quebrantamientos de la División de Poderes lleva a una democracia delegativa. Por último, si existen áreas donde autoridades no electas toman decisiones usualmente reservadas a oficiales escogidos democráticamente, estamos en la presencia de una democracia tutelar (Merkel, 2004: 49-50).

Debido a su división analítica de la democracia en regímenes, el concepto de Merkel es particularmente útil para detectar defectos con precisión. Con esto en mente, la siguiente sección analiza varios decretos presidenciales de Bolsonaro. El objetivo es evaluar si alguno de estos puede considerarse como una violación a un principio democrático.

SOBRE EL GOBIERNO (Y LAS POLÍTICAS) DE BOLSONARO

Como hemos expuesto anteriormente, la literatura y la prensa ha tildado continuamente a Bolsonaro de antidemócrata. En este sentido, una buena parte de los investigadores concluyen que Bolsonaro es el resultado del debilitamiento de la democracia brasileña (Rezende, 2018: 14; Hunter y Power, 2019), y sus

políticas erosionarán los pilares liberales que soportan el régimen democrático en Brasil. Peter Evans, académico de la universidad de Berkeley, definió las elecciones que llevaron a Bolsonaro a la presidencia como una «tragedia política», y el cambio de Temer a Bolsonaro como el cambio más aterrador en la historia reciente de Brasil (Evans, 2018: 8, 50). Especialmente, al nuevo presidente se le atañe irrespetar los derechos de las minorías, en especial los de la comunidad LGBTI (Ibid., 50).

Sin embargo, estas conclusiones son extraídas de los discursos de Bolsonaro en su campaña presidencial. Hasta ahora, sus acciones presidenciales, cómo se exponen aquí, no han sido analizadas. Para llenar este vacío argumentativo, en este apartado se analizan una serie de decretos presidenciales que Bolsonaro ha emitido desde que llegó a la Presidencia. La base de ello será el concepto de democracia liberal de Merkel (2004) expuesto en el segmento anterior. Si estos decretos socavan los principios democráticos, se puede afirmar que las preocupaciones de la literatura y la prensa no son exageradas.

En primer lugar, es necesario aclarar por qué utilizamos los decretos como unidad de análisis. Para esto, nos remontamos a las pasadas elecciones generales de Brasil, que, además de delinear el cambio ideológico en la cabeza del ejecutivo, impactaron el sistema político brasileño debido a la elevada fragmentación del legislativo. La Cámara alta quedó dividida en 21 bloques, seis bloques más respecto a las elecciones del 2014 (Domínguez Avila, 2019: 15); y, aunque el Partido Social Liberal (PSL) afín al presidente lecto, tuvo un ascenso acelerado y un nuevo espacio en la arena política, hubo un alto nivel de volatilidad electoral, que podría estar siendo provocado por el desalineamiento partidista en Brasil[7].

7 Análisis obtenido de un trabajo en preparación que analiza el contexto y resultado de las elecciones de Brasil, 2018. Con datos obtenidos desde ElectionResources.org y fuentes institucionales.

En ese sentido, el reto más importante que ha afrontado el presidente Bolsonaro es el de lograr mayorías en un legislativo altamente fragmentado. A la fecha, el Partido de los Trabajadores ha liderado la labor de oposición, pero todavía no se conoce una alineación exacta de los partidos que compondrían la bancada oficialista (Domínguez Avila, 2019: 22). Sin embargo, el PSL es la segunda fuerza en la Cámara de Diputados y cuenta con el apoyo del jefe del senado Davi Alcolumbre, del partido Demócratas, aliado del ejecutivo (González & Leme, 2019).

Bajo este contexto, Bolsonaro ha tenido grandes dificultades para gestionar procesos como el de la reforma pensional, por ejemplo, y las políticas en torno a la regulación del porte de armas han tardado largo tiempo y no han llegado a concretarse. Intentando gobernar por decreto, ha emitido más de 200 desde que asumió el cargo (Harris & Schipani, 2019), pero la mayoría han sido neutralizados por la voz del legislativo dejándole un bajo margen de poder de toma de decisión. A continuación, se analizarán algunos de los decretos más polémicos que ha emitido. Un resumen de nuestra argumentación puede ser encontrado en la Tabla 1.

Podrían dividirse, entonces, estos decretos emitidos por Bolsonaro en tres grandes bloques: aquellos que se refieren a alguna minoría, aquellos que se refieren a un *issue* o tema específico, y aquellos que se refieren a la sociedad civil en general. Sobre el primer bloque, el gobierno de Bolsonaro fue enfático desde el primer día de mandato: no habría políticas que favorecieran a poblaciones indígenas o la comunidad LGBTI (Zilla, 2019), y, al contrario, sancionó decretos para la regulación del territorio protegido y el recorte de recursos para el financiamiento de proyectos de la comunidad gay y trans.

Respecto a las comunidades indígenas, una de las primeras medidas implantadas por Bolsonaro al llegar a Planalto fue transferir

TABLA 1.
DECRETOS EMITIDOS POR BOLSONARO A LA LUZ DEL CONCEPTO DE DEMOCRACIA LIBERAL

			Regímenes de la democracia liberal (Merkel et al, 2003)				
Tema policy	**Vía decreto**	**Vigencia**	**Régimen electoral**	**Derechos Políticos**	**Derechos Civiles**	**División de poderes y Horizontal Accountability**	**Autoridad Efectiva para Gobernar**
Porte de armas	Sí	No	Sin efecto	Sin efecto	Sin efecto	Sin efecto	Sin efecto
Recursos proyectos audiovisuales LGBTI	Sí	Sí	Sin efecto	Sin efecto	No concluyente	Sin efecto	Sin efecto
Territorio indígena	Sí	No	Sin efecto	Sin efecto	El decreto le reduce autonomía a una minoría, más concretamente, a la comunidad indígena. Al transferirle responsabilidades al Ejecutivo, el campo de acción de la minoría se restringe.	Sin efecto	Sin efecto
Participación ciudadana – regulación drogas	Sí	Sí	Sin efecto	No concluyente	Sin efecto	Sin efecto	Sin efecto
Participación ciudadana – Consejos Sociales	Sí	No	Sin efecto	El decreto suspende organizaciones civiles legalmente fundadas y dirigidas.	Sin efecto	Sin efecto	Sin efecto
Autonomía universitaria	Sí	Sí	Sin efecto	El decreto les reduce autonomía a organizaciones civiles, en este caso universidades públicas.	Sin efecto	Sin efecto	Sin efecto

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de revisión documental

la función de demarcación de sus tierras de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), al Ministerio de Agricultura. El controvertido decreto causó gran polémica en los sectores involucrados ya que –según la minoría afectada– si se dejaba a cargo del ministerio la estructuración del territorio, se favorecía el interés de sectores agropecuarios (Saccone, 2019) y actividades de la agroindustria, más si esa cartera estaba liderada por Tereza Dias, quien fue líder de la bancada ruralista en la Cámara de Diputados (Redacción EFE, 2019b).

Tanta fue la pugna entre los sectores involucrados, y la imposición que quiso establecer el gobierno, que posterior a la emisión del decreto el Congreso se pronunció en contra de lo sancionado, ordenó suspenderlo y devolver las funciones al FUNAI. Aun así, y no contento con ello, Bolsonaro reeditó la norma haciéndola más general, pero devolviéndole la capacidad de decisión sobre el territorio rural e indígena a la cartera de Agricultura (Redacción EFE, 2019b). Sin embargo, las presiones de ONGs que abanderaban la causa, de las mismas comunidades indígenas y la votación del Congreso hizo que, por vía judicial, el Supremo Tribunal Federal declarara inconstitucional la decisión emitida por el ejecutivo. Además, por considerarla unilateral y autoritaria en tanto vulneraba derechos de una minoría que no fue consultada previamente (Zilla, 2019).

No solo el decreto que afectaba el territorio indígena ha pretendido vulnerar derechos de alguna minoría, también medidas recientes que inhiben en la política de Derechos Humanos a las acciones destinadas a garantizar/proteger derechos de la población LGBTI han querido limitar el reconocimiento de derechos civiles de toda la ciudadanía. De esta forma, el presidente ha querido modificar los alcances de la carpeta de la Mujer, Familia y Derechos Humanos –excluyendo a la comunidad gay y trans– para que estén acordes a la dirección de Damares Alves, pastora evangélica y

férrea opositora de la ideología de género (Serrano-Amaya, 2019: 156, 160). Por ello, Bolsonaro ha declarado que el Fondo Sectorial Audiovisual, de la Agencia Nacional de Cine, no gastará recursos en proyectos con temática (homo)sexual. Y, a través de un decreto oficial, ordenó la suspensión de una convocatoria pública (ya asignada) para programas que abordan temas de la comunidad LGBTI –específicamente, para los proyectos audiovisuales finalistas del concurso «RDE/FSA PRODAV» que compitieron en las categorías «diversidad de género» y «sexualidad». Las cuatro películas ganadoras (*Afronte*, *Transverse*, *Religare queer* y *Reverse sex*) que ya contaban con un presupuesto de 400.000 reales para su producción y financiación, vio negado el apoyo económico que aportaría el Estado gracias al decreto sancionado por Bolsonaro (Redacción La República, 2019).

Ahora, sobre el segundo bloque que se refiere a *issues* o temas específicos, desde la campaña electoral para las presidenciales, Bolsonaro fue enfático con su postura para atacar al crimen con propuestas a favor del porte de armas, la ampliación de las facultades de la fuerza pública y la capacidad de la sociedad civil para actuar cuando un evento de criminalidad. En ese sentido, ha firmado dos decretos que flexibilizan las condiciones para la posesión de armas de fuego (Silva de Sousa, 2019). El primero, firmado en enero de este año (2019), hacía que casi cualquier ciudadano encuadrara en la categoría de personas autorizadas a poseer armas: habitantes de zonas rurales, residentes de zonas urbanas con alta incidencia de homicidios, propietarios de negocios, coleccionistas y cazadores contaban con esa facultad. Y el segundo, sancionado en mayo, amplió aún más el universo apto para portar un arma, incluyendo en la categoría a camioneros, abogados, funcionarios públicos e incluso periodistas.

Sin embargo, y a pesar de la gestión y el apoyo popular[8] que «respaldaban» estas medidas, las presiones del legislativo –que consideraba que una decisión de tal magnitud no podía estar en cabeza del presidente– obligaron a que, en junio, Bolsonaro tuviera que revocar ambos decretos (Ustyanowski, 2019). Aunque el decreto *per se*, no atenta contra ningún régimen democrático enunciado por Merkel (2004), consideramos que la forma en cómo se tomó la decisión, el proceso cómo fue sancionado y hecho público, podría configurar una afrenta a la democracia, al poder del legislativo (electo por el constituyente primario) y los procesos de participación ciudadana.

Por otro lado, pero dentro de este mismo bloque, el polémico decreto 9794, sancionado también en mayo de 2019, que faculta al ejecutivo para controlar las designaciones de rectores, vicerrectores, prorrectores, procuradores y auditores de las universidades públicas ha generado fuerte debate en la comunidad académica ya que atenta en contra de la autonomía universitaria. La medida, que se toma como una intervención arbitraria del ejecutivo en la academia, y autoritaria por su carácter unilateral, sigue en pie; pero contra ella, la comunidad universitaria internacional ha denunciado que se atenta al principio de la educación como un bien público social, independiente de la corriente política de turno (Comunicado ANFHE, 2019).

Por último, entre aquellos decretos emitidos por el gobierno Bolsonaro que se refieren a la sociedad civil en general, cabría destacar los que van en detrimento de la participación ciudadana

8 «En los primeros 100 días de gobierno de Bolsonaro se vendieron 30.370 armas nuevas, el ritmo fue de casi 304 armas legales que entraron en circulación cada día (…) Los clubes de tiro consultados relataron un aumento de entre 40 y 50% en las consultas por cursos para principiantes (…) Y, además, se incrementó considerablemente la cantidad de municiones que pueden ser compradas por año, de 50 para 5 mil.» (Silva de Sousa, 2019).

en procesos de toma de decisión. El primero, referido a la composición del Consejo Nacional de Políticas de Drogas (CONAD), elimina la participación de la sociedad civil, incluidos médicos, psicólogos, trabajadores sociales y juristas en la institución, dejándola completamente integrada por miembros del gobierno (Redacción Télam, 2019). Así, según lo declarado por el gobierno, se quiso eliminar de esta institución (creada en 2006 bajo el gobierno de Lula da Silva) toda posición ideológica disfrazada de tecnicismo en los procesos de toma de decisión sobre las políticas y programas en la materia, dejando el nombramiento de más del 85% de sus miembros al ejecutivo.

Luego, sancionado también en mayo, está el decreto que quiso extinguir decenas de Consejos Sociales creados en los pasados gobiernos a cargo del Partido de los Trabajadores. Justificándose en la necesidad de reducir el tamaño del Estado, el mandatario argumentó el fin de dichos consejos que promovían la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones. El decreto dictado afectó a los consejos de Desarrollo Económico y Social, integrado por empresarios y sindicatos, y extinguió el Foro de Empleo y Trabajo, todos formados por organismos de la sociedad civil. Sin embargo, por decisión del Tribunal Supremo se suspendieron todos sus efectos y encargaron su revisión al legislativo (Redacción EFE, 2019a).

A pesar de ello, ambas decisiones, y todas las citadas en este apartado, le han dado al gobierno un aire de no saber gobernar con las diferencias de intereses, un carácter unilateral y su creciente necesidad de poner amplia capacidad de decisión en el ejecutivo para poder gobernar.

Ahora bien, la mayoría de estas decisiones repercute en alguno de los regímenes que dividen al concepto de Merkel (2004). En general, pueden encontrarse ataques a dos regímenes: Derechos

Políticos y Derechos Civiles. Sin embargo, consideramos que, por su pequeño alcance y por la acción de otras instituciones públicas, los decretos de Bolsonaro no han llevado a Brasil a cruzar el umbral de una democracia defectuosa. En primer lugar, el ataque a las universidades públicas no ha limitado, en mayor medida, la labor educativa autónoma que se llevaba antes del decreto. El segundo caso es el más complicado, debido a que la prohibición de grupos sociales es catalogada por Merkel como característica de gobiernos autoritarios (Merkel et al., 82-3). Sin embargo, debido al veto de esta medida por parte del Tribunal Supremo, la democracia continuó en el mismo estado que antes del decreto. No obstante, esto es una muestra del carácter personalista de los decretos del presidente.

Por otro lado, la reducción a la autonomía de los grupos indígenas es, indudablemente, un ataque a una minoría. Sin embargo, consideramos que no es lo suficientemente grave para considerarse una violación al régimen Derechos Civiles ya que, legalmente, no se le deja de proteger a las comunidades indígenas. No obstante, esta reducción puede ser el inicio de otras acciones contra grupos minoritarios. Con respecto a los decretos relativos a los recursos negados a la industria cinematográfica que incluya algún tema LGBTI, y a la participación civil en CONAD, consideramos que no hay evidencia suficiente para constatar una violación a algún principio liberal o democrático. En primer lugar, a pesar de que el primer caso pueda considerarse discriminatorio, no es labor del Estado velar por estos asuntos, por lo tanto, no es una violación a los derechos civiles. En el segundo caso, a pesar de que idealmente se debería incluir a la sociedad civil en la deliberación con respecto a las drogas, no es responsabilidad del Estado hacerlo, ni tampoco es un derecho ciudadano el poder participar en el debate.

Por último, el decreto relativo al porte de armas no puede ser juzgado como un ataque a alguno de los regímenes. Sin embargo,

es otra prueba de que el presidente Bolsonaro ha utilizado el instrumento del decreto presidencial para sustituir las funciones de instituciones democráticas como el Congreso. Por lo tanto, el decreto *per se* no atenta contra ningún régimen; no obstante, la forma en la que el tema fue abordado sí constituye una violación al régimen División de Poderes. Sin embargo, esto va más allá de nuestra unidad de análisis.

En suma, encontramos que un decreto socava el régimen Derechos Civiles, y dos atentan contra Derechos Políticos. En los otros no hay evidencia suficiente para constatar una violación; sin embargo, son ejemplo de los tintes personalistas con los que se maneja la toma de decisiones desde la llegada de Bolsonaro al poder. Por último, un decreto no infringe ningún régimen, a pesar de que su promulgación da muestras de personalismo político.

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS FUTURAS DEL GOBIERNO BOLSONARO

Como bien se expuso al comienzo del capítulo, la academia y la prensa han catalogado, en repetidas ocasiones, al gobierno de Bolsonaro como antidemocrático y personalista. Se le acusa de destruir la esencia democrática (Chagas-Bastos, 2019: 97), de extremista (Evans, 2018: 51) y de, en general, despreciar los procesos democráticos, sobre todo los contrapesos que son la base de la democracia liberal (Gerald Daly, 2019: 18-9). Sin embargo, la mayoría de estas afirmaciones están basadas en los discursos de Bolsonaro antes de asumir la presidencia. No ha habido ningún intento de analizar si estas caracterizaciones realmente describen al gobierno bolsonarista.

Con este capítulo se pretendió llenar ese hueco argumentativo. Mediante el análisis del instrumento más usado por Bolsonaro, los decretos presidenciales, se examinó si las políticas introducidas

por su gobierno atentan contra los principios liberales de la democracia. Y, para ello, se utilizó el concepto de *embedded democracy* de Wolfgang Merkel (2004). Así, luego de estudiar 6 decretos, se puede afirmar que, al menos la mitad de ellos viola alguna condición democrática. De otros dos no es concluyente el resultado, sin embargo, dan evidencia para catalogar al gobierno de Bolsonaro de personalista. Solamente uno está acorde a los principios liberales, a pesar de su controversial introducción en el sistema, y con la salvedad de que fue suspendido por el Congreso Nacional.

Sin embargo, se debe tener precaución al generalizar estas conclusiones. En primer lugar, el número de decretos analizado no es extensivo (solamente seis de más de 200). En segundo lugar, y aún más importante, no hubo ninguna violación grave a los principios liberales, como se indicó anteriormente. Por último, siempre que Bolsonaro quiso introducir una reforma que socavaría los pilares democráticos (por ejemplo, la limitación del territorio indígena o la eliminación de ciertas organizaciones civiles), otro poder (en este caso, el Tribunal Supremo y el Congreso) intervino para revertir la medida. En consecuencia, a pesar de que Bolsonaro quiera actuar de forma autoritaria, aún existen contrapesos en Brasil que están dispuestos a prevenir cualquier ataque al régimen democrático.

A pesar del carácter exploratorio de este estudio, se puede evidenciar un manejo personalista de la presidencia por parte de Bolsonaro. No obstante, la presencia de contrapesos para evitar instrumentos mayoritarios aún existe en Brasil. Futuras investigaciones deben centrarse en los decretos presidenciales como herramienta para gobiernos personalistas, con el objetivo de una evaluación más extensiva de este fenómeno.

REFERENCIAS

ANFHE. (2019). *Comunicado Repudio al atropello de la autonomía universitaria en Brasil.* Asociación Nacional de Facultades de Humanidades y de Educación.

Arantes, L. (2018). «Sistema político brasileño y las elecciones de 2018: Bolsonaro y el cambio de actores en la política nacional. Comentario Internacional». *Revista del Centro Andino de Estudios Internacionales*, (18). pp. 79-96. https://doi.org/10.32719/26312549.2018.18.4

Ayuso, A. (2018, diciembre). CIDOB - *El Brasil de Bolsonaro: Incognitas y certezas*. Recuperado 5 de octubre de 2019, de CIDOB website: http://www.cidob.org/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_209/el_brasil_de_bolsonaro_incognitas_y_certezas

Bruera, H. G. (2019). «Bolsonaro y la responsabilidad de las élites». *Foreign affairs: Latinoamérica*, 19(1). pp. 44-50.

Chagas-Bastos, F. (2019). «Political Realignment in Brazil: Jair Bolsonaro and the Right Turn», en: *Revista de Estudios Sociales* 69, pp. 92-100

Costa, B. (2018). «Quién es quién en el ejército de Jair Messias Bolsonaro». *Nueva Sociedad | Democracia y política en América Latina.* Recuperado de http://nuso.org/articulo/quien-es-quien-en-ejercito-de-jair-messias-bolsonaro/

Daly, G. (2019). «Populism, Public Law, and Democratic Decay in Brazil: Understanding the Rise of Jair Bolsonaro», para: *Human Rights Researchers Workshop*, 14va edición.

Domínguez Avila, C. F. (2019). «Competencia política y calidad de la democracia en Brasil: las elecciones de 2018 y la recomposición del sistema de partidos». *Teoria & Pesquisa: Revista de Ciência Política*, 28(1). https://doi.org/10.4322/tp.v28i1.702

El Periódico. (2019, febrero 1). «Pueblos indígenas protestan contra la política de tierras de Bolsonaro en Brasil». *El Periódico.* Recuperado de https://www.elperiodico.com/es/internacional/20190201/indigenas-reclaman-bolsonaro-politica-tierras-brasil-7279938

El Universal. (2019, mayo 24). «Presidente Bolsonaro deberá indemnizar a diputada por daño moral». Recuperado 6 de octubre de 2019, de *El Universal website:* https://www.eluniversal.com.mx/mundo/presidente-bolsonaro-debera-indemnizar-diputada-por-dano-moral

Evans, P. (2018). «An Unfolding Tragedy». *Berkeley Review of Latin-American Studies Fall 2018*, 9-13. pp. 49-53.

González, E., & Leme, L. (2019, abril 11). «Tracking the First 100 Days of Brazilian President Jair Bolsonaro». *Americas Society | Council of the Americas.* Recuperado de https://www.as-coa.org/articles/tracking-first-100-days-brazilian-president-jair-bolsonaro

Gonzalez, E., & Leme, L. (2019, marzo 22). «Tracking the First 100 Days of Brazilian President Jair Bolsonaro». Recuperado 26 de marzo de 2019, de *AS/COA* website: https://www.as-coa.org/articles/tracking-first-100-days-brazilian-president-jair-bolsonaro

Harris, B., & Schipani, A. (2019, julio 5). «Bolsonaro lucha por el poder contra legisladores brasileños». Recuperado 5 de octubre de 2019, de *Portafolio.co* website: https://www.portafolio.co/internacional/bolsonaro-lucha-por-el-poder-contra-legisladores-brasilenos-531311

Hunter, W. & Power, T. (2019). «Bolsonaro and Brazil's Illiberal Backslash». *Journal of Democracy* 30. pp. 68-82.

Jiménez, C. (2019, febrero 20). «Bolsonaro enfrenta su primera gran prueba con la reforma del sistema de pensiones». *El País.* Recuperado de https://elpais.com/internacional/2019/02/20/america/1550683944_755751.html

Méndez, L. (2019, enero 9). «Bolsonaro tras retiro del Pacto sobre Migración: 'Brasil es soberano de decidir si recibe o no migrantes'». Recuperado

6 de octubre de 2019, de *France 24* website: https://www.france24.com/es/20190109-brasil-bolsonaro-pacto-migracion-venezolanos

Merkel, W. (2004), «Embedded and Defective Democracies». *Democratization* 11:5. pp. 33–58.

Merkel, W./ Puhle, H./ Croissant, A./ Eicher, C./ Thiery, P. (2003). *Defekte Demokratie: Band 1: Theorie.* Opladen: Leske & Budrich.

Milz, T. (2019, julio 30). «Deportaciones en Brasil: Bolsonaro, por la senda de Trump». Recuperado 6 de octubre de 2019, de *DW.COM* website: https://www.dw.com/es/deportaciones-en-brasil-bolsonaro-por-la-senda-de-trump/a-49815948

Natanson, J. (2018). Brasil: «La nueva potencia de la derecha mutante». *Nueva Sociedad | Democracia y política en América Latina.* Recuperado de http://www.nuso.org/articulo/brasil-la- nueva-potencia-de-la-derecha-mutante/

O'Donnell, G. (1994). «Delegative Democracy». *Journal of Democracy* 5, 55-69. https://doi.org/10.1353/jod.1994.0010

Ortíz de Zárate, R. (2019, febrero 6). CIDOB. Recuperado 24 de marzo de 2019, de *CIDOB* website: http://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/america_del_sur/brasil/jair_bolsonaro

Redacción *BBC News Mundo*. (2018, octubre 28). «7 frases que reflejan el pensamiento político, social y económico de Jair Bolsonaro, presidente electo de Brasil». *BBC News Mundo.* Recuperado de https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45969725

Redacción EFE. (2019b, agosto 2). «La Corte Suprema suspende un decreto de Bolsonaro criticado por los indios brasileños». Recuperado 5 de octubre de 2019, de *www.efe.com* website: https://www.efe.com/efe/america/sociedad/la-corte-suprema-suspende-un-decreto-de-bolsonaro-criticado-por-los-indios-brasilenos/20000013-4035672

Redacción EFE. (2019a, junio 13). «El Supremo suspende un decreto de Bolsonaro que extinguía los consejos sociales». Recuperado 5 de

octubre de 2019, de *www.efe.com* website: https://www.efe.com/efe/america/politica/el-supremo-suspende-un-decreto-de-bolsonaro-que-extinguia-los-consejos-sociales/20000035-4000147

Redacción *La República*. (2019, agosto 21). «Bolsonaro suspende apoyo económico para series de televisión LGBT.» Recuperado 5 de octubre de 2019, de https://larepublica.pe/mundo/2019/08/22/brasil-jair-bolsonaro-suspende-apoyo-del-estado-para-series-de-television-que-abordan-temas-lgbt-atmp/

Redacción *Télam*. (2019, julio 22). «Por decreto, Bolsonaro excluyó a la sociedad civil del debate sobre las drogas». Recuperado 5 de octubre de 2019, de http://www.telam.com.ar/notas/201907/377685-por-decreto-bolsonaro-excluyo-a-la-sociedad-civil-del-debate-sobre-las-drogas.html

Rezende, R. (2018). Jair Bolsonaro, «Populismo de Derecha y Fin de Ciclo Político». *Revista Política Latinoamericana* 7. pp. 1-15.

Saccone, V. (2019, agosto 24). «Cómo Bolsonaro priorizó el sector agrario en detrimento de la Amazonía». *El Confidencial.* Recuperado de https://www.elconfidencial.com/mundo/2019-08-25/como-bolsonaro-priorizo-el-sector-agrario-en-detrimento-de-la-amazonia_2192259/

Serrano-Amaya, J. F. (2019). «'Ideología de género', populismo autoritario y políticas sexuales». *Nómadas*, (50). pp. 155-173.

Silva de Sousa, M. (2019, mayo 26). «Armas para todos: Cómo dos decretos de Jair Bolsonaro hicieron explotar la compra de pistolas en Brasil». Recuperado 5 de octubre de 2019, de *Infobae* website: https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/05/26/armas-para-todos-en-los-primeros-100-dias-de-gobierno-de-jair-bolsonaro-exploto-la-compra-de-pistolas-en-brasil/

Sohr, R. (2019). «El auge global del autoritarismo». *Residencia San Roberto Bellarmino,* 68 (676). Recuperado de https://link.galegroup.com/apps/doc/A577395582/IFME?sid=lms

Stefanoni, P. (2018). «Biblia, buey y bala… recargados Jair Bolsonaro, la ola conservadora en Brasil y América Latina». *Nueva Sociedad | Democracia y política en América Latina.* Recuperado de http://nuso.org/articulo/biblia-buey-y-bala-ola-conservadora-brasil-bolsonaro-stefanoni/

Ustyanowski, T. (2019, junio 19). «El Senado de Brasil rechazó el 'decreto de armas' de Jair Bolsonaro». Recuperado 6 de octubre de 2019, de *France 24* website: https://www.france24.com/es/20190619-brasil-decreto-armas-bolsonaro-homicidios

Vallejo, V. (2019, marzo 15). «Presidente Jair Bolsonaro eliminará 21.000 cargos públicos en Brasil. Recuperado 26 de marzo de 2019, de *Panam Post* website: https://es.panampost.com/vanessa-araujo/2019/03/15/bolsonaro-cargos-publicos/?cn-reloaded=1

Zilla, C. (2019). «Bolsonaro, sin luna de miel». *Nueva Sociedad | Democracia y política en América Latina.* Recuperado de http://nuso.org/articulo/bolsonaro-gobierno-division-brasil-derecha-crisis-protestas/

APÉNDICE

APÉNDICE A

1. Dimensión Vertical

a) Régimen Electoral

i. Derecho al sufragio universal

ii. Derecho a ser candidato

iii. Elecciones libres y justas

iv. Representantes electos

b) Régimen de Derechos Políticos

i. Libertad de opinión, prensa e información

ii. Libertad de asociación

2. Dimensión Horizontal

a) Derechos Civiles

i. Protección del individuo contra ataques de actores estatales o privados

ii. Acceso a cortes independientes

b) División de Poderes y *Horizontal Accountability*

i. Principio de la separación de poderes

3. Dimensión transversal

a) Gobierno efectivo

i. Oficiales electos que tengan autoridad real

Donald Trump: el presidente de la polarización

***Carme Colomina*[1] • *Jaume Ríos*[2]**

La revolución Trump se viste con la bandera y se escribe contra las instituciones (globales y federales). El 45 presidente de los Estados Unidos se considera el líder de un *movimiento*, señor de la América blanca, religiosa y enfadada con el poder político. Ya lo anunció en su discurso de inauguración, retrato sombrío de un país que en nada se parecía al que imaginaron los centenares de miles de personas congregadas en el Grant Park de Chicago la noche que Barack Obama ganó su primer mandato el 4 de noviembre de 2008. «No estamos meramente transfiriendo el poder de una a otra Administración o de un partido a otro, sino que lo transferimos desde Washington DC y se lo devolvemos al pueblo», anunció Donald Trump en su toma de posesión el 20 de enero de 2017. Él es un líder que no necesita intermediarios; «El pueblo se convertirá en el dirigente del país» porque Trump -millonario mediático– es el pueblo. Del poder de la promesa que significó la victoria de Obama al poder de la rabia que llevó a Trump a la Casa Blanca. El liderazgo populista se instaló en el número 1600 de la Avenida Pensilvania. «Dios quería que él fuera presidente y por eso está aquí, para dar su apoyo a las causas que preocupan a los creyentes», aseguraría más tarde la portavoz de la Casa Blanca, Sara Sanders, en una entrevista concedida a una televisión cristiana a principios de 2019.

---

1 Investigadora, Barcelona Centre for International Affairs.

2 Politólogo y consultor, Ideograma.

Pero la presidencia de Estados Unidos no es voluntad de dios (incluso si Trump se siente *el elegido*). Es consecuencia de un contexto que alimenta la personalización de la política y responde a características orgánicas de su propio sistema constitucional. Sus normas básicas definen el país como una república parlamentaria basada en un sistema presidencialista y ello determina que el ejecutivo gire siempre entorno a la figura individual del líder. El «comandante en jefe», y la «primera familia» que le acompaña, deben ser los símbolos ejemplarizantes del poder y los valores del país, aunque la mitomanía no se corresponda con la realidad. En la historia de Estados Unidos han existido presidentes con un mayor o menor grado de personalismo en su gestión. Y existe Donald Trump, que sustituyó el presidencialismo por la egolatría, y en su primer año en la Casa Blanca, consiguió la mayor brecha partidista en los índices de aprobación de un presidente norteamericano desde la década de los 50 del siglo pasado[3]. Mayor que Richard Nixon, Bill Clinton o George Bush, hijo.

Si hay un elemento que condicionó por completo el contexto político de las presidencias de Obama y Trump es la polarización. En 1960 se realizó una encuesta en Estados Unidos en la que se preguntaba a la población adulta si les «molestaría» que un hijo suyo se casara con un miembro del partido político contrario: no más del 5% respondió afirmativamente. Pero, en 2010, la respuesta afirmativa se elevó al 33% de los demócratas y el 40% de los republicanos. Algunos lo llaman «partidismo» y ya supera al racismo como fuente de prejuicios divisores (Hochschild, 2016). La brecha ha sido gradual. La revolución conservadora anti-estado que ha transformado Estados Unidos es muy anterior a Trump. Emana de la desregulación de Ronald Reagan, se radicaliza con el Tea Party y, con el neoconservadurismo de George W. Bush, se va

3 Pew Research Centre: *America's polarized views of Trump follow years of growing political partisanship* (November 2018)

a la guerra contra el nuevo enemigo del siglo XXI, el terrorismo. Trump, el supuesto *outsider* anti-establishment, tira del cordón umbilical del populismo republicano conectándolo directamente a una norteamérica que creía sentirse abandonada, relegada.

PODER EJERCIDO, PODER PERCIBIDO

El poder se ejerce y se explica. El gobernante sabe que su credibilidad depende de que los demás lo consideren poderoso, y por ello parte de la tarea de un gobierno es, en buena medida, escenificación. El liderazgo también es teatral, así lo cuenta el diplomático español Carles Casajuana después de años de ejercicio detrás de las cámaras negras del poder (Casajuana, 2014). El carisma se tiene, pero también se cultiva, se prepara y se exhibe. El fotógrafo Pete Souza construyó imagen y relato para la presidencia de Barack Obama. Auténticas obras de arte surgidas del objetivo de este veterano fotógrafo se ofrecían al mundo desde la web oficial de la Casa Blanca. El presidente con los pies sobre la mesa del Despacho Oval, en mangas de camisa, hablando relajado y sonriente por teléfono. Obama abrazando por la espalda a su esposa, Michelle, ante la sorpresa de una colaboradora; una imagen de Bo, la mascota presidencial, mirando por la ventana del Despacho Oval como Obama se acerca desde el jardín; incluso la imagen de la *Situation Room* la noche que apresan y asesinan a Osama bin Laden (la preocupación en el rostro de Hillary Clinton, Obama sentado en el rincón, el poder militar al mando de la operación y los rostros de expectación en torno a la mesa), todo ello atestigua una voluntad de dejar constancia, de construir imágenes y percepciones, de perdurar en la retina y en la memoria.

A Obama se le reconoció el poder incluso antes incluso de poder demostrar su capacidad transformadora hasta el punto de concederle el premio Nobel de la paz al inicio de un mandato todavía por desplegar. Fue el espaldarazo más contundente al momento

de esperanza que consiguió crear entorno a su elección. La recompensa al discurso de la reconciliación, a un presidente que quería ser de consenso pero terminó atrapado por la parálisis de la polarización política.

Con Trump, el punto de partida fue completamente distinto. El recelo siempre fue permanente; era el líder imprevisible a quien no se le quiso atribuir una agenda real de cambio en su ejercicio del poder, a pesar de haber puesto sobre la mesa una guerra comercial con China, el retorno al armamentismo o la renuncia al multilateralismo y a la lucha contra el cambio climático. El trumpismo se fue declinando como un vendaval declarativo y una auténtica gota malaya de desgaste exterior, que contribuyó al desorden geopolítico que ponía en cuestión las alianzas nacidas de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. Vestido de antipolítica, Trump ha demostrado ser un presidente con una agenda propia y la voluntad autoritaria necesaria para intentar imponerla. Esa misma ansia abusiva o arbitraria se refleja también en su relación con los diferentes poderes del Estado. Sus críticas al poder judicial y su trato al legislativo, en determinados momentos de tensión, carecían de precedentes en Estados Unidos. Su actitud, llegando a cuestionar el propio funcionamiento constitucional, lo situó, en más de una ocasión, en un terreno antisistémico, como se evidenció durante la investigación del fiscal especial, dirigida por Robert Mueller, que buscó cualquier tipo de coordinación entre la campaña presidencial de Trump con el gobierno ruso.

El trato que Trump propina a sus rivales políticos también le acerca a la definición de líder populista o iliberal. La simplicidad de su mensaje, su ansia por ser el centro de atención o la creación constante de supuestos enemigos alimentan este análisis. Tanto durante la campaña contra Hillary Clinton como en su relación con los líderes demócratas del Congreso, Trump desplegó un tono despectivo –incluso misógino y racista cuando se trataba de las

cuatro congresistas, Rashida Tlaib, Ilhan Omar, Ayanna Pressley y Alexandria Ocasio-Cortez, conocidas como «The Squad» (El Escuadrón)– que no respondía a las lógicas cordiales de anteriores presidentes. El caos político del trumpismo fue ganando en intensidad a medida que avanzaba su presidencia y aumentaba la amenaza de juicio político por sus abusos de poder. El desafío fluctuante de guerra comercial con China, el ataque militar en Irak que acabó con Qasem Soleimani, el jefe de los guardianes de la revolución iraní y la renuncia constante a la concertación internacional contribuyeron a un desorden geopolítico global donde el rol de Estados Unidos está en plena redefinición. Pero la gestión de Donald Trump quedará definitivamente marcada por el juicio político que supone un proceso de destitución. Las evidencias de sus abusos de poder coaccionando a un país extranjero como Ucrania para que investigara a un rival político le llevaron a convertirse en el tercer presidente de la historia de Estados Unidos a ser sometido a un proceso de *impeachment*. Una «caza de brujas», según Trump, de la que él es la víctima central.

DE CICERÓN A LA ANTIRETÓRICA

Las palabras, la dicción, el uso de los silencios, el lenguaje no verbal y la conexión con el público pesan tanto en el mundo de la política como en el del espectáculo. Los discursos de Obama presidente fueron analizados hasta la saciedad. El ritmo de sus aliteraciones, la cadencia de la voz, el uso de la emoción y las pausas, la repetición de un «sí se puede» como si fuese una plegaria en plena comunión con su público... Obama fue (es) el Cicerón de nuestros tiempos. En la nueva *República* global multimedia, el demócrata se vio entronizado a la categoría de líder carismático planetario incluso antes de empezar a gobernar. «We love you», le gritaban desde el público aquel 4 de junio de 2009 en un abarrotado auditorio de la universidad norteamericana de El Cairo donde Obama

pronunció un discurso que pretendía acabar con el antagonismo entre el Islam y Occidente. No había revueltas árabes, ni guerra en Siria, ni Estado Islámico. Sólo el daño infligido por la política beligerante de George W. Bush. Un enamoramiento inicial que la geopolítica y la realidad del poder se encargaron de apaciguar.

Trump, por su parte, comunica de un modo coherente con su propia personalidad política: detrás de una imagen de desorden, improvisación o de falta de preparación existe una estrategia de acción definida para romper esquemas establecidos, también en el ámbito comunicativo. Aunque algunos de sus asesores más cercanos hayan admitido cierta arbitrariedad en la toma de decisiones (Wolff, 2018), el estilo y las tácticas del presidente responden a unos objetivos políticos y mediáticos concretos: la campaña electoral de Trump fijó a los grandes medios de comunicación críticos como enemigos del pueblo americano. Solo se salvaron aquellos periodistas afines al inquilino del despacho oval. La lista de rotativos y empresas de comunicación importantes del país que se vieron atacadas y señaladas por publicar, según Trump, *fake news* se alargaba día a día. Y sus alusiones a la prensa «deshonesta» se convirtieron en constantes. Consecuente con su discurso, el presidente se negó a adaptarse ni al lenguaje, ni a los canales ni a los tiempos de los medios tradicionales. A contracorriente, utilizó un tono inédito con muchos de los corresponsales en la Casa Blanca, con un marco conceptual propio que desacredita a los medios no afines y, a la vez, rompe con el ciclo tradicional de la información utilizando su perfil personal en las redes sociales para marcar la agenda político-mediática.

El liderazgo de Trump también se caracteriza por su mano de hierro con los colaboradores. La elevada rotación en el equipo de asesores fue un elemento característico desde sus inicios como presidente. En el equipo de comunicación y prensa las salidas

fueron especialmente frecuentes[4] y algunas con polémica: inició su mandato con Sean Spicer como director de comunicación, proveniente del Comité Nacional Republicano, y después de él desfilaron perfiles diversos como Mike Dubke, que duró 88 días en el cargo, seguido de otros como Anthony Scaramucci, destituido en su décimo día como director de comunicación de la Casa Blanca por una sonada entrevista[5] donde repartió críticas a diferentes miembros del staff del presidente.

Los problemas de lealtad en su equipo estratégico y de comunicación fueron otra constante de la administración Trump. Era, en realidad, una infidelidad bidireccional: si algunos miembros de su equipo fallaron a la confianza del presidente y el propio jefe del ejecutivo, como líder voluble que es, se mostró en más de una ocasión muy crítico públicamente con algunos colaboradores de su círculo más cercano.

La política comunicativa de la administración Obama, en cambio, partió del polo opuesto a Trump. Si algún elemento identificó al demócrata es su institucionalidad y su voluntad de encajar en el mapa mediático estadounidense. La creación de la «marca Obama»[6] se basó en variables como la transparencia, una pretendida omnipresencia en medios y, al mismo tiempo, el establecimiento de una agenda propia que rompiese con la imagen de hiperlíder. Obama siempre aspiró a ser un líder del consenso bipartidista.

La transparencia fue un elemento indispensable, no solo por su iniciativa de *Open Government*, que sentó las bases institucionales

4 Gstalter, M. (2019) *The Five Trump Communications Directors Who Have Come And Gone.* The Hill. http://bit.ly/2uvEvgi

5 Lizza, R. (2017) «Anthony Scaramucci called me to unload about white house leakers, Reince Priebus, and Steve Bannon». *The New Yorker*. http://bit.ly/2UmtfBm

6 Kuittken, A. (2009) *Lessons from Brand Obama. Entrepeneur.* http://bit.ly/2THFfJi

de las políticas actuales de gobierno abierto, sino por la apertura con la que su equipo y él mismo comunicaban la acciones de la administración. La presidencia de Obama se caracterizó por no evadir preguntas ni en escenarios de crisis: el silencio administrativo era visto como un regalo a la oposición, una renuncia que cedía a los rivales políticos la oportunidad de ocupar el espacio del propio ejecutivo. Para evitarlo, la colaboración con los medios era constante y se instaba a comentar y reaccionar a todas las polémicas surgidas de la acción política del presidente. El liderazgo de Obama se considera de voluntad omnipresente por su proactividad en medios pero también en el entorno digital. Fue la primera presidencia nativa digital y con un uso intensivo de las redes sociales: no era un complemento a su política comunicativa sino que fue un canal central. Las redes ayudaron a apuntalar el personalismo de su presidencia, segmentando las diferentes plataformas para distintos objetivos. Los perfiles personales ayudaron a dar una imagen cercana y familiar del presidente: imágenes con su familia, sus mascotas, haciendo deporte o reunido con sus colaboradores con actitud distendida. La imagen que se configuró del presidente, basada en recursos audiovisuales, buscaba una identificación del ciudadano con el líder, que compartía momentos que se reconocían con hábitos de la población. Además, las redes también sirvieron para dar una imagen de un líder sensible: Obama se caracterizó por comunicar de forma explícita su parte más afectiva. El demócrata supo comunicar desde la sensibilidad y, a la vez, mostrar contundencia en sus acciones de gobierno, sentando precedente para otros líderes que lo imitarán en la gestión comunicativa de sus emociones como Justin Trudeau.

En el mundo digital, Donald Trump se ha comportado de forma antagónica a su antecesor. Una sola red se ha llevado todo el protagonismo: el perfil personal de Twitter de Trump era el canal habitual desde donde proclamar importantes decisiones de

gobierno, rompiendo con todos los intermediarios institucionales y mediáticos que se presuponen necesarios para dar a conocer medidas ejecutivas. Decisiones tan relevantes como un cambio de política exterior respecto a Siria, fue anunciada a través de una publicación en Twitter. El presidente huyó en la mayoría de ocasiones de sus cuentas oficiales en redes sociales, creadas por la Casa Blanca, usando la cuenta personal que ya tenía antes de acceder al cargo de jefe del ejecutivo.

El tono de Trump en redes también se alejó mucho de la corrección política de Obama. En muchos de sus mensajes públicos ha atacado a periodistas, contrincantes políticos, incluso a líderes de otros países. Su tono agresivo y desafiante dista de la institucionalidad de su predecesor. La forma y contenido de sus anuncios virtuales es coherente con su discurso público: simplificación del mensaje, menosprecio por la verdad, creación de un marco de conflicto permanente, imprevisibilidad en sus decisiones, identificación de «los culpables» antes que identificar soluciones a los problemas[7] y un ataque permanente a las élites o al establishment. Todo ello responde, en gran parte, a su propia personalidad reactiva con el orden preestablecido. Si la comunicación de Obama siguió los cauces institucionales y respetó los intermediarios y sus tiempos, Trump tiene por objetivo poner en duda el orden mediático y los roles de poder en el ámbito comunicativo. Trump rompe con aquello políticamente correcto e impone un nuevo orden en las relaciones entre el gobierno y los medios de comunicación.

Sin embargo, a pesar de todas estas diferencias, no se puede entender el liderazgo de uno y de otro sin las redes sociales. Internet marcó la aceleración sin precedentes de la vida política norteamericana. Twitter se convirtió en un nuevo púlpito, que tanto sirvió a uno para crear comunidad como al otro para despedir a

7 "Lo que aprendemos de Trump" (Revista *Reforma,* 2016) http://bit.ly/2K2sJ7B

colaboradores a golpe de tuit (agradeciendo a Rex Tillerson los servicios prestados en la secretaría de Estado) y lanzar amenazas a dictadores transpacíficos. Aunque podamos pensar que la comunicación de los dos líderes es contrapuesta, la finalidad de ambos es la creación de una marca propia, de un estilo que solo se pueda identificar con él.

AUTORIDAD Y AUTORITARISMO

Obama y Trump son dos líderes perfectamente identificables, en la retórica y en el tono. El de Obama es pausado, reflexivo, conciliador, con la voluntad de seducir a los suyos y a aquellos que pueden dudar de él. Trump recurre al ruido, al agravio, a la mofa y a la estridencia. Su estilo de ejercer el liderazgo requiere menospreciar al, tratándole de enemigo en vez de como un legítimo rival. Esta es una de las claves para entender la diferencia entre los dos presidentes: Obama fue un líder sin necesidad de alzar la voz. Trump subió del volumen de la estridencia, el nivel de las amenazas y la disrupción internacional y, sin embargo, es percibido como un líder con menos autoridad, aunque más autoritario. Su fuerza es otra: Es su capacidad de ofrecer un modelo y una coartada para aspirantes a autócratas de medio mundo. Son las diversas interpretaciones versionadas del *America first* que se van haciendo globales. Influencia por imitación.

Dos estilos contrapuestos pero de algún modo relacionados. ¿Hasta qué punto la aparición del fenómeno Trump no es una consecuencia del hiperliderazgo de Obama? Las altas expectativas que generó el 44 presidente de los Estados Unidos derivaron, también, en frustración para una parte importante del electorado americano. Trump se nutrió de esta desilusión. Su oportunidad (u oportunismo) fue contraponer su estilo de showman catódico, alejado de la correcta retórica obamista, a un orden institucional que no dudó en cuestionar, e incluso desafiar. Él mismo sabía que,

para contentar a sus votantes, su liderazgo debía ir a contracorriente del que le precedió. No podríamos comprender la «marca Trump» sin haber vivido los ocho años de la presidencia de Obama. El primer presidente afroamericano de la historia dejó un país en tensión racial. Sobre el malestar de una mayoría blanca que sintió su estatus amenazado, se encaramó Trump. Él es sólo la caricatura más deformada de la polarización de los últimos años, del discurso a la contra y del bloqueo político republicano que se impuso con un único propósito: detener a Obama.

Investido como el 45 presidente de los Estados Unidos, Donald Trump convirtió el recelo permanente y la imprevisibilidad mediática y política en la marca definitoria de su gestión. Su presidencialismo personalista abrió la mayor brecha partidista en los índices de aprobación de un presidente norteamericano desde la década de los 50 del siglo pasado. Aumento y tensó todavía más la polarización heredada de la era Obama hasta hacer de la confrontación permanente la piedra angular de su idea de liderazgo. La renuncia al multilateralismo y a la lucha contra el cambio climático, su trato desafiante al poder legislativo y judicial, y un liderazgo divisivo y a contracorriente, han contribuido al desorden geopolítico en el exterior y al desequilibrio constitucional en el interior. Sin embargo, este liderazgo, tan caótico como efectivo, alejado de la correcta retórica obamista, ha conseguido mantener prietas la filas republicanas e intacto el apoyo de una parte importante de su electorado.

«El legado más grande de la crisis financiera es la presidencia Trump» -sentenciaba un analista de la agencia Bloomberg- en una transición que transformó a la sociedad norteamericana y a sus líderes. Se pasó de la autoridad natural al populismo impulsivo; del exceso de expectativas al deseo de desafiar a poderes establecidos; del presidente que se hacía fuerte en la prudencia, al que quería parecer firme mediante la estridencia. Del líder obsesionado por generar consensos al populismo que consiguió vencer alimentando la polarización. De Obama a Trump.

BIBLIOGRAFÍA

Casajuana, C. (2014). *Las Leyes del Castillo. Notas sobre el poder.* Ediciones Península.

Hochschild, A. (2016). *Extraños en su propia tierra.* Capitán Swing.

Wolff, M. (2018.) *Fire and Fury: Inside The Trump White House.* Little. Brown.

El populismo de Viktor Orbán: una democracia iliberal para Hungría

Ángel Rivero[1]

INTRODUCCIÓN

El 26 de julio de 2014, Viktor Orbán pronunció un discurso en la universidad de verano Bálványos, en Baile Tusnad, Transilvania, Rumanía, que haría época. Sus palabras, llenas de providencialismo, nacionalismo e invocaciones a las minorías húngaras condenadas por la historia a vivir fuera de la patria –como la audiencia misma a la que se dirigía– anunciaban, en tono profético, la senda antiliberal que sería en adelante la marca de Orbán como político.

Comenzó por señalar que, en la breve historia de Hungría como país, apenas el siglo XX, ésta habría sufrido tres cambios de régimen con consecuencias profundas y radicales para la nación: la Iª Guerra Mundial y el tratado de Trianón, que hizo perder a Hungría el setenta por ciento de su territorio y a tres millones de conciudadanos de lengua magiar; la IIª Guerra Mundial, que culminó con la invasión soviética y la dictadura comunista; y 1990 con el final definitivo del comunismo y la llegada de la democracia, que abría un nuevo futuro.

Pues bien, para Orbán , "no estaba claro en 2008, durante el gran colapso financiero occidental que fuéramos a vivir, en adelante, en

1 Profesor Investigador, Universidad Autónoma de Madrid..

un mundo distinto [porque] el cambio no fue tan tajante y de alguna manera estuvo rondándonos por la cabeza hasta que la niebla acabó por disolverse en el campo» (Orbán, 2014: pp. 3). Pero sí, para el político húngaro el mundo ha cambiado radicalmente desde entonces y, nos dice, ya no puede contemplarse con la «lente de la cosmovisión liberal anterior a 2008» (ibid).

Para fundamentar su aserto recurre el primer ministro húngaro como ejemplos a la situación política en América; a la creciente desigualdad en Occidente; a la amenaza de los inmigrantes y al abandono en el que se encontrarían los trabajadores nacionales; a la situación de los jóvenes sin futuro y sin empleo; al acoso al cristianismo. Con todo ello llega a la conclusión de que Occidente está amenazado en un mundo globalizado, en el que domina una competencia económica sin cuartel.

Pero para Orbán no es la cuestión económica la más importante de la globalización como amenaza, la cuestión crucial bajo su punto de vista es la de «cómo construir hoy un Estado que sea capaz de procurar el éxito a su nación» (ibid. pp. 4). Por ello, de lo que se trataría, es de «comprender aquellos sistemas que no son occidentales, que no son liberales, que no son democracias liberales, que incluso pueden no ser democracias y que, sin embargo, hacen triunfar a sus naciones. Hoy, las estrellas en el análisis internacional son Singapur, China, India, Turquía y Rusia» (ibid).

Pues bien, para Orbán, los cuatro años precedentes –había alcanzado por segunda vez el gobierno en las elecciones de 2010, y al pronunciar estas palabra acababa de revalidarlo para una segunda legislatura consecutiva– habrían sido testigos de que su gobierno había entendido este cambio en el mundo, como ilustra el hecho que hicieron lo posible para «alejarse de los dogmas occidentales sobre la forma de organizar una comunidad, y para independizarnos de ellos, lo que nos hizo competitivos en la carrera mundial»

(ibid. pp. 5). Para ello recuerda que fue necesario en 2010 y vuelve a serlo en 2014 reafirmarse en el aserto considerado «sacrílego en el mundo liberal». Aquello que le resulta tan perentorio afirmar al político húngaro es que «una democracia no tiene porqué ser necesariamente liberal; que algo que no sea liberal no deja por ello de ser una democracia (…); y que probablemente las sociedades fundadas en los principios liberales no serán competitivas en el mundo en los próximos años y sufrirán retrocesos a menos que sean capaces de reformarse en profundidad» (ibid. pp. 5).

EL PROYECTO DE ORBAN: FUNDAMENTOS Y ACCIONES

Como vemos, el proyecto de Orbán se presenta como un instrumento estratégico que permitiría a Hungría encarar de la mejor manera el futuro, pero para ello considera necesario «abandonar los métodos y principios liberales de organizar la sociedad, así como la manera liberal de contemplar el mundo» (ibid. pp. 5). Además, refuerza su argumento señalando que los veinte años de democracia liberal húngara han sido un fracaso porque el Estado no se ha puesto al servicio del interés nacional; no ha reconocido que la diáspora húngara por el mundo pertenecía a la nación; ni ha protegido la riqueza nacional; ni ha protegido la propiedad pública; ni ha protegido al país frente al endeudamiento. Es por ello que para Orbán las elecciones de 2010 que lo devolvieron al poder, y las elecciones de 2014 que lo confirmaron en el mismo, deben entenderse como que dentro de la gran carrera mundial, los electores húngaros esperaban de sus líderes que «imaginaran, forjaran y construyeran una forma nueva de organización del Estado que hiciera nuevamente competitiva la comunidad de los húngaros tras la era del Estado liberal y de la democracia liberal, una que, por supuesto, respetara los valores de la cristiandad, la libertad y los derechos humanos» (ibid. pp. 6).

Termina su ya célebre discurso afirmando que lo que está ocurriendo en Hungría es una armonización entre los intereses de los individuos y los de la comunidad, la nación, porque la «nación húngara no es la simple suma de los individuos, sino una comunidad que necesita ser organizada, fortalecida y desarrollada y, en este sentido, el nuevo Estado que estamos construyendo es un Estado iliberal, es un Estado no liberal. No niega los valores básicos del liberalismo, como la libertad, etc…Pero no hace de esta ideología un elemento central de la organización del Estado sino que aplica un enfoque específico, particular, nacional» (ibid).

Como ejemplos de actores opuestos al desarrollo nacional de Hungría señala Orbán a las ONG's que no son presentados como actores independientes de la vida sino como profesionales pagados y al servicio de intereses extranjeros, y aquí señala en particular al Fondo Soberano Noruego. Otro ejemplo de «obstáculo para la reorganización del Estado» sería la Unión Europea. Sostiene Orbán que no es imposible «construir un Estado nación iliberal dentro de la Unión Europea (…) porque ser miembro de la Unión Europea no elimina esa opción». Sin embargo, la UE toma decisiones que afectan a Hungría sin que esta pueda defender sus intereses nacionales. Así, por ejemplo, expone la idea de que los fondos europeos que recibe Hungría no son un regalo sino algo a lo que tiene derecho y que, por tanto, deben ser administrados sin menoscabo de la soberanía húngara. Es decir, los debe administrar el gobierno sin la tutela «extraterritorial» de la UE.

Para Orbán vivimos en un tiempo incierto en el que puede pasar cualquier cosa, en que «el estado del mundo no es precisamente de su gusto» y puede empeorar, pero nos dice que también esta incertidumbre «trae oportunidades y desarrollos para nuestra nación húngara» y por ello recomienda coraje, pensamiento prospectivo, acción racional y valerosa, a las comunidades de la cuenca de los

Cárpatos (…) Puesto que todo es posible, también pudiera ser que nuestro tiempo hubiera llegado» (ibid. pp. 8).

Como puede verse, el discurso de Orbán de 2014 ponía nombre a la ideología que había marcado su vuelta al poder en 2010, la *democracia iliberal*, y que desde entonces presidirá hasta hoy día su acción de gobierno. No hay duda de que Orbán dice la verdad porque su anti-liberalismo no solo es verbal, sino que está encarnado en sus decisiones de gobierno, como veremos más adelante. Sin embargo, más allá de su abierto antiliberalismo, el régimen de Orbán resulta difícil de calificar y esto ha dado lugar a una amplia polémica entre académicos.

János Kornai sostiene que entre las democracias y las dictaduras se extiende un amplio campo, el de las autocracias, en este universo vivirían regímenes de una variedad de colores, desde el almirante Miklós Horthy en la Hungría anterior a la guerra a Vladimir Putin en la Rusia actual, pasando por Juan Domingo Perón en Argentina. Para Kornai la Hungría de Orbán es una *autocracia* porque Orbán no es un dictador y porque tampoco es el líder de una democracia (Kornai, 2015: pp. 42-43). Sin embargo, la denominación me parece insatisfactoria porque autocracia es un concepto asociado históricamente al gobierno despótico de los zares y no a los regímenes semi-democráticos cuasi autoritarios.

Agnes Heller, por su parte, ha denominado al régimen instaurado por Orbán en 2010 como una tiranía, porque su característica principal es el poder omnímodo del primer ministro en la organización de la vida húngara, con desprecio de las instituciones democráticas y de las minorías (Heller, 2018; Heller, 2019). Para Heller se trataría además de un nuevo tipo de tiranía, una modalidad que aún no tiene nombre y que viene caracterizada porque no precisa del uso de la fuerza para imponerse, sino que se basta con la manipulación de los procesos electorales y el control total de la

sociedad desde el gobierno. Por supuesto, este cesarismo plebiscitario tiene precedentes históricos, pero se alejan de nuestra propia realidad contemporánea. Heller ha rechazado la calificación de populista para Orbán porque «no diría nada» ya que «el populismo se apoya típicamente en los pobres» y «Orbán utiliza una retórica y un vocabulario nacionalista, moviliza el odio contras los forasteros y extraños, pero no tiene nada que ver con el populismo. Tiene que ver con la derecha, pero incluso esto es cuestionable porque Orbán es un hombre preocupado exclusivamente por el poder» (Smolenski, 2018).

Con ser cierto que el poder personal que ejemplifica Orbán recuerdan a la figura del tirano, hace falta precisar que esta forma corrupta de gobierno califica el ejercicio del poder de aquel que no respeta las leyes ni el bien general o que es un usurpador sin poder legítimo. Ninguno de estos atributos sirve para describir la acción de gobierno de Orbán. Por el contrario, la calificación de populismo, me parece, le cuadra perfectamente. Como bien señala Heller en los textos antes referidos, Orbán está destruyendo la democracia porque, simplemente, no hay democracia sin liberalismo, esto es, sin instituciones que velen por la realización de elecciones limpias, la separación de poderes, la independencia judicial, la libertad de expresión, la protección de los derechos de las minorías y de los individuos y esto es, precisamente, el contenido sustantivo del programa de Estado nuevo que califica como democracia iliberal.

La característica más notable del populismo contemporáneo es justamente su vocación de destruir la democracia (liberal) en nombre de una democracia que se presenta como más verdadera (Rivero, 2018a) y, por tanto, como en Orbán, el atributo central del populismo radica en su modelo alternativo de «democracia» (Rivero, 2019). El propio Orbán lo ha señalado con claridad meridiana en el discurso antes reseñado: durante 20 años Hungría ensayó la democracia liberal pero ahora los tiempos exigen algo

completamente distinto, un Estado nuevo que, nos dice, no puede ser liberal, aunque podría ser democrático. János Kornai por su parte señala con toda claridad cómo este giro impreso en la política húngara señala un alejamiento de la democracia después de veinte años, un cambio de sentido radical en la senda de la democratización húngara que no puede sino calificarse como abandono de la democracia (Kornai, 2015).

Este desencanto con la democracia liberal puede verse ya con anterioridad a la llegada de Orbán al gobierno en 2010. Así en el manifiesto de su partido de diciembre de 2007, Tibor Navracsiscs, jefe del grupo parlamentario de Fidesz describe cómo cuando se fundó su partido ellos creían que su objetivo fundamental era «asegurar que los húngaros pudieran disfrutar los beneficios de la democracia, la libertad y el bienestar únicamente conocidos en Europa occidental» y mantuvieron esa creencia hasta el inicio del nuevo siglo. Pero el gobierno «socialista-liberal» de 2002 lo cambió todo. Desde entonces Hungría ha sido traicionada y en Europa se abría un nuevo tiempo político: «las ideas de familia y comunidad han recuperado su relevancia; Europa reconoce de nuevo que los humanos son seres comunitarios que nacen, viven y desarrollan su personalidad dentro de comunidades. El nuevo *zeitgeist* entiende que la familia, la nación, la cultura europea son propiedad no solo de los vivos, sino de una comunidad indisoluble con el pasado y con las generaciones presentes y futuras» (Fidesz, 2017: pp. 4-9).

Es decir, el desencanto con el liberalismo se produce como consecuencia de la frustración de las expectativas húngaras en relación a su vuelta, largamente demorada por la experiencia comunista, a la comunidad de países de Occidente. Además, como puede verse en la prosa del manifiesto del partido que acabo de reseñar, el discurso que se adopta es netamente conservador, pero no conservador en su sentido original de buscar preservar los valores e

instituciones que representan a la mayoría sino como manifestación de un conservadurismo reaccionario que busca restaurar la grandeza perdida por la comunidad nacional húngara hace un siglo, es decir, se trataría de un nacionalismo palingenésico. En suma, el anti-liberalismo de Orbán es un populismo nacionalista y, como tal, autoritario. Como se ha señalado, esta característica anti-liberal que finalmente resulta en anti-democrática no es privativa del Orbán posterior a 2010 sino de la generalidad de los populismos contemporáneos.

Esto puede verse de la mejor manera si atendemos a los rasgos que definen la política del populismo:

- La defensa de un pueblo virtuoso con una voluntad única;
- La crítica a la democracia representativa desde un lenguaje anti-político en nombre de una democracia directa.
- La preferencia por una espacialidad política estructurada en arriba/abajo frente a izquierda/derecha;
- La personificación en un líder carismático de la voluntad del pueblo en nombre del cual se habla
- La sustitución del pluralismo político como valor por la búsqueda permanente de un enemigo del pueblo contra el que desplegar un discurso político emocional, maniqueo y moralista (Rivero, 2018, pp. 35-36; Gratius y Rivero, 2018, pp. 36). Como puede verse, cada una de estas características aplican a Orbán:
- La Hungría a la que apela no es un Estado sino la comunidad de los húngaros, de etnia magiar diseminados por el mundo. Una colectividad con una voluntad única que él encarna.
- Orbán crítica a la democracia liberal y al liberalismo en general como un modelo de Estado y una ideología política que impiden la protección de la comunidad nacional.

- Viktor Orbán se presenta como una figura paternal que vela por la felicidad y la protección de los húngaros.
- Viktor Orbán enfatiza que en una sociedad liberal la libertad es monopolizada por los más fuertes, por los ricos, frente a los derechos de la comunidad. Orbán recusa la distinción izquierda/derecha aunque formalmente aún pertenece su partido al Partido Popular Europeo, esto es, al centro derecha. Fidesz, el partido de Orbán, ha formado hasta ahora parte del Partido Popular Europeo, pero en la actualidad está sancionado con suspensión en la pertenencia al grupo y es más que probable que finalmente lo abandone o sea expulsado del mismo.
- Por último, Orbán ha creado su propio enemigo. En sus discursos, George Soros es presentado como el capitalista que busca la invasión de Hungría por parte de africanos y asiáticos, en alianza con la Unión Europea que fomenta la inmigración para acabar con los Estados nacionales al privarles de su base comunitaria.

Creo que más allá de autocracia y tiranía, Orbán es un populista como tantos otros que pueblan la escena política contemporánea. El populismo es una ideología maniquea que hace de su simplicidad su principal virtud pero que sólo es eficaz en contextos de crisis de la democracia, esto es, cuando ante la presencia de una crisis económica, social, política o cultural se produce un grado de frustración generalizado que convierten el malestar en desafección política. Se ha señalado que la principal explicación del cambio radical en el proyecto político de Orbán y de su partido, Fidesz, radica en la ambición personal del líder y su voracidad insaciable de poder (Heller, 2018; Heller, 2019; Lendvai, 2017: pp.149-163). Pero más allá de las explicaciones vinculadas al carácter personal de Orbán pueden aducirse circunstancias que explican mejor la oportunidad de su nuevo discurso y el oportunismo de su propuesta.

Estas circunstancias serían, en primer lugar, el exceso de expectativas que los húngaros depositaron en el cambio político democrático y en la pertenencia a la Unión Europea que entendieron prácticamente como la llegada del bienestar y felicidad infinitos e inmediatos, cosa que en modo alguno se ha producido. El cambio político y económico de Hungría ha sido complejo y ha exigido muchos sacrificios que ni habían sido anticipados ni imaginados. Por ejemplo, el estado desolador de las ciudades industriales húngaras ha sido retratado por Bernard Guetta. Al entrevistar a Tamás Lánczi, «el redactor jefe de *Figyelö*, el órgano semanal del orbanismo» lo resumía de manera bien sintética: «la gente pensaba que una vez se hubiera consumado la desaparición del comunismo todo sería formidable, pero la ideología del mundo libre ha dado lugar a un desastre» porque el liberalismo, los liberales, al «privatizar a la fuerza toda la economía, incluidos los sectores estratégicos» han dado lugar a un millón y medio de parados y la casi total desaparición de «la industria agroalimentaria», orgullo de la Hungría socialista (Guetta, 2019: 21). El resentimiento contra Occidente, una clave permanente de la identidad húngara ha renacido gracias al resentimiento y la frustración propiciados por las dificultades de la Hungría democrática.

Este resentimiento dio lugar a una importante crisis política cuando el primer ministro socialista Ferenc Gyurcsány, confesó en una reunión privada el haber mentido sin tapujos durante las elecciones de 2006, lo que dio lugar a movimientos de una violencia sin precedentes en la historia húngara, apoyados por Fidesz y en particular por un Viktor Orbán que se creía ganador y que sufrió la humillación de una segunda derrota electoral consecutiva (Lendvai, 2017: pp. 62). Otra explicación interesante del malestar húngaro sobre el que cabalga Orbán puede verse en el libro de Ivan Krastev y Stephen Holmes. En esta obra, que tiene una inquietante empatía con los argumentos populistas, se nos dice que a los húngaros se

les impuso de manera paternalista y autoritaria el deber de ser como los países occidentales y que el precio personal y colectivo de la empresa fue desolador. Al parecer, el liberalismo fue la herramienta con la que occidente dominó a Hungría tras el comunismo. La idea de que se pueda equiparar a la Unión Soviética con la Unión Europea produce estupor, pero debe tomarse en consideración si es así como lo ve, al menos, un sector de la opinión húngara.

Pero también se dicen cosas certeras e interesantes. La primera es que en 2020 se cumple el centenario del tratado de Trianón, y el irredentismo húngaro no lo va olvidar, máxime cuando algunos como Orbán vieron en la Unión Europea la posibilidad de restaurar la comunidad transnacional húngara. En segundo lugar, algo no menos importante, que la inquina de Orbán contra el liberalismo tiene una dimensión social evidente que le acerca a los perdedores que han visto deteriorada su forma de vida. Esto es, que la prosperidad en la imaginación húngara está vinculada al período final del comunismo, el *kadarismo*, y el presente es visto como un tiempo de dificultad. Esta percepción ha sido movilizada y aprovechada de forma sistemática por el propio Orbán.

Pero no menos importante es la manera en la que el propio Orbán ha procesado su inquina contra el liberalismo. Él que fue su apóstol en 1989, que fue becario en Oxford gracias a la Open Society de Soros, dedicada a la promoción del liberalismo, vio cómo la democracia liberal le apeaba del poder en 2002, y es aquí precisamente donde se produce su cambio: lo que busca ahora no es la mera derrota electoral de sus oponentes, sino su derrota permanente: «lo que le interesa a Orbán es el tipo de victoria que entraña la derrota y humillación total de sus rivales. Es este tipo de victoria la que forja y consolida una identidad política partisana. Quizás Orbán está utilizando la intensidad de su rechazo al liberalismo para compensar la vaciedad ideológica y la banalidad de su renacido iliberalismo» (Krastev y Holmes, 2019: pp. 69).

Ciertamente, el malestar húngaro tiene raíces profundas y motivos evidentes, pero la deriva política de Hungría es responsabilidad exclusiva de Viktor Orbán. Su proyecto político puede envolverse de nacionalismo y de preocupación por el pueblo, pero los hechos muestran que la dimensión personal del mismo abarca desde su enriquecimiento personal a la perpetuación en el poder quebrando las instituciones de la democracia. Porque la democracia iliberal de Orbán ha combatido sin duda a los capitalistas como Soros, pero el resultado no ha sido una democracia mejor sino una disminución constante de la calidad de la democracia en Hungría (véase Gratius y Rivero, 2018: pp. 47-49; y Rivero, 2018b)

Así pues, más allá del malestar húngaro, las raíces del cambio radical en la política de Orbán, de defensor de la democracia y el liberalismo a un populismo autoritario han de buscarse en él mismo. En primer lugar, habría que atender a la biografía política del propio Orbán y al hecho extraordinario de cómo un grupo de amigos universitarios fundan una asociación juvenil, Fisdesz, que será a la postre el partido político de mayor éxito de la historia de Hungría (todo esto puede verse en el extraordinario libro de Paul Lendvai, *Orbán. Hungary's Strongman*). Pero si hubiera que elegir los momentos cruciales de la evolución política de Orbán estos serían la percepción de las elecciones de 1994 como una tragedia, pues señalan el hundimiento de la derecha gobernante y la formación de un gobierno con los excomunistas del Partido Socialista Húngaro (MSzP) y de la Alianza de Demócratas Libres (SzDSz). Hasta entonces Fidesz era un partido de jóvenes (sus estatutos señalaban que los militantes tendrían que tener un mínimo de 16 años y un máximo de 35), necesariamente minoritario (7% del voto en las elecciones de 1994). Tras la vuelta de los ahora excomunistas al gobierno, Viktor Orbán, con 32 años, se hace con la dirección del partido dándole una nueva identidad: ahora se definirá como liberal, de centro derecha y cívico; se eliminará la limitación de

edad de los miembros y en abril de 1995 pasará, en concordancia con la nueva y explícita ideología de centro derecha a llamarse Fidesz-Partido Cívico Húngaro (Lánczi, 2005: pp. 32). En suma, que la vocación de Orbán era ahora refundir toda la derecha en un único partido que contraponer a la izquierda, los excomunistas.

Para preparar las elecciones de 1998 Fidesz diseñó una estrategia de acercamiento a los ciudadanos hablando en un lenguaje popular, sin tecnicismos ni palabras extranjeras y con un programa social y nacional dirigido a los que sufrían dificultades:

1) Apoyo a las familias y en particular a aquellas con niños a su cargo.
2) Freno a las privatizaciones y reconsideración de los bienes que deberían ser propiedad del Estado.
3) Apoyo a la cultura y a la educación.
4) Un programa de «ley y orden», con aumento de penas y apoyo a la policía.

La alianza de la derecha tuvo éxito y el Partido Socialista Húngaro, que con sus tecnócratas se presentaba como el único capacitado para gobernar fue derrotado en las elecciones de mayo de 1998 (ibid: pp. 35).

El nuevo gobierno buscó deliberadamente colocar el énfasis en la nación como principio de unidad y contrapunto al comunismo de la izquierda, pero la coalición de gobierno estuvo sujeta a enormes tensiones por los casos de corrupción detectados en los ministerios que no controlaba Fidesz. Esto señaló el inicio del deterioro del nuevo gobierno que acabaría en fracaso por distintas razones.

Siguiendo a Lánczi, en primer lugar, si el gobierno buscaba realizar una ruptura total con el pasado comunista como principal línea de acción esta estrategia se volvió conflictiva porque hacía

del gobierno presa del radicalismo y eso enajenaba a sectores de la población partidarios de un cambio gradual y de una despolarización de la vida política. En segundo lugar, ya mencionado, los casos de corrupción entre 1998 y 2002, debilitaron la credibilidad del gobierno. En tercer lugar, los medios de comunicación estaban bajo el control de los partidos políticos y en este terreno el control del Partido Socialista era mayoritario. Con este escenario y con una campaña electoral muy reñida, donde Fidesz intentó una campaña positiva y la oposición una negativa centrada en la corrupción, se llegó a las elecciones cruciales de 2002.

Fidesz fue derrotado en estas elecciones, tras una primera experiencia gobierno y es allí, en la derrota, donde se forja el nuevo pensamiento político de Orbán, que no podrá realizar como primer ministro hasta 2010. Obsérvese que Orbán fue capaz de retener la dirección del partido, y por tanto ser el candidato a primer ministro, a pesar de perder el gobierno y dos elecciones consecutivas. Para garantizarse un futuro triunfo, desarrolló una política de «círculos cívicos» que conectaran al partido con los ciudadanos y que movilizaran a los militantes; se impuso una nueva política de comunicación destinada a mostrar que Fidesz era el partido de todos; además Fidesz buscó movilizar permanentemente a las sociedad a través de peticiones al gobierno: bajada del precio de los medicamentos; subsidios para los agricultores; apoyo a la construcción de viviendas; frenar las privatizaciones; limitar el precio del gas y la electricidad. Estas peticiones alcanzaron millones de firmas y se presentaron como instrumentos de democracia directa (ibid: pp. 46).

El triunfo de Fidesz en las elecciones al Parlamento Europeo en 2004 parecían confirmar lo acertado de la estrategia (47% del voto y 12 de los 24 diputados) pero cuando llegaron las generales de 2006 Fidesz fue nuevamente derrotado. Fue en ese período, 2006-2010 donde la polarización se hizo extrema en Hungría y donde el

proyecto de Orbán se radicalizó en el sentido de buscar alcanzar a todo precio un gobierno que después, este era el propósito, nunca más habría de perderse. Este período brutal de la historia política de Hungría los resume Lendvai en tres episodios fundamentales: el mega-escándalo o el «discurso de las mentiras» de Gyurcsány; la victoria de Orbán en la guerra civil «fría»; y el terremoto (Lendvai: pp. 65-90).

Estos tres episodios representan un cambio sistémico e irreversible en el sistema político húngaro salido de la transición a la democracia tras el comunismo. El primero de ellos constituyó una auténtica «bomba atómica política» y explotó exactamente a las cuatro de la tarde del 17 de septiembre de 2006 sobre la cabeza de Ferenc Gyurcsány, el primer ministro socialista elegido en el mes abril. Primero la televisión pública y después todas las televisiones y radios del país comenzaron a emitir fragmentos de un discurso en el que se reconocía la voz del primer ministro quien en un lenguaje soez y vulgar confesaba que todo lo que había hecho el gobierno en el último año y medio era basura y que estaba harto de hacer como si gobernaba, cuando en realidad no se hacía nada, y de tener que mentir mañana, tarde y noche, para que no se notara (Lendvai: pp. 65-66).

Ese mismo día empezaron las protestas de un otoño caliente en Budapest que darían lugar a una «guerra civil fría» en la que perecerían políticamente todos los adversarios de izquierdas de Orbán. En este ambiente de disturbios y violencia inédita en Hungría se forjaría el nacimiento del partido Jobbik, un partido alimentado por el descontento que permitirá con su irrupción que Fidesz se presente como un partido moderado, de centro derecha, situado entre los radicales, los comunistas y la nueva formación de extrema derecha (vid. Rivero, 2018b). El terremoto, finalmente, vino el 11 de abril de 2010 con la victoria de Fidesz con el 57.2 de los votos y la obtención de 263 de los 386 escaños en liza. Por primera vez

en la historia democrática de Hungría un partido alcanzaba más de dos tercios de la cámara, con lo cual podía modificar en solitario la Constitución. Desde entonces Orbán ha alcanzado estas supermayorías que le han otorgado un poder ilimitado. Ciertamente, utilizando este mismo poder para modificar las leyes electorales al punto de poder alcanzar este sobresaliente número de escaños con muchos menos votos (Kornai: pp. 42).

Un análisis complaciente de la victoria de Viktor Orbán puede verse en Márk Szabó (2013) quien apunta como principales razones del abrumador resultado de la crucial elección de 2010 a la capacidad de Orbán de unir a la derecha; de denunciar las políticas de austeridad sin hacer promesas infundadas; de limitar la campaña a un mes de alta intensidad; de marginar a los contendientes rechazando incluso participar con ellos en debates electorales; de coordinar y centralizar la propaganda en unos *slogans* comunes y una sola marca, *Fidesz*; de personalizar en Viktor Orbán el mensaje, como el hombre providencial del momento; de enfatizar la novedad de la alternativa propuesta; de colocar un mensaje simple sin marcadores ideológicos evidentes: combatir la corrupción, restaurar la seguridad pública, hacer que la economía vuelva a funcionar, proporcionar estabilidad; del uso proactivo de las redes sociales, sobre todo Facebook; de hacerse presente de forma intensa en las últimas 24-72 horas de la campaña con una movilización masiva de los militantes y de los líderes, puerta a puerta, con sms y con e-mails (Szabó: pp. 46-47).

Desde 2010 Viktor Orbán viene desarrollando su proyecto de democracia iliberal en el que bajo el pretexto de la restauración de la soberanía de la nación húngara se han socavado todas las instituciones que sirven a la limitación del gobierno para la protección de los derechos de las minorías y de los individuos. Este proyecto se ha sustanciado en la reforma constitucional de 2011. Una constitución hecha a la medida de Viktor Orbán, con secretismo y

como un *fait accompli* (Rosanvallon: pp. 42). Ya he señalado como Kornai (2015) califica este movimiento de giro radical: un país que se democratizaba paulatinamente de pronto gira en redondo para alejarse de la democracia. Este alejamiento puede verse detalladamente descrito en el artículo citado, pero puede sustanciarse en las siguientes rúbricas:

- Debilitamiento de la institucionalidad democrática
- Subordinación del poder judicial al ejecutivo
- Control omnímodo de los medios de comunicación
- Guerras culturales dirigidas a la destrucción simbólica de los adversarios políticos

En relación a la destrucción del sistema democrático y su sustitución por un autoritarismo plebiscitario, puede verse un análisis detallado en Kornai (2015), pero también dentro de un cuadro más amplio que retrata la deriva autoritaria de Europa central-oriental en Krakovsky (2019) y Rupnik (2017 y 2018). Una radiografía completa de los males que asolan a la democracia húngara puede encontrarse en el informe «Tavares» por el nombre del relator, Rui Tavares, realizado para el Parlamento Europeo en 2012, donde se relatan una serie de problemas que no han dejado de agravarse desde entonces. El nombre completo del informe es «Informe sobre la situación de los derechos fundamentales: patrones y prácticas en Hungría» (Tavares, 2013).

El debilitamiento del poder judicial como poder independiente puede seguirse en el artículo de Bánkuti, Halmai y Scheppele (2012) donde se explica la manera en la que Orbán utilizó su supermayoría para confeccionar una constitución a su gusto. Estos autores señalan como la fatalidad del diseño constitucional ha producido este resultado. Los constituyentes húngaros de 1989-1990 estaban preocupados por dos cosas: un parlamento fragmentado

que impidiera la formación del gobierno y una constitución demasiado rígida que no fuera capaz de adaptarse a los cambios de la sociedad que se avecinaban. Para ello favorecieron en escaños al partido ganador de las elecciones y establecieron un procedimiento flexible de reforma constitucional, que únicamente necesitaba de la aprobación por parte de dos tercios de la asamblea. Estos son los instrumentos que han permitido a Orbán modelar el sistema político a su conveniencia.

Entrar en los detalles de la constitución que ha creado Orbán precisaría de un artículo en sí mismo pero los rasgos básicos son un debilitamiento de la separación de poderes, un ataque a la independencia judicial, una limitación de la responsabilidad política y, sobre todo, el afianzamiento de *Fidesz* en el control de todos los resortes del Estado. Miklós Bánkuti *et al*. terminan su artículo recordando un discurso de Viktor Orbán de 2009, donde anunciaba que llegaría un día en el que la política en Hungría ya no vendría caracterizada como un enfrentamiento entre partidos, sino que «surgiría un gran partido de gobierno en el centro del escenario político que sería capaz de formular una política nacional, no a través de debates constantes sino a través de la representación natural de los intereses» (Bánkuti *et al.*, 2012: pp. 145). Parece que tal día llegó para Hungría poco después, en 2010. El resultado, el debilitamiento o des-consolidación de la democracia en el país (Tavares, 2013; Rivero, 2018b y 2019; Gratius y Rivero, 2018).

El control de los medios de comunicación ha sido otra de las consecuencias del orbanismo. En el muy detallado estudio realizado por Mértek Media Monitor, *Centralised Madia System. Soft Censorship 2018* (2019) se estima que Orbán controla el 80% de los medios húngaros ya sea directamente o a través de personas instrumentales con lo que si bien la oposición tiene un margen de manifestación, el control que ejerce el gobierno sobre los medios

es prácticamente total. Es decir, la discrepancia es posible, pero está marginalizada y acosada.

Por último, Orbán, que fue renuente en el pasado a entablar las guerras culturales que planteaba la izquierda, se ha mostrado un firme partidario de las políticas memorialistas desde el gobierno. El intento que persiguen estas políticas es señalar que el fascismo y el comunismo son ajenos, extraños o enemigos a la nación húngara. Este movimiento que podría parecer una denuncia de los totalitarismos que han devastado Hungría y un llamamiento a su conocimiento como instrumento de ilustración pública, se ha convertido en una herramienta destinada a la estigmatización pública de los rivales de Orbán, presentándolos como sujetos indignos debido a su connivencia con las ideologías del totalitarismo.

En este sentido es particularmente instructiva la llamada *Terrorhaza*, o «Casa del Terror» abierta en 2002, en plena campaña electoral en la que Orbán buscaba retener el gobierno. El edifico es un museo situado en una de las avenidas más elegantes de Budapest en el lugar en el que tuvo su sede en 1944 la «Cruz Flechada», el partido nazi húngaro que la denominó la «casa de la lealtad» y la utilizó como su cuartel general y como cárcel. Tras la guerra fue utilizado por la policía secreta del comunismo húngaro hasta 1963. El museo costó más de 20 millones de dólares y se financió con fondos públicos y aunque el propósito alegado era educativo sus críticos sostienen que en realidad se trata de un instrumento político «destinado a mancillar al Partido Comunista y, por asociación, a todos los políticos y las políticas de centro izquierda de la Hungría de hoy» (Sodaro: pp. 58). El hecho mismo de que el museo está dirigido por la historiadora y principal idelóloga de *Fidesz,* María Schmidt, no deja de ser significativo.

CONCLUSIONES

El proyecto de una democracia iliberal de Viktor Orbán encuentra su asidero en el malestar húngaro, pero es resultado principalmente de la pulsión autoritaria de su impulsor. Esta pulsión autoritaria ha podido imponerse en una democracia poco consolidada como la húngara a pesar de los frenos que representa la Unión Europea. Pero el caso no es único, sino que responde a una oleada global de populismo que tiene manifestación muy particular en el Este europeo. Resulta interesante saber que la falta de tradiciones democráticas de Hungría (Heller 2018 y 2019) no significa que no haya otras tradiciones políticas en el país. Rupnik señala en particular cómo Hungría ha basculado desde siempre entre occidentalistas/urbanitas y populistas/ruralistas (Runik, 2017: pp. 5). Que Orbán sea de pueblo, que venga de una infancia más que frugal, miserable, quizá digan algo relevante respecto al campo en el que se situaría dentro de este antagonismo húngaro.

En cualquier caso, el ejemplo de la Hungría de Orbán más allá de su particularidad, ha sido visto como la vanguardia, la punta de lanza, de otros movimientos que en Europa buscan transitar desde la democracia al autoritarismo. Bustikova y Guasti han mostrado cómo dentro del grupo de Visegrado, República Checa, Polonia, Eslovaquia y Hungría, solo este último país ha completado el programa completo de debilitación de la democracia: polarización que impide los acuerdos y el consenso; control de la justicia y desmantelamiento del Estado de derecho; control político de los medios de comunicación; persecución legal de la sociedad civil destinada a eliminar la protesta y la disidencia; cambio de las leyes electorales y de la constitución para debilitar a la oposición política (Bustikova y Guasti: pp. 174; Traub, 2015).

Viktor Orbán encarnó en 1989 la promesa democratizadora de una nueva Hungría. Protagonista juvenil de la transición tras el comunismo, pronto se convirtió en el gobernante más joven de

Europa, entre 1998 y 2002. Su proyecto: realizar el modelo europeo occidental de libertad, bienestar y seguridad en su patria. Sin embargo, la pérdida del poder tras su primer mandato; su ambición política sin límite; y el horizonte dibujado en Europa tras la crisis de 2008 han modificado de manera radical su figura y su programa político. Tras llegar de nuevo al gobierno en 2010 ha encadenado tres mayorías consecutivas que le han permitido escribir y modificar la constitución a su gusto; sujetar al control de su poder personal la política húngara; manipular el sistema judicial; someter al poder económico; y monopolizar los medios de comunicación.

Este nuevo proyecto ha alejado a Hungría de los valores europeos para abrazar francamente un proyecto que algunos califican de autocracia o directamente de autoritarismo. Él mismo lo ha denominado «la democracia iliberal». Que este programa se generalice a otros países dentro y fuera de Europa está todavía por ver. Desde luego no es una fatalidad que deba ser aceptada como inexorable. Grzegorz Ekiert sostiene que la Unión Europea tiene mucho margen y una elevada obligación, por coherencia con sus propios valores, para evitar que esta deriva autoritaria se generalice en Europa. Esperemos que quienes ejercen la tal responsabilidad estén a la altura de la exigencia.

REFERENCIAS

Bánkuti, M., Halmai, G. y Scheppele, K.L. (2012). «Hungary's Illiberal Turn: Disabling the Constitution». *Journal of Democracy*, vol. 23, núm. 3, julio 2012. pp. 138-46.

Bustikova, L. y Guasti, P. (2017). «The Illiberal Turn or Swerve in Central Europe?», *Politics and Governance*, Volume 5, Issue 4. pp. 166-176.

Ekiert, G. (2017). «How to Deal With Poland and Hungary». *Social Europe. Occasional Paper,* núm. 13, Agosto 2017, Hardvard: Minda de Gunzburg Centre for European Studies, Harvard

FIDESZ (2007), *A Stronger Hungary. The Manifesto of Fidesz-Hungarian Civic Union.* Budapest: Fidesz-HCU.

Gratius, S. y Rivero, Á. (2018). "Más allá de la izquierda y la derecha: populismo en Europa y América Latina". Revista *CIBOD d'Afers Internacionals*, núm. 119. pp. 35-61.

Guetta, B. (2019). *L'enquête hongroise (puis polonaise, italienne et autrichienne)*. París: Flammarion.

Heller, A. (2019). «¿Por qué Hungría se rinde a Orbán?», *El País,* 21 de abril.

Heller, A. (2018). «What Happened to Hungary?» September 16. *The New York Times.*

Krakovsky, R. (2019). «Les démocraties illibérales en Europe centrale». En *VV.AA. L'Europe et ses populismes.* pp. 79-103. París: Études.

Kornai, J. (2015). «Hungary's U-Turn: Retreating from Democracy». *Journal of Democracy,* vol. 26, núm. 3, julio 2015. pp. (34-48.

Krastev, I. y Homes, S. (2019). *The Light that Failed. A Reckoning.* Londres: Allen Lane.

Lánczi, T. (2005). «Why Fidesz Lost: A Successful Government and Unsuccessful Party». En Ucen, P. y Surotchak, J.E. (eds.), *Why We Lost. Explaining the Rise and Fall of the Center-Right Parties in Central Europe, 1996-2002.* Bratislava: International Republican Institute.

Lendvai, P. (2017). *Orbán. Hungary's Strongman.* Oxford: Oxford University Press.

Mértek Media Monitor (2019). *Centralised Media System. Soft Censorship 2018.* Volume 18. Budapest: Mértek Booklets.

Orbán, V. (2014). «Speech at Baile Tusnad (Tusnadfürdo) of 26 July 2014». July 29, 2014. *The Budapest Beacon*.

Rivero, Á. (2018a). «Populismo: ¿cómo destruir la democracia en nombre de la democracia?». En Rivero, Á. et al. (coords.) *Geografía del populismo. Un viaje por el universo del populismo desde sus orígenes hasta Trump*. (pp. 31-39). Madrid: Tecnos.

Rivero, Á. (2018b). «¿La desconsolidación de la democracia en Hungría? Viktor Orbán y su teoría populista de la democracia iliberal». En Rivero, Á. et al. (coords.) *Geografía del populismo. Un viaje por el universo del populismo desde sus orígenes hasta Trump* (pp. 380-390). Madrid: Tecnos.

Rivero, Á. (2019). «Populism and Democracy in Europe». En de la Torre, C. (ed.). *Routledge Handbook of Global Populism* (pp. 281-294). Londres: Routledge.

Rosanvallon, P. (2020). *Le siècle du populisme. Histoire, théorie, critique*. París: Seuil.

Rupnik, J. (2017) «Evolving or revolving? Central Europe since 1989», *Eurozine,* 15 December.

Rupnik, J. (2018). «Variations centre-européennes». En Badie, B. y Vidal, D. *Le retour des populismes. L'état du monde 2019.* París: La découverte.

Smolenski, J. (2018) «Ágnes Heller: Orbán is a tyrant», *Political Critique,* August 13. En http://politicalcritique.org/cee/hungary/2018/agnes-heller-orban-is-a-tyrant/

Sodaro, A. (2018). «The House of Terror: The Only One of its Kind», cap. 3 de Sodaro, *A. Exhibiting Atrocity. Memorial Museums and the Politics of Past Violence*. New Brunswick: Rutgers University Press.

Szabó, M. (2013). «A Long Hard Road Out of Opposition: Explaining the Success of Fidesz-Hungarian Civic Union». En Ucen, P. y Surotchak, J.E. (eds.), *Why and How we Won. Center-Right Parties in East Central Europe and their Return to Power in the 2000s.* Bratislava: International Republican Institute.

Tavares, R. (2013). *Report on the Situation of Fundamental Rights: Standards and Practices in Hungary* (pursuant to the European Parliament resolution of 16 February 2012), A7-0229/2013, 2013 en https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0229+0+DOC+XML+V0//EN

Traub, J. (2015), «Hungary's Rightward Shift», 5 artículos, *Foreign Policy,* October 26, 27, 28, 29, 31.

La evolución reciente de la derecha política mexicana

Víctor Alarcón Olguín[1]

INTRODUCCIÓN

Durante los últimos treinta años que han configurado al llamado espacio de la competición real en las elecciones mexicanas, mismos que marcan el alcance del periodo que se pretende abordar aquí (1988-2018), se puede valorar como su rasgo general la presencia de una interacción entre los votantes y los partidos cada vez menos sustentada en los argumentos ideológicos, lo que ha dado paso a un incremento sustantivo de las acciones y campañas apoyadas en la importancia de las candidaturas, el papel de la evaluación retrospectiva de corto plazo de los gobiernos y cargos en juego, así como de las decisiones de coordinación estratégica tomadas por los partidos políticos a partir de que han optado por aprovechar las opciones legales que permiten la presentación de postulaciones comunes y coaliciones, mismas que no exigen ningún nivel de coherencia con respecto a los contenidos de sus plataformas o documentos a ser registrados ante la autoridad electoral.[2]

---

1 Politólogo. Profesor-Investigador Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa.

2 De alguna manera, ello nos remite a vislumbrar junto con Arend Lijphart, la persistencia de los modelos adversarial-conflictivo versus el consensual-negociado en el marco de la transición mexicana, (Lijphart, 2000)

Estas consideraciones hacen valorar como hipótesis general para guiar a la presente exposición, que las decisiones tomadas por los partidos políticos (especialmente a los auto-identificados formalmente en el campo de la derecha) los llevaron a pactar reglas de requisitos ideológicos cada vez más laxas para el registro de candidaturas, debido justamente al desdibujamiento de las propuestas y la necesidad de «ganar el centro». Esto derivó en rupturas que incluso propiciaron, como se observó en los comicios presidenciales de 2018, la figura de dos postulaciones independientes. Ello marcó un referente muy significativo que trajo como consecuencia una suerte de «vaciamiento» en las bases de información general con las cuales los electores pudieran distinguir o fijar un nivel de distinción consistente con respecto a la solidez y viabilidad de las promesas con que las candidaturas registradas se pudieran comparar y evaluar con respecto a la oferta presentada desde el campo de la izquierda, oferta concentrada especialmente alrededor del candidato Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para así tomar la decisión más cercana a sus intereses reales como ciudadanos/as, quienes se inclinaron por castigar especialmente a las agrupaciones que se habían identificado como exponentes del llamado «neoliberalismo». Un concepto con el cual precisamente AMLO logró agrupar en un solo bloque a los partidos que gobernaron al país durante ese periodo como lo fueron el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN).

A partir del resultado mayoritario observado en las urnas, los dilemas que se presentan entonces para dichas agrupaciones existentes revelan la imposibilidad de reacomodos inmediatos dentro de dicho campo, particularmente derivados de las propias condiciones legales para la creación de nuevos partidos, que no es un proceso fácil, así como adicionalmente las organizaciones existentes se encuentran atrapadas justamente por las condiciones del sistema, que los empuja a mantenerse en la defensa de sus

registros y el acceso a un sistema de incentivos y prerrogativas donde prevalece más un interés de corte económico que metas más de carácter formativo u participativo con relación a la ciudadanía.

Adicionalmente, cabe destacar como otro elemento contra-fáctico explicativo el incremento de los mecanismos clientelares con que se ha venido dando la «cartelización» y esquemas de patronazgo de los propios partidos políticos, que en general han condicionado el marco de las campañas electorales y en el ejercicio regular de las acciones de gobierno. Lo anterior ha venido igualmente a simplificar las consideraciones con que la población «racionaliza» y «optimiza» su decisión, porque se encuentra en juego la continuidad de recibir beneficios, pagos o cargos en el corto o mediano plazo, dejando muy al margen aspectos relativos a las discusiones o comparaciones de alcance ideológico.

De esta manera, se puede captar un factor más directo y objetivo que explica el incremento del proceso de desideologización prevaleciente dentro de las contiendas electorales en México, merced al incremento de los recursos legales e ilegales que permean a las campañas, las cuales a su vez han debilitado a los partidos en lo relativo a sus niveles de contenido programático, llevándolos abiertamente hacia el terreno de la operación pragmática y de la simple operación de las acciones tipo maquinaria de movilización de votos al estilo clásico «pork and barrel» («cerdo y cerveza») con que se han identificado a estas dinámicas clientelares y corporativas de trasiego y compra de sufragios desde épocas muy remotas. (Casar y Ugalde, 2018). Aunque ahora cabría agregar los elementos sustanciales con que los poderes de gobierno se mantienen gracias a sus negociaciones y acuerdos con las oligarquías económicas, las estructuras del crimen y los elementos militares, lo que en la literatura se ha llegado a denominar como el «pacto de dominación» prevaleciente que le ha dado forma al sistema político. (Brachet Márquez, 1996)

A partir de los factores aquí descritos, este texto se propone explorar entonces los siguientes temas: en primer lugar se tratará de valorar cómo el desempeño de las identidades y tendencias electorales se fueron desideologizando en tanto se dio prioridad a la conjunción de alianzas que tuvieran como primer objetivo desplazar al viejo partido hegemónico que encabezó al sistema autoritario, como lo fue el PRI, mediante la generación de coaliciones, frentes o candidaturas comunes por parte de los partidos políticos de oposición, para posteriormente observar cómo estas situaciones tuvieron un efecto difuso en las maneras adoptadas por los partidos políticos para determinar sus rendimientos electorales, si bien se comenzaron a establecer tendencias más estables en la conformación de dichas alianzas de manera posterior a las elecciones del año 2000, que es cuando se da la primera alternancia efectiva en el plano presidencial, así como se amplían dichas condiciones de pluralidad hacia los demás niveles de contienda.

Ahora bien, como ya se indicó, la elección de 2018 ha vuelto a generar un nuevo reacomodo sustantivo en las preferencias de la ciudadanía en la medida que por vez primera se logra que una coalición de partidos encabezada por una agrupación de nuevo cuño auto-identificada como de «izquierda» como lo es Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) (apenas compitiendo desde las elecciones federales de 2015), fue capaz de desplazar a los partidos políticos considerados tradicionales y que habían ejercido hasta ahora la presidencia: el PAN y el PRI. (Moreno, 2018)

En consecuencia, se podrá definir que los clivajes prevalecientes en el contexto de las elecciones mexicanas pasaron de la perspectiva «democracia / autoritarismo» (como sinónimo de una lucha integral contra el PRI), hacia definirse en los términos deseados por la izquierda encabezada por MORENA, al proponer una disyuntiva de confrontación entre «neoliberalismo PRI-AN corrupto versus

nacionalismo popular anti-corrupción», lo cual permitió generar un realineamiento de identidades de carácter fuertemente emocional y asociado además a la fuerza carismática del liderazgo generado por el candidato triunfante Andrés Manuel López Obrador (Casar, 2018).

Bajo estas condiciones, resulta muy significativo valorar que la idea del «autoritarismo» como expresión del régimen mexicano, tan vigente en los estudios de la política comparada a partir de trabajos clásicos como los de Daniel Cosío Villegas (1972), José Luis Reyna (1976), Arnaldo Córdova (1972), Miguel Basañez (1990), Juan Molinar Horcasitas (1991) o Enrique Krauze (1997) (entre muchos otros), se vieron relegados al tenerse que concentrar y (re) definir los retos del naciente sistema político en términos de su nuevo talante democrático, tal y como se puede destacar posteriormente en autores como José Woldenberg (2012), Héctor Aguilar Camín (2018), Roger Bartra (2009) o Soledad Loaeza (2008), por ejemplo, quienes llegarían a postular las condiciones de arribo a una etapa organizativa del sistema político plenamente democrática, si bien ahora, como producto de las condiciones en que va evolucionando el gobierno a partir del ejercicio del poder por el presidente AMLO, esto comienza a ponerse en duda e incluso ya se habla de un proceso de «restauración» de las prácticas asociadas con un esquema de corte más neo-presidencialista y que ofrece menos espacios de tolerancia y pluralismo con respecto a las actividades y críticas desde el campo de la oposición, al reducirlas como expresiones de «conservadurismo reaccionario», si bien esto se encuentra colocado todavía en el ámbito de los debates e intercambios generados desde los espacios mediáticos y redes sociales.

IZQUIERDA Y DERECHA EN EL MARCO DE LAS CONTIENDAS POLÍTICAS DE LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA

Un rápido mapeo en torno a las características evolutivas de los debates públicos y sus efectos con respecto a los procesos electorales en México nos permiten identificar con cierta facilidad un proceso pendular en torno a la construcción de las preferencias ciudadanas existentes y cómo de alguna manera la presencia de un partido de centro de tipo *«catch-all»* (atrapa todo) y que a la vez ejerciera una capacidad de agente principal (partido pivote) había sido factible para determinar el carácter de las agendas de gobierno y legislativa en la operación del sistema político mexicano. Dicha condición como centro político e ideológico permitió especialmente que el PRI pudiera ejercer dicho papel durante buena parte del siglo pasado. Primero, porque se generaron las condiciones de regulación legal para impedir que hubiera un esquema de competencia efectiva, dada la ya mencionada dosificación de registros a los partidos para que pudieran presentarse a elecciones (la cual fue controlada inicialmente desde la Secretaria de Gobernación y su agencia como lo fue la Comisión Federal Electoral), que terminaría dando paso al esquema actual de organismo autónomo del Estado, bajo la figura de una instancia administrativa de alcance central y nacional, como lo es el Instituto Nacional Electoral (INE, surgido en 2014), mismo que se remonta a su antecesor, el Instituto Federal Electoral (IFE, creado en 1990).

Y en segundo lugar, porque a partir de las lentas negociaciones y concesiones en materia de reformas político-electorales derivadas a partir de 1977, se fueron dando elementos muy precisos y rígidos para permitir el acceso de nuevas agrupaciones partidarias, pese a que primero los umbrales de registro eran bajos y daban la posibilidad de intentar registrarse en procesos consecutivos. Esto se fue diluyendo paradójicamente hasta llegar ahora a los niveles donde sólo se permite la solicitud de nuevos registros cada seis

años, además de que se impide formar alianza con otros partidos en una primera elección; y pese a la presencia de un régimen de coaliciones, los partidos deben demostrar por separado que poseen un umbral mínimo de votación individual para retener su registro nacional, colocado actualmente en 3 por ciento de la votación. (Solís Acero, 2018)

Visto así, mucho se puede poner en duda de que el «mercado electoral» haya sido abierto y sensible a permitir una autentica puerta de entrada para alentar la participación ciudadana organizada, sino que claramente los registros partidarios se sometieron a un proceso de negociación y protección cuyo objeto era mantener debilitadas a las fuerzas que tuvieran mayor posibilidad de construir una oposición capaz de derrotar al partido hegemónico priísta, como lo fue precisamente en un primer momento el PAN, y luego a partir de 1988, la presencia de una coalición de fuerzas políticas que surgen derivadas de la ruptura interna del propio PRI desde su lado izquierdo, y cuya ala «progresista» decidió confrontar a su vertiente conservadora a partir de las elecciones de 1988 aprovechando a los partidos satélites como el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) y el Partido Popular Socialista (PPS), así como implicaría vincularse a los partidos con un pasado de izquierda social y radical de corte marxista, en especial el Partido Mexicano Socialista (último heredero directo del viejo Partido Comunista Mexicano nacido en 1919), el cual de manera concreta se sumaría a la presencia del llamado Frente Democrático Nacional, mismo que posteriormente daría paso al Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 1989, aunque ello no evitó que el PRI reactivara la mecánica de alentar la formación de nuevos partidos en ambos lados del espectro ideológico para disminuir la fuerza de las organizaciones opositoras «autenticas», como se visualizaba respectivamente al PAN y el PRD, cuestión que a su vez comenzaría a motivar la perspectiva de que ambas fuerzas deberían unirse

para generar bloques opositores de amplio rango a fin de lograr derrotar al PRI en los diversos niveles de contienda a lo largo y ancho del territorio nacional. (Astudillo, 2018)

Una consecuencia y crítica constante a este tipo de planteamiento se sustentaría en la idea de calificar a dichos esfuerzos como «alianzas anti-natura», justo al ir en contra del «sentido común» que hacía manifiesto que dos plataformas ideológicas distintas y opuestas entre sí no eran viables electoralmente hablando. Esto es, se considera que este tipo de acciones confunden al electorado en la medida que no había certeza en torno a cómo un programa de gobierno u acciones legislativas propuestas por fuerzas tan disímbolas pudieran ser la expresión de un gobierno democrático y responsable. De esta manera, el PRI regularmente buscaba maximizar el potencial de inconsistencia ideológica que representaban este tipo de propuestas, hablando usualmente en términos primero de «los enemigos de la Revolución Mexicana o del sistema», mientras que por el lado contrario, los argumentos centrales tanto del PAN como el PRD se irían concentrando en la importancia de que la lucha política debía orientarse a generar condiciones auténticas para generar la alternancia democrática en los gobiernos en condiciones de respeto al sufragio, para luego entonces avanzar en la reconformación de las instituciones de gobierno a efecto de combatir situaciones ya inoperantes como la inseguridad, la corrupción y las crisis económicas a las que estaba expuesto el país. Si bien las alianzas entre ambas fuerzas opositoras pudieran parecer inciertas, la parte importante a considerar era alentar a la población para que pudieran darse pasos sustantivos en la ruta de desmontar al régimen autoritario. (Reynoso, 2011)

Una evidencia importante es que el PAN y el PRD pudieron presentar a lo largo de las años noventa y en las 2 décadas del siglo actual, un número sobresaliente de alianzas en los ámbitos estatales y municipales para combatir de manera común al PRI,

cuestión que curiosamente nunca pudo concretarse para el caso de las elecciones presidenciales, con excepción precisamente de las pasadas elecciones de 2018, guiados en este caso por la lectura de que su alianza permitiría generar un polo centrista y moderado para así colocar en los extremos a los partidos que consideraban eran simplemente una continuidad del antiguo régimen priista con sus 2 alas clásicas; la popular-nacionalista (MORENA) y la tecnocrática-conservadora (PRI), generando desde las etapas iniciales de la transición del régimen autoritario lo que pensadores como Rolando Cordera y Carlos Tello identificaron con mucha oportunidad como «La disputa por la Nación».

Dicha lectura, a la luz de las descalificaciones que recibirían por parte de MORENA, es que el PAN y el PRD, en sus ejercicios de coaliciones en los gobiernos estatales, no pudieron hacer una gran diferencia, a la vez que dentro del plano federal no fueron capaces de exigir al PRI modificaciones sustantivas en el marco del Pacto por México. Y dicha crítica era más clara hacia el PAN en la medida que se consideraba que no había promovido buena parte de los cambios prometidos cuando dicha organización tuvo en sus manos la presidencia del país durante dos periodos. (De Andrea Sánchez, 2018)

Ahora bien, guiándonos sobre la premisa de los campos temáticos que harían clara una identificación primaria con respecto a las preferencias de los electores de cara a las ofertas programáticas que les presentan los partidos, cabe decir que el proceso pendular y condiciones de concentración de los votantes muestra un proceso de volatilidad que pasó desde la izquierda (1988) hacia la derecha (2000), para irse desplazando nuevamente hasta llegar al momento actual que se presenta con el regreso de las opciones de corte nacionalista y neo-populista enarboladas por MORENA, y que detrás suyo se suman expresiones sociales de corte diverso como las que aglutinan a grupos ambientalistas, feministas, pueblos

originarios, jóvenes o de la diversidad sexual por ejemplo, mientras que desde el campo de la derecha se estarían manteniendo esencialmente grupos más asociados con los nuevos emprendimientos empresariales como los que caracterizan a los que poseen nexos o ligas con el desarrollo global y de alta tecnología, lo que implica el surgimiento de demandas mayores en materia de seguridad, derechos humanos y otros temas similares, pero los cuales también no impiden ubicar la continuidad de una derecha tradicional conservadora centrada esencialmente en los aspectos propios de la religiosidad y la actividad e intervención creciente de las iglesias dentro de los asuntos públicos. (Masferrer, 2018).

De esta forma, el espectro dentro del cual se mueve la derecha mexicana permite caracterizarla bajo las condiciones internas de su carácter tradicional-conservador (con fuertes bases de organizaciones religiosas, que van desde el catolicismo hasta las nuevas expresiones políticas asentadas en grupos evangélicos, similares a los encontrados en otras partes de América Latina), que rechazan agendas de políticas públicas que afecten a sus creencias importantes como lo son la preservación de las familias nucleares o su abierto rechazo a derechos como el aborto, las uniones entre personas de un mismo sexo y las adopciones uniparentales, así como acciones relacionadas con la eutanasia o la voluntad anticipada. Pero sobre todo, destaca la continuidad de su rechazo a cualquier tipo de presencia por parte del Estado en la definición de aspectos como la impartición de los contenidos educativos. Y esto contrasta notablemente con la presencia de segmentos liberales, laicos y modernos, en donde se ha asentado un claro convencimiento de valores como la tolerancia, la defensa de libertades esenciales como las de expresión y emprendimiento, con una baja intervención del aparato estatal en la conducción económica.

GRÁFICO N.1
ORIENTACIÓN ECONÓMICO-POLÍTICA DE LOS GOBIERNOS
(MÉXICO, 1988-2018)

Fuente: Elaboración propia.

Considerando los elementos aquí expuestos, resulta importante captar entonces que los procesos de alternancia y liberalización en un primer momento dieron paso igualmente a una dinámica de mayor pluralismo y reconocimiento de los triunfos provenientes de la oposición no priísta en ambos lados del espectro ideológico, abriendo así espacio para que también comenzarán a generarse

regiones o bastiones de hegemonía controlados en este caso, precisamente por partidos como el PAN y el PRD, lo cual dio pauta a su crecimiento político y paradójicamente, también dentro de la ruta de su cartelización y formación de clientelas, lo que abonaría en el abandono paulatino de la formación ideológica de sus cuadros, así como en la minimización sustantiva de temáticas clave más allá de su mera enunciación dentro de sus documentos básicos y sus plataformas electorales.

Si bien el país se fue fragmentando en mercados electorales más amplios, en la medida que se llega a tener prácticamente un país dividido en tres grandes segmentos, esto igualmente se comienza a observar en la representación partidaria presente en las 2 cámaras legislativas federales. El proceso de construcción de consensos obliga entonces a tener que ir forjando acuerdos y mecanismos que tengan más por objeto garantizar la superación de vetos entre sí, aunque por otra parte deriva que pueda haber temas de corte amplio susceptibles de obtener aprobación.

En la práctica, las tres fuerzas principales se van moviendo paulatinamente hacia un punto de equilibrio y moderación con respecto a sus demandas básicas, cuestión que comienza a ser criticado, al considerarse que ello estaba deteniendo al proceso de transición y el desmantelamiento del viejo sistema autoritario, lo que justamente motiva a escisiones desde el campo de la izquierda, misma que comenzará a encabezar AMLO al punto de romper con el PRD y decidirse a formar una nueva agrupación como lo sería MORENA. Pero también ocurrirá desde el lado derecho de la oferta política, en la medida que se separa un segmento del PAN, encabezado por el expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala, quienes al igual que el ex priísta Jaime Rodríguez Calderón (quien resultaría electo como el primer gobernador independiente del país), tomarían la ruta de intentar postularse a la presidencia

sin contar con respaldos partidistas, pero buscando captar votos y militantes desde el campo de la derecha.

Para el caso del PAN, el efecto de dicho desfonde se intentó paliar con su acercamiento con el PRD (controlado ahora principalmente por la corriente Nueva Izquierda, de carácter moderado), pero ello no impidió que posterior a los malos resultados de las elecciones de 2018, se diera un proceso de renovación de liderazgos internos que por el momento, sólo ha permitido cohesionar a una coalición que contiene a liderazgos regionales con escaso impacto en la construcción de una agenda opositora, a pesar de que el PAN se mantenga como la segunda fuerza con representación política dentro de las cámaras legislativas.

Y en el ámbito del PRI, pese a que emprendió igualmente una renovación de sus liderazgos nacionales posterior a los comicios de 2018, sus escisiones han seguido dándose sobre todo a partir de los escándalos de corrupción rampante generados por varios de los gobernadores asociados con la coalición que alentó al ex presidente Enrique Peña Nieto, quien a su vez no pudo sostener dichos acuerdos internos, mismos que profundizó al escoger como potencial sucesor a un funcionario que provenía de los grupos financieros tecnocráticos, pero que al mismo tiempo había colaborado con las administraciones panistas. Con ello, y más las presiones de la propia corrupción atribuida al propio Peña Nieto, la unidad entre los grupos regionales ha vuelto a colocarse en el mismo punto de quiebre como los que se habían observado en los comicios de 2000 y 2006, incluso ahora con un resultado mucho más dramático con respecto a la baja votación que se recibió en la pasada elección presidencial, misma que lo ha colocado en un nivel de partido marginal.

En consecuencia, no resulta sorprendente por tanto que conforme se fue dando un proceso de fuerte incremento en la

personalización de las campañas se generara entonces una reducción de las temáticas a cuestiones esenciales, apelando así a las emociones y contextos coyunturales. De esta forma, lo que se puede calificar como un desalineamiento en términos de las tendencias observadas, es también un inusual proceso de reconcentración y hegemonización por un partido de corte «atrapa-todo» a la vieja usanza del régimen.

No resultaría extraño ver entonces este proceso, dado que en muchas de los procesos transicionales puede identificarse cómo la mecánica de cambios liberalizadores y democratizadores fue insuficiente, lo que da pauta para que las fuerzas reconvertidas del viejo régimen (muchas veces sólo con nuevas etiquetas y adaptadas a las condiciones de competencia), puedan tener un retorno al poder; o bien finalmente hacerse del mismo, en tanto sean fuerzas que nunca lo hayan ejercido y por ello el electorado les brinde la oportunidad para hacerlo, si bien se corre el riesgo de que se emprendan acciones igual de radicales en su carácter autoritario con respecto a las que venían criticando en materia de ajustes económicos y controles políticos.

ESCENARIOS Y PERSPECTIVAS

En virtud de que la base de la investigación que sostiene a este ensayo se encuentra en proceso, particularmente en lo relativo al estudio comparado de las plataformas electorales que han sido presentadas por los partidos políticos participantes dentro del periodo seleccionado y que se pretendería tratar en otro momento, no deja de ser interesante poder anticipar algunos elementos de análisis derivados de las condiciones de volatilidad entre bloques que se muestran entre las fuerzas de derecha e izquierda.

Como puede verse en el cuadro que se presenta a continuación, el esquema de contienda partidaria no ha estado exento de tener

una variedad importante de fuerzas en ambos lados del espectro ideológico. Y de manera específica, esta situación se puede ver asociada con las estrategias que se indicaban líneas atrás en lo relativo de alentar y / o fragmentar en su caso a la oposición según se fuera considerando la necesidad del propio régimen.

CUADRO N. 1
SISTEMA DE PARTIDOS POLÍTICOS MEXICANOS 1976-2018
(ALINEAMIENTO IDEOLÓGICO FORMAL IZQUIERDA-DERECHA)

Para el estudio de los alineamientos consideramos al PRI como el partido central o pivote del sistema entre 1976 y 2000, mientras que el PAN ocupa dicho espacio a partir del año 2000 al 2012, regresando al PRI entre 2012 y 2018, y finalmente ubicar a MORENA como el partido que ocupa dicho espacio a partir de 2018. La línea vertical indicaría la división formal imaginaria existente entre izquierda y derecha. ginaria existente entre izquierda y derecha. Los partidos marcados con *cursiva* significan que se movieron de su nicho ideológico natural para sumarse a una coalición «anti-natura». Los partidos resaltados en **negrita** son los partidos que poseen la presidencia.

1976
[PPS-PARM-**PRI**] | PAN

1979
PCM-PST-PPS-PARM-**PRI** | PAN-PDM

1982
PRT-PSUM-PSD-PST-PPS-PARM | **PRI** -PAN-PDM

1985
PRT-PMT-PSUM- PST-PPS-PARM | **PRI** -PAN-PDM

1988
FDN
PRT-[*PMS*-PFCRN-PPS-PARM] | **PRI** -PAN-PDM

El candidato del PMS declinó a favor del candidato del FDN, pero ya no pudo modificarse dicho cambio en las boletas, si bien sus votos si contaron para la candidatura común.

CUADRO N. 1
SISTEMA DE PARTIDOS POLÍTICOS MEXICANOS 1976-2018 *CONT.*

1991

PT-PRD-PFCRN-PPS-PARM | **PRI** -PEM-PAN-PDM

1994

PT-PRD-PFCRN-PPS-PARM | **PRI** -PVEM-PAN-UNO

1997

PT-PRD-PC-PPS-PARM | **PRI** -PVEM-PAN-PDM

2000

AM ↓ APC
[PT-CD-PRD-PSN-*PAS*]-DS-PCD-*PARM* | PRI - [PVEM-**PAN**]
↑

El PAS (antes UNO) se corre de la derecha a la izquierda. El candidato del PARM decidió declinar a favor de la APC en los días previos a la elección, aunque ya no se pudieron modificar las boletas.

2003

APT
PT-Convergencia-PRD-MP-FC-PSN | PLM - (PRI-PVEM)-**PAN**-PAS

2006

CBT APM
(PT-Convergencia-PRD)-PASDC | [PRI-PVEM]-PANAL-**PAN**

2009

SM PM
(PT-Convergencia)-PRD-PSD | [PRI-PVEM]-PANAL-**PAN**

2012

MP CM
(PT-MC-PRD) | [**PRI**-PVEM]-PANAL-**PAN**

2015

IP
MORENA-[PT-PRD]-MC | [**PRI**-PVEM]-PANAL-PH-PAN-PES

El PRI y el PVEM establecieron un convenio de coalición pero sin darle denominación a la misma.

2018

JHH TM ↓ MF
[PT-**MORENA**] | [*PRD-MC*] [PRI-PVEM-PANAL]-PAN-«Ci-Bronco»-«CI-MZ»-*PES*
↑

Dos candidaturas independientes lograron cumplir requisitos: Jaime Rodríguez Calderón «El Bronco» y Margarita Zavala Gómez del Campo. Ésta última declinó continuar en la contienda posterior al primer debate presidencial. El PES decide correrse desde su espacio de derecha para sumarse a la candidatura de MORENA, mientras que los partidos PRD y MC deciden correrse hacia el centro a efecto de coincidir en una coalición con el PAN.

LISTA DE PARTIDOS

PAN	Partido Acción Nacional
PRI	Partido Revolucionario Institucional
PPS	Partido Popular Socialista
PARM	Partido Auténtico de la Revolución Mexicana
PST	Partido Socialista de los Trabajadores (1
PCM	Partido Comunista Mexicano
PDM	Partido Demócrata Mexicano
PRT	Partido Revolucionario de los Trabajadores
PSD	Partido Social-Demócrata
PSUM	Partido Socialista Unificado de México
PMT	Partido Mexicano de los Trabajadores
PFCRN	Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional
PT	Partido del Trabajo
PEM	Partido Ecologista Mexicano
UNO	Unión Nacional Opositora
PVEM	Partido Verde Ecologista de México
PC	Partido Cardenista
CD	Convergencia por la Democracia
PCD	Partido del Centro Democrático
PSN	Partido de la Sociedad Nacionalista
PAS	Partido Alianza Social
DSPPN	Democracia Social-Partido Político Nacional
PLM	Partido Liberal Mexicano
FC	Fuerza Ciudadana
MP	México Posible
C	Convergencia
PANAL	Partido Nueva Alianza
PASDC	Partido Alternativa Social-Demócrata y Campesina
PSD	Partido Social Demócrata (distinto al de 1982)
MC	Movimiento Ciudadano
PH	Partido Humanista
PES	Partido Encuentro Social

LISTA DE COALICIONES

FDN	Frente Democrático Nacional
AM	Alianza por México
APC	Alianza por el Cambio
APT	Alianza para Todos
CBT	Coalición por el Bien de Todos
APM	Alianza por México
SM	Salvemos a México
PM	Primero México
MP	Movimiento Progresista
CM	Compromiso por México
IP	Izquierda Progresista
JHH	Juntos Haremos Historia
MF	Por México al Frente
TM	Todos por México

Fuente: Elaboración propia

De lo que puede observarse al ver los esquemas de alineamientos izquierda-derecha aquí presentados, se puede concluir que en la medida que hay una oferta «excesiva» dentro de alguno de los polos ideológicos, ha resultado más factible el triunfo para alguna de las coaliciones o partidos en lo individual, como claramente se observa en los casos del PAN-PVEM-PARM en el año 2000, y para MORENA-PT-PES en el contexto de las elecciones de 2018, mismas que se pueden ver como los dos grandes desalineamientos que ha tenido el sistema partidario en el marco de la transición. En el caso del retorno del PRI en 2012, se podría valorar como una suerte de desplazamiento a la «izquierda», aunque esto en relación a la postura que generaba el PAN dentro de la identificación ideológica.

Otra anotación relevante que nos puede servir como una hipótesis de trabajo adicional, es que justamente los cambios dentro del sistema de partidos no han sido tan radicales ni tan profundos como uno supondría, sino que en por lo general, todas las formaciones ganadoras lo han logrado a partir de un esfuerzo por presentar un discurso tendiente a la moderación, si bien para el caso de la elección pasada, así como en la de 2006, se dieron fuertes evidencias de una polarización que se decanta por seleccionar entre la candidatura o coalición más fuerte en ambos lados del espectro ideológico.

La persistencia de dicho esquema de antagonismo polarizado hasta el presente hecho por parte por el gobierno de AMLO indicaría que a la par de ejercer sus números mayoritarios obtenidos en ambas cámaras legislativas, hay una pretensión significativa por «restaurar» una política de corte hegemónico, misma que a su vez implican algunos riesgos importantes en lo relativo a modificar la presencia de ciertas libertades y derechos, en tanto fueron institucionalizándose como parte misma del proceso democrático transicional, como por ejemplo, el papel de los organismos autónomos,

la relación con los medios de comunicación y la operación de economía de libre mercado.

En síntesis, la persistencia de un modelo de competencia electoral en los términos hasta ahora pactados se encuentra ciertamente en riesgo a partir de las acciones que desea emprender el nuevo régimen a efecto de «abaratar los costos» y «reducir la presencia excesiva» tanto de los órganos electorales como de la propia oposición, apelando igualmente a la potencial reducción del tamaño de las cámaras legislativas, lo que paradójicamente impulsaría una concentración significativa del poder y de la inequidad de los procesos electorales por cuanto ahora se presenta la mecánica de la reelección a aplicarse precisamente a partir de la presente legislatura en ambas cámaras. Esto último podría dar pauta efectivamente a una reconcentración de fuerzas, pero igualmente con riesgo de que se tengan dinámicas con clivajes muy polarizados, los cuales no necesariamente serían de tipo ideológico, sino de abierta confrontación entre liderazgos personalistas surgidos desde ambos lados del espectro.

El sistema electoral y partidario mexicano no ha sido uno de fácil construcción, si bien ahora requiere de acuerdos que optimicen su desempeño bajo la idea de que se recupere la confianza entre las propias fuerzas políticas y el electorado. Aquí se encuentra por el momento la parte más delicada que debe obligar a un esfuerzo significativo que no nos lleve de vuelta a las condiciones previas de un sistema hegemónico-autoritario como el que prevaleció durante buena parte del siglo pasado, sino que nos pueda llevar a la instauración de un esquema eficaz y acorde con las necesidades del presente siglo.

Puede afirmarse así que los desafíos para el reagrupamiento de la derecha mexicana pasan evidentemente por calibrar en qué medida el electorado mexicano resulta capaz de distinguir y reubicar

conceptos ideológicos que parecen caer sin matices dentro de un mismo saco: liberal, conservador o fascista, pero que en los hechos no facilitan en mucho asumir cómo hay un amplio espectro de organizaciones que se colocan entonces como abanderados de los mismos. Y por otra parte, cabe ubicar las condiciones de agenda desde las cuales no sólo se trate de generar una simple dinámica reactiva para oponerse a todo lo que surja desde el gobierno lopez-obradorista, sino que ello permita revisar sus bases organizativas y de vinculación con sus militancias en lo particular, así como la ciudadanía y electores en lo general.

Será entonces muy importante observar si dentro del proceso de inscripción de nuevas formaciones partidarias de cara primero a las elecciones federales de 2021 y posteriormente hacia las de 2024, pudiera surgir alguna que adopte un estilo de liderazgo carismático populista procurando enaltecer dinámicas de «mano dura» (ya observado por ejemplo en el caso de la candidatura independiente de Jaime Rodríguez cuando en uno de los debates presidenciales de 2018 aludió al uso de las mutilaciones corporales como castigos aplicables a los criminales); o incluso llamando abiertamente a los segmentos clásicos de las bases de la derecha (iglesias, ejercito y empresarios) a construir acciones de movilización y confrontación directas con el régimen.

Por el momento, lo que se observa en el panorama se constriñe a un mero «reciclamiento» de figuras y espacios, como lo representan la escisión panista de México Libre encabezada por la dupla Felipe Calderón y Margarita Zavala, así como por la organización Redes Sociales Progresistas, promovida por la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, en un claro esfuerzo por recuperar el espacio que desarrolló a partir de 2005 con la creación del Partido Nueva Alianza, mismo que precisamente perdió su registro nacional en los comicios federales de 2018, que se reveló por su intento de auto-adscribirse como una formación política de corte liberal,

incluso adhiriéndose a la Internacional de partidos identificados con dicha filiación política. Sin embargo, su intento por ser un partido «bisagra» para maximizar su espacio le llevó a un ejercicio de coaliciones primero con el PAN y luego para desplazarse hacia el lado del PRI, lo cual terminaría por desdibujar su naturaleza y presencia entre los electores.

De esta manera, la reconstrucción y reencauzamiento de las organizaciones y discurso de corte derechista también obligarán a posicionamientos importantes a los partidos tradicionales como el PRI y el PAN. Otros partidos como el Verde decidieron realizar un salto pragmático para deslizarse a una alianza con MORENA. En cambio, cabe dar una atención especial al Partido Encuentro Social, que si bien perdió su registro en las pasadas elecciones a pesar de haber sido parte de la coalición ganadora en 2018, se halla en una condición sui generis de apoyar al régimen gracias a los escaños legislativos logrados dentro de la coalición «Juntos Haremos Historia», aunque está en puerta la renovación de su registro legal ahora como Partido Encuentro Solidario. No es el primer caso en la historia partidaria mexicana en donde una agrupación de corte religioso se desplaza desde la derecha hacia montar una alianza con un movimiento de izquierda, partiendo de sus afinidades de agenda social. Esto ocurrió en el año 2000 con el partido PAS (Partido Alianza Social), el cual tuvo sus orígenes en los grupos católicos sinarquistas que habían sostenido registros electorales desde el Partido Demócrata Mexicano (PDM), y cuyos orígenes se remontan hasta mediados del siglo pasado con el partido Fuerza Popular.

De cara a estos procesos, la larga noche en que se encuentra inmersa la derecha mexicana se torna así en un objeto de estudio muy relevante y de cara a la propia valoración que las instituciones políticas deben valorar factores como la alternancia democrática y dentro de las cuales estas organizaciones poseen igual responsabilidad de propuesta y exigencia.

Aquí resulta de suyo importante considerar que al igual que como ocurrió en los años ochenta y noventa, la defensa de ciertos elementos mínimos del Estado de Derecho democrático puedan reencontrar en los espacios partidarios civilistas a un contenedor de las orientaciones polarizantes y confrontacionales como las que parecen guiar al accionar de quienes detentan al gobierno mexicano actual en sus orientaciones restauracionistas del autoritarismo y presidencialismo tradicionales.

Sin duda, no sería para nada recomendable que dentro de este contexto aquí descrito, a pesar de lo intenso que se ha convertido el debate político en el marco de la llamada «Cuarta Transformación» del régimen, que se diera un agotamiento del diálogo político y se comenzaren a invocar alusiones o salidas vinculadas con la deposición de los gobernantes fuera de las vías institucionales so pretexto de las exigencias de preservar el orden y la seguridad nacionales. Esto sin duda, sería un elemento de fracaso que no sería deseable en lo absoluto, dado el propio pasado mexicano en materia de la presencia de los militares y sus aparatos represivos han dejado secuelas muy profundas que son precisamente un factor que sigue estando pendiente en materia de justicia y reconciliación, como lo atestiguan las luchas y movimientos sociales desarrolladas en contra del autoritarismo a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, así como en contra de las desapariciones, inseguridad e incertidumbre generadas por el crimen organizado en lo que va de la presente centuria Sin duda, aquí prevalece uno de los desafíos más relevantes que pueda dar definición al sentido con que la democracia mexicana puede finalmente surgir sin imposturas ni falsos mesianismos.

REFERENCIAS

Aguilar Camín, Héctor (2018). *Nocturno de la democracia mexicana.* Ensayos de la transición. México: Debate.

Ai Camp, Roderic (2018). *La política en México. ¿Consolidación democrática o deterioro?* México: FCE.

Astudillo, César (2018). *El derecho electoral en el federalismo mexicano.* México: UNAM-IIJ / INERHM / SEGOB / Sria. de Cultura.

Bartra, Roger (2009). L*a fractura mexicana. Izquierda y derecha en la transición democrática.* México: Debate.

Basañez, Miguel (1990). *El pulso de los sexenios. 20 años de crisis en México.* México: Siglo XXI Editores.

Brachet Márquez, Viviane (1996). *El pacto de dominación. Estado, clase y reforma social en México (1910-1995).* México: El Colegio de México.

Casar, María Amparo (2018). «Morena toma todo», en Bernardo Barranco (coord.), *AMLO y la tierra prometida. Análisis del proceso electoral 2018 y lo que viene.* México: Grijalbo, pp.151-171.

Casar, María Amparo y Ugalde, Luis Carlos (2018). *Dinero bajo la mesa. Financiamiento y gasto de las campañas políticas en México.* México: Grijalbo.

Cosío Villegas, Daniel (1972). *El sistema político mexicano. Las posibilidades del cambio.* México: Joaquín Mortiz.

Córdova, Arnaldo (1972). *La formación del poder político en México.* México: Ediciones Era.

De Andrea Sánchez, Francisco José (2018). *La selección de candidatos políticos y las plataformas electorales. Una guía para entender las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016 y de México en 2018.* México: UNAM-IIJ.

Krauze, Enrique (1997). *La presidencia imperial. Ascenso y caída del sistema político mexicano (1940-1996).* Madrid: Tusquets Editores.

Lijphart, Arend (2000). *Modelos de democracia. Formas de gobierno y resultados en 36 países.* Barcelona: Ariel.

Loaeza, Soledad (2008). *Entre lo posible y lo probable. La experiencia de la transición en México.* México: Editorial Temas de Hoy.

Masferrer Kan, Elio (2018). *Lo religioso dentro de lo político. Las elecciones de 2018.* Buenos Aires: Libros de la Araucaria.

Molinar Horcasitas, Juan (1991). *El tiempo de la legitimidad. Elecciones y autoritarismo y democracia en México.* México: Ediciones Cal y Arena.

Moreno, Alejandro (2018). *El cambio electoral. Votantes, encuestas y democracia en México.* México: FCE.

Reyna, José Luis (1976). *Control político, estabilidad y desarrollo en México.* México: El Colegio de México. (Cuadernos del CES, n.3)

Reynoso, Diego (2011). *La estrategia dominante. Alianzas electorales en los estados mexicanos, 1988-2011.* Buenos Aires: Editorial Teseo / FLACSO-Argentina.

Solis Acero, Felipe (2018). *Reforma político-electoral.* México: FCE.

Woldenberg, José (2012). *Historia mínima de la transición democrática en México.* México: El Colegio de México.

El conservadurismo paraguayo: un análisis del gobierno de Mario Benítez

Sarah Patricia Cerna Villagra[1]

INTRODUCCIÓN

La primera característica que comparte Paraguay con sus pares del Cono Sur es su impronta autoritaria en el siglo XX; este país mediterráneo también tuvo un régimen autoritario en el siglo pasado, pero a diferencia de sus pares, fue el más longevo de esa centuria. El régimen autoritario de Alfredo Stroessner se hizo del poder vía un golpe de Estado militar en mayo de 1954 y sólo pudo ser derrocado por otro golpe militar en febrero de 1989. La historia política previa al gobierno autoritario de Stroessner se caracteriza por la alternancia violenta en el poder entre colorados y liberales, luego por un periodo largo de autoritarismo con rasgos sultanistas (Linz, 1996) del régimen stronista, para posteriormente transitar a una democracia frágil con una fuerte herencia institucional y cultural de corte autoritario.

Como lo sostienen Cerna y Solís (2019: 261) a casi tres décadas de la transición hacia la democracia, se podría decir que los procesos electorales son más la regla que la excepción y que, en ese sentido, Paraguay es una democracia electoral consistente por lo que se refiere a la regularidad con la que se han celebrado seis

1 Politóloga, Catedrática CONACyT- El Colegio de México.

elecciones generales desde 1993. Sin embargo, y a pesar de la formalidad electoral que se repite cada cinco años desde entonces, Paraguay es catalogado como uno de los países con mayor inestabilidad política en la región a causa de los recurrentes acontecimientos disruptivos de su vida política cruzada por asesinatos políticos (1999), intentos de golpes de Estado (1996), protesta social (2006, 2017), escándalos de corrupción (2002), salidas anticipadas de los presidentes (1999) o juicios políticos (2012) (Pérez Liñán, 2009, 2014, 2017; Uharte, 2012; Abente, 2012, Cerna y Solís (2012, 2017, 2018).

En las tres décadas que lleva instaurada la democracia paraguaya, siete de un total de ocho gobiernos han sido del Partido Colorado, salvo el periodo comprendido entre abril de 2008 y junio de 2012, cuando un presidente no colorado, quien encabezó una alianza de movimientos de izquierda con el principal opositor a la ANR (Asociación Nacional Republicana), el PLRA (Partido Liberal Radical Auténtico), pudo acceder al poder por vía democrática y con ello cerrar 61 años de gobiernos colorados ininterrumpidos en el país.

Este capítulo busca brindar en un primer momento un breve recorrido de las principales características de la débil democracia paraguaya para luego concentrarse en las principales características del liderazgo y gobierno del actual presidente paraguayo Mario Abdo Benítez, quien junto con otros colegas mandatarios del Cono Sur, comparten ese giro a la derecha de la región (Londoño, Bonnefoy y Politi, 2017, diciembre 19; Quintana, 2018, octubre 28; Lissardy, 2017; Núñez, 2018, julio 19), y que, en el caso paraguayo, se denomina más bien un giro conservador y de carácter autoritario. El texto analiza el liderazgo y estilo de gobernar del actual presidente de Paraguay, Mario Benítez (2018-2023) quien se ha caracterizado por sus rasgos autoritarios y conservadores desde un discurso y una agenda que buscan: 1) defender la gestión

del gobierno autoritario de Stroessner (1954-1989); 2) promover la militarización de la juventud e implementar políticas de mano para combatir la violencia e inseguridad; 3) arremeter contra la igualdad de género por considerarla parte de la «ideología de género» extranjerizante y; 4) el acercamiento político-ideológico a sus pares de derecha y conservadores de Argentina y Brasil. Se sostiene que el actual gobierno de Paraguay se alinea con los gobiernos de derecha contemporáneos, pero, además, posee características autoritarias y conservadoras que evocan constantemente un legado oscuro de la historia política paraguaya: el stronismo.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA ENDEBLE DEMOCRACIA PARAGUAYA

Los 35 años que duró el régimen autoritario de Stroessner en Paraguay se caracterizaron por implantar de manera firme un sistema político y una cultura política caracterizada por el patrimonialismo del Estado; la corrupción como mecanismo de asegurar el funcionamiento estatal, y en gran medida, la interacción del Estado con la ciudadanía; la desigualdad en la distribución de la riqueza generada en el país (donde los amigos del régimen se llevaban todo y los enemigos, nada); enriquecimiento ilícito desde el gobierno; el militarismo en política y con fuerte presencia en la sociedad; la defensa de valores de derecha y conservadores, relacionados con la protección de la «familia tradicional», el nacionalismo, la religión católica y la persecución férrea de las disidencias tanto políticas como ideológicas (partidos y movimientos de izquierda y principalmente, comunistas) y hacia las minorías étnicas y sexuales.

Esta impronta stronista tanto en el sistema político como en la cultura política ha permeado toda la transición y consolidación democrática en Paraguay, afectando el desarrollo de instituciones propias del nuevo régimen y dejando poco espacio para nuevas formas de hacer política en el país que impliquen un desafío a los

valores citados anteriormente. La baja institucionalidad democrática en el país le debe mucho al legado stronista, del mismo modo que las prácticas de corrupción, el enriquecimiento ilícito o el patrimonialismo estatal que han minado la construcción de un Estado con instituciones democráticas. Al mismo tiempo, la cultura política ha estado caracterizada por fuertes rasgos autoritarios, conservadores y de intolerancia a la diversidad que han hecho muy difícil la tarea de consolidar espacios de disenso para sectores no alineados con el gobierno de turno.

Los siete gobiernos emanados de la ANR durante la democracia paraguaya han tenido sus particularidades propias. Tras el gobierno ejercido por el general Andrés Rodríguez, el primer presidente en acceder al gobierno vía elecciones democráticas fue Juan Carlos Wasmosy quien se caracterizó por su liderazgo de corte civil y empresarial en una élite caracterizada por políticos y militares. Para el siguiente periodo de 1998 a 1999, el breve gobierno encabezado por Rául Cubas (y detrás de él la imponente figura de Lino Oviedo a quien le debió su victoria) se caracterizó por sus rasgos militaristas y represivos que tuvieron su punto culminante con los enfrentamientos del denominado Marzo Paraguayo de 1999. Tras la renuncia de Cubas para evitar el juicio político, Luis González Macchi le sustituyó en el cargo hasta culminar el periodo constitucional en 2003 con un gobierno caracterizado por escándalos de corrupción y escasa gobernabilidad por la falta de legitimidad de origen. En agosto de 2003 llegó al cargo Nicanor Duarte quien se distinguió por conducir el gobierno más al centro del espectro político con respecto a sus antecesores, básicamente por las políticas públicas y sociales que implementó. A su vez, el gobierno de Horacio Cartes se caracterizó por ser el más pragmático por su corte empresarial y tecnócrata. Y por último, el gobierno de Mario Abdo representa a ese coloradismo militante que apela a valores relacionados con el periodo autoritario que se mantuvo más de tres décadas en el

poder, el ala más dura de la ANR donde se encuentran los viejos colorados nostálgicos del stronismo con los jóvenes colorados «de verdad» que buscan distinguirse del ala cartista caracterizados por su escasa trayectoria política y poca militancia en el partido.

EL CONTEXTO ELECTORAL QUE DIO ORIGEN AL GIRO NEOCONSERVADOR EN PARAGUAY

En primer lugar, cabe destacar que, si bien es cierto que la ANR es una maquinaria electoral robusta y sostenible en el tiempo, tal y como se ha señalado con anterioridad, no por ello ha sido ajena al faccionalismo al interior de la misma. Prueba de ello han sido las recientes divisiones que sufrió el partido de cara a las elecciones de abril de 2018. Estas fracturas dejaron mella, por ejemplo, en la conformación del poder legislativo, la composición de las gobernaciones departamentales y en la posibilidad de estabilidad y gobernabilidad para el presidente electo. A continuación, se explican los orígenes y repercusiones de la división al interior de la ANR en la campaña electoral y posteriormente en el gobierno colorado vigente.

LA DIVISIÓN INTERNA DE LA ANR: COLORADO AÑETETÉ *Y HONOR COLORADO*[2]

En las elecciones internas de la ANR con miras a las elecciones presidenciales de abril de 2018, se disputaron dos liderazgos muy diferentes entre sí, que han abierto una división difícil de zanjar entre dos facciones, aún después de la victoria electoral de este

2 Cabe señalar que parte del análisis sobre la división interna de la ANR, así como de las candidaturas y los programas de Mario Abdo Benítez y Efraín Alegre han sido presentados en el texto «Fricción: (re) concentración y afianzamiento político conservador tras las elecciones de 2018 en Paraguay» de Solís Delgadillo, Juan Mario; Cerna Villagra, Sarah Patricia (2019) publicado en la *Revista Estudios Políticos*, Nro. 54, pp. 1-24.

partido en las elecciones generales de 2018. Como apuntan Solís y Cerna (2019: p. 256), por un lado, el movimiento Honor Colorado, facción política del ex presidente Horacio Cartes, presentó como pre-candidato presidencial a Santiago Peña, un joven tecnócrata que estuvo al frente del Ministerio de Hacienda durante dos años (2015-2017). Peña representaba la figura tecnocrática de los ministros que acompañaron la gestión de Cartes, sin embargo, tenía un pasado en el Partido Liberal, formación universitaria en Estados Unidos y experiencia laboral en el Fondo Monetario Internacional. Ante la propuesta de Cartes para sucederlo en el cargo, Peña no pudo ceder ante la presión cartista y tuvo que renunciar al PLRA y afiliarse a la ANR en plena convención partidaria para no quedarse sin la cartera que dirigía (*Ultima Hora*, 2016). Por el otro bando, se encontraba la facción del hijo del ex secretario privado de Alfredo Stroessner, Mario Abdo Benítez, quien creó el movimiento político Colorado *Añeteté,* a través del cual contendió en las internas coloradas en noviembre de 2017.

Solís y Cerna (2019: pp. 265-266) señalan que las principales diferencias entre ambos candidatos eran sus posturas en torno a temas como: 1) la reforma constitucional; 2) la reelección presidencial; 3) los bonos soberanos; 4) el aborto; y 5) la unión civil de personas del mismo sexo. Mientras que Santiago Peña sentó una postura más liberal-progresista en algunos puntos, el candidato de Colorado *Añeteté* fue firme en su rechazo a todo tipo de reformas progresistas en el ámbito de los derechos de las minorías en el país.

Durante la pre-campaña, Peña pronunció públicamente que no estaba a favor de una reforma constitucional porque la sociedad paraguaya «no está madura para poder debatir a profundidad todos los puntos que se pueden plantear en una reforma» (*Telefuturo,* 2017), pero sí señalaba que estaba de acuerdo con la reelección

vía enmienda constitucional porque es la forma «más democrática» para que la ciudadanía incida en dicha decisión (Solís y Cerna, 2019: p. 265). Con respecto a temas económicos, Peña consideraba que los bonos soberanos son útiles para el desarrollo económico del país y en cuanto a la agenda más polémica de los derechos civiles, este pre-candidato colorado señalaba que aún no tenía definida su postura en torno al aborto pero que estaba «abierto al debate». Por otro lado, y con respecto al matrimonio igualitario, el político cartista sí consideraba que las personas «deberían tener la posibilidad de decidir con quién unirse de manera civil» (*Telefuturo*, 2017).

A su vez, sobre estos mismos temas, Mario Abdo afirmó que sí estaba de acuerdo con una reforma y que en caso de ganar llamaría a una asamblea constituyente en el primer año de mandato, lo cual no ha podido concretarse debido a que no cuenta con la mayoría necesaria en ambas cámaras del congreso, precisamente por la división de la ANR tras las elecciones internas. Con respecto al debate de la reelección presidencial, Solís y Cerna (2019: p. 266) señalan que el pre-candidato se manifestó estar a favor de ella, vía reforma constitucional pero no en el periodo inmediato al del presidente que la implemente. En el ámbito económico, apuntaba que estaba a favor de los bonos soberanos, pero de manera moderada y con una implementación discreta. Y finalmente, respecto al aborto y el matrimonio igualitario, el hijo del ex secretario de Stroessner, afirmaba enfáticamente no estar de acuerdo con la legalización de la interrupción del embarazo y que, además, es una «persona católica, apostólica, romana que respeta lo que dice la Biblia, por ello, no estoy a favor del matrimonio igualitario» (*Telefuturo,* 2017).

CANDIDATOS Y PROGRAMAS

EL HEREDERO DEL ALA MILITANTE DEL COLORADISMO: MARIO ABDO BENÍTEZ

Mario Abdo Benítez se identificó en su campaña electoral por apelar a los valores tradicionales que caracterizan a la Asociación Nacional Republicana: a) la unidad; b) el patriotismo; c) la familia; y d) el militarismo. A modo de ejemplo, entre sus discursos más polémicos, el presidenciable colorado afirmaba que «los hijos de madres solteras [deberían] ir a los cuarteles militares» (*Última Hora*, 2018); en otro mitin político también aseveraba que «el 80% de los delincuentes provenían de familias disgregadas» por lo que había que proteger el «valor de la familia» para evitar conductas delictivas en la sociedad paraguaya. Ambas declaraciones generaron polémicas entre sectores relacionados con la objeción de conciencia, así como en organizaciones de derechos humanos porque criticaron las creencias implícitas detrás de estas declaraciones, principalmente la cultura militarista que ha dejado en el país deudas históricas de violaciones a derechos humanos.

LA ALIANZA ENTRE LIBERALES E IZQUIERDA: UN INTENTO DE EMULAR LA FÓRMULA VICTORIOSA DE 2008

Los liberales en alianza con diversos partidos y movimientos de izquierda intentaron desafiar al Partido Colorado como lo hicieron en 2008 cuando resultaron victoriosos con la chapa presidencial de Fernando Lugo y Federico Franco. La alianza aglutinó nuevamente al PLRA con movimientos de izquierda como el Frente Guazú, el Partido Revolucionario Febrerista, el Partido Democrático Progresista, el Partido Encuentro Nacional, Avancemos País y el Partido del Movimiento al Socialismo. La fórmula presidencial de la oposición, la Alianza GANAR (Gran Alianza Nacional Renovada) postuló al ex ministro de la era luguista, Efraín Alegre (de extracción liberal) como candidato a presidente y al conductor de radio, Leonardo Rubín (del Frente Guazú) como vice-presidente.

LA CAMPAÑA ELECTORAL, ESTRATEGIAS Y DEBATE

Si algo tenían en común los dos principales candidatos a la presidencia de la república era su conservadurismo, aunque del lado de la Alianza GANAR intentaron abanderarse de algunas temáticas más de corte progresista de la mano del candidato a vice-presidente, Hugo Rubín. Otro rasgo característico de la campaña electoral fue la guerra sucia entre los dos principales contendientes, Mario Abdo Benítez y Efraín Alegre. Mientras que al primero se le acusaba de representar el lado más oscuro del coloradismo por su herencia política, al candidato liberal le endilgaban los malos manejos de la cartera de Obras Públicas y Comunicaciones cuando se desempeñó como ministro de Fernando Lugo (*La Nación*, 2018).

A la campaña también se sumó el presidente en funciones, Horacio Cartes, quien adquirió protagonismo con una serie de frases desafortunadas como cuando se refirió al candidato liberal diciendo: «Efraín, cuidá tu familia, no te preocupes del Partido Colorado» (*ABC Color,* 2018c). Sobre dicha declaración, Alegre afirmó que se sentía amenazado y que hacía responsable al presidente «por la seguridad de su familia»; y agregó que el discurso de Cartes estaba lleno de amenazas y odio y que él consideraba necesario discutir en una campaña electoral pero que «nadie debe amenazar (a los demás) por sus pensamientos, por defender principios y valores» (*Última Hora*, 2018b).

Los temas centrales de la campaña electoral de Mario Abdo giraron alrededor de la unidad colorada, con lo que claramente estaba apelando al voto duro de la ANR, al tiempo de plantear en varias ocasiones «coloradizar al funcionariado público de todo el país» (*ABC Color*, 2018b). Entre sus propuestas de campaña, Abdo señaló las siguientes: 1) ampliar la base contributiva y luchar contra la evasión fiscal formalizando la economía; 2) luchar

contra la corrupción; 3) mejorar la infraestructura del Estado y fortalecer la institucionalidad estatal; 4) profesionalizar a la función pública (*Última Hora*, 2018c); 5) fomentar el control de las fronteras; 6) reformar la constitución y emprender una reforma judicial; 7) reorganizar la estructura y administración del sistema penitenciario nacional; 8) dotar de más presupuesto e infraestructura al sector educativo para alcanzar el 7% de la inversión del PIB, así como también becas de grado y posgrado para fortalecer el capital humano del país; 9) priorizar la Atención Primaria en Salud, promoción de la salud comunitaria y la disminución de la mortalidad materno-infantil; 10) renegociar el Anexo C del Tratado de Itaipú, la libre disponibilidad de la energía eléctrica para la venta a otros países, revisión del Acta de Yacyretá y modernización de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) (*Última Hora,* 2018d).

Efraín Alegre, por su parte, inició su campaña política recordando a la ciudadanía paraguaya que Mario Abdo Benítez representaba el pasado stronista al que no deben volver al decir: «los paraguayos están ante el gran desafío de no volver al pasado y de apostar al futuro» (*ABC Color,* 2018a). La campaña electoral de Efraín Alegre se situó alrededor de los siguientes ejes temáticos: 1) la salud básica gratuita sin IVA para los medicamentos (*Paraguay.com,* 2018a); 2) la educación de calidad (*ABC Color,* 2018); 3) bajar las tarifas de la electricidad a aquellas empresas que generan empleo; 4) apostar por un modelo de crecimiento económico equitativo «hacia dentro y hacia abajo»; 5) la re-negociación de las hidroeléctricas Yacyretá (con Argentina) e Itaipú (con Brasil); 6) terminar con la evasión fiscal, el contrabando y la corrupción; 7) aumentar el impuesto al tabaco para destinar recursos a la salud pública y; 8) impuesto progresivo a la renta personal (*Paraguay.com,* 2018b).

LOS RESULTADOS ELECTORALES

Como se ha señalado con anterioridad y se puede observar en la Tabla 1, la ANR es una maquinaria electoral que desde el año 1993 ha oscilado entre 30.7% de los votos (cuando perdió el poder en el 2008) hasta 53.8% de las preferencias electorales en 1998 (cuando ganó el oviedismo). En dicha tabla también se observa que la única manera que tiene el PLRA de acercarse a la ANR o de ganarle (como en el 2008) en cuando ha ido en coalición.

TABLA 1. RESULTADOS HISTÓRICOS DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 1993-2018

Partidos	1993	1998	2003	2008	2013	2018
ANR	41.78	53.80	37.10	30.70	45.80	46.42
PLRA	33.20	42.60	24.00			
AEN	24.39					
APC				40.90		
APA					36.90	
UNACE			13.50	22.00	0.80	
PPQ			21.30	2.40	1.10	
Avanza País					5.90	
Frente Guazú					3.30	
Alianza Ganar						42.74
Frente Amplio						0.33
Artistas del Paraguay						0.59
Mov. Soberanía Nacional						0.28
Partido Verde Paraguay						3.23
Mov. Reserva Patriótica						0.36
Herederos						0.23
Partido del Movimiento Patriótico Popular						0.38
Unámonos						0.24
Participación	69.00%	80.50%	64.30%	65.60%	68.60%	61.25%

Elaboración propia con base en datos del TSJE. Las casillas resaltadas en gris en la columna partidos hacen referencia a las alianzas que se han hecho desde 1993.

Por lo demás, la Tabla 1 también muestra la aparición y desaparición de partidos políticos en Paraguay, los cuales ocupan todo el espectro político, pero, principalmente, los más importantes en cuanto a caudal electoral se han alineado en la derecha del mismo y ejemplo de ello, son los partidos Patria Querida y UNACE.

CARACTERÍSTICAS DEL GOBIERNO NEOCONSERVADOR DE MARIO ABDO BENÍTEZ

Entre los rasgos que han caracterizado tanto la campaña, el liderazgo como el estilo de gobernar de Mario Abdo Benítez se pueden resaltar sus atributos autoritarios y conservadores, principalmente en los siguientes puntos: 1) la defensa de valores como el legado *stronista*; 2) la militarización de los jóvenes y sus propuestas de políticas de seguridad de «mano dura» como mecanismos de combate a la violencia e inseguridad del país; 3) la defensa de la figura de la «familia tradicional» en detrimento de los derechos de las mujeres y las minorías sexuales y; 4) el acercamiento político / ideológico a sus pares de derecha y conservadores de Argentina y Brasil, pero principalmente resalta durante su gobierno su subordinación política a Jair Bolsonaro.

El *stronismo* como cultura política se caracterizó por sus valores de derecha y conservadores, relacionados con la defensa de la familia, el nacionalismo, la religión, la militarización y la persecución de las disidencias tanto políticas como ideológicas y de las minorías étnicas y sexuales. Esta tendencia hacia una ideología de derecha conservadora se verá plasmada a continuación en los principales rasgos que han caracterizado al liderazgo y estilo de gobernar de Mario Abdo Benítez

LA DEFENSA DEL GOBIERNO AUTORITARIO DE ALFREDO STROESSNER EN PARAGUAY (1954-1989) Y SU LEGADO AL PAÍS

Mario Abdo hizo campaña jugando con la imagen de su padre y del papel que cumplió durante el régimen autoritario de Stroessner, donde se desempeñaba como secretario privado del dictador. Un apellido no solo representa una identidad sino en ámbitos como el político, implica una tradición, unos valores y una manera de hacer política. En este caso, el actual presidente de Paraguay, desde el lanzamiento de su campaña como pre-candidato presidencial, optó por utilizar el homónimo de su padre para la chapa presidencial, lo que representa un detalle de suma importancia, porque no decidió separarse de toda la carga simbólica que representa el «cuatrinomio de oro» del régimen stronista ni lo que implicó para el país.

El «cuatrinomio de oro» fue el círculo más cercano a Alfredo Stroessner en la etapa final del régimen, se catalogaron a sí mismos como los «militantes», es decir, los duros del régimen, frente a los «tradicionalistas» quienes eran los blandos del mismo. Estuvo compuesto por Sabino Augusto Montanaro, el cruento ministro del Interior; Adán Godoy Giménez, ministro de Salud; Eugenio Jacquet, ministro de Justicia, conocido como «el caza comunistas» y; por el secretario privado del dictador, Mario Abdo Benítez, padre del actual presidente del país y homónimo de éste (*La Nación,* 2017). Este grupo político fue el encargado de devolver el espíritu más militar, autoritario y conservador al régimen en los últimos dos años del stronismo, aunque antes de recibir esta denominación ya estuvieron muy de cerca asesorando al presidente en gran parte de su gestión.

Por lo anterior, que el actual presidente del Paraguay se sienta orgulloso de utilizar el homónimo a su padre y con ello, la identidad colorada militante que éste le ha heredado, no es un dato

menor porque el régimen autoritario stronista dejó como herencia un profundo rezago en cuanto a desarrollo social, profundas desigualdades económicas, una educación deficiente, así como también desaparecidos, muertos y exiliados. Basta con leer las 400 páginas del Informe de Verdad y Justicia para tener noción de que un régimen como el stronista trajo más daños que beneficios a este país sudamericano.

Otro dato no menor es el silencio del gobierno actual a la fecha conmemorativa de los 30 años de caída de la dictadura, el pasado 2 de febrero de 2019, día en el que ninguna autoridad realizó ningún acto recordatorio a las víctimas del régimen ni a los soldados que dieron su vida en el golpe de Estado que derrocó a Stroessner. Hecho que genera muchas especulaciones porque en todos los años que llevaba de instaurada la democracia, los sucesivos gobiernos habían hecho algún acto conmemorativo a las víctimas, por más pequeño que haya sido el evento recordatorio.

PROMOVER LA MILITARIZACIÓN DE LA JUVENTUD PARAGUAYA E IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE MANO DURA COMO MECANISMOS DE COMBATE A LA VIOLENCIA E INSEGURIDAD DEL PAÍS

Entre las políticas de gobierno más polémicas de Mario Abdo se encuentran la reactivación del servicio militar obligatorio como medida de prevención de la delincuencia e inseguridad del país, una ley que se encontraba sin vigencia desde finales de la década de 1990 como resultado de la concientización de movimientos sociales y organizaciones de la sociedad en la objeción de conciencia.

En un acto de campaña política, antes de ser presidente, Mario Abdo Benítez había defendido públicamente las «bondades» del servicio militar obligatorio para los jóvenes paraguayos bajo el supuesto de que las madres solteras «tienen hijos que no pueden contener» (*Última Hora*, 2018a) y con la militarización de la

juventud se evitará que estos caigan en redes de delincuencia organizada o de menor escala, porque según datos del propio Abdo Benítez durante su campaña, «el 80% de los jóvenes delincuentes proviene de familias disgregadas» (*Última Hora*, 2018a).

Precisamente respecto a la defensa de los valores tradicionales del *stronismo* conservador de derecha, destaca uno de sus discursos más polémicos durante el cierre de su campaña electoral en marzo de 2018 de donde se extrae la siguiente frase: «…vamos a utilizar los cuarteles para tender una mano contenciosa para ellos (los hijos de madres solteras)… para que vayan a estudiar un oficio… que canten el himno nacional y que recuperen el orgullo de ser paraguayo» (*Última Hora*, 2018a). Esa frase plasma ideas sedimentadas en el propio pensamiento del actual presidente que hablan de militarización, nacionalismo, defensa de la «familia tradicional» y mano dura a la juventud. Como es común en este tipo de pensamientos conservadores de derecha, en ningún momento se cuestionan los roles de género ni la subordinación de la mujer a éstos, donde la única encargada de criar y educar a los hijos es la madre y ante la ausencia del padre, todos los fracasos de la política educativa y de crianza, solamente recaen en ella y no se cuestiona el abandono de la familia o de los hijos por parte del progenitor y su responsabilidad en el fracaso educativo o de crianza de los hijos.

CRITICAR LA AGENDA DE IGUALDAD DE GÉNERO EN EL PAÍS, UTILIZANDO ADJETIVOS DESCALIFICATIVOS PARA SUS REIVINDICACIONES POR CONSIDERARLAS PARTE DE LA «IDEOLOGÍA DE GÉNERO» EXTRANJERIZANTE

Durante toda su campaña electoral, Mario Abdo buscó distanciarse del discurso progresista y de izquierda del candidato a vicepresidente de la Alianza GANAR, Leonardo Rubín, reafirmando su defensa a la vida desde la concepción, la figura de la «familia tradicional» y la religión católica.

Antes y durante su campaña, Marito había hecho la promesa de vetar cualquier proyecto sobre matrimonio igualitario. En un discurso en el congreso nacional antes de presentar su renuncia como senador para dedicarse a la campaña sostuvo: «Estoy en defensa de la familia absolutamente; vamos a vetar todo proyecto de ley que trate de destruir el núcleo que sustenta la sociedad, que es la familia» (*Última Hora*, 2018b). Mientras que, por su parte, el candidato presidencial de la Alianza GANAR, Efraín Alegre en su cuenta de cuenta de Twitter manifestaba que, aunque él cree en el matrimonio entre el hombre y la mujer, eso no significa que él desconozca la realidad y que, en ese sentido, él se comprometía a «crear una solución para encontrar una figura jurídica que proteja el patrimonio de las parejas» (*Última Hora*, 2018b).

Precisamente, el 28 de junio, día en el que se festeja internacionalmente el Orgullo Gay y la comunidad LGTTTBI conmemora a las víctimas de Nueva York y reivindican la protección de sus derechos, el presidente del Paraguay se pronunció públicamente a «favor de la familia» y en contra del matrimonio igualitario como consta en la publicación del periódico Hoy (2019), donde el presidente señala: «Defendemos la familia como fundamento de la sociedad y a la protección de la vida desde la concepción».

EL ACERCAMIENTO POLÍTICO-IDEOLÓGICO A SUS PARES DE DERECHA DE ARGENTINA Y BRASIL

Primero fue Mauricio Macri, luego Jair Bolsonaro y por último, Mario Abdo Benítez, tres líderes del Cono Sur que se caracterizaron por apelar durante sus campañas electorales a valores de la derecha conservadora para atraer el voto de ciudadanas y ciudadanos hastiados por los escándalos y casos de corrupción de los gobiernos del giro a la izquierda latinoamericana en un contexto económico caracterizado por el bajo o nulo crecimiento, donde ha primado la inseguridad y han proliferado los líderes carismáticos

que prometen resolver con mano firme los problemas más acuciantes de sus sociedades.

Durante su campaña electoral, Mario Abdo Benítez se enfrentó, primero, al liberal de Santiago Peña al interior de la ANR. Luego, ya en las elecciones generales se volvió a enfrentar a los liberales y progresistas de la Alianza GANAR. Como lo demuestran las elecciones de 2018, en una sociedad donde los partidos tradicionales de derecha y conservadores ocupan 9 de cada 10 preferencias electorales, no es difícil que un discurso tradicionalista y conservador como el de Mario Abdo se cuele y resulte victorioso, por encima de los liberales y de los progresistas (Ver Tabla 2).

TABLA 2:
PORCENTAJE DE VOTOS DE CADA PARTIDO O ALIANZA PARA LA ELECCIÓN DE PRESIDENTE 1998-2018

Ideología	Partido	1998	2003	2008	2013	2018[3]
Derecha	ANR	53,8	37,1	30,7	45,8	46,44
Derecha	PLRA	42,6	24			
n/d	APC			40,9		
n/d	GANAR					42.74
Derecha	APA				36,9	
Derecha	UNACE	13,5	22	0,8		
Derecha	PPQ	21,3	2,4	1,1		
Izquierda	Avanza País		5,9			
Izquierda	Frente Guazú		3,3			
	% Participación	**80,5**	**64,3**	**65,6**	**68,6**	

Fuente: elaboración propia con base en datos del TSJE (2018)

3 Los resultados de las elecciones del año 2018 son preliminares debido a que el escrutinio de los votos se encuentra aún en marcha.

SU ESTILO AMBIGUO DE GOBERNAR Y REPRESENTAR LOS INTERESES DEL PAÍS: LA CRISIS POLÍTICA TRAS EL PACTO SECRETO DE ITAIPÚ Y SU REMINISCENCIA A LA FIRMA EN TIEMPOS DE STROESSNER

En julio de 2019, a tan solo 11 meses de asumir como presidente del país, la gestión de Mario Abdo se puso en peligro y las amenazas de juicio político para destituirlo a él y a su vicepresidente, Hugo Velázquez, fueron inminentes. La causa de la crisis política que puso nuevamente en jaque al país tuvo su origen en un acuerdo secreto celebrado entre Mario Abdo y Jair Bolsonaro, de espaldas a sus respectivos congresos y en el que, básicamente, se estipulaba un pago excesivo por el uso de la energía eléctrica para los consumidores paraguayos de la Administración Nacional de Electricidad de este país. El documento secreto fue filtrado por el expresidente de la ANDE tras presentar su renuncia al cargo el 24 de julio con lo que se desató una crisis política que puso al borde del abismo al gobierno de «Marito». Tras suscitarse un escándalo político por el contenido del acuerdo y sus implicancias para el actor más desfavorecido del tratado de Itaipú (Paraguay), la ciudadanía y los legisladores de partidos de la oposición pidieron el juicio político al presidente y vicepresidente el último fin de semana de julio.

Los pormenores del acuerdo secreto entre Bolsonaro y Abdo trajeron al recuerdo la firma inicial del Tratado de Itaipú en 1970 entre Kubistcheck y Alfredo Stroessner, porque nuevamente se hacía entre dos líderes afines ideológicamente, a espaldas del poder legislativo y con un impacto negativo para la soberanía energética del país más endeble: Paraguay. La única diferencia entre el pacto inicial y el del año 2019, es que el contexto político es disímil, en aquella década ambos países se encontraban bajo regímenes autoritarios, en la actualidad, ambos son regímenes democráticos, de baja o media calidad, pero democracias, al fin.

Los colorados afines al cartismo trajeron el salvavidas que el gobierno de Mario Abdo necesitaba para salvarse del juicio político, pues prefirieron negociar al interior del partido que quitarle la presidencia y vicepresidencia a su propio partido y cederla al PLRA. No obstante, el costo para evitar la destitución es alto y es por ello que, en los últimos días, diputados cartistas, los congresistas afines a Mario Abdo y el propio presidente se han reunido en la casa presidencial para concretar un pacto de gobernabilidad (Última Hora, 2019). Así también, su colega y presidente afín, Jair Bolsonaro, unos días después de la crisis política terminó de sacar del hoyo a Mario Benítez tras anunciar que quedaría anulada el acta del escándalo y con ello, terminaba de cerrarse una crisis política que, una vez más, dejaba a un presidente paraguayo, al borde de la destitución (Mizrahi, 2019).

CONCLUSIONES

En Paraguay no se puede hablar necesariamente de un giro a la derecha en términos de Londoño, Bonnefoy y Politi, 2017, diciembre 19; Quintana, 2018, octubre 28; Lissardy, 2017; Núñez, 2018, julio 19, sino más bien de una profundización del conservadurismo y del autoritarismo con el arribo del último presidente tras las elecciones de 2018. En esta investigación, no se habla de giro a la derecha, porque los gobiernos de la democracia paraguaya siempre han estado de ese lado del espectro político, salvo el breve periodo de gobierno de la Alianza Patriótica para el Cambio en el que hubo algunos intentos por cambiar la ideología del gobierno, aunque sin mucho éxito, ya que los liberales conformaban la mayoría del gobierno y, además, eran tan de derecha como sus pares del Partido Colorado.

El actual gobierno de Mario Abdo Benítez en muchos aspectos representa el lado más conservador y autoritario del coloradismo, que ha tenido muchas variantes a lo largo de los gobiernos

colorados de la democracia paraguaya, como se ha señalado anteriormente, pero la diferencia con el presidente actual es que en cuanto a sus valores es muy integrista y, por ende, intransigente con quienes no piensan como él. En cuanto a sus formas de hacer política, Mario Abdo se apega a su credo (conservador y autoritario) y al religioso (católico) para hacer políticas públicas y de Estado de corte conservador y anti-derechos de mujeres y de minorías sexuales.

Al cerrar este capítulo, el gobierno de Mario Abdo acababa de superar la crisis política tras el escándalo del pacto secreto sobre Itaipú[4], y aunque la facción cartista lo salvó de enfrentar el juicio político en el mes de agosto de 2019, el precio de dicha negociación se sabrá tarde o temprano y el tiempo que dure Marito dependerá de su cintura política para negociar con sus pares colorados, prin-

4 El gobierno de Mario Abdo Benítez firmó un acta con el gobierno brasilero de Jair Bolsonaro el 24 de abril de 2019, pero durante dos meses fue un secreto para ambos países, en ella se modificaban los montos y las condiciones en las que la Administración Nacional de Electricidad ANDE (de Paraguay) recibe la energía de la Usina Hidroeléctrica de Itaipú (Mizrahi, 2019). Cuando al presidente de la ANDE, Pedro Ferreira se le solicitó que la rubrique, éste se negó y hace de conocimiento público «el pacto secreto de Iatipú» entre Benítez y Bolsonaro, lo que desató, unos días después, un escándalo mediático, político y social en Paraguay, principalmente por los costos económicos que implicaría para los consumidores de energía eléctrica en este país y en beneficio de Brasil. Los partidos de oposición a la Asociación Nacional Republicana tomaron el pacto secreto como un causal de juicio político para Mario Abdo Benítez y comenzaron a cerrar filas (tanto entre los diputados como entre los senadores de la oposición como algunos disidentes de la ANR) para obtener los votos suficientes para iniciar su destitución. La crisis política tuvo costos altos para el gobierno de Benítez, entre ellas: la renuncia de varios ministros, asesores y del director de Itaipú y; la confirmación de que un sector importante del cartismo apoyaría su juicio político con lo cual se aseguraba la cantidad de diputados requerida para iniciar su destitución. Ante estos hechos, Mario Abdo solicitó una reunión urgente con el líder de la facción disidente, Horacio Cartes para negociar y evitar su juicio político. Con esa reunión, Mario Abdo logró desactivar el juicio político en su contra al lograr la unidad del Partido Colorado en ambas cámaras del Congreso. Dos días después, Bolsonaro anuncia la anulación de dicha acta y con ello, termina de cerrarse una crisis política que, una vez más, dejaba a un presidente paraguayo, al borde de la destitución (Mizrahi, 2019).

cipalmente, con el expresidente Horacio Cartes. A diferencia de su líder político del pasado, Alfredo Stroessner, Mario Abdo no cuenta con un «cuatrinomio de oro» que lo proteja y lo blinde políticamente, así que las posibilidades de mantener la gobernabilidad los próximos cuatro años serán muy endebles y dependerán mucho de la buena voluntad e interés de apoyarlo del expresidente, Horacio Cartes.

REFERENCIAS

Cerna Villagra, S. P. y Solís Delgadillo, J. M. (2018). «Paraguay: entre el pluralismo moderado y el predominio de los actores tradicionales». En: Alcántara Manuel; Buquet, Daniel y Tagina, María Laura (eds.). *Elecciones y partidos en América Latina en el cambio de ciclo* (pp. 353-376). Madrid: CIS.

Cerna Villagra, S. P. y Solís Delgadillo, J. M. (2017). «Los resortes colorados del poder: nacionalización de los partidos y el sistema de partidos paraguayo (1998-2013)». *Colombia Internacional,* 91, 151-184. https://doi. org/10.7440/colombiaint91.2017.05 20.

Cerna Villagra, S. P. y Solís Delgadillo, J. M. (2012). «La crisis institucional paraguaya a la luz de las élites parlamentarias». Boletín *Élites Parlamentarias Latinoamericanas*, 42. Recuperado de https:// gredos.usal.es/jspui/ bitstream/10366/122528/1/boletin_elites_42_2012.pdf 19.

Hoy (2019) «En el día del orgullo LGTBI y grupos afines, Abdo baja línea nosotros defendemos la familia». 28 de junio de 2019. Disponible en: https://www.hoy.com.py/nacionales/en-dia-de-orgullo-lgtbi-y-grupos-afines-abdo-baja-linea-nosotros-defendemos-la-familia

La Nación (2017) «Abdo Benítez, Montanaro, Godoy Giménez y Jacquet: 30 años de un capítulo negro en la ANR». 1 de agosto de 2017. Disponible en: https://www.lanacion.com.py/politica/2017/07/26/abdo-benitez-montanaro-godoy-gimenez-y-jacquet-30-anos-de-un-capitulo-negro-en-la-anr/

Lissardy, G. (2018, abril 17). «'La fuerza política más nueva': cómo los evangélicos emergen en el mapa de poder en América Latina». *BBC News*. Recuperado de https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43706779

Lissardy, G. (2017). «Por qué 2017 puede ser la clave en el giro hacia la derecha de América Latina». *BBC News.* Recuperado de https:// www.bbc.com/mundo/ noticias-america-latina-38493148 38.

Londoño, E.; Bonnefoy, Pascale y Politi, Daniel. (2017, diciembre 19). «La victoria de Piñera refuerza el giro a la derecha de América Latina». *The New York Times.* Recuperado de https://www.nytimes.com/ es/2017/12/19/chile-pinera-americalatina-derecha/

Mizrahi, D. (2019, agosto 3). «Un acta secreta y 'traición a la patria': la crisis que puso a otro presidente paraguayo al borde de la destitución». *Infobae.* Recuperado de https://www.infobae.com/america/ america-latina/2019/08/03/un-acta-secreta-y-traicion-a-la-patria-la-crisis-que-puso-a-otro-presidente-paraguayo-al-borde-de-la-destitucion/

Núñez, L. (2018, julio 19). «Se interrumpe el giro la derecha en América Latina». *ALnavío. Noticias de ida y vuelta.* Recuperado de https:// alnavio.com/ noticia/14400/actualidad/se-interrumpe-el-giro-a-la-derecha-en-america-latina.html

Pérez-Liñán, A. & Polga-Hecimovich, J. (2017). *Explaining Military Coups and Impeachments in Latin America. Democratization,* 24 (5), pp. 839-858. https://doi.org/10.1080/13510347.2016.1251905

Pérez-Liñán, A. (2014). *A Two-Level Theory of Presidential Instability. Latin America Politics & Society,* 56 (1), pp. 34-54. https://doi.org/10.1111/j.1548- 2456.2014.00220.x 45.

Pérez-Liñán, A. (2009) *Juicio político al presidente y nueva inestabilidad política en América Latina*. México, D. F.: FCE.

Solís Delgadillo, J.M. y Cerna Villagra, S. P. (2019) «Paraguay: fricción, (re)concentración y afianzamiento conservador tras las elecciones de 2018». En *Estudios Políticos* (Universidad de Antioquia), 54, pp. 259-285. http:// doi.org/10.17533/udea.espo.n54a13

Última Hora (2019) «Diputados se reúnen con Marito en Mburuvichá Roga». 19 de agosto de 2019. https://www.ultimahora.com/

diputados-se-reunen-marito-mburuvicha-roga-concretar-pacto-n2838883.html

Última Hora (2018a) «Para Marito, hijos de madres solteras deben ir a la cárcel». 28 de marzo de 2018. Disponible en: https://www.ultimahora.com/para-marito-hijos-madres-solteras-deben-ir-al-cuartel-n1140244.html

Última Hora (2018b) «De ganar, Marito vetará cualquier proyecto sobre matrimonio igualitario». 1 de marzo de 2018. Disponible en: https://www.ultimahora.com/de-ganar-marito-vetara-cualquier-proyecto-matrimonio-igualitario-n1136016.html

Los *hijos* de Putin: ¿quién gobernará Rusia después de 2024?[1]

Denis Volkov[2] • *Andrey Kolesnikov*[3]

PRÓLOGO

«¿Por qué crees que 2024 es un año especial y que todo cambiará? No veo ninguna razón para destacarlo de alguna manera», dijo uno de nuestros encuestados, involucrado en procesos políticos y administrativos importantes. Quiso decir que el sistema que se ha desarrollado durante los veinte años del reinado de la misma persona es poco probable que cambie, con o sin él. Muchos de nuestros interlocutores compartieron la misma opinión, descubriéndonos cómo sobrevivirán las élites, gerenciales, políticas y empresariales, durante el período de tránsito en el año en que expire el actual mandato de Vladimir Putin.

Sin embargo, existen numerosos escenarios, expectativas y esperanzas asociadas con el año 2024. Los gerentes desean evitar que el país sufra cataclismos y mejorar su vida de acuerdo con las nuevas pautas. Los políticos quieren conservar la lealtad a la primera persona, salvandose a si mismos. Los empresarios,

---

1 Esta es una traducción del artículo «»Дети» Путина: кто будет править Россией после 2024 года?», originalmente publicado por el Carnegie Moscow Center, a partir de un estudio apoyado por la Embajada de Finlandia en Moscú y la Oficina Oriental de Industrias Finlandesas. ©2019, Carnegie Endowment for International Peace.

2 Sociólogo, Centro Carnegie Moscú.

3 Politólogo, Centro Carnegie Moscú.

nacionales y extranjeros, tratar de desarrollar sus negocios frente a una mayor intervención del gobierno en la economía o, en su defecto, abandonar el negocio o abandonar el país.

Durante el otoño de 2018 y la primavera y verano de 2019, realizamos dos series de entrevistas de expertos con personas que brindan capacitación a las élites tecnocráticas –cursos, conferencias, programas de capacitación y asesoramiento para los tomadores de decisiones–, que estudian estas élites y que observan dichos procesos desde una perspectiva empresarial. Todos nuestros encuestados están involucrados de alguna manera en la transición del país durante el ciclo político de 2018-2024. Justo en el período posterior a la elección presidencial: alguno participa directamente en él, otros como observadores.[4]

Ninguno de nuestros interlocutores se hizo ilusiones sobre la disposición de los más altos funcionarios estatales –llamémoslos la *superélite*– para democratizar el sistema político, liberalizar la economía y, en general, modernizar el estado y la sociedad. Pero nadie dibujó escenarios apocalípticos de revolución o colapso del país, derivados de la ineficiencia del sistema del capitalismo de estado y la autocracia política construida durante 20 años. Las élites que no pueden influir en el curso de los eventos están listas para continuar adaptándose a los cambios en el sistema, a su estancamiento e incluso, como lo expresó uno de los encuestados, a su «extinción». En realidad, una de las tareas de la élite gerencial es, sin cambiar el marco político y los fundamentos políticos del

4 En total, durante el proyecto se realizaron 13 entrevistas en profundidad, de las cuales seis fueron a expertos en el campo de la capacitación gerencial, la economía, la geografía económica, y la tecnología de la información y siete a representantes de grandes y medianas empresas rusas y extranjeras que tienen experiencia trabajando con agencias gubernamentales rusas, incluyendo los rubros de construcción, energía y venta minorista. A solicitud de los entrevistados, varias de las entrevistas se llevaron a cabo bajo condiciones de estricta confidencialidad y anonimato, sin grabación alguna.

sistema, extender este «desvanecimiento» y (o) garantizar un nivel aceptable de desarrollo, principalmente socioeconómico.

No se requiere que las nuevas élites tecnocráticas participen en el proceso de toma de decisiones políticas reales, en los campos de la «geopolítica», la política interna y la política exterior. Su trabajo es mantener un nivel aceptable de optimismo del consumidor favorable al sistema político, ayudar al régimen a evitar la tensión social excesiva y resolver los problemas cotidianos. Es decir, proporcionar a la clase política superior –la *superélite*– más información y un trasfondo social normal, para un mejor gobierno en el marco del capitalismo de estado.

La tecnocratización es un instrumento para llevar a cabo tal política. La transformación digital como sustituto de la modernización, la democratización y la liberalización en todas las esferas de la vida. En esa dirección apunta el énfasis observado en la política regional, un deseo completamente natural en un país tan grande como Rusia, que busca proporcionar un nivel de distribución sociopolítica y desarrollo económico aceptables. El establecimiento de objetivos aquí es puramente pragmático, medido por ciertos indicadores de control y éxito. Instrumentalmente, este enfoque se manifiesta, por ejemplo, en implementación de *proyectos nacionales*, una especie de sustituto de los planes quinquenales soviéticos.[5] Las instituciones de la democracia no son necesarias para llevar a cabo tal política; en su lugar se utiliza el enfoque «tecnocrático» del «proyecto».

El sistema de Putin está buscando puntos para mantener el equilibrio social y político hasta el final del ciclo político y más allá. El

5 Estos son programas de desarrollo del país, aprobados por decreto presidencial en mayo de 2018. Ver: Butrin D., Barsukov Yu. «Paso a la derecha, paso a la izquierda - el proyecto». *Kommersant.* 9 de agosto de 2019 // https://www.kommersant.ru/doc/4054741 .

actor principal y el empleador principal es el Estado. El sistema de gestión se basa en la presunción de omnisciencia y omnipotencia de su burocracia, en la absolutización del control estatal: de ahí la atención al gasto selectivo de fondos y los intentos puntuales de combatir la corrupción. El Estado entra en todas las esferas: su intervención en la economía se convierte en el principal estímulo para el crecimiento, construye una sociedad civil paralela, que refleja iniciativas de cierta base y activistas civiles, ofreciéndoles subvenciones estatales y, al mismo tiempo, estableciendo una lista de restricciones en el comportamiento. Absorbiendo y atrayendo al sector civil, el Estado también está tratando de controlar las empresas privadas: todos los seres vivos en el ámbito empresarial están obligados a tener en cuenta al menos el interés del Estado en su trabajo o cooperar directamente con la burocracia. Un ejemplo sintomático es la coerción real de las empresas para participar en la implementación de los *proyectos nacionales*. Todos estos procesos están determinados principalmente por el marco político, que determina todos los patrones de comportamiento de todos los grupos políticos, gerenciales y sociales.

EL MARCO POLÍTICO DE LA ÉLITE

La principal preocupación del *establishment* ruso para el período 2018-2024 no es la modernización del país, sino el tránsito suave y seguro del poder para las élites políticas, gerenciales y empresariales. Esto significa que los cambios no afectarán las bases políticas del sistema, tal y como lo conocemos hoy: centralizado y orientado al Estado, autoritario y altamente personalista.

Cualquier conversación sobre el tránsito del sistema actual y su supervivencia después de 2024, es también una evaluación de los mecanismos de transferencia de poder. La posibilidad de la partida de Putin depende de si en los próximos cuatro años y medio será posible encontrar un esquema de tránsito que sea seguro tanto

para él personalmente como para los fundamentos básicos del régimen. Por tránsito no necesariamente nos referimos aquí a la partida de Putin o «transición a la democracia»: estamos hablando de la transferencia de poder, en virtud de los requisitos de la Constitución. Sin cambios, políticos o económicos, el sistema está condenado a la erosión rápida o lenta, pero nuestros encuestados están convencidos de que Putin no cambiará nada fundamentalmente. Y todas sus expectativas están relacionadas con la respuesta a la pregunta de en qué medida el jefe de Estado está listo (o no) para cambiar el sistema, de modo que este siga siendo al menos algo operativo.

El actual régimen político ruso ha buscado a tientas su identidad: valores conservadores, conciencia imperial, militarización, anti-occidentalismo; un camino especial basado en ideas mitológicas sobre la historia, con el recuerdo de la Gran Guerra Patriótica como el principal pegamento de la nación y método de legitimación del poder.[6] Podemos suponer que esta es la ideología del Estado, alrededor de la cual hubo un consenso tanto de las élites como de las masas. Sin embargo, la ineficiencia del modelo socioeconómico crea una demanda, aunque extremadamente incierta, de cambio.

El cambio no es el objetivo del sistema, pero dado que existe una demanda de cambio, las autoridades lo imitan. Por ejemplo, la digitalización se presenta como modernización, o se anuncia la idea de un «avance», sin ningún incentivo ni aclaración de lo que es. Hasta ahora, el sistema es capaz de imitar cambios -lo que, entre otras cosas, significan su mejora tecnocrática sin cambiar la base política- los cuales no están acompañados de cambios significativos en sí mismo. En cualquier caso, la mayoría de nuestros

6 Según los estudios sociales, este es el único evento que une a la nación: Putin lo usa para mantener su imagen como heredero de la Victoria. Ver: A. Kolesnikov, P«olítica histórica en Rusia: por qué divide, pero no une», Carnegie Moscow Center. 9 de agosto de 2017 // https://carnegie.ru/2017/08/09/ru-pub-72746 .

encuestados se adhieren a este punto de vista: el proceso de imitación puede resultar bastante controlable y aceptable tanto para las élites como para la gente común. Se puede discutir si la «mayoría de Putin» como resultado del estancamiento económico se convirtió en la suma de las minorías políticas y si esto erosiona el consenso nacional; manteniendose un estado de relativo equilibrio político.[7]

En cuanto a la técnica de transferir el poder en sí, para Putin, en el supuesto de que abandone su mandato, es importante encontrar para 2024 una fórmula que emule con la de Boris Yeltsin. Con el presidente decidiendo renunciar sin perder la posición privilegiada de un líder nacional, padre fundador del sistema. Pero para garantizar la estabilidad del sistema en sí, es aún más importante mantener el «putinismo»: es decir, la continuación de políticas autoritarias, aislacionistas y de conducción en ausencia de Putin.[8] Sin embargo, en la historia rusa, especialmente cuando se trata de regímenes autoritarios y totalitarios, la salida del líder de los puestos formales –o su muerte– inevitablemente erosionó los cimientos del sistema político. Por lo tanto, la tarea del presidente es «irse sin irse», sentando las bases para la supervivencia continua del «putinismo después de Putin».

Un punto fundamentalmente importante en la caracterización del sistema es el alto grado de participación estatal en los procesos

7 Sergey Guriev y Daniel Traisman llamaron a estos regímenes «dictaduras de información», ver: Guriev S., Treisman D. «Cómo sobreviven los dictadores modernos: una teoría informativa del nuevo autoritarismo». La Oficina Nacional de Investigación Económica. Abril de 2015. https://www.nber.org/papers/w21136. Parece que el régimen político ruso, después de reprimir duramente las protestas masivas del verano de 2019, ha pasado a una nueva etapa: la llamaremos la «dictadura represiva de la información».

8 Lo que remite a un período más largo al que, por ejemplo, el estalinismo –las prácticas totalitarias y represivas en la forma en que existieron antes del XX Congreso del PCUS en 1956– permaneció después de la muerte de Stalin.

económicos, políticos y comerciales. La tarea de las élites civiles –es decir, aquellas liberales y puramente tecnocráticas, sin claro color ideológico– es mantener el sistema en un estado estable. Por su parte, la tarea de las élites del poder es determinar:

1) El marco ideológico: cultivar el nacionalismo, la ideología y la política imperial –Ej. anexión de Crimea–, la oposición a Occidente, el tradicionalismo, la psicología de una fortaleza asediada, las formas de autoaislamiento, incluido el económico, mediante la sustitución de importaciones y la intervención estatal intensiva en la economía.
2) Las líneas de política interna y externa: para redirigir los principales flujos financieros en su dirección, lidiando con amenazas que, supuestamente, solo ellos pueden prevenir.

Este es el modelo que debería, desde el punto de vista del poder y las élites ideológicas –principalmente aquellas a cargo de la administración del Kremlin– sobrevivir al año 2024.

Al formar el gobierno de la Federación Rusa en la primavera de 2018, Dmitry Patrushev –hijo de Nikolai Patrushev, miembro del círculo interno de Vladimir Putin– recibió el cargo de Ministro de Agricultura. Antes de este incidente, los hijos de representantes clave del círculo íntimo de Putin recibieron altos cargos en bancos estatales y corporaciones estatales: así ocurrió con los hijos de Nikolai Patrushev, Sergey Ivanov, Sergey Kirienko, Dmitry Rogozin, Alexander Bortnikov, la «dinastía» de Kovalchukov y Rotenberg.[9] Se trata de un tipo de *auto-divulgación* de la clase política alta, que «desnuda» el mecanismo de sucesión colectiva. En 2024, la generación de los hijos de los asociados de Putin heredará una

9 Ver: Shamardina L. «Potencial de relación profesional. Los expertos clasificaron la tasa de éxito de los hijos de funcionarios de alto rango». *Kommersant.* 30 de mayo de 2018 // https://www.kommersant.ru/doc/3643977 .

parte del país en forma de activos existentes, todo ello en un sistema donde «el poder es igual a la propiedad». Así, junto con los mecanismos normales para la transferencia de propiedad privada por herencia, se está formando un esquema para la transferencia del Estado como un activo por herencia, dentro de unas pocas docenas de familias.

Por supuesto, no se trata de todo el país, sino de fragmentos de propiedad muy importantes y costosos. El principal problema para tal tránsito de *superélite* es, según un experto consultado, que «es imposible heredar la propiedad fusionada con el Estado»: si los padres abandonan el sistema de gobierno, los hijos dejan de ser líderes empresariales exitosos. En otras palabras, todo depende de mantener el control del poder político. La «familia» política del anterior presidente Boris Yeltsin retuvo al menos las posibilidades de una vida relativamente tranquila y cómoda, pero la escala de la «herencia» de la «familia» de Putin, si se mide por sus posiciones, bienes raíces, activos, es incomparablemente más significativa. En consecuencia, la élite superior está interesada en la continuidad del poder político porque garantiza la continuidad del poder económico. Solo en este caso será posible mantener el modelo «poder = propiedad» incluso después de 2024.

Según la hipótesis de Ivan Krastev, «Putin está convencido de que Rusia no necesita un sucesor, como estaba bajo Boris Yeltsin, sino una generación sucesora. Él ve el próximo tránsito como una transferencia de poder de su generación a la «generación de Putin», que incluye a «políticos que entraron en la era de la madurez durante el gobierno de Putin y experimentaron su influencia».[10] Sin embargo, en el sistema personalista, la figura de un sucesor –que

10 Krastev I. El, el G Pavlovski. «La llegada de Rusia post-Putin». *Rusia en los asuntos globales.* 2 de marzo de 2018 // https://eng.globalaffairs.ru/book/The-arrival-of-post-Putin-Russia-19399 .

simboliza la vertical del poder– es extremadamente importante. De lo contrario, la continuidad del sistema sigue en cuestión. Por eso, los gerentes de un tipo relativamente nuevo, los tecnócratas, deben proporcionar un *mecanismo para la* continuidad del sistema.

Putin puede convertirse en un sucesor de sí mismo si no encuentra un heredero o herederos dignos. Pero no le interesa revelar el mecanismo de tránsito para 2024, porque en este caso corre el riesgo de ser un «pato cojo» y las élites se reorientarán a otra(s) figura(s) política(s). Si el presidente se va, el sucesor de Putin puede ser el sistema que este mismo creó y sus «hijos» políticos. Recuérdese que en los primeros años después de la muerte de Stalin, a pesar del hecho de que el sistema soviético se volvió menos cruel y más racional, la imagen del líder siguió siendo un símbolo del poder soviético, que los nuevos líderes del país inicialmente temían abandonar. La pregunta de cuánto tiempo puede durar el Putinismo sin Putin sigue siendo una pregunta abierta. Pero la experiencia histórica muestra que es poco probable que tales períodos duren demasiados años.

Mucho, incluida la elección de un mecanismo de sucesión, dependerá de los sentimientos masivos que se desarrollarán para 2022-2024. De las actitudes hacia Putin y al poder en general. A partir de la ejecución del modelo, en el centro del cual Putin no es percibido como una persona que tiene la responsabilidad principal del (bueno o mal) gobierno, sino como una institución y un símbolo. El «Zar y Dios», el único guardián de la identidad rusa y del país mismo.

En las elecciones de 2018, las funciones del presidente y el líder nacional –símbolo del país– coincidieron. La pregunta principal de cara a las elecciones de 2024 es si será suficiente para que el sistema permanezca estable que Putin conserve solo el papel de líder nacional y símbolo de Rusia, o sí tendrá que preservar la

presidencia para garantizar la continuidad del régimen. Estas son cosas diferentes. Vale la pena recordar que cerca del final de la presidencia de Medvedev sus calificaciones son iguales a las de Putin[11] y para mantener su peso anterior, Putin ya no necesitaba el puesto de primer ministro. Resultó que el presidente de Rusia como institución (quien llenara esta vacante) podría ser más importante y más importante que Putin como político y líder nacional. Quizás es por eso que hubo un enroque en 2011, que devolvió a Putin a la presidencia. El sistema también fue preservado e incluso apretado.

Después de que Putin regresó a la presidencia en 2012, las encuestas de opinión comenzaron a mostrar que fueron las personas quienes lo culparon no solo «por todo lo bueno», como lo había sido antes, sino «por todo lo malo». En octubre de 2018, el 61% de los encuestados culpó «completamente» al presidente por los problemas del país, otro 22% culpó «hasta cierto punto».[12] Si bien las calificaciones en primera persona se mantuvieron muy altas, las personas tendieron a justificar al jefe de estado. «Al menos funciona», «los problemas son tan graves que incluso Putin no puede hacerles frente», dijeron las personas en grupos focales. Pero a medida que las calificaciones cayeron en 2018 en medio de la caída de los niveles de vida y el anuncio de la reforma de las pensiones –el índice de aprobación de la actividad del presidente cayó del 82% en diciembre de 2017 al 64% en enero de 2019–, los apoyos al presidente disminuyeron notablemente. La insatisfacción con la situación en el país y el trabajo del propio presidente ha dejado de ser una posición marginal.

11 Ver aprobación de las actividades de V. Putin y D. Medvedev en 2011: aprobación de las actividades de Vladimir Putin. Centro Levada // https://www.levada.ru/indikatory

12 «Posibles resultados electorales y responsabilidad». Centro Levada. 22 de noviembre de 2018 // https://www.levada.ru/2018/11/22/19281 .

La falta de competencia política y el control estatal sobre los principales canales de televisión ayudan a evitar que las clasificaciones presidenciales se reduzcan notablemente. Creada artificialmente y conectada a la construcción misma del sistema político ruso, la falta de alternativas de Vladimir Putin es una de las principales herramientas para mantener la legitimidad del poder. La ausencia de alternativas explican el hecho de que hoy la baja de popularidad del presidente no vaya acompañada de un aumento de la confianza pública en ningún otro político. Si hace un par de años, en grupos focales, las personas explicaron su apoyo a Putin por el hecho de que logró algo –«hizo que Occidente respete al país», «sacó a Rusia» del «abismo» en el que el estado se deslizó en la década de 1990, etc– hoy las respuestas en el espíritu de 2012 suenan cada vez más cómo: «Si no es Putin, entonces, ¿quién? » Se escucha el mismo estado de ánimo en las encuestas de opinión: hasta el 43% de los rusos explican la confianza de la población a Vladimir Putin precisamente diciendo que» la gente no ve a nadie más en quien puedan confiar «. Y esta es la cifra más alta desde 2001, cuando se hizo esa pregunta por primera vez.[13]

La tendencia general hacia una disminución en la legitimidad del poder ya ha comenzado a afectar las posiciones del partido en el poder, *Rusia Unida*. Inmediatamente después de la anexión de Crimea en 2014, la calificación del partido se duplicó, pasando del 25 al 50% de la población total. Hoy cayó por debajo del 30%.[14] Las elecciones regionales de 2018, en las que el *Rusia Unida* perdió terreno en varias regiones, mostró que comenzó a perder su posición de monopolio. Por lo tanto, lograr que los miembros del partido tengan una mayoría constitucional en las elecciones

13 Ver: «Presidente: confianza y voto». Centro Levada. 30 de julio de 2019 // https://www.levada.ru/2019/07/30/prezident-doverie-i-golosovanie .

14 Ver: «Posible votación para partidos». Centro Levada. 14 de agosto de 2019 // https://www.levada.ru/2019/08/14/vozmozhnoe-golosovanie-za-partii .

parlamentarias de 2021 sigue siendo cuestionable. Esta es probablemente la razón por la cual la liberalización de la legislación electoral –anunciada por la presidenta de la Comisión Electoral Central, Ella Pamfilova– se enfrentó a la oposición de *Rusia Unida* y fracasó.[15]. La naturaleza del tránsito de 2024 dependerá en gran medida del control del poder sobre el parlamento y la presencia de la mayoría constitucional de Rusia Unida. Aparentemente, el Kremlin tiene la intención de mantener este control.

Además, en la opinión pública, el «problema de 2024» no existe. Más de la mitad de la población rusa todavía quiere hoy, después de la expiración del actual mandato presidencial, que Vladimir Putin continúe siendo el presidente del país. Esto es una vez y media más que en 2012, cuando –pese al contexto de protestas masivas– Vladimir Putin aún habría ganado las elecciones en la primera vuelta. Y a pesar de la rebaja después de la reforma de las pensiones, la disposición a votar por Vladimir Putin hoy es mayor que ocho años atrás: 40% de los rusos en junio de 2019 en comparación con el 31% en noviembre de 2011.[16]

Los resultados de los grupos focales realizados por el Centro Levada a fines de abril de 2019 hablan de lo mismo.[17] Los encuestados discutieron principalmente dos escenarios principales: a) el presidente no va a ninguna parte y es reelegido, o b) se va y nombra a un sucesor. Hay muchos partidarios del primer escenario, tanto

15 Ver: A. Lubarev. «El filtro sigue ahí. Cómo Pamfilova y Kiriyenko no lograron suavizar las leyes electorales». *La información privilegiada.* 10 de junio de 2019. https://theins.ru/politika/160297. Sin mencionar las violaciones de los derechos de los votantes durante la campaña electoral de la Duma de la ciudad de Moscú, que llevó a protestas en Moscú en el verano de 2019

16 Ver: «Cambios y cambio». Centro Levada. 19 de junio de 2019 // https://www.levada.ru/2018/06/19/izmeneniya-i-peremeny .

17 Ver: D. Volkov, «Elegirán a una persona: ¿qué piensan los votantes rusos sobre el problema 2024?». *RBC.* 14 de mayo de 2019 // https://www.rbc.ru/opinions/politics/14/05/2019/5cda6f089a794770fbfb5ec9 .

entre los partidarios como contra los oponentes de Putin. Muchos encuestados desconocen la existencia de restricciones constitucionales a la nominación de Putin para un nuevo mandato o, lo más probable, no las toman en serio. La participación del presidente en funciones en las próximas elecciones es ampliamente dada por sentada por muchos.

En el caso de que Vladimir Putin deje la presidencia, el escenario más probable, según los encuestados, es el nombramiento de un sucesor. Cuando se discuten posibles candidatos para grupos focales, el nombre de Dmitry Medvedev suena con mayor frecuencia. Aunque no es el político más popular después de Putin, ya estuvo en la presidencia y ahora ocupa el cargo de primer ministro, por lo que a los ojos de las personas es el candidato más probable para la nueva presidencia. Después de Medvedev, los otros políticos son mencionados de acuerdo con una calificación de confianza.[18] Más a menudo que otros, suena el nombre del Ministro de Defensa Sergei Shoigu. Luego, con menos frecuencia, aparecen el Ministro de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov, el Alcalde de Moscú Sergei Sobyanin y el comunista Pavel Grudinin. Todo esto parece algo extraño, pero tal es la opinión pública de masas, que tiene una inercia muy grave.

Muchas personas creen que el sucesor será una persona que, según los encuestados, no conocemos o notamos, porque hoy no está en las primeras posiciones. Los encuestados se refieren a la historia reciente: nadie consideró seriamente a Putin o Medvedev antes de su nombramiento como sucesores. Entonces, esta vez podría ser lo mismo: un año antes de las elecciones, aparecerá una persona, completamente nueva, «no aburrida». Esta será sin

18 Ver listas de los políticos más populares: voto presidencial y confianza en los políticos. Centro Levada. 11 de abril de 2019 // https://www.levada.ru/2019/04/11/prezidentskoe-golosovanie-i-doverie-politikam .

duda una persona «decente», «digna» que será «recibida» por nosotros. Según los encuestados, puede ser un nativo de los servicios especiales o militares y también, por supuesto, una persona con experiencia en administración pública: el gobernador, el líder regional o algún «asesor estatal». El apoyo de Putin al sucesor será un plus: incluso aquellos que no apoyan al presidente actual piensan que sí. Ambos escenarios principales –«Putin permanece» y «Putin se va, pero deja un sucesor»– hoy son percibidos con calma por la mayoría de la población, la gente está lista para aceptar cualquiera de ellos. Entonces, la posibilidad de cualquier opción permanece abierta.

La gobernanza política efectiva, para los líderes en varios niveles, se considera tecnocrática. Como sucedió en Moscú con Sergei Sobyanin. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la capital rusa, en comparación con otras regiones, tiene recursos financieros gigantescos.[19] El enfoque «tecnocrático», o más bien, autoritario de las campañas electorales dió resultado a los ojos de las autoridades en 2018, cuando se celebraron las elecciones a la alcaldía en Moscú. Estas sucedieron sin la admisión de candidatos de la oposición y de acuerdo con el escenario de una especie de campaña de marketing para la *marca Sobyanin*.

Pero el mismo enfoque fracasó por completo durante la campaña para las elecciones a la Duma de la ciudad de Moscú: un cuerpo sin importancia en las condiciones del «autoritarismo ilustrado» de la capital. La negación masiva del registro a los candidatos de la oposición provocó poderosas protestas políticas masivas. La gente protestó contra la negligencia cínica de su derecho constitucional a elegir y ser elegido. La respuesta fue una represión masiva. El

19 Y que la *demostración de logros* fue una tontería por el trabajo de reparación sin fin incomprensible para los moscovitas, lo que generó sospechas de un extraño gasto de fondos.

alcalde tecnocrático no pudo mantener la calma política y el bajo nivel de tensión social en la región que le fue confiada. La tecnocracia pura sin democracia resultó ser ineficaz como resultado.[20]

Pero fue precisamente actuando como un «tecnócrata» que Sobyanin, el protegido de Putin que no tenía la capacidad de dialogar con los ciudadanos, fracasó. Pese a ello, las autoridades aún no ven ninguna otra opción para el tránsito de las élites, aparte de la vía tecnocrática. Consideremos pues sus principales propiedades.

LAS PROPIEDADES BÁSICAS DE UN TRÁNSITO TECNOCRÁTICO

Hay diferentes formas de resolver los problemas de un país y regiones en el marco de un enfoque tecnocrático. Una de ellas es la búsqueda de nuevas caras, de nuevo capital humano. El otro es el cambio tecnológico radical. Para algunos, son un sustituto de la modernización; para aquellos que realmente desean una gestión más efectiva, este es un método para combatir la corrupción y mejorar el trabajo de los servicios públicos. En el segundo caso, lo ideal, según algunos encuestados, es la máxima automatización de funciones y servicios. Como lo expresó uno de los participantes en nuestras entrevistas de expertos, «la ausencia de una persona», es decir, una función digitalizada, puede «salvar» a un país de la corrupción y el gobierno ineficiente.

Se pide a los tecnócratas que garanticen la ejecución técnica, incuestionable –y, en la medida de lo posible, profesional– y la implementación de las decisiones tomadas a nivel político. Hoy se trata ante todo de la implementación de *proyectos nacionales* de acuerdo con el «Decreto de mayo» de Vladimir Putin en 2018 –un plan de prioridad, basado en el financiamiento estatal de 13 áreas

20 Es difícil llamar al «tecnócrata» Alexander Beglov, quien fue nombrado gobernador de San Petersburgo precisamente en la lógica política y leal, aunque se creía que podía crear la imagen de un «ejecutivo de negocios».

de desarrollo económico y social–, aplicando la política del centro federal en las regiones por parte de los gobernadores. Nuestros expertos encuestados consideran que el objetivo de esta estrategia es estandarizar las prácticas de gestión y fortalecer el control central sobre las regiones y las élites locales.

Idealmente, los tecnocrátas no deberían tener su propia opinión, su propia personalidad, su propia agenda. Deben ser fácilmente reemplazables. No pueden tener ninguna otra lealtad, excepto en relación con el centro federal[21], operando en correspondencia con la competencia de gerentes «Líderes de Rusia»[22], la Escuela de Administración de Moscú «Skolkovo»[23]y la Agencia de Iniciativas Estratégicas.[24] Para evaluar el trabajo de los nuevos servidores públicos se han desarrollado incluso indicadores especiales de desempeño.[25]

El modelo para la formación de una nueva burocracia de alta calidad, como se desprende de las entrevistas con nuestros encuestados, idealmente supone que los nuevos gerentes tendrán un largo horizonte de toma de decisiones –más de un ciclo político de seis años– y un alto nivel de responsabilidad social. No se trata tanto de rejuvenecer a la élite, sino de cambiar su tipo: deben ser personas con un nuevos valores, educados, modernizados. En el sistema de vez en cuando aparecen tales perfiles. Para ellos, es importante

21 Sitio web de la Escuela de Graduados de Administración Pública. https://www.ranepa.ru/struktura/instituty-i-fakultety/vysshaya-shkola-gosudarstvennogo-upravleniya.

22 Sitio del concurso «Líderes de Rusia» https: // líderes de Rusia.rf.

23 Sitio de la Escuela de Administración de Moscú Skolkovo http://www.skolkovo.ru.

24 Sitio web de la Agencia de Iniciativas Estratégicas https://asi.ru.

25 Véase:. Mereminskaya E., A. Kholyavka, Bazanova E. «El gobierno aprobó una metodología para evaluar a los gobernadores». Sábanas. 26 de julio de 2019 // https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/07/25/807334-pravitelstvo-utverdilo .

no solo una carrera y la ejecución oportuna de las instrucciones de gestión, sino también la implementación de proyectos, aunque locales y no políticos: relacionados con la introducción de nuevas tecnologías, la depuración de procesos de gestión y la eliminación de problemas sociales agudos. En parte, la tecnocratización, entendida como sustituto de la modernización, se ve facilitada por las tareas que se establecen en los proyectos nacionales.

La idea básica del tránsito tecnocrático –su idea está asociada, en primer lugar, con el jefe de la administración presidencial Anton Vaino y su primer diputado Sergey Kiriyenko– es que sin cambiar (fortalecer) las instituciones existentes, sin introducir la democracia política, es posible cambiar las caras en el poder. Como dijo uno de los participantes en nuestras entrevistas: si no hay forma de cambiar las instituciones, puede intentarse mejorar la calidad de la gestión y la burocracia y cambiar las «caras».

Hay varias razones para buscar nuevos mecanismos para sublimar cuadros tecnocráticos. Esta es una solicitud de gestión justa y, por lo tanto, efectiva, tomando en cuenta el bajo rendimiento de los mecanismos de ascenso social que prácticamente se han detenido. Y al mismo tiempo, atiende la escasez de gerentes de alta calidad, en relación con el nivel administrativo de los directores de departamentos de ministerios, viceministros, líderes regionales.

Los defensores de la movilidad tecnocrática confían en que las modificaciones en el nivel medio de la pirámide estatal ejercerán gradualmente presión sobre las modificaciones en el nivel superior; que los marcos se esfumarán. Por supuesto, a un cierto nivel donde ya existen restricciones políticas: el finalista de los «Líderes de Rusia» no puede ser designado tan fácilmente como Ministro de Defensa o nominado a los gobernadores de San Petersburgo. Sin embargo, estos cuadros pueden ser nombrados para el puesto de jefe de departamento, viceministro o gobernador en una región

no importante del país.[26] Según la lógica de quienes participan en proyectos similares a los «Líderes de Rusia», dicho mecanismo puede hacer que el sistema sea más eficiente.

A pesar de todas las restricciones establecidas en el programa de actualización tecnocrática del personal, los mecanismos regulares de selección y capacitación ayudan, según nuestros encuestados, a mejorar gradualmente las calificaciones de los funcionarios tecnócratas y a ampliar su comprensión de la situación en el país. Los mejores expertos rusos en economía, geografía y ciencias sociales participan en programas de capacitación; los eventos a menudo terminan con un intercambio gratuito de opiniones entre los participantes y los profesores. Incluso causando una sonrisa, algún tipo de formación de observadores, son una copia de la avanzada formación de equipos de inspiración occidental.[27] En el proceso de los eventos de capacitación, los participantes intercambian experiencias, forman comunicaciones interpersonales horizontales –no parecidas a los clanes tradicionales– y una apariencia de identidad corporativa.

Sin embargo, estos aspectos positivos de los programas son hoy, según los expertos, más un subproducto de la capacitación que el objetivo principal. Además, como señalaron algunos conferenciantes que entrevistamos, a veces se encuentran con una reacción desconcertada e incluso directamente hostil de la audiencia: futuros gobernadores y ministros, vicegobernadores y viceministros. Es cierto que esto es más bien una minoría de la audiencia, que se puede definir como «profesionales leales». De acuerdo con uno

26 Ver: «45 nuevos participantes en la competencia 'Líderes de Rusia' recibieron nuevos nombramientos». *TASS*. 12 de marzo de 2018 // https://tass.ru/politika/5021737 .

27 Ver: E. Kuznetsova Aleksey Komissarov - RBC: «No forzamos a nadie bajo el transporte blindado de personal». *RBC.* 20 de junio de 2018 // https://www.rbc.ru/interview/politics/20/06/2018/5b23ced49a7947bf297925f0 .

de nuestros encuestados, dichos funcionarios se caracterizan por «poco conocimiento de la economía, disgusto por las malas noticias y disgusto con las evaluaciones críticas de la situación».

Los nuevos gerentes se pueden comparar con los gobernadores generales en el modelo imperial de la Rusia prerrevolucionaria. Pero es importante comprender que se trata de personal para administrar la parte *de alquiler* de la economía. Su tarea no es el desarrollo, sino la preservación de los fundamentos fundamentales del régimen y el mantenimiento de la viabilidad del sistema de poder.

Un tecnócrata de un nuevo tipo no es necesariamente un joven de treinta o cuarenta años, enérgico, con buen traje y gafas. Las personas designadas para altos cargos en las jerarquías federales y regionales son muy diferentes. Nuestros encuestados identificaron varios perfiles. Por ejemplo: los que van a *romper la rodilla* –que entran en conflicto con las élites locales–; los *optimizadores* –tecnócratas clásicos, como Maxim Reshetnikov, 40 años, gobernador del Territorio de Perm–; los *asignadores de recursos* –personas de un negocio existente a través de lazos con el estado, por ejemplo Oleg Kozhemyako, gobernador de Primorye, nativo con negocios de pescado–; y los *nombramientos políticos*, como el gobernador interino de San Petersburgo, Alexander Beglov, hombre de Putin. Algunos de ellos están tratando de destruir el sistema de gestión regional, utilizando un cambio completo del equipo. Otros simplemente siguen las instrucciones de la alta gerencia. Entre los nuevos tecnócratas hay líderes como Alexei Dyumin –gobernador de la región de Tula, la región donde la Corporación de Tecnologías Rusas «reina»– que ocultan el hecho de que una corporación estatal controla la región. Algunos de ellos pueden negociar y buscar compromisos. Al mismo tiempo, alrededor de un tercio de los nombrados en las regiones son *paracaidistas*, también son *extraterrestres* venidos del exterior. Son posibles numerosas fallas de los

nuevos nombrados; lo que significa que, según uno de los expertos, «deberán cambiarse en el próximo ciclo de modificaciones».

Putin no se opone a utilizar los mecanismos de la movilidad gerencial moderna, e incluso ocasionalmente se reúne con «nuevos gerentes».[28] Sin embargo, al parecer, no considera que estos mecanismos de selección de personal sean básicos; su implementación en sí misma depende en gran medida de la presencia o ausencia de ciertas personalidades en el poder. Por ejemplo, «Líderes de Rusia» es, según nuestros encuestados, un proyecto personal de Sergei Kiriyenko. Cualquier esfuerzo de modernización es personificado, dependiendo del interés de ciertos individuos o estructuras. [29]

El nivel político de los nombramientos sigue siendo prerrogativa del presidente y su círculo íntimo, donde los tecnócratas entrenados bajo el nuevo sistema no pueden acceder. Es sintomático que, hasta cierto punto, el presidente conectó literalmente la efectividad del líder con la proximidad a su cuerpo. Por lo tanto, los oficiales de seguridad o el jefe del servicio de protocolo –Anton Vaino, jefe de la administración presidencial– fueron nombrados para altos cargos.[30] Entre los nombrados hay muchas personas con experiencia en las estructuras de poder: el presidente confía especialmente en ellos.

---

28 Reunión con los ganadores del concurso «Líderes de Rusia». Presidente de Rusia. 19 de marzo de 2019 // http://kremlin.ru/events/president/news/60104 .

29 Aquí hay una cita típica de una entrevista de expertos: «El estado es una abstracción. Lo principal es la gente «. Hay ejemplos de interacción efectiva entre el estado y las instituciones educativas: capacitación en el personal «Skolkovo» de la Escuela de Administración de Moscú para ciudades de una sola industria y para los médicos principales de los hospitales allí.

30 Véase:. Kolesnikov A. «Todos los eunucos del presidente». *Project Syndicate.* 1 de septiembre de 2016 // https://www.project-syndicate.org/commentary/putin-purges-old-guard-loyalists-by-andrei-kolesnikov-2016-09 .

En el caso de Rusia, el principal elemento limitante, que es el poder de las fuerzas de seguridad y la coordinación de todos los nombramientos con las fuerzas de seguridad, no desaparecerá. La lealtad política absoluta es más importante que la eficiencia tecnocrática, sin mencionar las aspiraciones de modernización. El filtro de lealtad es el principal. Un compromiso de poder es ideológico. Para las élites civiles, las altas instancias del poder son teóricamente alcanzables pero difícilmente factibles: los funcionarios de seguridad designan a quien quieran y de entre aquellos que han sido seleccionados para los puestos más importantes.

¿Por qué es tan importante el filtro de lealtad? La gestión se lleva a cabo manualmente –y a menudo con baja eficiencia– por temor a perder el control político sobre los puestos clave. Un ejemplo típico del rechazo de la selección tecnocrática, por no mencionar democrática, a favor de un actor completamente leal fue el caso ya mencionado de San Petersburgo, cuando Alexander Beglov fue elegido como contendiente para el extremadamente importante cargo de gobernador.

A veces, las personas designadas potenciales no quieren participar en la carrera por altos cargos en el poder. Estas son las razones principales por las que los tecnócratas pueden rechazarla:

- Percepción negativa de los funcionarios del gobierno por parte de la población;
- Inestabilidad política de altos cargos con criterios vagos para la eficiencia del trabajo. A pesar de la presencia de elementos de evaluación tecnocrática, es poco probable que realmente les presten mucha atención al darse cuenta de la calidad del trabajo. De ahí el temor de perder tanto un alto puesto como una reputación;
- El problema con los topes salariales: son inferiores a puestos similares en el mundo de los negocios;
- Restricciones a la propiedad, problemas para declarar ingresos, etc.

Algunos de nuestros encuestados identificaron limitaciones para lograr resultados debido a una regulación excesiva, lo que también desalienta a los gerentes.

Los expertos ven un defecto importante en el enfoque tecnocrático[31] en el sentido de que los funcionarios tecnocráticos son los principales responsables ante el centro federal y no ante los ciudadanos: tal mecanismo a menudo conduce a un «culto a la responsabilidad» y al cumplimiento formal de objetivos e indicadores. La evaluación de la efectividad sobre la base de indicadores de objetivos, a veces formulados sin ninguna conexión con la realidad, conlleva el riesgo de formalismo, ajustando el resultado a los parámetros dados por antelación.[32] Es más importante que los funcionarios informen a las autoridades superiores a tiempo, mantengan su posición en el poder o se muden a un nuevo lugar de trabajo, en lugar de resolver el problema.

A corto plazo, este enfoque puede ser efectivo, pero a largo plazo está lleno de problemas, ya que no tiene en cuenta los intereses de la gente común y las élites regionales, y aumenta la tensión dentro del propio sistema de gestión. Hay menos problemas de este tipo en los negocios: muchos gerentes de un nuevo tipo prefieren la movilidad social en el entorno empresarial. Ello incluye a las grandes empresas: aunque están asociadas con el estado, no están equipadas con una gran cantidad de filtros y restricciones.

---

31 ¿Cuál es el problema fundamental del enfoque tecnocrático? Esto fue escrito por William Easterly en su libro «La tiranía de los expertos»: «Los expertos en desarrollo, impulsados por una ilusión tecnocrática, inconscientemente otorgan legitimidad y amplia autoridad al estado como un sujeto llamado a implementar soluciones técnicas (…) Juego de manos, que se enfoca en soluciones técnicas mientras oculta violaciones de los derechos de una persona real, es una tragedia moral del desarrollo moderno» Vease Easterly W. *La tiranía de los expertos. Economistas, dictadores y los derechos olvidados de los pobres*. M.: Editorial del Instituto Gaidar, 2016. C. 21.

32 Cita de una entrevista: *«Esta es la prioridad del informe sobre el desarrollo».*

Los métodos básicos de reclutamiento en las élites gerenciales son la lealtad personal a Putin; el profesionalismo combinado con un filtro de lealtad –presentes, por ejemplo, en representantes del bloque financiero y económico del gobierno–; la observancia de los intereses de clanes, familias, grupos, corporaciones que patrocinan a la persona designada no contribuyen a una mayor eficiencia.

DIGITALIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL TRÁNSITO DE ÉLITE: GOSPLÁN 2.0

La digitalización, en la que las autoridades rusas se han centrado en los últimos años, se ha convertido en una especie de estandarte de los esfuerzos de modernización del estado. Se lanzó un *proyecto nacional* «Economía digital de la Federación de Rusia».[33] Esto es natural, porque la naturaleza de las comunicaciones ha cambiado en toda la economía.

La transición a lo «digital» es inevitable, por lo que, por ejemplo, la televisión se transfiere de la transmisión analógica a la digital. Sin embargo, en Rusia, la transformación digital se entiende en mayor medida como la automatización de procesos y servicios: no se crean nuevas entidades. En esencia, la tarea de automatizar la infraestructura es tecnocrática, no sustantiva. La pregunta sigue siendo por qué se hace esto.

Se ha acumulado una base de datos de datos abiertos, incluidos los servicios de salud, educación, vivienda y servicios comunitarios. Teóricamente, tales bases estimulan el desarrollo de nuevos negocios para los cuales existe una demanda. Las áreas donde los datos abiertos son críticos son las mismas empresas de servicios públicos, educación, atención médica y el medio ambiente: aquí cambian el comportamiento de los consumidores y

33 Economía digital 2024. Programa nacional // https://digital.ac.gov.ru.

los negocios. Sin embargo, surge la cuestión, en particular, de la seguridad de estos datos, el problema de las condiciones para su venta. Se necesita una nueva regulación, dicen los expertos. Todos estos procesos requieren la capacitación de otro personal, la aparición de nuevas competencias. Hay problemas relacionados: ¿será posible retener profesionales calificados, su negocio los conseguirá? ¿Las personas nuevas serán más independientes, emancipadas e independientes; será este es un producto no planificado y derivado de la digitalización? ¿O, a la salida, el país recibirá trabajadores robotizados?

Como señalamos, uno de los problemas clave inherentes a un enfoque tecnocrático, en principio, es la personificación de iniciativas relacionadas con funcionarios específicos que ven la digitalización como la base de los esfuerzos de modernización. Entre ellos están Alexei Kudrin, Sergey Kirienko, Maxim Akimov –Viceprimer Ministro, que supervisa la digitalización–, Konstantin Noskov –Ministro de Desarrollo Digital, Comunicaciones y Comunicaciones en Masa– y el ex ministro de gobierno abierto, Mikhail Abyzov, quien a menudo fue arrestado en 2019 en relación con cargos de delitos financieros. La historia de Abyzov –a menudo mencionado por los encuestados– no crea un fondo muy favorable para el tránsito de las élites en su conjunto. Los gerentes relativamente jóvenes y dinámicos pueden ser vulnerables por varias razones, incluso desde el punto de vista del derecho penal: las represiones se han convertido en un mecanismo de control de élite.[34]

En un sistema político centralizado y autoritario, todas las señales provienen de arriba. Y la única señal de «modernización» en las circunstancias de la Rusia actual es la digitalización. Además,

34 Ver: N. Petrov. «La represión se ha convertido en un mecanismo de control de élite». Sábanas. 30 de agosto de 2017 // https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/08/30/731537-repressii-kontrolya-eliti.

la modernización real del país, que el gobierno considera políticamente peligrosa, está siendo reemplazada por una transformación digital, medida por criterios tecnocráticos.

En Rusia, la industria de Tecnlogía Informática (TI) se desarrolló dinámicamente al principio precisamente en el sector del mercado. Luego fue notado por el estado, que comenzó a aplastar a la industria por sí misma. Esto implicó la «soberanización» de la industria de TI: el estado la colocó bajo sus «estandartes», la obligó a trabajar para la «seguridad» y la parte de la economía de alquiler oligárquico. Como resultado, con raras excepciones, la industria no se incluyó en la economía global, en los procesos comerciales competitivos normales.

Hoy, el estado es el principal comprador de productos de TI. La implementación del programa de Economía Digital significará una reducción en la participación del sector de TI en el competitivo sector privado de la economía. El Ministerio de Desarrollo Digital, Telecomunicaciones y Medios de Comunicación de la Federación de Rusia es lo último añadido, según nuestros encuestados, como parte del «modelo autoritario de conducción con competencias débiles contra un entorno regulatorio prohibitivo».

El estado está listo para tomar personal de TI por sí mismo, pero se cree que no es tan fácil seleccionar personal calificado –funcionarios de alto nivel y programadores– para el servicio civil. Lo más probable es que aquellos tengan más probabilidades de trabajar en corporaciones estatales o bancos estatales –Rostec, Rostelecom, Rosneft, Sberbank– donde participan activamente en la digitalización. Según nuestros encuestados, uno de los problemas clave es que la mayoría de los funcionarios no entienden el lado significativo de la digitalización. Como resultado, a menudo se produce la digitalización de funciones y documentos antiguos, en lugar de simplificar los procesos de gestión y crear contenido nuevo. Un

enfoque burocrático formal prevalece en el logro de los objetivos: «¿cuántos kilómetros de cable nuevo se deben tender?».

La digitalización aún no resuelve el problema de administrar el flujo creciente de información: las funciones en los departamentos están duplicadas, hay una gran cantidad de instrucciones y una secuencia de informes igualmente a gran escala. El resultado es el mismo que en otras partes del sistema estatal: el «culto a la presentación de informes», la ejecución formal de los puntos de referencia. Otro problema que los expertos identifican es el excesivo entusiasmo digital, una inmersión casi violenta en ese universo. Ello implica la discriminación y exclusión de los procesos digitales de una parte significativa de la población –especialmente los más vulnerables: personas de mediana edad y menos educadas que viven fuera de las grandes ciudades–, que no tienen tiempo para adaptarse a la digitalización de todo y de todo, desde la televisión hasta los servicios públicos.

Por supuesto, la digitalización tiene también un aspecto político: la desconexión de Internet móvil durante las protestas en Moscú en el verano de 2019 demostró claramente cómo las autoridades pueden usar exactamente la «dictadura digital» para la supervisión y el control. Por lo tanto, los objetivos «pacíficos» de la transformación digital están desacreditados.

La digitalización puede proporcionar más oportunidades para realizar (como lo llamó uno de los encuestados, «Gosplan 2.0») cuando todo se vuelve transparente y controlable. Se cree que esto ayudará a combatir la corrupción, contribuirá a una mayor capacidad de gestión de varias áreas y, además, formará una especie de burócrata ideal, «oficial 2.0»: un algoritmo, un programa, no una persona. [35] La información también puede, si el estado lo quiere,

35 La posibilidad de reducir algunos grupos de funcionarios públicos podría convertirse en un punto de intersección de los intereses de las autoridades y en una posible «coalición para la modernización» que, sin embargo, todavía no existe.

resolver el problema del control excesivo y excluir de los procesos de gestión a casi 100 mil controladores e inspectores que pueden cerrar cualquier negocio y son muy corruptos. Se supone que la inteligencia artificial puede tomar muchas decisiones automáticamente, sin la participación humana, simplemente en función de los informes proporcionados.

Por supuesto, en este sentido, la digitalización tiene sus aspectos positivos. En particular, crea una nueva motivación para trabajar en puestos administrativos y forma un establishment orientado al proyecto entre los funcionarios. Ahora, de acuerdo con las observaciones de nuestros encuestados, los funcionarios, especialmente a nivel de viceministros, están más dispuestos a hacer proyectos «hermosos» y ambiciosos que «pueden dejar una marca». Mejorar la infraestructura de TI puede mejorar la calidad y la velocidad de los servicios públicos al público. Por lo tanto, en uno de nuestros estudios anteriores, los representantes comerciales de los pocos logros indiscutibles de los últimos años llamaron a la digitalización de los informes fiscales y los servicios públicos .[36]

Sin embargo, según los encuestados, la lógica de la digitalización y el programa nacional «Economía digital de la Federación de Rusia» no es política, ni económica, sino burocrática. Quieren obtener, como lo expresó nuestro experto, «el sueño mágico de un conductor-tecnócrata»: Internet funcionará mejor, se ampliará la gama de servicios públicos electrónicos, aumentará la cantidad de personal de TI del gobierno. Aproximadamente el 70% del mercado de TI está ocupado por el estado como comprador. El resultado sería la digitalización como otro elemento de la nacionalización de la economía, la nacionalización de una industria comercial en

36 Ver: Movchan A., Volkov D. «Reformas no políticas. Un estudio de las opiniones de los empresarios». El Centro Carnegie de Moscú. 27 de septiembre de 2018 // https://carnegie.ru/2018/09/27/en-pub-77353 .

funcionamiento y su adaptación a los objetivos de «soberanización» de la economía», a la «digitalización soberana».

Nuevamente, como en otras áreas, surge la situación habitual: «se están obteniendo proyectos, no se está construyendo instituciones». La modernización sustantiva está siendo reemplazada por la digitalización como supertarea tecnocrática. Y eso significa que apenas una «figura» puede convertirse en la zona y el motor de una modernización y avance del personal. Más bien, ayudará a resolver la principal tarea política del sistema: su supervivencia.

INVERSORES EXTRANJEROS: SUPERVIVENCIA Y PERSPECTIVAS

El caso de Michael Calvey [37] socavó seriamente la confianza ya extremadamente baja –aunque parece que no hay lugar para caer más– en la economía rusa. La inversión extranjera directa en 2018 disminuyó más de tres veces en comparación con 2017, a $ 8.8 mil millones. En relación con el PIB, este se ha convertido en el valor mínimo de los últimos diez años .[38]

Los inversores extranjeros, principalmente los de cartera, valoran los indicadores macroeconómicos rusos buenos y equilibrados, pero esto no los inspira a las inversiones directas. Los que trabajan en Rusia son aquellos que tienen preferencias especiales garantizadas desde la cima de la pirámide de poder –por ejemplo, hay muchos negocios alemanes con los que el presidente ruso

37 Fundador de Baring Vostok, ciudadano estadounidense Michael Calvey, fue detenido el 15 de febrero hasta el 13 de abril por presunto fraude a gran escala. Es sospechoso de malversación de 2.5 mil millones de rublos en el banco Vostochny Express a través de un esquema con la participación de First Collection Bureau. Ver: «El caso de Michael Calvey». *Kommersant* // https://www.kommersant.ru/theme/3156 .

38 Nazarova K. «Los analistas del Banco Central explicaron el triple colapso de la inversión extranjera en Rusia». *RBC.* 13 de mayo de 2019 // https://www.rbc.ru/economics/13/05/2019/5cd981989a7947252f589b47 .

tiene una buena relación personal– o que, en principio, se ha establecido, ha pasado por varias etapas de heladas políticas y puede trabajar en el ambiente ruso

Entre estos tipos de empresarios se encuentran muchos finlandeses que conocen bien las condiciones económicas, administrativas y políticas de Rusia. Las entrevistas en profundidad con algunos de ellos muestran que están muy decepcionados con los últimos eventos –el caso Calvey es lo principal que causa preocupación– y la forma en que los funcionarios de seguridad rusos tratan a los negocios, no solo los extranjeros. Sin embargo, según la definición de uno de los encuestados, aquellos que continúan trabajando en Rusia continuarán haciéndolo, y sin esperanzas de mejores condiciones, solo pueden empeorar. Pero la aparición de nuevos casos graves con socios occidentales, incluidos los finlandeses, los inversores y las empresas en las condiciones actuales, es casi imposible.

Como regla general, los empresarios finlandeses han estado trabajando en Rusia durante mucho tiempo y tienen algo con lo que comparar la situación actual. «Las condiciones para hacer negocios», dijo uno de nuestros encuestados finlandeses, «eran tres en una escala de cinco puntos (...) Antes del arresto de Khodorkovsky, todo era diferente (...) Luego hubo cambios fundamentales en el clima de negocios». Debemos decir que el arresto de Calvey, con todos sus efectos negativos, en principio, no afectó la percepción de los empresarios de las condiciones para hacer negocios en Rusia. El entendimiento de que los derechos de propiedad en la Federación de Rusia no están protegidos y en cualquier momento cualquier cosa puede sucederle a alguien, viene de mucho antes.

Sin embargo, hay oportunidades para adaptarse al medio ambiente, especialmente porque todas las empresas finlandesas en Rusia invariablemente cumplen con la ley y no son absolutamente

corruptas. Tanto los socios como el estado lo saben. Por lo tanto, no hay reclamos serios para los empresarios finlandeses. Paradójicamente, uno de nuestros encuestados señaló que el trabajo con socios rusos, así como con las autoridades locales en algunas regiones rusas, se ha vuelto más efectivo recientemente. Esta no es una tendencia general, pero, por ejemplo, en el negocio de la construcción y el desarrollo, los socios rusos «no quieren ver a los accionistas engañados», confían en las empresas finlandesas y, por lo tanto, intentan mantener relaciones buenas y productivas con ellos. Además, las autoridades regionales buscan atraer inversión extranjera: no son suficientes, al igual que la presencia de grandes empresas occidentales. «Las autoridades locales quieren mostrar», dijo el encuestado, «que Rusia es un país donde puede invertir». La política no juega un papel importante, especialmente si no se trata de sectores estratégicos.

Parecería que tal posición de uno de nuestros encuestados contradice la noción de un clima de inversión deficiente. Sin embargo, debe entenderse que ambas partes, el anfitrión de la inversión y el inversor, están tratando sinceramente de trabajar de manera efectiva y eficiente, superando el entorno adverso. La economía, a pesar de las graves invasiones del estado, sigue estando basada en el mercado, donde existe una demanda de bienes y servicios, y aquellos que quieren y saben cómo hacer negocios en entornos a menudo hostiles continúan con su actividad empresarial.

En las industrias donde los actores estatales están presentes, las relaciones entre los dos países son importantes, lo que es bastante parejo en el caso de Finlandia. Sin embargo, el problema más importante aquí son las relaciones con los líderes regionales, cuyo grado de profesionalismo, según nuestros encuestados, es muy diferente. Hay gobernadores que impiden que las empresas funcionen, y hay quienes están muy familiarizados con los problemas y la ayuda: «a veces lo que es posible en Moscú es imposible en

San Petersburgo». Las autoridades no escuchan a los inversores, se muestran reacias a aconsejar sobre la mejora del entorno empresarial y la racionalización de la legislación. Además, como señalaron los encuestados, en general no se puede construir un negocio solo con buenas relaciones con el gobernador o el alcalde, aunque solo sea porque a menudo se han cambiado recientemente.

El segundo problema regional es el *clanismo*, que a veces interfiere con los negocios. Independientemente de la escala del negocio, y esto ha sido enfatizado por nuestros expertos en todo momento, es muy importante cumplir con la letra de la ley y en ningún caso dar sobornos: entonces la actitud de las autoridades y los socios será apropiada.[39] Además, los inversores extranjeros, a pesar de su deseo de adherirse a las reglas, están molestos por la imprevisibilidad del entorno regulatorio.[40]

El problema del personal es diferente para las empresas de distintos niveles en diversas industrias: alguien necesita personas que puedan hablar con las autoridades sobre los permisos, incluida la conexión de agua, electricidad, gas; otros necesitan cabilderos; otros necesitan personal de ingeniería. Algunos tienen escasez de personal, especialmente en industrias jóvenes -por ejemplo, logística- mientras que otros, en particular en la construcción, no tienen tales problemas. Para muchos, las competencias de gestión son importantes: «El gerente de proyecto es el puesto más importante». De las fuentes consultadas, todas expresan su satisfacción con el nivel de capacitación en Rusia: la profesionalización y el

39 Como mencionó un entrevistado: «No dar sobornos, eso significa que no lo hacemos: estamos este punto de vista es más fácil. Pero es más difícil para las empresas rusas, tienen que ceder. Aunque en general la situación con la corrupción no se ha vuelto tan deprimente, tienen miedo al castigo».

40 «Todo cambia constantemente. La adaptación lleva tiempo y nervios. Si en Finlandia necesitamos una persona para resolver estos problemas (de interacción con el entorno externo y la burocracia. Nota de los Autores) entonces aquí necesitamos tres o cuatro «. Fin de la Cita

rejuvenecimiento tienen lugar simultáneamente: «Todos entienden qué son los ingresos, la facturación, el margen, la depreciación»; «Ya no hay diferencia entre países, hay una diferencia entre edades»; «Ya no preguntamos por la experiencia laboral en empresas extranjeras».

A pesar del hecho de que hay un aumento en la profesionalidad de los gerentes en varios niveles, la burocracia sigue siendo un problema grave. Por ejemplo, obtener un permiso de construcción lleva al menos un año. Desde la decisión de invertir hasta el inicio de la producción: tres años. «Esto no está relacionado con la situación política», razonó un experto, «pero cuando se combina con él, da un efecto muy malo». A veces, la duración excesiva de los procesos comerciales se ve afectada por la rotación del personal en las administraciones rusas en varios niveles. Además, las personas que se espera que renuncien en cualquier momento simplemente tienen miedo de tomar decisiones.

A pesar de las mejoras en los impuestos y en parte -pero solo en parte- en la administración de aduanas, los inversores extranjeros no están satisfechos con las actividades de las estructuras de inspección: «Buscan delitos donde obviamente no están allí». La situación se ha intensificado en los últimos dos o tres años. Aunque, de acuerdo con uno de nuestros expertos, «debe ser una persona muy seria (es decir, con excelentes conexiones. –Nota de los Autores) para» ascender «a negocios extranjeros». Sin embargo, se encuentran personas tan «serias» –nuevamente, el caso de Michael Calvey es un ejemplo típico– y aun así no hay garantías de un trabajo tranquilo. «No habrá inversión si todo sigue como está», dice uno de los empresarios finlandeses. «Se necesita una reducción fundamental en el componente de energía, especialmente para negocios innovadores». Cualquier riesgo es posible, los inversores están seguros y el negocio extranjero está listo para todo «hasta cerrar las fronteras».

¿Hay algún cambio para mejor? Los emprendedores son unánimes: no. «El horizonte real de los planes de negocios es de 5-6 años», señala el encuestado. «En esta perspectiva, los cambios no son visibles». No hay un crecimiento económico serio, lo negativo está creciendo –y el caso Calvey, repetimos, jugó un papel aquí–, mientras los principales actores del lado ruso «usan el sistema por sí mismos». «Desde el punto de vista del inversor», dice otro experto, «el problema número uno es cómo mejorar la imagen de Rusia». En Rusia, los empresarios solo ven problemas ».

LIMITACIONES DEL TRÁNSITO TECNOCRÁTICO Y LA MODERNIZACIÓN

El éxito de varios proyectos –por ejemplo, varios programas de Skolkovo– no cambia los fundamentos fundamentales de un sistema autoritario. Más de una vez en conversaciones con nosotros, los encuestados dijeron que si una persona que personifica un proyecto se va, lo más probable es que la iniciativa se detenga. Entre tales proyectos, se mencionó el «Gobierno Abierto»; Mikhail Abyzov, el ministro de coordinación de sus actividades, fue el único «motor» de esta iniciativa. Con su renuncia, el proyecto terminó, y después del arresto fue completamente desacreditado. [41] Los proyectos del nivel de «Líderes de Rusia» tienen un serio apoyo administrativo y político, pero esto no significa que se convertirán en un mecanismo permanente para la selección del personal y sobrevivirán a los diversos cambios políticos de los próximos años.

Como resultado, el efecto general del mecanismo «lanzamos proyectos, reemplazamos individuos, pero no cambiamos las instituciones» es bastante negativo. La selección de cuadros para la gestión y la economía es igual de negativa. En algunos

41 Se asumió que en el marco del «Gobierno Abierto» se establecería un sistema de trabajo con la comunidad de expertos y el público. Se implementaron varios proyectos, incluso en el ámbito digital.

casos, el estado está interesado en equipos que «podrían hacer algo». A veces, los funcionarios, que a veces también necesitan diálogo y «aire», quieren ir al menos temporalmente más allá del mundo burocrático y comunicarse con expertos y gerentes independientes. Pero en general, resulta que los gerentes o socios verdaderamente buenos para el estado son solo una carga. Si la lealtad y una lucha exitosa contra la tensión social siguen siendo los criterios principales para evaluar el trabajo de un administrador estatal, entonces el poder personificado por el Kremlin no está realmente interesado en otra cosa que no sea la autoconservación.

La esencia del poder mediocrático –es decir, caracterizado por la mediocridad– sigue siendo la misma. Las personas fuertes, creativas e independientes no encajan en el sistema, pierden la oportunidad de una autorrealización y un comportamiento adecuados de acuerdo con sus valores. Demasiados tienen que hacer esfuerzos sin sentido, las tareas se hacen más pequeñas, el interés en el trabajo activo desaparece. A personas activas y experimentadas de 40-50 años de edad, según uno de los expertos, «el sistema las arroja a la emigración o la pesca» , «todo su valor personal es devorado por el medio ambiente». Ellos siguen sin ser actores, sino observadores de cómo alguien más estropea el medio ambiente y toma decisiones inapropiadas. Sin mencionar el hecho de que la situación política requiere más personal de las fuerzas de seguridad y especialistas en la lucha contra la oposición. ¿Qué tipo de coalición hay para la modernización si no hay un tema de modernización en la agenda?

La raíz del problema está en el sistema político. La principal limitación política del modelo de modernización consiste en que apenas es posible cambiar los mecanismos de gestión en un sistema cuya propiedad raigal consiste precisamente en la fusión del estado y los negocios, la combinación de poder y propiedad y la construcción de relaciones patrón-cliente. Este sistema todavía es

«clandestino» y, como lo dice la socióloga Olga Kryshtanovskaya, «Sechin no puede convertirse en presidente, pero su protegido sí puede».[42] No puedes vivir en una sociedad de clanes y estar libre de clanes. Este ejemplo indica que muchos oligarcas estatales que forman parte del círculo íntimo del presidente pueden no ser políticos públicos en el sentido habitual, pero su influencia es tan grande que, como líderes en la sombra, pueden controlar personajes que se consideran figuras políticas prominentes.

No hay señal desde arriba sobre qué es la modernización, en qué enfocarse. La única señal que podemos atribuir condicionalmente, como hemos demostrado, a la modernización, es el desarrollo de la economía digital. Las empresas no tienen motivos serios para creer en las aspiraciones de modernización de las élites estatales. Citando una entrevista de un experto: «Un negocio exitoso es uno que escapó a la atención del estado, incluido el apoyo estatal» .

Este es un punto muy importante, en ese contexto. La estructura autoritaria de la política también corresponde al sistema del capitalismo de estado, que se basa en la economía de alquiler. Y en sistemas de este tipo, el crecimiento económico es difícil.[43] El estado está en todas partes. Esto se evidencia, en particular, por la estructura de los ingresos reales disponibles de la población. Por ejemplo, la participación del ingreso empresarial, según el Servicio de Estadísticas del Estado Federal, cayó de un 15.2% en todo el mercado en 2000 a un 7.5% en 2018. La participación de los ingresos de la propiedad en 2018 ascendió a un insignificante 4.9%

42 Whitehouse M. «Lo que viene después de Putin podría ser un problema». *Bloomberg*. 25 de agosto de 2018 // https://www.bloomberg.com/view/articles/2018-08-25/putin-s-succession-plan-could-be-trouble-for-russia.

43 Véase:. Murphy K. M., A. Shleifer, Vishny R. W. «¿Por qué la búsqueda de rentas es tan costosa para el crecimiento?. Documentos y procedimientos de revisión económica estadounidense». 83 (2). Mayo de 1993. P. 409-414 // https://scholar.harvard.edu/shleifer/files/rent_seeking.pdf .

(en los EE. UU., Por ejemplo, fue del 14,2%), pero la participación de los pagos sociales alcanzó el 19.4% en el mismo 2018 (13,9% en 2000). Dichos indicadores demuestran un alto grado de participación estatal en los procesos sociales y económicos.[44]

Según algunos de nuestros encuestados, los ingresos de la mayoría de la población rusa dependen de la economía de alquiler. Para un número mucho menor de ciudadanos, la economía de mercado adecuada con patrones de comportamiento del mercado sirve como fuente de ingresos. Esta es pequeña, más bien local, no participa en procesos globales; está representada por el tipo de «emprendedor que no sabe inglés» del campo ruso. El problema de los agentes económicos de este tipo es que una gran economía de alquiler «devora» a los representantes de la segunda economía de mercado, o se lleva sus negocios a sí mismos. La tercera parte, muy pequeña, es la parte globalmente competitiva de la economía rusa con una participación del 2-3% (en comparación con una renta del 70%). Los representantes de esta economía, como los programadores, no tienen problemas para encontrar trabajo, y no necesariamente en Rusia.

El objetivo de cualquier modernización es hacer que la segunda economía de mercado local, se una a la tercera, globalmente competitiva. Sin embargo, mientras se lleva a cabo el proceso inverso, opera la absorción de la segunda economía por la primera, de alquiler. A veces, los representantes de la segunda economía buscan protección en la primera: garantiza la seguridad del negocio; sin embargo, a cambio, prácticamente se les apropia. La gran industria de TI rusa nació en la segunda economía, pero la primera la está tomando gradualmente por sí misma: este es un ejemplo de cómo

44 Véase:. Nikolaev. «A la cuestión de la dinámica de los ingresos reales disponibles en efectivo de la población». *FBK*. Grant Thornton. 28 de mayo de 2019 // https://www.fbk.ru/upload/docs/I_Nikolaev_Real%20cash%20income.pdf .

la economía de alquiler absorbe todo lo que resulta ser de alguna manera efectivo.

Con respecto a dicho modelo, enfatiza nuestro encuestado, existe un consenso entre las élites. Nadie cree que la segunda economía crecerá de manera independiente y repondrá a la tercera. Y no solo no cree, sino que no quiere: es más conveniente adaptarse a la economía de alquiler, integrarse en el sistema de relaciones del capitalismo de estado y no crear un nuevo valor, sino consumir. Por lo tanto, la economía del alquiler se reproduce por sí sola. Resulta que no es la coalición para la modernización de la que hablaron los expertos durante la presidencia de Dmitry Medvedev la que domina, sino una especie de «coalición para el estancamiento». Además, se comprende la ineficiencia del sistema, pero sin el deseo de cambiar sus fundamentos fundamentales.

Pero a los representantes de la coalición de estancamiento les gustaría enviar a sus hijos a la tercera economía global. Esta conclusión coincide con la conclusión que hicimos sobre la base de un estudio sociológico sobre la actitud de la población hacia la propiedad privada (2018). Luego, el 59% de los encuestados que participaron en la encuesta en toda Rusia dijeron que les gustaría que sus hijos trabajaran por cuenta propia o que encontraran su propio negocio; a un 47% les gustaría esto por sí mismos, dadas las dificultades de hacer negocios en condiciones adversas.[45] El representante promedio de la élite actual es el «pequeño Putin». La limitación clave de las decisiones gerenciales y el comportamiento político de tales líderes son las acciones que tienen en cuenta la atmósfera general del país, según la lógica: «Si Putin estuviera en mi lugar, ¿qué haría?»

45 Ver: A. Kolesnikov, D. Volkov. «El nuevo sueño ruso: propiedad privada para niños». El Centro Carnegie de Moscú. 20 de noviembre de 2018 // https://carnegie.ru/2018/11/20/en-pub-77744 .

Por supuesto, el poder en Rusia no es monolítico, se distribuye. El control manual desde el nivel más alto cubre un porcentaje insignificante de todas las decisiones tomadas en el país. Más bien, esta gestión es de naturaleza didáctica, con una demostración aproximada de la mecánica de la toma de decisiones. Pero Putin no tiene absolutamente ninguna necesidad de intervenir directamente en todos los procesos: las decisiones administrativas, los veredictos de los tribunales y las acusaciones se articulan, emiten, aplican, teniendo en cuenta su posición potencial en cualquier tema. En una parte importante de los casos, esta posición del «Putin imaginario» se malinterpreta, y luego debe activar el mecanismo de control manual. Corrigiendo errores graves y excesos, resultados de la codicia y la estupidez de los funcionarios que persiguen principalmente intereses personales y del clan.

Una parte sustancial de la élite espera ansiosamente el año 2024 solo en el sentido de que es necesario prepararse para cualquier decisión sobre el tránsito del poder, que será adoptada por un círculo muy reducido de personas. Cuál será esta decisión no es un tema muy significativo. El problema principal es la estrategia y las tácticas de supervivencia. El político opositor, diputado de la Asamblea de Diputados del Óblast de Pskov del partido Yabloko, Lev Schlosberg, dijo sin piedad y con precisión qué es esa élite: «No creo en la élite rusa actual. La élite es responsable ante la sociedad, la élite debe expresar su opinión, incluido al rey, si él es lo que ella piensa. Esta es su función. La élite debe ser más audaz que la sociedad, ser más abierta y tener menos principios. Entonces se le puede llamar una élite. Pero esto es un montón para escuchar el mensaje del presidente a la Asamblea Federal: —Esto es algo indecente, este no es el *establishment*, esta no es la vanguardia de la sociedad. Estas son personas que no se avergüenzan de usar

los beneficios del poder, que han vendido sus almas por lealtad y confianza».[46]

La principal preocupación del *establishment* ruso para el período de 2018 a 2024 no es la modernización del país, sino el tránsito suave y seguro del poder para las élites políticas, administrativas y empresariales. Siendo alto el grado de participación estatal en los procesos económicos, políticos y comerciales del sistema, la tarea de las élites «civiles» y tecnocráticas es mantenerlo en un estado estable y la misión de las élites del poder determinar su marco político e ideológico.

Las posibilidades de modernización en el marco del régimen político existente en Rusia son limitadas, si no negadas. Las élites empresariales y de gestión son conscientes de esto, pero son completamente incapaces y no quieren superar los obstáculos a la modernización; mucho menos construir coaliciones para ello. La decisión sobre dónde mover el país se tomará sin tener en cuenta las opiniones de las élites. Son extras, observadores o puestos, nada más. Es probable que una decisión de este tipo pueda verse más influida, incluso en pequeña medida, por los procesos que tienen lugar en la sociedad civil rusa.[47]

46 P. Kanygin, «Chico, tienes razón». Diputado Pskov, autor de la ley sobre la protección de las personas de la falta de respeto por el poder Lev Schlossberg - sobre el tiempo, Putin y él mismo. Novaya Gazeta. 11 de abril de 2019 // https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/04/11/80185-paren-da-ty-prav .

47 Ver: A. Kolesnikov. «Tres frentes de la 'sociedad de ciudadanos': conflicto creciente». El Centro Carnegie de Moscú. 27 de febrero de 2019 // https://carnegie.ru/2019/02/27/en-pub-78453 .

Autogolpe en Turquía (2016-2018): Lecciones del Perú

Orçun Selçuk[1] • *Astrid Arrarás*[2]

INTRODUCCIÓN

Los líderes personalistas alrededor del mundo presentan un reto a la gobernanza de las democracias liberales. Desde la perspectiva de la democratización, varios estudios han analizado como los líderes personalistas, particularmente de derecha, contribuyen al retroceso democrático, el cual describe un movimiento alejándose de la democracia liberal y acercándose al autoritarismo en una escala continua (Bermeo, 2016; Diamond, 2015; Kendall-Taylor, Frantz, and Wright, 2017). Viktor Orbán (Hungría), Alberto Fujimori (Perú), Recep Tayyip Erdoğan (Turquía), Donald Trump (Estados Unidos) y Rodrigo Duterte (Filipinas) son algunos ejemplos notables de líderes personalistas y derechistas que han concentrado poder en la rama ejecutiva, debilitando los principios constitucionales liberales como el estado de derecho, la división de poderes y los derechos y libertades individuales.

Mientras la mayoría de los trabajos de investigación se enfocan en los procesos lentos de retroceso democrático, particularmente en el engrandecimiento ejecutivo,[3] en este artículo examinamos

1 Politólogo, Luther College.

2 Politóloga, Florida International University.

3 En el artículo, Bermeo (2016) considera que Turquía es un caso típico de engrandecimiento de la rama ejecutiva pero no es un caso de autogolpe.

una forma rápida: los autogolpes. Los autogolpes ocurren cuando «un presidente cierra las cortes y la legislatura, suspende la constitución, y gobierna por decreto hasta que se celebre un referéndum y elecciones legislativas para aprobar poderes ejecutivos más amplios» (Cameron, 1998: pp.125). Resaltando una necesidad de ejercer un liderato fuerte para encarar una crisis en curso (por ejemplo: un tranque legislativo, una insurrección guerrillera, una dificultad económica y amenazas externas), los líderes personalistas imponen un *fait accompli* en otros actores políticos y buscan mayores poderes para gobernar de forma directa. A diferencia de los golpes militares, en donde típicamente los militares destituyen a los civiles del poder, en los autogolpes, los jefes ejecutivos electos asumen provisionalmente los poderes dictatoriales al caracterizar las otras ramas del gobierno como ineficaces (Pérez-Liñán, 2007). Finalmente, a través de los autogolpes, los jefes ejecutivos buscan obtener mayores poderes para gobernar con menos jugadores con poder de veto.

Este artículo examina la declaración del estado de emergencia del Presidente Erdoğan el 20 de julio de 2016 como un caso de autogolpe contemporáneo. Para apoyar nuestro argumento que un autogolpe ocurrió en Turquía, lo comparamos con el caso de autogolpe más documentado en el período después de la Guerra Fría: Perú bajo Fujimori. Aunque Perú y Turquía son diferentes en términos de ubicación geográfica, características demográficas y legados históricos, ambos tienen o tuvieron presidentes personalistas, de derecha y neoliberale, y sobre todo, hubo un autogolpe en ambos países, como demustra este trabajo.

Por lo tanto, este artículo tiene los siguientes objetivos: (1) documentar y establecer el caso turco como un autogolpe y (2) mejorar el entendimiento sobre el retroceso democrático en Turquía desde julio del 2016 hasta julio del 2018. Para lograr estos objetivos teóricos y empíricos, organizamos el artículo de la siguiente

manera. La próxima sección examina la literatura sobre personalismo, retroceso democrático y autogolpes. Luego el artículo analiza los estudios de en el caso de Perú y Turquía. Finalmente, el artículo concluye con una comparación de los resultados sobre los dos autogolpes y sus implicaciones para futuras investigaciones sobre la política en Turquía.

CONSIDERACIONES TEÓRICAS

Los estudiantes de Política Comparada utilizan varias definiciones de la democracia. La celebración de elecciones libres y justas en forma frecuente es un elemento central de casi todas las definiciones de la democracia. De acuerdo con la definición minimalista de la democracia, los académicos clasifican a los países como democráticos o no democráticos, dependiendo de la presencia de elecciones que ocurran de forma regular. De hecho, el enfoque en las elecciones es muy útil y parsimonioso para poder estudiar las olas globales de democratización. Esto permite identificar tendencias generales hacia la democracia o alejado de un gobierno democrático (Huntintgon, 1991). Sin embargo, este enfoque no es adecuado para investigar el estado de la democracia en países individuales. Para entender la naturaleza multidimensional del concepto, necesitamos ir más allá de la existencia de las elecciones y tomar en cuenta otras variables. En la literatura sobre la democratización comparada, la democracia liberal es el área de investigación predominante, la cual está basada en una tradición de republicanismo y liberalismo constitucional para poner límites al mandato de una mayoría pura (Dahl, 1971; Zakaria, 1997).

Las democracias liberales en su forma ideal tienen las siguientes características: ejército subordinado, división de poderes, poder ejecutivo limitado, resultados electorales inciertos, alternancia en el poder, reconocimiento de derechos de minorías, libertad de asociación, información, creencias, expresión y reunión, igualdad

bajo la ley, poder judicial independiente, estado de derecho, y una constitución suprema (Diamond, 2015). En teoría existen límites en las acciones de presidentes o primer ministros dado que los principios constitucionales liberales mencionados anteriormente deberían limitar sus poderes. Sin embargo, la violación de los principios constitucionales es muy común, especialmente en los países en vías de desarrollo, donde los jefes ejecutivos abusan de su poder de manera frecuente a expensas de otras ramas del gobierno, el abandono del estado de derecho y de la violación de las libertades civiles. En países donde la adhesión a las normas constitucionales es débil, los líderes personalistas tienden a dominar el proceso en la toma de decisiones y destacar la importancia de la rendición de cuentas de forma vertical a través de elecciones y referéndum, en lugar de instituciones autónomas de rendición de cuentas horizontales (O'Donnell, 1994). Sin la fuerte tradición de respeto a las instituciones formales, las prácticas informales aumentan el poder del ejecutivo y reducen el poder de los jugadores constitucionales con poder de veto como la legislatura, el poder judicial y los partidos politicos (Levitt, 2012).

Dentro del marco de estos contextos personalistas, los autogolpes ocurren cuando «un presidente cierra las cortes y la legislatura, suspende la constitución y gobierna con decretos hasta que la celebración de un referéndum y de nuevas elecciones legislativas para aprobar poderes ejecutivos más amplios» (Cameron, 1998, pp.125). A diferencia de los golpes militares tradicionales que destituyen a los civiles del poder, en los autogolpes el jefe ejecutivo civil asume poderes dictatoriales al caracterizar las otras ramas del gobierno como ineficaces. Al justificar la necesidad de adoptar un liderato fuerte para encarar una crisis en curso (por ejemplo: tranque legislativo, insurgencia guerrillera, dificultades económicas, y amenazas externas), ellos imponen un *fait accompli* sobre otros

actores políticos y buscan aumentar sus poderes para gobernar directamente (Pérez-Liñán, 2007).

Como se puede apreciar en la Tabla 1, hemos compilado una lista de autogolpes que han ocurrido alrededor del mundo desde 1946. Esta lista en una versión modificada del conjunto de datos de Marshall y Ramsey Marshall (2016) sobre casos de subversión de ejecutivos gobernantes. En nuestra lista hemos contado autogolpes llevados a cabo por presidentes y ministros pero no por monarcas. También hemos incluido las siguientes cinco observaciones adicionales que faltaban en el conjunto de datos existente: Ecuador 1946, Bolivia 1974, Guatemala 1993, Rusia 1993, Gambia 2016, and Venezuela 2017. En relación con el caso turco, hemos cambiado el año del autogolpe de 2014 a 2016. Como elaboraremos en la siguiente sección, podemos identificar el origen del autogolpe en Turquía con la elección de Erdoğan como presidente en 2014. Sin embargo, el autogolpe ocurrió el 20 de julio de 2016 con la declaración del estado de emergencia. Para aplicar la definición de autogolpe de Marshall y Marshall,[4] el Presidente Erdoğan no «derrocó el orden constitucional e impuso un régimen autocrático» de una forma absoluta el 28 de agosto de 2014. No obstante, dos años después, del 20 de julio de 2016, el caso satisface esos criterios.

En la versión revisada del conjunto de datos, hemos identificado treinta y seis casos de autogolpe entre 1946 y 2017. Durante la Guerra Fría (1946-1989), hubo veinte y tres autogolpes, mientras que en el período después de la Guerra Fría (1990-2017) hubo catorce. Entre los catorce autogolpes en el período después de la Guerra Fría, en este artículo, vamos a comparar los estudios de

4 Marshall and Marshall codifican a los autogolpes de la siguiente manera en la página 3: «Autogolpe: Indicadores de los sucesos de subversión del orden constitucional por un ejecutivo en funciones (usualmente electo) y la imposición de un régimen autocrático durante el año en record (frecuentemente llamado golpe presidencial o autogolpe.)

caso cualitativos de Turquía bajo Erdoğan con Perú bajo Fujimori. Esta selección de casos de forma no aleatoria responde a dos razones principales. Primero, al comparar a Turquía con el caso más documentado de autogolpe, podemos reforzar nuestro argumento de que el Presidente Erdoğan lanzó un autogolpe el 20 de julio de 2016. Segundo, podemos obtener lecciones comparativas y transregionales del caso peruano para entender la actual trayectoria de Turquía.

ESTUDIOS DE CASO

PERÚ BAJO FUJIMORI

En 1990, un profesor universitario de descendencia japonesa, llamado Alberto Fujimori, ganó las elecciones presidenciales en el Perú. Como candidato «outsider» o nuevo en la arena política, Fujimori prometió tomar una distancia significativa de los últimos dos presidentes peruanos, Fernando Belaúnde Terry de Acción Popular (AP) y Alan García de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), cuyos gobiernos se caracterizaron por un bajo rendimiento de la economía, aumento de la violencia por organizaciones guerrilleras y escándalos de corrupción. Para ganar las elecciones, Fujimori creó una plataforma personalista, Cambio 90, la cual era apoyada principalmente por pequeños comerciantes y la comunidad evangélica (McClintock, 1993). En la primera vuelta de las elecciones, Fujimori perdió (24 por ciento) frente a otro candidato personalista, el novelista renombrado internacionalmente, Mario Vargas Llosa (28 por ciento). En la segunda vuelta, Fujimori identificó a Vargas Llosa como el candidato de la élite blanca y defensor de las políticas neoliberales, mientras que el alegaba ser el representante del peruano promedio. Dentro de este contexto, Fujimori fácilmente ganó la segunda vuelta con una margen de 23 por ciento por encima de Vargas Llosa (Roberts, 1995).

TABLA 1.
LISTA DE AUTO-GOLPES DE ESTADO DESDE 1946

País	Líder	Año
Ecuador	José María Velasco Ibarra	1946
Bolivia	Mamertó Urriolagoitía Harriague	1951
Francia	Charles de Gaulle	1958
Senegal	Léopold Sédar Senghor	1962
Congo	Alphonse Massemba-Débat	1963
Singapur	Lee Kwan Yew	1965
República Dominicana	Joaquín Balaguer	1966
Uganda	Milton Obete	1966
Zambia	Kenneth Kaunda	1968
Guinea Ecuatorial	Francisco Macias Nguema	1969
Kenia	Jomo Kenyatta	1969
Malasia	Tunku Abdul Rahman	1969
Las Filipinas	Ferdinand Marcos	1969
Ecuador	José María Velasco Ibarra	1970
Sierra Leona	Siaka Stevens	1971
Uruguay	Juan María Bordaberry	1972
Corea del Sur	Park Chung-hee	1972
Bolivia	Hugo Banzer	1974
Comoras	Ali Solih	1976
El Salvador	Carlos Humberto Romero	1977
Guayana	Forbes Burnham	1978
Zimbabue	Robert Mugabe	1987
Comoras	Ahmed Abdullah Abderrahman	1989
Perú	Alberto Fujimori	1992
Guatemala	Jorge Serrano Elías	1993
Rusia	Boris Yeltsin	1993
Armenia	Levon Ter-Petrossian	1995
Azerbaiyán	Geidar Aliyev	1995
Bielorrusia	Aleksandr Lukashenko	1995
Albania	Sali Berisha	1996
Zambia	Frederick Chiluba	1996
Haití	René Preval	1999
Níger	Mamadou Tanja	2009
Burundi	Pierre Nkurunziza	2015
Turquía	Recep Tayyip Erdoğan	2016
Gambia	Yahya Jammeh	2016
Venezuela	Nicolás Maduro	2017

Fuente: Versión revisada de Marshall y Marshall (2016).

Cuando asumió el poder como presidente, Fujimori tuvo que encarar el desafío del aumento de la violencia por las organizaciones guerrilleras. El Sendero Luminoso, la organización guerrillera más poderosa y violenta del Perú, controlaba las regiones sur y central del interior del país y aumentaba su presencia en las zonas alrededor de Lima. Con el objetivo de derrocar el estado peruano y establecer una sociedad comunista como en China bajo Mao, el Sendero Luminoso atacaba a las autoridades políticas y los líderes cívicos que se oponían a la organización guerrillera. Sendero Luminoso también colaboraba con los narcotraficantes, protegiendo así su producción de coca y su infraestructura, a cambio de dinero. Otro grupo que buscaba derrocar a Fujimori era el Movimiento Revolucionario Tupac Amarú (MRTA), una organización guerrillera pro-Cuba que operaba principalmente en las áreas urbanas (Smith, 1994). Tanto el Sendero Luminoso como el MRTA fueron responsables de cientos de muertes y daño a la propiedad privada e infraestructura. Su búsqueda de derrocar al gobierno peruano representó una amenaza a la estabilidad democrática y el orden político. Además de representar un problema de seguridad por el aumento de la violencia de los grupos guerrilleros, Fujimori también heredó problemas económicos de sus predecesores tales como altos niveles de inflación, estancamiento económico y una relación deteriorada con la comunidad financiera internacional (Mauceri, 1995).

Durante los primeros quince meses en el poder, Fujimori debilitó las instituciones del Perú. Para empezar, el partido Cambio 90 de Fujimori ocupaba menos de un cuarto de los puestos del Congreso y no contaba con una mayoría para apoyar las políticas de Fujimori. A pesar de esto, el Congreso delegó poderes legislativos a Fujimori en varias ocasiones. Por su cuenta, Fujimori promulgó decretos sobre la economía y la seguridad. Por medio de su

uso de decretos en repetidas ocasiones,[5] Fujimori prescindió de la rama legislativa para tomar decisiones sobre el rol del estado en la economía y aumentar la autoridad del ejército y las agencias de inteligencia. En respuesta, el Congreso revocó o modificó los decretos anteriores para limitar el poder de Fujimori. El Congreso también censuró al Ministro de Agricultura de Fujimori y algunos legisladores intentaron destituir a Fujimori de la presidencia por motivo de discapacidad moral. En el marco de esta tensa relación, Fujimori criticó la rama legislativa por interferir con sus esfuerzos para mejorar la economía y luchar de manera eficaz contra las organizaciones guerrilleras (Kenney, 2004).

De igual manera, el poder judicial presentó retos adicionales para el gobierno de Fujimori en el área de la lucha contra las organizaciones criminales. Los miembros del poder judicial, quienes habían sido nombrados por los gobiernos anteriores, no estaban dispuestos a apoyar las políticas de mano dura de Fujimori en su campaña antiterrorista. Dado que las organizaciones guerrilleras y las organizaciones de narcotraficantes habían sobornado y amenazado a varios miembros del poder judicial, la autonomía del poder judicial se había deteriorado. En vista del de la falta de apoyo del poder judicial, Fujimori criticó a las cortes judiciales por fallar en su administración de la justicia y por no colaborar en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico (Ferrero Costa, 1993).

En medio de los choques entre las ramas legislativas y judiciales, el presidente Fujimori llevó a cabo un autogolpe el 5 de abril de 1992. En un mensaje de televisión dirigido a la nación, Fujimori anunció la suspensión de la Constitución de 1979, la disolución del Congreso y la reorganización en el Poder Judicial, más específicamente la Corte Suprema, el Tribunal de Garantías Constitucionales

5 A finales de 1991, Fujimori emitió decretos presidenciales para aprobar 120 leyes nuevas, ver Mauceri.

y el Fiscal Público. Después de acusar al Congreso, a las cortes judiciales y los partidos políticos tradicionales por obligarlo a tomar estas medidas, Fujimori enumeró las siguientes metas para su gobierno: el cambio de las provisiones de la constitución con relación al poder legislativo y judicial, la lucha contra la corrupción en el poder judicial, la modernización de la burocracia, el orden y la estabilidad a través de políticas de seguridad nacional, el castigo a los guerrilleros y narcotraficantes y la promoción de reformas económicas neoliberales. Al final del discurso de televisión de Fujimori, el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, los Comandantes en Jefe de cada rama de las Fuerzas Armadas y el Director de la Policía Nacional ofrecieron su apoyo a Fujimori. Ese mismo día, las tropas del ejército ocuparon todos los medios de prensa y arrestaron a líderes de la oposición (Ferrero Costa, 1993).

Una gran mayoría de la población al igual que los militares, la policía y la comunidad de negocios apoyaron el autogolpe de Fujimori. Las encuestas nacionales demostraron que el apoyo al autogolpe estuvo entre el 80 y el 90 por ciento de la población. Las acciones que generaron más apoyo fueron: el cierre del Congreso y la reorganización del poder judicial. Doce años después del final del régimen autoritario en 1980, los peruanos expresaron su frustración con la democracia debido a los problemas económicos, el tranque político, el deterioro institucional, y el aumento del terrorismo en el país. En esta coyuntura, la oposición al autogolpe de Fujimori se limitaba a un grupo de intelectuales, políticos y periodistas. El abrumador apoyo al autogolpe de Fujimori explica porque fue un golpe de estado sin derramamientos de sangre (Kenney, 2004).

El siguiente paso del autogolpe de Fujimori fue reescribir la constitución e institucionalizar su aumento de poder. En el mes de mayo de 1992, Fujimori dio un discurso en una reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA), en las Bahamas, donde

prometió celebrar una elección para una Asamblea Constituyente dentro de los próximos cinco meses. De acuerdo al cronograma, la Asamblea Constitucional iba a diseñar una nueva constitución mientras ejercía las labores legislativas del Congreso disuelto anteriormente. La Asamblea Constitucional ejercería estas funciones legislativas hasta la toma de posesión del nuevo presidente y la elección de un nuevo Congreso en julio del 1995. En agosto del 1992, Fujimori promulgó un decreto electoral que contenía información sobre el Congreso Constituyente y las elecciones. De acuerdo al decreto, el Congreso Constituyente sería unicameral y estaría compuesto por ochenta miembros. El Congreso Constituyente, en su capacidad de funcionar como el Congreso del Perú hasta el 1995, tendría la responsabilidad de diseñar una nueva constitución que debería ser sometida para la aprobación del pueblo en un referéndum (Ferrero Costa, 1993).

Antes de las elecciones del Congreso Constituyente, dos eventos contribuyeron al aumento de popularidad de Fujimori. Primero, una unidad especial dentro de la policía capturó a Abimael Guzmán, el fundador del Sendero Luminoso, al igual que a otros guerrilleros en septiembre de 1992. El arresto de los líderes de la organización terrorista reforzó la posición de Fujimori *vis-à-vis* a la de la oposición. Segundo, Fujimori descubrió un plan de atentado de golpe de estado organizado por un general retirado que quería derrocarlo antes de las elecciones del Congreso Constituyente. Después del descubrimiento del atentado del golpe que daría fin al autogolpe, Fujimori ordenó el arresto de docenas de altos miembros del ejército. Con la captura de Guzmán y el desmantelamiento del atentado de golpe de estado o contra golpe, Fujimori gozaba de una gran popularidad poco antes de las elecciones. En noviembre de 1992, los peruanos salieron a votar por los miembros del Congreso Constituyente. Mientras la oposición no se presentó como un frente unido, los partidos tradicionales

como APRA y AP boicotearon la elección. Los resultados le dieron la mayoría al Partido Nueva Mayoría-Cambio 90, ganando 44 de los 80 asientos disponibles. Los 36 asientos restantes fueron divididos entre nueve partidos políticos restantes (Ferrero Costa, 1993).

Como la oposición estaba dividida, los seguidores del Presidente Fujimori dominaron el Congreso Constituyente, el cual funcionaría como Asamblea Constituyente para reescribir la constitución y como la rama legislativa hasta las elecciones de 1995. Después de ocho meses de deliberaciones, el Congreso Constituyente terminó un borrador de la nueva constitución. Durante la campaña para el referéndum, Fujimori cateogorizó el voto de los ciudadanos como si fuera un plebiscito sobre su liderato, en lugar de promover una discusión sobre los cambios individuales en la nueva constitución, en comparación con la constitución de 1979. El referéndum se llevó a cabo en octubre 1993 y la nueva constitución fue aprobada por el 52 por ciento del voto. La constitución de 1993 cambió el Congreso bicameral original a uno unicameral, redujo el número de actores con poder de veto en la rama legislativa. Principalmente, la nueva constitución permitió la reelección presidencial inmediata, la cual era prohibida anteriormente. Igualmente creó un sistema separado de cortes militares, en donde la identidad de los jueces sería ocultada, para juzgar a los civiles acusados de traición o terrorismo. Por último, la nueva constitución restableció la pena de muerte (Conaghan, 2005).

Durante el período que va desde el referéndum hasta las elecciones de 1995, Fujimori tomó medidas adicionales para limitar el espacio de la oposición a través de la politización del ejército y el uso efectivo del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) (Wood, 2000). Antes de las elecciones, los datos macroeconómicos eran positivos con un 13 por ciento de crecimiento y una reducción de la inflación del 15 por ciento. También las cifras de muertes por violencia política disminuyeron de 3,745 muertes en 1990, a 600

muertes en 1994 (Palmer, 1996). Tomando en consideración estos resultados, el principal contendiente de Fujimori, el ex-Secretario General de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, «prometió administrar los logros de Fujimori a la vez que respetando las libertades civiles y los procesos democráticos de una forma más estricta que el presidente» (Weyland, 2000, pp.495).

En confirmación a las críticas de Pérez de Cuéllar, la campaña de 1995 se caracterizó por un campo de juego desigual para la oposición y los seguidores de Fujimori debido a las zonas de emergencias existentes, mandato por decretos de emergencia, participación de las fuerzas de seguridad en la campaña de Fujimori y el acceso del gobierno a recursos financieros (*LASA*, 1995). En las elecciones de abril 1995, Fujimori (con el 64 por ciento) derrotó a Pérez de Cuéllar en la primera vuelta. Además, su movimiento personalista, Cambio 90-Nueva Mayoría, ganó la mayoría de los asientos en el congreso unicameral del Perú, Como consecuencia, Fujimori logró los objetivos del autogolpe en un período de tres años.

TURQUÍA BAJO ERDOĞAN

Antes de su elección como presidente en 2014, Erdoğan fue el primer ministro de Turquía y el Presidente fundador del Partido Justicia y Desarrollo (AKP). Durante la primera participación del AKP en el parlamento (2002-2007), Erdoğan compartió el poder con otras figuras claves dentro del partido como Abdullah Gül, Bülent Arınç y Abdüllatif Şener. Después de la elección de Gül para la presidencia en 2007, Erdoğan consolidó su poder en forma gradual dentro del AKP y debilitó elementos de democracia interna del partido (Lancaster, 2014). En particular, durante el tercer término como presidente del partido (2011-2014), Erdoğan demostró «características evidentes de *personalismo*, con un fuerte sentido de misión y una concentración excesiva de autoridad en sus manos»

(Özbudun, 2014, pp.163). El aumento de las señales de personalismo, al principio de la década de 2010, también coincidió con el debilitamiento de la independencia judicial, la libertad de prensa y las libertades civiles. Como resultado de la forma en que el Primer Ministro Erdoğan manejó las Protestas en el Parque Gezi en mayo de 2013 y los escándalos de corrupción en diciembre 2013, algunos académicos caracterizaron la democracia turca como iliberal y delegativa (Bechev, 2014; Taş, 2015).

En el medio de acusaciones de autoritarismo y corrupción, en agosto de 2014, Erdoğan (con el 52 por ciento del voto) se convirtió en el primer presidente electo popularmente en la historia de Turquía. Debido a la naturaleza no partidaria y simbólica de la presidencia turca, la constitución requería que Erdoğan renunciara al Partido AKP. Por lo tanto, Erdoğan oficialmente renunció al AKP y eligió al Ministro de Relaciones Exteriores Ahmet Davutoğlu como su sucesor. En la práctica, Erdoğan continuó actuando como el presidente del AKP y como el jefe de gobierno. En lugar de respetar las reglas formales, Erdoğan frecuentemente se excedió en sus límites constitucionales y argumentó que el establecimiento de un sistema presidencial solucionaría la situación de una rama ejecutiva con doble cabeza o dos líderes. A pesar de su afán de legalizar la situación, el Partido AKP de Erdoğan carecía del número de asientos necesarios (tres-quintos) en el parlamento para convocar un referéndum constitucional sobre el presidencialismo. Para lograr su objetivo, el Presidente Erdoğan participó con el AKP en la campaña para las elecciones parlamentarias de junio 2015 (Özsoy Boyunsuz, 2014).

Como telón de fondo de estos acontecimientos, las elecciones parlamentarias se convirtieron en un referéndum sobre las ambiciones de Erdoğan de rediseñar las relaciones ejecutivas-legislativas y acumular más poder en sus manos. Los resultados de las

elecciones[6] de junio 2015 fueron decepcionantes para el presidente dado que el AKP, oficialmente liderado por el Primer Ministro Davutoğlu, falló en obtener la mayoría parlamentaria por primera vez. Este resultado significó que los partidos políticos tenían que comenzar a hablar sobre la posibilidad de formar una coalición de gobierno. Sin embargo, el Presidente Erdoğan evitó la formación de una coalición de gobierno con uno de los partidos de oposición que reduciría, en gran parte, su control sobre el gabinete. Cuando Davutoğlu falló en formar una coalición de gobierno, Erdoğan se rehusó a darle el mandato a Kemal Kılıçdaroğlu, el presidente del segundo partido político más grande, el Partido Republicano del Pueblo (CHP). Erdoğan también se benefició de la fragmentación de los partidos de oposición ya que ellos no podían superar sus divisiones sobre el tema de los kurdos. Como consecuencia, el presidente convocó a elecciones inmediatas para noviembre del 2015. En un período de cinco meses entre las dos elecciones parlamentarias, un gobierno interino liderado por el Primer Ministro Davutoğlu aparentaba gobernar Turquía mientras que el Presidente Erdoğan ejercía su fuerte influencia como un líder personalista (Öniş, 2016).

Después que el AKP perdió su mayoría parlamentaria en las elecciones de junio, el Presidente Erdoğan puso fin al proceso de paz con el Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) y atacó el ala democrática del movimiento kurdo. También atacó el Partido Democrático del Pueblo (HDP) por su vinculación con el grupo separatista terrorista. El triunfo del HDP en las elecciones de junio fue particularmente perturbador para el presidente ya que este partido llevó a cabo una campaña negándole la presidencia ejecutiva y consiguiendo su meta de sobrepasar el 10 por ciento del

6 El AKP recibió 41 por ciento del voto (258 asientos) seguido por CHP con 25 por ciento (131 asientos), el MHP con 16 por ciento (80 asientos), y el HDP con 13 por ciento (81 asientos).

umbral del electorado nacional por primera vez. Merece ser destacado el hecho que el Estado Islámico (ISIS) también atacó al HDP como una extensión de su enemistad hacia los grupos kurdos en el norte de Siria. Como resultado, los ataques terroristas de PKK e ISIS aumentaron durante las dos elecciones parlamentarias de Turquía en 2015 (*T24*, 2015).

En las elecciones de noviembre de 2015, el AKP registró un aumento en el porcentaje de los votos obtenidos[7] de 41 a 49 por ciento. Por esta vez, el AKP pudo formar un gobierno unipartidista. De acuerdo con un informe de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), las elecciones de noviembre se llevaron a cabo bajo un ambiente de campaña desigual, donde el AKP tuvo un acceso desproporcionado a los medios de comunicación mientras que las estaciones de televisión y sitios web enfrentaban cierres e investigaciones judiciales (OSCE, 2016). A pesar de la injusticia del proceso electoral, el AKP aún no pudo alcanzar el número de asientos necesarios en el parlamento para cambiarse la constitución de manera unilateral y cambiar a un sistema presidencial. A diferencia del Presidente Erdoğan, el Primer Ministro Davutoğlu interpretó los resultados de las dos elecciones parlamentarias como el rechazo del pueblo a un sistema presidencial, pero una aprobación de un gobierno unipartidista bajo su liderazgo (*BBC*, 2016a).

Cuando el público se dio cuenta de las divisiones entre el presidente y el primer ministro en mayo del 2016, Davutoğlu anunció su renuncia y convocó a una convención extraordinaria del partido. Para todos los propósitos prácticos, Davutoğlu fue despedido por el Presidente Erdoğan, quien se excedió de sus límites constitucionales una vez más, e interfirió con los asuntos internos de

7 The AKP recibió 49 por ciento del voto (317 asientos) seguido por CHP con 25 por ciento (134 asientos), el MHP con 12 por ciento (40 asientos), y el HDP con 11 por ciento (59 asientos).

su antiguo partido. Dentro del mismo mes, los delegados del AKP eligieron unánimemente al antiguo Ministro de Transporte y Comunicación, Binali Yıldırım, también elegido por Erdoğan, como el nuevo presidente del partido (*Hürriyet Daily News*, 2016). Luego del reemplazo de Davutoğlu por alguien más leal, el Presidente Erdoğan se enfocó en aumentar su control en el partido y a promover su propuesta del sistema presidencial. Un fallido golpe militar ocurrió en esta coyuntura política, aumentando la popularidad de Erdoğan como un líder personalista y el «salvador de Turquía.»

El 15 de julio de 2016, un grupo de soldados intentaron derrocar al gobierno civil al ocupar lugares estratégicos como puentes, aeropuertos, y estaciones de televisión al igual que bombardeando el parlamento, el complejo presidencial y las sedes de la policía y la agencia de inteligencia. Inicialmente, se desconocía cuáles eran las condiciones físicas del presidente y del primer ministro y tampoco era claro si una junta militar estaba al mando del poder. Tarde en la noche, el Primer Ministro Yıldırım apareció en la televisión y caracterizó la situación como una sublevación dentro del ejército en desafío a la cadena de mando. Más importante aún, el Presidente Erdoğan apareció en la cadena *CNN Turk* vía Facetime pidiéndole a los ciudadanos que llenaran las plazas centrales y los aeropuertos para resistir el golpe. Cuando se supo que el presidente no había sido secuestrado ni asesinado, miles de personas respondieron al llamado de Erdoğan para defender el gobierno electo democráticamente de los golpistas. A la mañana siguiente, las fuerzas leales a Erdoğan dentro del ejército y la policía derrotaron a los golpistas y teniendo como resultado 240 muertos, incluyendo a 173 civiles (İHA, 2016).

Después de sobrevivir el intento de golpe de estado a su gobierno, Erdoğan describió el incidente como una «regalo de Dios» para limpiar el ejército y la burocracia del estado de los terroristas (*DW*, 2016). Particularmente, Erdoğan se referió a la infiltración

de los círculos de Gülenismo8 en instituciones estatales formando una «estructura paralela.» Erdoğan identificó al grupo terrorista, llamado «FETÖ», como responsable de este acto de traición. El sangriento intento de golpe contribuyó aún más a que Erdoğan concentrara su poder en nombre de la lucha contra el terrorismo. Su meta específica era purgar todas las instituciones estatales de los Gülenistas de forma inmediata. De hecho, un portavoz de la presidencia sugirió que el golpe había sido organizado por los oficiales Gülenistas, quienes serían expulsados del ejército en la reunión del Consejo Supremo Militar en agosto de 2016. De acuerdo a esta explicación oficial, el golpe de estado organizado de forma apresurada conllevó a la expulsión retroactiva de esos oficiales (Kalın, 2016).

El 20 de julio de 2016, después de la reunión del Primer Ministro Yıldırım, su gabinete y el alto mando del ejército, el Presidente Erdoğan, en un discurso de televisión en vivo, declaró un estado de emergencia de tres meses «para eliminar la amenaza terrorista a la democracia, el estado de derecho y los derechos y las libertades de los ciudadanos» (Hürriyet, 2016a). A pesar del anuncio del estado de emergencia, Erdoğan le pidió al pueblo a que permaneciera en las plazas principales para defender el gobierno elegido democráticamente en contra de otro posible atentado de golpe de estado.

8 A nivel público, el Movimiento Gülen promueve un diálogo interreligioso desde la perspectiva del islam moderado. Especialmente durante los dos primeros términos del AKP (2002-2011), los miembros del Movimiento Gülen fueron nombrados para ocupar posiciones claves en el ejército, la policía y el poder judicial como parte de la alianza en contra del establecimiento secular. Después de debilitar el establecimiento secular de forma exitosa, el AKP y el Movimiento Gülen se enfrentaron unos contra otros. La lucha de poder entre ambos grupos fue evidente dentro del contexto del escándalo de corrupción en 2013 el cual Erdoğan calificó de una conspiración del Movimiento Gülen para derrocar a su gobierno. Como su rompimiento fue de conocimiento público, el Movimiento Gülen fue redefinido como un grupo terrorista (FETÖ) el cual buscaba infiltrarse en instituciones claves y finalmente tomar el control del estado turco.

«La vigilancia democrática» continuó hasta que el gobierno y los seguidores de Erdoğan organizaron «Las manifestaciones de la democracia y los mártires» el 7 de agosto de 2016, a las que asistieron más de un millón de ciudadanos.

Además de la participación masiva de ciudadanos, el Presidente Recep Tayyip Erdoğan, el Primer Ministro Binali Yıldırım, el líder de CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, y el líder de MHP, Devlet Bahçeli y el Jefe del Personal, Hulusi Akar, también estuvieron presentes. A modo de espectáculo, después de casi todo los oradores hablaron brevemente y condenaron al atentado de golpe organizado por «FETÖ», Erdoğan se apoderó del escenario como «el líder de la Nueva Turquía, el niño de los ojos de la nación y el comandante en jefe» (Hürriyet, 2016b). En esta coyuntura, los niveles de aprobación de Erdoğan se dispararon al 68 por ciento, indicando un amplio apoyo a su fuerte liderazgo durante tiempo difíciles (*Bloomberg*, 2016).

La declaración del estado de emergencia fue un autogolpe porque le otorgó poderes ilimitados al Presidente Erdoğan y dejó sin efecto a las ramas legislativas y judiciales. Originalmente, el presidente justificó el estado de emergencia como una respuesta a los desafíos de seguridad por el intento de golpe de estado y una defensa del régimen democrático. En poco tiempo, la declaración de emergencia se convirtió en una herramienta para reprimir la oposición secular y kurdista de una manera sin precedentes. El informe de Freedom House sobre Turquía en 2016 cita que, bajo el estado de emergencia más de «150,000 personas, incluyendo soldados, policías, oficiales judiciales, servidores civiles, académicos y maestros fueron detenidos, arrestados o despedidos de sus puestos en una purga masiva de confabuladores sospechosos de participar en el golpe y otros enemigos del estado» (Freedom House, 2017). Contrario a lo que el Presidente Erdoğan prometió inicialmente, bajo el estado de emergencia, el estado de derecho,

la división de poderes, los derechos humanos y otros principios liberales fueron suspendidos.

Después de la extensión del estado de emergencia por tres meses más en octubre 2016, Devlet Bahçeli, el líder del partido nacionalista turco MHP, tomó una decisión inesperada al pedirle al Presidente Erdoğan que pusiera fin a la situación *de facto* o que llevara a cabo los cambios constitucionales necesarios para legalizarla (*T24*, 2016). Lo que Bahçeli y otros llamaron un presidencialismo de facto, era de hecho, una captura del poder por Erdoğan. Luego del anuncio del estado de emergencia en julio y su extensión en octubre, Erdoğan impuso un *fait accompli* sobre otros actores políticos y obtuvo más poder de negociaciónes para institucionalizar el sistema presidencial que él deseaba desde su elección en 2014. De parte de Bahçeli, su partido pudo haber influido en el tipo de sistema presidencial por medio de negociaciones pero optó por permanecer al margen. En particular, al MHP le preocupaba la posibilidad de un arreglo federal, que pudiera amenazar la integridad territorial de Turquía al otorgar autonomía a los kurdos. Dos semanas después del anuncio de Bahçeli apoyando el presidencialismo, nueve miembros del parlamento del HDP, incluyendo a sus líderes Selahattin Demirtaş y Figen Yüksekdağ, fueron arrestados como parte de una investigación sobre un caso de terrorismo (BBC, 2016b). Como resultado de los arrestos a los líderes de HDP, la oposición al presidencialismo disminuyó aún más.

Aunque la coalición de AKP-MHP no contaba con la mayoría de los dos tercios en el parlamento para enmendar la constitución unilateralmente, sí controlaba más de los tres quintos de mayoría (330 asientos) para proponer un paquete de enmiendas constitucionales y convocar a un referéndum popular. Las conversaciones de los dos partidos políticos sobre presidencialismo concluyeron en noviembre de 2016 y el borrador del documento fue presentado a la comisión parlamentaria al mes siguiente. Luego de que la comisión hiciera

unos cambios pequeños, los miembros del parlamento debatieron en la sesión plenaria sobre la reforma constitucional compuesta de dieciocho artículos. En enero de 2017, los votos afirmativos sobre el paquete de reformas sobrepasaron el umbral de tres quintos necesarios gracias a la disciplina partidaria de los parlamentaristas de los AKP y MHP (*The New York Times*, 2017).

Posteriormente a la aprobación del paquete de enmiendas propuestas por el Presidente Erdoğan, el referéndum fue programado para abril 2017. Al mismo tiempo, el estado de emergencia fue extendido por tres meses más. Bajo el estado de emergencia, el referéndum favorecía al campo del Sí liderado por el Presidente Erdoğan y Primer Ministro Yıldırım, quienes tenían un acceso desproporcionado a los recursos del estado y a los medios de comunicación. En contraste, el campo del No encaraba varios obstáculos para competir en un terreno equitativo (OSCE, 2017). El impacto de las enmiendas constitucionales, en caso de ser aprobadas, en el tipo de sistema que gobierno que Turquía tendría fue tema de preocupación de la Comisión Europea para la Democracia a través de la Ley, también conocida como la Comisión de Venecia. De acuerdo a un informe de la Comisión de Venecia, los cambios constitucionales[9] «carecen de los pesos y contrapesos necesarios para protegerlo de que se convierta en un [sistema presidencial] autoritario» (Venice Commission 2017, pp.39). A diferencia de los sistemas democráticos presidenciales, las ramas legislativas y judiciales hubieran tenido un poder limitado para contrarrestar «una concentración excesiva del poder ejecutivo en las manos del Presidente» (Venice Commission 2017, pp.12).

9 Las dieciocho enmiendas de la constitución incluyeron, pero sin limitarse, al aumento del tamaño del parlamento de 550 a 600; organizando elecciones parlamentarias y presidenciales simultáneamente cada cinco años; otorgamiento al presidente de la autoridad de nombrar y despedir ministros; mandato por decreto; estado de emergencia; preparación del presupuesto; como también otras prerrogativas fuertes. Ver Sabah (2017).

Bajo el estado de emergencia, los votantes aprobaron el paquete de enmiendas constitucionales por un pequeño margen (51 por ciento). Inmediatamente después del referéndum, la presidencia se convirtió en una institución partidista. Como consecuencia, Erdoğan tuvo una oportunidad legal para convertirse en el líder de AKP nuevamente. Al poco tiempo de la adopción de las enmiendas constitucionales, el estado de emergencia se extendió por tres meses más. En mayo de 2017, Presidente Erdoğan recuperó su posición como Presidente de AKP en la Tercera Convención Extraordinaria. En esa reunión, Erdoğan justificó otra extensión del estado de emergencia usando las siguientes palabras: «El estado de emergencia fue declarado en Francia cuando surgieron 15 terroristas. En mi país, hubo un intento de golpe de estado. Tenemos 249 mártires y 2,193 veteranos. ¿Cómo puede preguntar acerca del levantamiento del estado de emergencia? No va a ser eliminado. ¿Hasta cuándo? Hasta conseguir la paz y la prosperidad.» (*Hürriyet Daily News*, 2017).

Aun cuando el Presidente Erdoğan regresó oficialmente al AKP, los cambios no entrarían en efecto hasta noviembre de 2019. Por lo tanto, Turquía haría una transición hacia un nuevo sistema de gobierno cuando el parlamento en funciones hubiera completado su término de cuatro años. Al contrario de estas expectativas, y para sorpresa de muchos (incluyendo a los miembros del AKP), en abril 2018, el Presidente Erdoğan se reunió con Bahçeli, su compañero de coalición, y decidió adelantar la fecha de las elecciones. Para justificar esta acción, Erdoğan enfatizó la necesidad urgente de abordar los acontecimientos del Medio Oriente y superar el problema del ejecutivo dual en el sistema parlamentario (Sabah, 2018). El día que el parlamento renovó el estado de emergencia por la séptima vez, el presidente anunció que las elecciones se llevarían a cabo el 24 de junio de 2018. Para las elecciones presidenciales, cada partido de oposición presentó su propio candidato, para negarle la oportunidad a Erdoğan de ser reelecto. Dos candidatos de la

oposición, Muharrem İnce y Meral Akşener, prometieron levantar el estado de emergencia en su primer día como presidentes y prometieron reestablecer el parlamentarismo dentro de un período de dos años (Cumhuriyet, 2018).

Como de costumbre, durante la campaña de 2018, el Presidente Erdoğan y el AKP se beneficiaron de una manera excesiva de los recursos y del estado de emergencia mientras que los candidatos de la oposición tenían que competir bajo condiciones equitativas (OSCE, 2018). A pesar de las limitaciones, İnce, el candidato de CHP, superó las expectativas con su habilidad de movilizar su base, a la vez que se posicionaba por encima de los partidos. İnce y otros candidatos de la oposición desarrollaron una estrategia de campaña para negarle la reelección a Erdoğan en la primera vuelta. Más adelante, en la segunda vuelta, la meta era unificar a todos los votantes en contra de un presidente de turno polarizador. Como los indicadores económicos, tales como el alza de la inflación y la devaluación de la lira turca, habían reducido las posibilidades de reelección para Erdoğan, los miembros de la oposición buscaron revertir el voto por el Sí (51 por ciento) en contra del voto por el No (49 por ciento) entre los bandos a favor y en contra de Erdoğan en el referéndum de 2017 (Fishman, 2018).

A pesar de que la oposición seguía ganando terreno en las áreas metropolitanas, los resultados de las elecciones presidenciales y parlamentarias no cambiaron significativamente la para la distribución de poder en la política turca. En la elección presidencial, Erdoğan obtuvo la victoria en la primera vuelta (53 por ciento) y se evitó ir a una segunda vuelta. Como se esperaba, Ince (31 por ciento) obtuvo el segundo lugar, seguido por el líder de HDP, Demirtaş (8 por ciento), quien se encontraba preso y la Presidenta del Partido del Bien (IYIP), Akşener (7 por ciento). En las elecciones parlamentarias, el AKP (43 por ciento) permaneció como el partido más fuerte, seguido por CHP (23 por ciento), el HDP (12 por ciento), el MHP (11 por ciento), y el IYIP (10 por ciento). En

general, el MHP apareció como el «forjador de reyes» al permitirle a Erdoğan que ganara la presidencia en la primera vuelta y que conservara su mayoría en la legislatura. El 9 de julio de 2018, con la toma de posesión del Presidente Erdoğan, se había completado la transición al presidencialismo en Turquía. Nueve días más tarde, el autogolpe llegó a su fin con el vencimiento de la vigencia del estado de emergencia.

CONCLUSIÓN

En la sección anterior, este trabajo ha analizado los autogolpes en Perú y Turquía y su evolución en cambios constitucionales y reelecciones presidenciales. Hemos demostrado que tanto Fujimori como Erdoğan adquirieron poderes ilimitados dentro de un contexto de crisis severa en ambos países. En Perú, Fujimori justificó su acumulación de poder para combatir a Sendero Luminoso y en menor escala a MRTA, mientras que en Turquía Erdoğan principalmente atacó a un supuesto organizador del golpe de estado, «FETÖ» y PKK. En otras palabras, ambos presidentes llevaron a cabo autogolpes en nombre de la lucha en contra del terrorismo y del restablecimiento del orden público y el estado de derecho. Sin embargo, las medidas *de facto* en Perú y en Turquía para combatir el terrorismo gradualmente se convirtieron en procesos constitucionales para aumentar los poderes *de jure* de la presidencia *vis-à-vis* los de las otras ramas de gobierno. En Perú, esto fue el resultado de reescribir la constitución, primero a través del establecimiento del Congreso Constituyente y luego la celebración del referéndum. En Turquía, el parlamento en funciones enmendó dieciocho artículos de la constitución vigente y los votantes, por un margen estrecho, aprobaron los cambios a través de un referéndum. En ambos países, bajo estado de emergencia, los presidentes lograron derrotar a sus contrincantes, ganar la reelección y completar exitosamente los objetivos de los autogolpes. La Ilustración 1 describe una trayectoria general de los autogolpes en Perú and Turquía.

FIGURA 1.
TRAYECTORIA DE LOS AUTOGOLPES DE ESTADO EN PERÚ Y TURQUÍA

Además de estas similitudes, podemos elaborar en las diferencias de los contextos de ambos casos. Primeramente, en Turquía, la Asamblea Nacional técnicamente permaneció abierta en comparación con el autogolpe de Perú, donde Fujimori asumió poderes absolutos de la rama legislativa provisionalmente hasta la elección del Congreso Constituyente. A diferencia de Fujimori, quien contaba con una minoría en el Congreso, Erdoğan usó de manera efectiva la mayoría parlamentaria del AKP para legitimar el mandato por medio de decretos de emergencia. Aun más importante, para Erdoğan, el parlamento fue instrumental para el inicio del proceso de las enmiendas constitucionales, especialmente después que el partico nacionalista turco, MHP, estuviera a favor de legalizar la acumulación de poder del presidente. En Perú, la disolución del Congreso y la no negociación de leyes antiterroristas y el paquete de reformas económicas con los partidos politicos tradicionales fue una mejor estrategia para Fujimori. En lugar de proponer el proceso de enmiendas constitucionales con un Congreso en funciones, Fujimori convocó a una Asamblea Constituyente, compuesta en su mayoría por pro-Fujimoristas, para reescribir la constitución en su totalidad.

Segundo, la situación doméstica en Turquía antes del autogolpe era más compleja que la del Perú bajo Fujimori, ya que Erdoğan y el AKP habían estado en el poder desde 2002. Es más fácil identificar el origen del autogolpe en Perú porque Fujimori llevó a cabo el autogolpe después de dos años desde el inicio de su presidencia. Para complicar el análisis aún más, en Turquía, el AKP y «FETÖ»

fueron aliados cercanos en la lucha para debilitar el establecimiento secular hasta 2013. La alegada infiltración de los miembros de «FETÖ» en el ejército, la policía, el poder judicial y otras áreas de la burocracia estatal, ocurrió principalmente durante el mandato de Erdoğan como Primer Ministro. Además de la percepción de amenaza por «FETÖ», otros grupos terroristas, como PKK y ISIS, habían amenazado a Turquía antes del golpe de estado fallido. Estas amenazas le dieron aún más motivos al Presidente Erdoğan para justificar la declaración del estado de emergencia. Por lo tanto, en comparación con Perú, donde la amenaza terrorista era más fácil de identificar, en Turquía, esto conlleva a un amplio conjunto de actores vinculados a la Guerra Civil de Siria.

Para futuros trabajos de investigación, otro tema de comparación entre Perú and Turquía podría ser el impacto negativo del liderazgo personalista en la construcción de partidos políticos. Desde un principio, Fujimori no quiso formar un partido político fuerte. Al contrario, Fujimori contó con coaliciones sueltas que aparecían solo para las elecciones y no cumplían ningún papel en los gobiernos sucesivos. Para cada elección legislativa, el nombre del movimiento de Fujimori cambió (Cambio 90, Cambio 90-Nueva Mayoría y Perú 2000), indicando la falta de institucionalización, como también la supremacía del liderazgo populista. Dentro de este contexto, el escándalo de corrupción[10] involucrando al jefe de inteligencia e implicando a Fujimori provocó una crisis del régimen, ya que no había nadie dentro de la coalición gobernante que sustituyera en el cargo de presidente y garantizara continuidad. En respuesta a la flagrante evidencia de corrupción y las

10 Después de su re-elección en 2000, Fujimori enfrentó un escándalo cuando varios videos salieron a la luz pública donde aparecía su jefe de inteligencia, Vladimiro Montesinos, sobornando políticos en nombre del presidente. Este escándalo causó la caída de Fujimori. Luego de convocar a elecciones, Fujimori abandonó el Perú y anunció su renuncia.

manifestaciones masivas, Fujimori no tuvo otra opción más que huir del país y anunciar su renuncia. A pesar de que su estilo personalista le permitió llevar a cabo el autogolpe, el régimen creado colapsó rápidamente por su mismo estilo personalista.

En Turquía, el AKP comenzó como un partido político conservador con raíces profundas en la sociedad. Como el sistema parlamentario de Turquía ofreció incentivos a los partidos políticos fuertes, entonces el Primer Ministro Erdoğan fue sólo el primero entre iguales. Después de una serie de triunfos electorales, Erdoğan gradualmente marginalizó a sus rivales dentro del AKP y estableció su dominio personal a principios de la década de 2010. Luego de su elección como presidente en 2014, Erdoğan continuó ejerciendo una fuerte influencia sobre su (oficialmente antiguo) partido y moldeó la política turca. Gracias al atentado de golpe de estado en julio de 2016 y la declaración de estado de emergencia justo después, Erdoğan cambió la estructura institucional en Turquía, la cual le permitió gobernar por si solo y reducir la importancia de las políticas legislativas y la de los partidos políticos. Los resultados de las elecciones de 2018 y la composición del primer gabinete presidencial11 ofrecen evidencia preliminar de que el AKP podría estar dando señales de debilitamiento en los niveles del electorado y del gobierno.

11 De diecisiete ministros, sólo cinco de ellos son políticos activos dentro del AKP, lo cual limita el papel del partido en la rama ejecutiva. Esto significa que el AKP podría tener visibilidad en la legislatura y en la política local en el próximo período.

REFERENCIAS

BBC. (2016a). Retrieved June 21, 2017, from http://www.bbc.com/news/world-europe-36205210

BBC. (2016b). Retrieved 5 February, 2017, from http://www.bbc.com/turkce/37868309

Bechev, D. (2014). *Turkey's Illiberal Turn.* European Council on Foreign Relations.

Bermeo, N. (2016). «On Democratic Backsliding». *Journal of Democracy,* 27(1), 5-19.

Bloomberg. (2016). Retrieved February 4, 2017, from https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-08-11/erdogan-s-approval-rating-soars-in-turkey-following-coup-attempt

Cameron, M. A. (1998). «Self-Coups: Peru, Guatemala, and Russia». *Journal of Democracy,* 125-137.

CNN Turk. (2017). Retrieved February 10, 2017, from http://www.cnnturk.com/turkiye/anayasa-degisikligi-18-madde-ile-neler-degisecek-yeni-anayasa-maddeleri-nelerdir

Conaghan, C. M. (2005). *Fujimori's Peru: Deception in the Public Sphere.* Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

Cumhuriyet. (2018). Retrieved July 20, 2018, from http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/988621/Kilicdaroglu_ile_Aksener__parlamenter_sisteme_donusu__konustu.html

Dahl, R. (1971). *Polyarchy: Participation and Opposition.* New Haven: Yale University Press.

Diamond, L. (2015). «Facing Up to the Democratic Recession». *Journal of Democracy,* 26(1), 141-155.

Diamond, L. (1999). *Developing Democracy: Toward Consolidation.* Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

DW. (2016). Retrieved June 4, 2017, from https://www.dw.com/en/turkish-democrats-rally-behind-erdogan-in-germany-and-across-europe/a-19404921

Ferrero Costa, E. (1993). «Peru's Presidential Coup». *Journal of Democracy,* 4(1), 28-40.

Fishman, L. (2018). *Haaretz.* Retrieved July 1, 2018, from https://www.haaretz.com/middle-east-news/turkey/.premium-turkey-election-how-the-anti-erdogan-opposition-could-win-1.6197520

Freedom House. (2017). Retrieved February 4, 2017, from https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/turkey

Freedom House. (2018). Retrieved from https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2018

Hürriyet. (2016a). Retrieved February 4, 2017, from http://www.hurriyet.com.tr/son-dakika-haberi-tum-ulkede-ohal-ilan-edildi-40156536

Hürriyet. (2016b). Retrieved February 4, 2017, from http://www.hurriyet.com.tr/cumhurbaskani-erdogan-hep-birlikte-turkiye-olacagiz-40184640

Hürriyet Daily News. (2017). Retrieved 23 June, 2017, from http://www.hurriyetdailynews.com/state-of-emergency-wont-be-removed-until-peace-is-restored-president-erdogan.aspx?PageID=238&NID=113358&NewsCatID=338

Hürriyet Daily News. (2016). Retrieved June 21, 2017, from http://www.hurriyetdailynews.com/akp-names-yildirim-as-new-chairman-pm.aspx?pageID=238&nID=99383&NewsCatID=338

Huntington, S. pp. (1991). *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century.* Norman: University of Oklahoma Press.

İHA. (2016). Retrieved February 4, 2017, from http://www.iha.com.tr/haber-basbakan-acikladi-kac-darbeci-olduruldu-580952/

Kalın, İ. (2016). «After the Coup Attempt, Turkey's Success Story Continues». *Insight Turkey,* 18(3), 11-17.

Kendall-Taylor, A., Frantz, E., & Wright, J. (2017). «The Global Rise of Personalized Politics: It's Not Just Dictators Anymore». *The Washington Quarterly,* 40(1), 7-19.

Kenney, C. D. (2004). *Fujimori's Coup and the Breakdown of Democracy in Latin America* . Notre Dame: University of Notre Dame Press.

Lancaster, C. (2014). «The iron law of Erdogan: the decay from intra-party democracy to personalistic rule». *Third World Quarterly,* 35(9), 1672-1690.

LASA. (1995). *The 1995 Electoral Process in Peru.* Latin American Studies Association.

Levitsky, S., & Loxton, J. (2012). «Populism and Competitive Authoritarianism: The Case of Fujimori's Peru». En: C. Mudde, & C. R. Kaltwasser (Eds.) *Populism in Europe and the Americas?: Threat or Corrective for Democracy* (pp. 160-181). Cambridge: Cambridge University Press.

Levitsky, S., & Way, L. A. (2010). *Competitive Authoritarianism. Hybrid Regimes After the Cold War*. New York: Cambridge University Press.

Levitt, B. S. (2012). *Power in the Balance: Presidents, Parties, and Legislatures in Peru and Beyond*. Notre Dame: University of Notre Dame Press.

Marshall, M. G., & Marshall, D. R. (2016). «Coup d'état Events, 1946-2015». *Center for Systemic Peace*. Retrieved from http://www.systemicpeace.org/inscr/CSPCoupsCodebook2015.pdf

Mauceri, pp. (1995). «State Reform, Coalitions, and the Neoliberal Autogolpe in Peru». *Latin American Research Review,* 30(1), 7-37.

McClintock, C. (1993). «Peru's Fujimori: A Caudillo Derails Democracy». *Current History,* 112-199.

O'Donnell, G. A. (1994). «Delegative Democracy». *Journal of Democracy,* 5(1), 55-69.

OSCE. (2018). Republic of Turkey-Early Presidential and Parliamentary Elections - 24 June 2018. Warsaw: OSCE.

OSCE. (2017). Republic of Turkey Constitutional Referendum 15 April 2017. Warsaw: OSCE/ODIHR.

OSCE. (2016). Republic of Turkey Early Parliamentary Elections 1 November 2015. Warsaw: OSCE.

Öniş, Z. (2016). «Turkey's Two Elections: The AKP Comes Back». *Journal of Democracy,* 27(2), 141-154.

Özbudun, E. (2014). «AKP at the Crossroads: Erdoğans Majoritarian Drift». *South European Society and Politics,* 19(2), 155-167.

Özsoy Boyunsuz, Ş. (2016). «The AKP›s Proposal for a 'Turkish type of presidentialism' in comparative context». *Turkish Studies*, 17(1), 68-90.

Palmer, D. S. (1996). «'Fujipopulism' and Peru's Progress». *Current History*, 95(598), 70-75.

Pérez-Liñán, A. (2007). *Presidential Impeachment and the New Political Instability in Latin America.* Cambridge: Cambridge University Press.

Politico. (2018). Retrieved July 1, 2018, from https://www.politico.eu/article/muharrem-ince-turkey-election-opposition-might-actually-have-a-chance/

Roberts, K. M. (1995). «Neoliberalism and the Transformation of Populism in Latin America: The Peruvian Case». *World Politics,* 48(1), 82-116.

Sabah. (2018). Retrieved July 24, 2018, from https://www.sabah.com.tr/gundem/2018/04/18/son-dakika-cumhurbaskani-erdogandan-erken-secim-tarihi-aciklamasi

Sabah. (2017). Retrieved from https://www.sabah.com.tr/gundem/2017/01/26/2017-referandum-ne-zaman-olacak-iste-anayasa-degisikligi-ve-baskanlik-sistemi-maddeleri

Schedler, A. (2006). *Electoral Authoritarianism: The Dynamics of Unfree Competition.* Boulder and London: Lynne Rienner Publishers.

Smith, M. L. (1994). «Taking the High Ground: Shining Path and the Andes». En: D. S. Palmer (Ed.), *The Shining Path of Peru* (pp. 33-50). New York: St. Martin's Press.

T24. (2016). Retrieved February 5, 2017, from http://t24.com.tr/haber/bahceli-cumhurbaskani-fiili-baskanlik-durumundan-vazgecmeli-olmazsa-fiili-durum-hukuki-boyut-kazanmali,364342

T24.. (2015). Retrieved June 21, 2017, from http://t24.com.tr/haber/iste-7-hazirandan-1-kasima-secime-etki-eden-olaylar,315129

Taş, H. (2015). «Turkey-From Tutelary to Delegative Democracy». *Third World Quarterly,* 36(4), 776-791.

The New York Times. (2017). Retrieved February 5, 2017, from https://www.nytimes.com/2017/01/20/world/middleeast/turkey-new-constitution-fight.html?_r=0

Venice Commission. (2017). «Turkey Opinion on the Amendments to the Constitution Adopted by the Grand National Assembly on 21 January 2017 and to be Submitted to a National Referendum on 16 April 2017». Venice: European Commission for Democracy Through Law.

Weyland, K. (2000). «A Paradox of Success? Determinants of Political Support for President Fujimori». *International Studies Quarterly,* 44(3), 481-502.

Wood, D. (2000). «The Peruvian Press under Recent Authoritarian Regimes, with Special Reference to the autogolpe of President Fujimori». *Bulletin of Latin American Research,* 19(1), 17-32.

Zakaria, F. (1997). «The Rise of Illiberal Democracy». *Foreign Affairs,* 76(6), 22-43.

El campo transversal de la política venezolana: ¿hacia una derecha (post)bolivariana?

Luis Duno-Gottberg[1]

> ¿Seremos un vasto continente de mendigos? ¿Será la nuestra una mano tendida en espera de los mendrugos de la caridad norteamericana, europea y soviética? ¿Seremos la India del hemisferio occidental? ¿Será nuestra economía una simple ficción mantenida por la filantropía?
>
> Carlos Fuentes, *La nueva novela latinoamericana* (1969), citado por Carlos Rangel, *Del buen salvaje al buen revolucionario* (1979).

LOS CONTORNOS DIFUSOS DE LA DERECHA VENEZOLANA (EL FIN DE?)

Pensar la «Derecha» en la Venezuela contemporánea exige un ejercicio fino de matizaciones que den cuenta de las zonas grises de una petro-modernidad democratizadora y, a su vez, profundamente desigual y excluyente.[2] Se trata de un esfuerzo por identificar y caracterizar las expresiones de una modalidad política que, con las excepciones que mencionaremos más adelante, *no contaba* con las líneas duras que observamos actualmente en países como Colombia, Chile, Brasil, Perú, o incluso, México.

El origen de tal especificidad es múltiple: el triunfo de los Liberales en la Guerra Federal venezolana (1859-1863) y su hegemonía subsiguiente contribuyeron a una formación social y política notablemente distinta de la que se observa, por ejemplo, en

1 Profesor Investigador, Rice University.

2 El estudio clásico de esta modernidad contradictoria generada por la renta petrolera es *El estado mágico. Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela,* de Fernando Coronil (Nueva Sociedad 2002).

Colombia, a partir de la Guerra de los Mil Días (1899-1902). En Venezuela la separación de Iglesia y Estado, los impulsos modernizadores y la dinámica cosmopolita y clientelar de una economía extractiva contuvieron, desplazaron y/o apaciguaron a los factores tradicionalistas y a las elites. Sólo a partir de la fractura del romance nacional que cristalizó en el «Pacto de Punto Fijo»[3], y la quiebra financiera de la llamada «Cuarta Republica»[4], que dieron eventualmente origen a la Revolución Bolivariana, surgen mutaciones realmente significativas en el pensamiento político de la derecha venezolana, adquiriendo un sesgo más radical. Asistimos hoy, en este sentido, al fin de las líneas difusas del espectro político venezolano: el campo se ha extremado.

Sin embargo, por lo menos hasta la década de los años ochenta, y más allá de las referencias literarias a «Los amos del valle» (como suele llamarse a un reducido grupo social con raíces en los tiempos de la Colonia[5]), era difícil identificar en Venezuela a

3 «El Pacto de Punto fijo» es un acuerdo de gobernabilidad y distribución de la riqueza petrolera. Se inició como una alianza formal entre representantes de los tres principales partidos políticos de Venezuela en 1958: Acción Democrática (AD), COPEI (Partido Social Cristiano) y Unión Republicana Democrática (URD). El Partido Comunista de Venezuela (PCV) jugó un papel crucial en la lucha contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y, sin embargo, fue excluido del acuerdo. Dicho pacto constituyó una garantía escrita de que los partidos firmantes respetarían los resultados de las elecciones, evitarían la hegemonía unipartidista y lucharían contra la dictadura. Las fracturas y conflictos entre las élites y el descaecimiento del orden político son algunos de los factores que enmarcan el surgimiento de la Revolución Bolivariana.

4 Éste es el nombre que adoptó oficialmente Venezuela en la constitución de 1953, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente de 1952, durante la dictadura del Pérez Jiménez. Dicho nombre cambia a «Quinta República» con la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana, redactada por la Asamblea Nacional Constituyente de 1999.

5 *Los amos del valle* (Francisco José Herrera Luque, 1979) es el título de una novela histórica que, hilvanando personajes ficticios y reales, expone la conformación de las élites en Venezuela, desde la Conquista hasta la consolidación de una «nobleza criolla» colonial.

una oligarquía absolutamente excluyente y vertical. Asimismo, era difícil reconocer la primacía histórica de un sector ultra católico que hubiera naturalizado estructuras y jerarquías sociales. En este sentido, las manifestaciones del pensamiento y la praxis derechista venezolana de la segunda mitad del siglo veinte encontraron expresiones políticas en la social democracia, el socialcristianismo, el liberalismo conservador y el neoliberalismo, más que en facciones abiertamente reaccionarias o ultramontanas.

La reflexión de Ángel Rama sobre la configuración de la ciudad de Caracas es reveladora de una estructura social que se distingue, más allá de sus contradicciones, de un orden claramente jerárquico:

> El casco urbano de Caracas sigue conservando tesoneramente un nomenclátor en que son las esquinas, y no las calles, las que tienen nombres, que muchas veces conservan referencias históricas concretas (se va de Misericordia a Velázquez, de Coliseo a Corazón de Jesús) y entre una y otra esquina se ubica una dirección mediante un nombre también, aplicado a un edificio (Quinta Anamar, Edificio Camoruso, Residencia El Trébol), con lo cual se registra la adhesión a un pasado que, sin embargo, ya ha comenzado a disolverse. Por el contrario, en la ciudad de Bogotá se ha impuesto un nomenclátor numérico aún más preciso y rígido que el de Manhattan: las ubicaciones pueden hacerse exclusivamente con números fijando exactamente el lugar de la cuadra en que se encuentra la casa: 25& 3-70, 13& 69- 31, 93& 13-A-1 0. Parecería contradictoria la situación de ambas ciudades, visto que la sociedad venezolana es indudablemente más dinámica y modernizada que la colombiana. La explicación hay que ir a buscarla en la dominación que ejerce la *ciudad letrada* en cada una de las ciudades: es mucho más poderosa y mejor articulada en el ejemplo bogotano que en el caraqueño, cuya sociedad es sacudida por enérgicos movimientos democráticos y anti-jerárquicos que dificultan la acción racionalizadora de élites intelectuales (Rama 39-40).

Esta aparente contradicción entre la voluntad venezolana de conservar nombres de espacios que datan de la Colonia y las designaciones racionales y precisas del caso bogotano, no son más que el testimonio de estructuras de poder notablemente distintas. En otras palabras, se trata de una diferencia en el alcance y preminencia de las elites. En Venezuela, sostiene Rama, la Ciudad Letrada no alcanzó a regular lo social del mismo modo que en Colombia. Esta caracterización es sugerente, más allá de la lectuzra del crítico uruguayo sobre la expresión espacial del poder letrado, pues revela también, paradójicamente, un sustrato conservador en una sociedad «indudablemente más dinámica y modernizada.» Si Bogotá parece imaginada por una poderosa y bien articulada ciudad letrada, mientras que Caracas escapa a dicho orden, es también porque en esta última ciudad se instala «más cómodamente» en un orden preexistente. Todo estaba en «su lugar», incluido el crecimiento periférico y marginal de la urbe caraqueña. ¿No da esto cuenta también del sesgo conservador en nuestra celebrada modernidad? ¿No es posible leer aquí también las paradojas de nuestro registro político, con sus líneas difusas, siempre y cuando se garantice cierto orden social?

Esta conformación fluida del espacio político, patente en la espacialización del poder letrado, hace inviable reducir la sociabilidad venezolana a una díada (izquierda-derecha), sin reconocer la existencia de *movimientos trasversales* que atraviesan «campos enemigos.» Como mencionamos más adelante, el texto constitucional de 1961 podría ser un ejemplo perfecto de esta realidad. De allí también la existencia de valores tradicionales e incluso reaccionarios dentro de movimientos considerados de izquierda; o, por el contrario, la presencia de valores «progresistas» dentro de grupos que abrazan, y aún extreman, la lógica del mercado capitalista.

¿Significa ello que no existe una derecha venezolana? Más que la ausencia de una Derecha, lo que hemos descrito se corresponde a una situación de estabilidad e incluso, holganza, dentro de las esferas de poder; todo lo cual permite cierta distención del espectro político. En otras palabras, el sistema establecido con el derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez (1958) y el advenimiento de la democracia reposó en un «pacto constitutivo» (Lander 66) entre el Estado, los gremios obreros y campesinos, y los grupos empresariales. Esto contenía en cierta medida la confrontación con los sectores populares, además de apaciguar a las élites, dada la ausencia de amenazas significativas a sus intereses. Cooptación, negociaciones favorables entre actores sociales y clientelismos de todo orden facilitaron este nuevo ordenamiento político que, más que generar radicalismos «desde arriba», produjo una «sociedad de ambidextros» (Juaquín Estefanía en Bobbio 1996, p.13)[6]. A la mesa se sentaban cómodamente los «Doce Apóstoles»[7], disfrutando de un festín costeado por el acceso a un rico petro-estado, con una notable capacidad redistributiva.

Durante más de tres décadas, un punto de confluencia y acuerdo fundamental a través del espectro político fue el rol básico del «Estado de Bienestar Social;» incluso establecido dentro del texto constitucional de 1961. En efecto, este dispositivo, incluyendo las enmiendas posteriores de los años 1973 y 1983, parece encarnar esta condición trasversal que conecta principios socializantes y

6 En su prólogo a Norberto Bobbio, Joaquín Estefanía describe de este modo a las sociedades que desdibujan la díada izquierda-derecha.

7 *Los Doce Apóstoles* (1975) es el título de un libro del filósofo Pedro Duno, quién acuñó el término para designar a un grupo de empresarios cercanos al Presidente Carlos Andrés Pérez. El grupo incluye a Enrique Delfino, Édgar Espejo, Concepción Quijada, Julio Pocaterra, Luis Jugo Amador, Aníbal Santeliz, Siro Febres-Cordero, Arturo Pérez Briceño, Ignacio Moreno, Pedro Tinoco, Carmelo Lauría y Gustavo Cisneros.

aspiraciones de mercado[8]. Ello, junto con el reparto (desigual) de la renta petrolera, proporcionaba un modelo de notable impronta moderadora, tanto para la «izquierda democrática», como para la derecha. Cabe además decir que el Movimiento al Socialismo (MAS), Acción Democrática y COPEI poseían dentro de sí, cierta heterogeneidad ideológica; lo que explica el consenso en torno a variaciones programáticas que se ubicaban en un registro más bien liberal que abarca, más o menos, de la centro izquierda a la centro derecha.[9]

8 El texto constitucional de 1961 es revelador de eso que denomino el campo trasversal de la política venezolana. Sin ser exhaustivos, vemos claramente una suerte de oscilación del instrumento legal, pasando de discursos proteccionistas y socializantes, a discursos más de mercado. Los artículos 55, 56 y 78, por ejemplo, establecen el deber del Estado de garantizar la educación pública. Más adelante, en el artículo 79, introduce también el deber de promocionar y defender la educación privada. El Articulo 77, por ejemplo, garantiza la protección de sectores campesinos y comunidades indígenas, aunque termina sugiriendo su incorporación al proyecto nacional, en términos que parecen asimilacionistas. El artículo 84 se refiere al derecho al trabajo y concluye afirmando la necesidad de garantizar «una subsistencia digna y decorosa.» Esta idea es ratificada en los artículos 88 y 89, que se refieren a la protección del salario justo y estable. Los artículos 91 y 92 protegen incluso el derecho a sindicalizarse y a la huelga. El capítulo 97, no sólo rechaza las prácticas monopólicas, sino que afirma, a su vez, la prerrogativa del estado de reservarse sectores de la economía. Finalmente, los capítulos 98 y 99 parecen revertir el impulso estatizante, para reafirmar la defensa de la propiedad e iniciativas privadas. Cabe decir que dicho texto fue aprobado con el voto afirmativo de las principales cuatro fuerzas políticas del país para entonces, Acción Democrática, Unión Republicana Democrática, COPEI y el Partido Comunista de Venezuela.

9 El MAS reúne fuerzas que habían quedado fuera del «Pacto de Punto Fijo» y, sin embargo, supo negociar hacia los años 80, su entrada en el reparto del poder. MAS, o Movimiento al Socialismo, fue fundado en 1971 por factores de izquierda que cuestionaban el modelo socialista Soviético y se separan del Partido Comunista. COPEI, o Comité de Organización Política Electoral Independiente, es también conocido popularmente como Partido Socialcristiano. Fundado en 1946, representó históricamente a facciones más conservadoras dentro del espectro político. AD, o Acción Democrática, comienza a gestarse en 1936 y la fundación de su estructura actual data de 1941. Este partido representa sectores de centro izquierda. MAS, AD y COPEI son, sin embargo, heterogéneos a su interior y han oscilado entre el

Dentro de esta historia de los partidos existieron grupos, momentos y expresiones políticas que rompieron con el esquema descrito. Por ejemplo, en sus orígenes, COPEI surgió como una alternativa de impronta claramente conservadora. Sus fundadores católicos rechazaban vehementemente lo que percibieron como influencias marxistas dentro de la socialdemocracia. De hecho, a partir del golpe de estado contra Rómulo Gallegos, en 1948, COPEI colaboró con el régimen militar de Marcos Pérez Jiménez. Con el asesinato de Delgado Chalbaud, en 1950, el partido pasó a la oposición y, sin embargo, los estados Táchira, Aragua y Yaracuy continuaron apoyando al dictador (Magallanes 156). El partido moderó progresivamente sus posturas y, sin dejar de ser profundamente anti-comunista y abogar por una relación «armoniosa» entre Iglesia y Estado, «la defensa de la familia» y la educación privada, también apoyó la reforma agraria y la modernización del país. Otros partidos se colocaron aún más firmemente a la derecha del espectro político: el Frente Nacional Democrático (FND) se conformó después de las elecciones de 1963 para impulsar la candidatura de Arturo Uslar Pietri, cuyo legado dentro del pensamiento conservador venezolano es bien conocido.[10] Mucho más radical y con una más larga y errática vida en la historia política del país, el Partido Nuevo Orden Autentico Nacionalismo (NOR), se caracterizó por su discurso corporativista y sus inclinaciones fascistas (particularmente falangistas).

Este panorama no puede obviar el trasfondo de la sangrienta historia de la lucha armada venezolana de los años 60 y 70, ni tampoco otras irrupciones de violencia, descontento y fracturas

apoyo del Estado Bienestar hasta políticas económicas de corte neo-liberal. Para una historia de los partidos ver Magallanes, Manuel Vicente (1983). *Los partidos políticos en la evolución histórica Venezolana.*

10 El conservadurismo de la reflexión de Uslar coexiste con una práctica política más bien ambigua.

de ese orden que, más que bipartidista, fue «ambidextro». Todo ello apuntaba, indudablemente, a la debilidad intrínseca del pacto que contenía sobretodo los radicalismos dentro de los grupos de poder. Por otro lado, cabe admitir que se impuso una hegemonía cuya conflictividad no parece haber alcanzado las dimensiones masivas de las últimas tres décadas de este siglo; a partir de la revuelta popular de «El Caracazo,» en 1989, hasta la profunda crisis actual de la Era Bolivariana.

Este nuevo ciclo precede la llegada de Hugo Chávez a la presidencia y se inicia con la erosión de los acuerdos entre grupos de poder político y sectores económicos. La nueva época supone, en tal sentido, una ruptura profunda de la sociabilidad política del país, marcada ahora por enconos y sectarismos que hacen aparentemente inconcebible cualquier acuerdo entre actores antagónicos.

EL PRINCIPIO DEL FIN

Beneficiándose de la memoria (más bien de las fantasías) de la «Venezuela Saudita»[11] y bajo las promesas de un nuevo milagro

11 La bonanza que acompañó el primer mandato de Carlos Andrés Pérez (1974-1979) dio origen a este término. Se trata de un período de crecimiento sin precedentes, impulsado por el alza de los precios del petróleo que llegan a cuadriplicarse. Esta coyuntura surge del embargo petrolero levantado por el bloque árabe de la OPEP en contra los países de Occidente por su apoyo a Israel en la Guerra Árabe-israelí (1973). Venezuela no se suma al embargo, dada su condición de aliado de Estados Unidos. Poco después, en 1976, el presidente Carlos Andrés Pérez nacionaliza el petróleo y concentra las operaciones en la compañía estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). En este período se crean numerosas empresas paraestatales con el objetivo de fomentar el desarrollo de la industria pesada y se lanzan programas para la reducción de la pobreza. Las políticas de endeudamiento de esos años fueron prolongadas por su sucesor, Luis Herrera Campins de COPEI. Por su parte, las naciones desarrolladas e importadoras de petróleo tomaron medidas para reducir la dependencia y, a su vez, controlar su política monetaria. Esto último disparó las tasas de interés, lo que afectó directamente a aquellas naciones endeudadas, que ahora tendrían que pagar tasas de interés más elevadas. El gobierno venezolano no pudo responder al nuevo costo de la deuda,

económico, Carlos Andrés Pérez entró en la contienda electoral de 1988 con un discurso firmemente anclado el «estado bienestar» y la redistribución de la riqueza. Aquel modelo de acumulación rentista y redistribución (populista) resultaba ya, sin embargo, inviable. Venezuela había entrado en una profunda crisis fiscal y política hacía ya una década. El contexto petrolero había cambiado significativamente y la crisis económica de 1983, conocida como el «viernes negro», venía imponiendo una revisión del modelo económico que, hasta entonces, sustentaba la maquinaria política nacional y sus fórmulas de consenso clientelar.

Bajo el eslogan de «El gocho pa'l 88», Carlos Andrés Pérez lanza una exitosa campaña que le confiere el 52,89% de los votos. Sin embargo, los recursos de la bonanza petrolera ya no están allí para satisfacer (o sosegar) a los distintos grupos sociales y económicos. El faccionalismo al interior de los partidos es también una fuente de erosión de las estructuras de gobernabilidad. En ese contexto se propone un «viraje nacional» y, con la inauguración de su segunda presidencia, el 2 de febrero de 1989, Pérez impone un paquete de reformas económicas de corte neoliberal: descentralización y privatización de buena parte de la propiedad estatal; eliminación de subsidios a alimentos y combustibles; liberación total de las tasas de interés; eliminación del control de cambio. El «Gran viraje», como se llamó este programa de ajustes estructurales, fue recibido con una violenta reacción popular («El 27 de Febrero» o «El Caracazo») y, a su vez, desató una represión militar y policial

lo que llevó al estallido de la crisis económica de 1983. Pedro Rodríguez Rojas nos da una escala de la crisis en ciernes: «[En] el periodo 1973–1983, mientras que el ingreso petrolero creció 350%, los gastos lo hicieron 540% y el incremento de la deuda externa a corto plazo aumentó 2000%, llegando al cierre del periodo a unos 29 millones de dólares, divididos en partes iguales entre los gobiernos de Carlos Andrés Pérez (CAP) y Luis Antonio Herrera Campins (LHC) y de los cuales 60% tenía vencimiento entre 1983 y 1984.»(188).

sin precedentes.[12] El principio del fin había acontecido hacía una década, pero el sacudón social de 1989 constituyó su hito más visible y trágico.

Si bien las medidas impuestas por Carlos Andrés Pérez respondían a un modelo y unas directrices emanadas del Fondo Monetario Internacional y el Consenso de Washington, existen también precedentes venezolanos que buscaban transformar la estructura del estado. Surgen en el gobierno anterior de Jaime Lusinchi, quien, habiendo acumulado un déficit enorme, agota las reservas extranjeras del país. En 1984 y dentro de esa circunstancia de crisis, se conforma la Comisión para la Reforma del Estado (COPRE), cuyo objetivo era limitar la injerencia gubernamental en los asuntos sociales y económicos, así como aumentar la participación democrática de los ciudadanos.

El Grupo Roraima, constituido por varios académicos y representantes del mundo empresarial, se pronuncia también en ese momento para exigir cambios radicales. *Proposición al País* (1984) y *Más y mejor democracia* (1987) son, en este sentido, sus textos

12 «El Caracazo» devino en un mito fundacional de la Revolución Bolivariana, pero conviene reconocer la autonomía del evento. Se trató de una serie de protestas y disturbios «espontáneos», pero indudablemente políticos, que se iniciaron el 27 de febrero de 1989 en Guarenas, a 15km al este Caracas. La respuesta estatal fue una masacre perpetrada por las fuerzas de seguridad de la Policía Metropolitana (PM) y las fuerzas armadas del Ejército y de la Guardia Nacional (GN). La cifra oficial de muertos emanada por el gobierno de Carlos Andrés Pérez, arroja un saldo de 276 muertos. El hallazgo de fosas comunes sugiere que el verdadero número oscila entre 2.000 y más de 3.500 personas asesinadas. Provea, *Informe de Situación de Derechos Humanos en Venezuela, octubre de 1988-septiembre de 1989,* http://archivo.derechos.org.ve/informes-anuales/informe-anual-1988. Sobre el carácter político de la protesta, ver Margarita Lopez-Maya, «Venezuela después del Caracazo: Formas de la protesta en un contexto desinstitucionalizado», Working Paper, en: https://web.archive.org/web/20050504070547/http://www.nd.edu/~kellogg/WPS/287.pdf y Reinaldo Iturriza, «Análisis del 27 F», disponible en http://27f.blogspot.com/

fundamentales para trazar el desarrollo de un discurso en defensa de la libertad de mercado y la descentralización en Venezuela.

> La decisión nacional de fortalecer el sistema democrático, nos enseña la necesidad de desarrollar un sistema integral de libertades, *ya que sólo garantizando la libertad económica se puede preservar la libertad.* Esta es una correlación fundamental, allí donde hay democracia también hay una forma de economía de mercado. Grupo Roraima: *Proposición al País. Proyecto Roraima. Plan de Acción*, Caracas, 1985. Subraya LDG.

Esta década resulta fundamental para entender las transformaciones del pensamiento político venezolano. A las fracturas de los partidos y el descaecimiento del modelo económico debe sumarse el surgimiento concomitante de una reflexión sobre los límites del estatismo y la necesidad de expandir la libertad de mercado. En este sentido, se ha escrito mucho sobre la significación de las medias económicas emanadas del FMI e impuestas por Carlos Andrés Pérez, pero ha faltado reconocer el lugar que ocupó una *intelligentsia* (neo) liberal en la conformación de las bases para una nueva derecha venezolana.

Un antecedente fundamental en esta genealogía es el libro de Carlos Rangel, *Del Buen Salvaje al Buen Revolucionario* (1976). Si bien se trata de una expresión de un liberalismo clásico frente a la experiencia de la lucha armada y la Revolución Cubana, sus relecturas más recientes reconocen un proyecto que, dentro de su propia lógica, advertía contra los «desmanes del presente».

Como bien expone Manuel Caballero, *Del Buen Salvaje al Buen Revolucionario* no es sencillamente un ensayo conservador, sino más bien, «reaccionario». El historiador aclara que no emplea el término como insulto político, sino como descriptivo de un libro «escrito para codificar los presupuestos teóricos de un pensamiento que reacciona contra la revolución, y contra las ideas que la

cimientan»(144). Cuatro décadas más tarde, esta crítica parece informar también la celebración contemporánea del libro de Rangel. El análisis de Caballero es, al final, demoledor, señalando que se trata de un texto profundamente ideológico que termina por emular lo que cuestiona: «Corroído por la critica hecha por teóricos socialistas, marxistas y hasta leninistas, pero sobre todo por su propia inconsistencia argumental, el estalinismo encontró así un inesperado epígono en tierras latinoamericanas» (152).

En su prólogo a la edición aniversaria del libro de Rangel (2006), el escritor cubano Carlos Alberto Montaner reflexiona desde el exilio sobre la relevancia de estas ideas para una América Latina sumida en la «Marea Roja» y, en particular, para Venezuela: «¿cómo una sociedad que contó con la advertencia de Rangel en 1976 pudo haber caído voluntariamente en las redes del chavismo?», se pregunta. Más allá de una ratificación de principios liberales, la lectura de Montaner encarna la reacción (de derechas) que suscitó la Revolución Bolivariana, revelando claramente sus tropos: el rechazo del populismo izquierdista, las políticas redistributivas, el colectivismo, los nacionalismos, el estatismo y las nociones de conflicto de clases y anti imperialismo. Lo interesante es que se cuestionan y condenan aquí principios que estuvieron presentes de, un modo u otro, hasta los años 80, en los discursos social-demócratas e incluso social cristianos:

> (…) tenían una visión populista del poder y de la sociedad. Suponían que la visión del gobierno era planificar y mandar, y no obedecer las leyes y las instituciones. Pensaban que el objetivo de gobernar era distribuir las riquezas existentes sin potenciar las condiciones para que la sociedad creara riquezas. Fomentaban la dependencia y no la responsabilidad individual. Cultivaban el clientelismo político de una ciudadanía que esperaba dádivas y privilegios del partido de gobierno, ratificándole a la muchedumbre (…) un mensaje en el que se les aseguraba que era víctima

> del maligno despojo de unos bienes que supuestamente le pertenecían por derecho propio y de les que era inicuamente privada (…) a los pobres se les comenzó a llamar desposeídos. Alguien, el capitalismo, las clases medias, los americanos les había quitado lo que era suyo (…)

De igual modo, en ese contexto del treinta aniversario de la publicación del libro de Rangel, el politólogo Aníbal Romero escribió:

> *Del buen salvaje...* sigue siendo una especie de cartucho de dinamita arrojado en medio de una fiesta, en este caso la engañosa fiesta en que se deleita una América Latina acosada por sus tropiezos. Los latinoamericanos acogemos con beneplácito el mito del buen salvaje, del hombre puro y simple corrompido por una sociedad injusta y explotadora; una sociedad que, sin embargo, puede redimirse mediante utopías colectivistas. Por otro lado, la humillación que se deriva de la brecha entre el inmenso poder de Estados Unidos y las divisiones, el atraso y la inestabilidad de América Latina genera el mito del buen revolucionario, arquetipo del latinoamericano que culpa al coloso norteño por todos nuestros males y dedica su existencia a luchar contra «el imperio» (23-11-2006, en https://www.libertaddigital.com/opinion/libros/del-buen-salvaje-al-buen-revolucionario-1276232629.html)

Más adelante, Romero anuncia la relevancia de libro, afirmando: «Lo que más llama la atención cuando se regresa a este valiente libro es lo poco que hemos aprendido» (ibid.); y concluye: «Cuando escribió estas líneas, Rangel tenía en mente a Fidel Castro. Uno se pregunta: ¿qué hubiese pensado de haber contemplado, tres décadas más tarde, a Hugo Chávez y sus delirios mesiánicos, exhibidos sin pudor alrededor del mundo?»(ibid). Romero, cuya larga obra ha dedicado un esfuerzo significativo a la crítica del populismo, el estatismo y las propuestas redistributivas de la riqueza, juega un papel importante también en esta formación de un

pensamiento liberal que nutre las tendencias más recientes de la derecha venezolana:

> El Estado de Bienestar (*Welfare State*), que existe por ejemplo en Gran Bretaña, Suecia, Italia, Alemania Federal, Francia y otros países democráticos avanzados es el resultado del progreso de la civilización en una sociedad libre, y tales sistemas de protección y seguridad social no son dádivas, ni donaciones, ni actos de caridad de los fuertes a los débiles; tampoco son, por lo demás, gratuitos, sino que esos sistemas se sostienen gracias al producto de esfuerzo de toda la ciudadanía, que contribuye a mantenerlos con el pago de impuestos (Romero 104).

Uno de los pensadores más importantes del liberalismo venezolano es Luis Castro Leiva. Sus reflexiones van mas allá de una crítica al pensamiento utópico de las izquierdas y apunta a una deconstrucción de mitos fundacionales de la nación. De su extensa obra interesa, particularmente, su reflexión sobre el lugar del liberalismo a partir de la crisis de los «socialismos reales» y su crítica al bolivarianismo.

RUPTURAS Y ESPASMOS... LOS GIROS EXTREMOS

Este panorama político calificado de transversal, de líneas tenues es, con frecuencia, ambiguo y contradictorio. La escena política reciente evidencia expresiones de un radicalismo conservador afín al de países con dinámicas partidistas claramente demarcadas. Otras expresiones parecen encarnar combinaciones culturales e ideológicas que desafían la razón.

La Organización Renovadora Auténtica (ORA) es un partido político evangélico que conjuga el discurso religioso, con alianzas coyunturales, que pasan de Acción Democrática al Polo Patriótico. En las formulaciones más recientes de su programa doctrinario, rechazan las etiquetas ideológicas, posicionándose oportunamente

junto al gobierno de Nicolás Maduro mientras abrazan valores profundamente conservadores. Dicho caso podría ejemplificar la complejidad y, acaso la inutilidad, de la distinción derecha / izquierda.

Mucho más consistente en términos ideológicos, «Prociudadanos» se funda en 2016 con un discurso abiertamente liberal y profundamente crítico del estatismo y del estado bienestar. Su coordinador general, el empresario Leocenis García, cuestiona la validez de la social democracia y propone incluso derogar la Constitución de 1999 («Leocenis García: «Es necesario acabar con el estatismo controlador», *El Universal* 01/07/2018).

Aunque inhabilitado para participar en procesos electorales, «Vente Venezuela» (VV) representa uno de los pocos movimientos políticos que declara abiertamente su rechazo a las nomenclaturas de la socialdemocracia. Su fundadora, María Corina Machado proviene del seno de una de esas las familias descritas en *Los doce apóstoles* y, en ese sentido, representa los interesas de una élite que participó activamente del pacto social que fundó y sostuvo la Cuarta República. Ello, unido a su educación y valores estrictamente católicos, la posiciona dentro del espectro más conservador del registro político venezolano. Sin embargo, en su discurso programático, VV rechaza los rótulos de la «ultra-derecha «y se considera de «centro,» abrazando incluso la noción de un «capitalismo popular».[13] Este último concepto, sin embargo, le ha valido comparaciones con Margaret Thatcher, cosa que ella no parece rechazar explícitamente (ver *El Universal* 30 de octubre del 2011). Por

13 «Nosotros somos un partido centro liberal, entonces dicen que es de extrema derecha, porque para los marxistas si no eres de izquierda eres de ultra derecha, pero Vente es un partido de liberales de centro» https://elestimulo.com/climax/maria-corina-machado-la-dama-de-acero/. Ver también su entrevista en *El Universal* del 30 de octubre del 2011. https://web.archive.org/web/20120102144029/http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/111030/el-capitalismo-popular-le-dara-a-la-gente-el-poder

último, sus relaciones con el *National Endowment for Democracy*[14], su critica del estatismo y los populismos de izquierda permiten definir claramente un perfil ideológico que dista mucho del horizonte trazado por el bipartidismo de Acción Democrática y COPEI.

El «Movimiento de Derecha Liberal Autonomista (MDLa)», dirigido por Marcos Polesel, se ha distinguido no tanto por una fuerte crítica a la ya extinta coalición de la MUD (Mesa de Unidad Democrática), que tildaba de colaboracionista [15]; sino por una propuesta insólita de secesión que dividiría el país en dos:

14 La organización no gubernamental «Súmate» jugó un papel fundamental en el referendo contra Hugo Chávez, en el 2004. Su fundadora, María Corina Machado fue acusada de recibir fondos del *National Endowmend for Democracy.*

15 Ver https://laprotestamilitar.blogspot.com/2010/12/origenes-del-colaboracionismo-pseudo.html y http://www.rebelion.org/noticia.php?id=67727

Más recientemente, desde un nicho de acción inconsecuente, Marcos Polesel plantea lanzar una «Confederación de Derechas»:

> (...) será una unión cuya finalidad es la de agrupar organizaciones, movimientos e individualidades políticas, de derecha: Liberales, Libertarios, Conservadores, Nacionalistas, para consolidar, presentar y ejecutar un plan para salir de la más grande y criminal tiranía de la historia en Venezuela, compuesta por un régimen socialista tutelada y dirigida por el régimen castrista en Cuba, y de su pseudo oposición colaboracionista entregada a la convivencia por espacios de subsistencia. (https://chenoticiasweb.blogspot.com/2018/02/marcos-polesel-estamos-en.html).

«Orden, Movimiento Nacionalista» y «Rumbo Libertad» constituyen ejemplos de otros grupos menores cuya retórica gira en torno a un vehemente anti-comunismo y vagas propuestas de refundación nacional.

Un partido de mayor importancia en esta discusión y, sin embargo, también inhabilitado por el Consejo Supremo Electoral, es «Voluntad Popular» (VP). El partido tiene sus origen en una plataforma estudiantil heterogénea, así como en divisiones dentro de Primero Justicia. Actualmente es conocido por sus líderes Leopoldo López y Juan Guaidó. Considerándose asimismo como un partido de «centro derecha» y adscrito a la Internacional Socialista, sus posturas y relaciones allende Venezuela, lo posicionan claramente en un campo de «derechas», mientras su discurso público parece no querer descartar elementos de la social democracia. [16]

16 El padre de Leopoldo López, Leopoldo López Gil recibió la nacionalidad española del entonces presidente Mariano Rajoy, en 2015. Su participación en la política europea, como representante del Partido Popular, sugiere también las conexiones de los grupos de derechas venezolanos más allá de las fronteras nacionales.

CONCLUSIÓN: EL CAMINO DE LOS SENDEROS QUE CONFLUYEN

A partir del derrocamiento del dictador Marcos Pérez Jiménez en 1958, el horizonte político venezolano parecía no contar con una derecha radical o ultramontana, sino más bien con un registro que se desplazaba moderadamente de la social democracia al social-cristianismo, manteniendo una mayor o menor preminencia del estado-bienestar. Los pactos entre las élites y los grupos políticos produjeron cierta distención dentro de las capas altas de la sociedad que no veían amenazados sus intereses. Hacia los años 80, y en el contexto de la crisis económica y política que precede el advenimiento de la Revolución Bolivariana, aparecen las fracturas del consenso que sostenía un campo político trasversal, donde los matices de izquierda y derecha parecían más o menos difusos. Asistimos hoy, en este sentido, a una transformación de la cultura política venezolana, donde el campo se ha extremado y las definiciones o distinciones entre derecha e izquierda parecen improductivas.

Nada resulta más sintomático de las ambigüedades y desplazamientos del campo político venezolano como el hecho de que, dentro de partidos auto declarados de izquierda, como el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), se impulsen practicas notablemente conservadoras. Hemos mencionado ya las alianzas de evangélicos con el Polo Patriótico. A ello se suma, más recientemente (10/2019), la declaración del presidente Nicolás Maduro, en el marco del «Plan Caracas Juntos Todo Es Posible», donde afirma que todas las iglesias católicas y evangélicas del país serían objeto de obras de recuperación. Dentro de este proyecto, más de trescientos templos serían rehabilitados por el gobierno nacional.

Este esfuerzo no parece ser parte de una política inscrita en tradiciones revolucionarias, cómo aquellas que caracterizaron la Teología de la Liberación; tampoco constituyen un esfuerzo por preservar el patrimonio arquitectónico de la nación. ¿Qué

motivaciones y principios caracterizan entonces dicho gesto desde un Estado laico?

Otro rasgo compartido por muchos grupos de izquierda y derecha en Venezuela es su conformación en torno a «personalidades» más que doctrinas.[17] En este sentido, las limitaciones de nuestra esfera política parecen gozar de la misma transversalidad: el rol del líder carismático opaca la voluntad de crear mecanismos institucionales para el ejercicio del poder.

Si, por un lado, «Vamos Venezuela» y «Voluntad Popular» resisten los epítetos derechistas y pretenden abrazar elementos de un Estado benefactor, mientras el PSUV defiende los principios católicos y los espacios de la iglesia evangélica, ¿qué sentido tienen las distinciones conceptuales de «izquierda» y «derecha»?

¿O más bien cabrá pensar que la Marea Roja latinoamericana arrastró consigo una nueva sociabilidad política caracterizada por su conservadurismo y cariz frecuentemente reaccionario?

17 Entre los defensores de esta tesis se encuentra Michael Coppedge: *Strong Parties and Lame Ducks: Presidential Partiarchy and Factionalism in Venezuela,* Stanford, 1994.

REFERENCIAS

Bruni Celli, M (2009). *Los Partidos Políticos y la Democracia en Venezuela.* Disponible:http://grupos.emagister.com/documento/los_partidos_politicos_y_la_democracia_en_venezuela/1521-315990 (Consulta: 11 de noviembre de 2019).

Caballero, Manuel (1988). «Para una radiografía del pensamiento reaccionario», *Nueva Sociedad*, Nro.98, Noviembre- Diciembre 1988, pp. 143-152.

Coppedge, Michael (1994). *Strong Parties and Lame Ducks: Presidential Patriarchy and Factionalism in Venezuela,* Stanford.

Iturriza, Reinaldo. «Análisis del 27 F», disponible en http://27f.blogspot.com/

Lander, Edgardo (1994). *Neoliberalismo, socidad civil y democracia: ensayos sobre Venezuela y América Latina.* Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Venezuela/faces-ucv/20120815120406/lander.pdf

Magallanes, Manuel Vicente (1983). *Los partidos políticos en la evolución histórica Venezolana.* Caracas: Ediciones Centauro.

Margarita Lopez-Maya, «Venezuela después del Caracazo: Formas de la protesta en un contexto desinstitucionalizado», Working Paper, en: https://web.archive.org/web/20050504070547/http://www.nd.edu/~kellogg/WPS/287.pdf

Rodríguez Rojas, Pedro (2010). «Venezuela: del neoliberalismo al socialismo del siglo XXI,» *Política y Cultura*, otoño, núm. 34, pp. 187-211.

Romero, Aníbal (2006). «Un clásico del liberalismo: Del buen salvaje al buen revolucionario», en: https://www.libertaddigital.com/opinion/libros/del-buen-salvaje-al-buen-revolucionario-1276232629.html

Romero, Aníbal (1996). *La miseria del populismo: mitos y realidades de la democracia en Venezuela.* Caracas: Editorial Panapo.

Romero Méndez, Carlos Antonio (2006). «Arturo Uslar Pietri: la imposibilidad de la política», *Politeia*, vol. 29, núm. 37, julio-diciembre, pp. 37-56.

Provea (1989), *Informe de Situación de Derechos Humanos en Venezuela,* octubre de 1988-septiembre de 1989. http://archivo.derechos.org.ve/informes-anuales/informe-anual-1988.